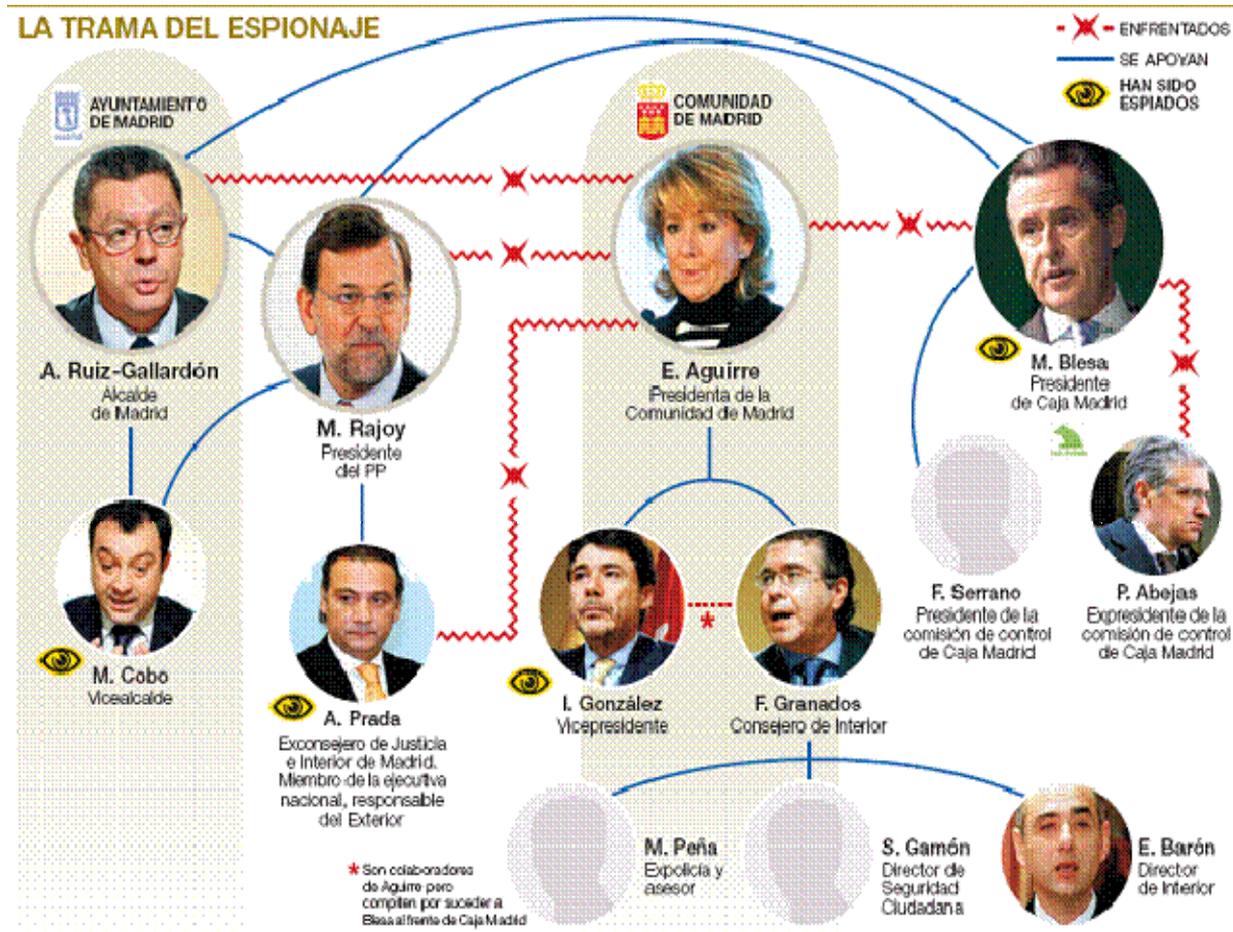


CASO GRANADOS \$ GONZALEZ



CRONICA INACABADA DE UN AJUSTE DE CUENTAS

17 de febrero 2009

INDICE

A) LAS NOTICIAS

1. UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES
2. ALGUNOS CASOS INVESTIGADOS POR LOS 'AGENTES' DEL CONSEJERO GRANADOS
3. EL VICEPRESIDENTE DE ESPERANZA AGUIRRE FUE ESPIADO EN SUS VIAJES AL EXTRANJERO
4. LA FISCALÍA DE MADRID NO VE INDICIOS DE DELITO EN EL ESPIONAJE A GONZÁLEZ
5. UN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS GRABADO CON CÁMARA OCULTA
6. GRANADOS ASEGURA QUE SUS ASESORES DE SEGURIDAD ACTÚAN DENTRO DE LA LEY
7. GRANADOS Y AGUIRRE NIEGAN CUALQUIER RED DE ESPIONAJE EN EL GOBIERNO DE MADRID
8. "MONTADO EL DISPOSITIVO EN TORNO A COBO"
9. MANUEL COBO, 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN, DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE
10. RAJOY CONFÍA EN LA 'LIDERESA'
11. GRANADOS: "SOMOS VÍCTIMAS DE UNA MANIOBRA CON EL ÚNICO FIN DE DESPRESTIGIAR AL GOBIERNO DE AGUIRRE"
12. EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE PIDE AL FISCAL QUE INVESTIGUE QUIÉN LE ESPIÓ
13. AGUIRRE PIDE AL FISCAL QUE ACLARE QUIÉN ESPÍA A SU VICEPRESIDENTE
14. LOS ESPÍAS SIGUIERON AL CONSEJERO PRADA ANTES DE SER DESTITUIDO POR AGUIRRE
15. CRONOLOGÍA DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
16. PRADA: "ES UNA ACTIVIDAD ILEGAL CON FONDOS PÚBLICOS"
17. "BAJA ESTATURA, CABEZA DESPOBLADA, CINTURA GRUESA"
18. RAJOY EXIGE A AGUIRRE QUE ACLARE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
19. RODARÁN CABEZAS EN EL PP DE MADRID SI SE DEMUESTRA EL ESPIONAJE POLÍTICO
20. DIRIGENTES DEL PP RECLAMAN A RAJOY QUE INTERVENGA
21. GALLARDÓN PEDIRÁ DIMISIONES SI LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ES LA RESPONSABLE
22. UNA TRAMA TURBIA
23. GALLARDÓN: "JAMÁS SE ME HUBIESE OCURRIDO CREAR UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"
24. GALLARDÓN CRITICA EL "CUERPO PARAPOLICIAL" DE GRANADOS

25. LA COMUNIDAD DENUNCIA UNA 'OPERACIÓN DE ACOSO Y DERRIBO' CONTRA AGUIRRE
26. LA COMUNIDAD PIDE A GALLARDÓN QUE RECTIFIQUE SU ACUSACIÓN DE ESPIONAJE
27. ELVIRA RODRÍGUEZ RECTIFICA TRAS PEDIRLE A AGUIRRE LA DESTITUCIÓN DE GRANADOS
28. COBO: "QUIERO SABER QUIÉN LO HIZO, QUIÉN LO ENCARGÓ Y CON QUÉ FINES"
29. EL CONSEJERO SE PRESENTA COMO VÍCTIMA
30. GONZÁLEZ PONS ACUSA AL GOBIERNO DE COMPLICIDAD CON EL ESPIONAJE AL PP DE MADRID
31. LA FISCALÍA CITARÁ A DECLARAR A GRANADOS POR EL CASO DE ESPIONAJE
32. COBO TIENE CLARO QUE TRAS EL ESPIONAJE ESTÁ EL GOBIERNO DE AGUIRRE
33. ZAPATERO, SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE: "QUE EL PP MIRE A QUIEN TIENE QUE MIRAR"
34. LAS EVIDENCIAS SOBRE EL SEGUIMIENTO A POLÍTICOS MADRILEÑOS
35. LA TRAMA DE ESPIONAJE REABRE LAS HOSTILIDADES ENTRE AGUIRRE Y RAJOY
36. RAJOY EXIGE RESPONSABILIDADES Y ABRE LA GUERRA CON AGUIRRE
37. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
38. GOBIERNO DE AGUIRRE SOPEÓ CREAR UN 'CNI' LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO DESDE DENTRO
39. LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE UNOS 40 EX AGENTES TRABAJAN EN EL 'SERVICIO DE INFORMACIÓN'
40. LA COMUNIDAD DE MADRID SABÍA QUE SUS AGENTES REALIZABAN LABORES FUERA DE LA LEY
41. ENTREVISTA: LUIS VICENTE MORO, Ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta : "LES DIJE 'APLIQUEMOS A ESTO LEGALIDAD Y ASÍ OS QUITÁIS DE OSCURANTECES"
42. LA TRAMA DESATA LAS AMENAZAS EN EL PP MADRILEÑO
43. GRANADOS ASEGURA QUE DETRÁS DE LOS SEGUIMIENTOS A GONZÁLEZ ESTÁ "ALGUIEN MUY PODEROSO"
44. RAJOY: "ACTUAREMOS DE FORMA FULMINANTE, SEA QUIEN SEA"
45. *EL PAÍS* ENTREGA AL FISCAL LOS DOCUMENTOS QUE REVELAN LA TRAMA
46. LOS ESPÍAS DE LA COMUNIDAD SIGUIERON A UN ALTO CARGO AL QUE REQUISARON EL ORDENADOR
47. QUIÉN ES QUIÉN EN LOS SEGUIMIENTOS A POLÍTICOS MADRILEÑOS
48. MENSAJE ENTRE LÍNEAS DE GALLARDÓN
49. COSPEDAL EXCULPA A ESPERANZA AGUIRRE TRAS UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
50. EL EQUIPO DE AGUIRRE ALEGA QUE SUS AGENTES PUDIERON ESPIAR POR LIBRE

51. PSM E IU SE PERSONARÁN COMO ACUSACIÓN POR EL ESPIONAJE EN MADRID
52. LA COMUNIDAD DE MADRID EMPRENDERÁ "ACCIONES LEGALES" CONTRA 'EL PAÍS' POR FALSEDAD
53. AGUIRRE: "¿A TI NO TE HE ESPIADO, CON LO TODOPODEROSO QUE ERES?"
54. EL 'NÚMERO DOS' DEL EX CONSEJERO DE JUSTICIA PRADA TAMBIÉN FUE SUPUESTAMENTE ESPIADO
55. LAS NOTAS SECRETAS DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DEL PP EN MADRID
56. AVISÉ A MARIANO RAJOY DE QUE ME ESTABAN ESPIANDO"
57. AGUIRRE SE DESHILACHA ENTRE ESPÍAS
58. MARIANO RAJOY. Primero se fio de ella y ahora la investigará
59. ESPERANZA AGUIRRE. "Nos vemos en los tribunales"
60. ALBERTO R.-GALLARDÓN. "Sabemos que ha habido espionaje"
61. EL ESCÁNDALO DEL ESPIONAJE ROMPE LOS ÚLTIMOS PUENTES ENTRE RAJOY Y AGUIRRE
62. GÜEMES ACUSA A *EL PAÍS* DE "FABRICAR UNA GRAN MENTIRA"
63. EL PP ESCENIFICA UNA FRÁGIL UNIDAD PERO AGUIRRE PASA AL CONTRAATAQUE
64. LOS 'MORTADELOS' AMENAZAN LA CARRERA DE AGUIRRE
65. EL EX POLICÍA QUE FICHÓ GRANADOS URDIÓ UN BULO CONTRA EL GOBIERNO DE ZAPATERO
66. LOS TRES EQUIPOS DE INTERIOR
67. LOS ESPÍAS REQUISARON UN 'DOSSIER' DEL CONSEJERO DE INTERIOR Y DE SU ESPOSA
68. GAMÓN Y HALFFTER
69. GONZÁLEZ RECOLOCA A UNO DE LOS ALTOS CARGOS CITADOS EN LOS SEGUIMIENTOS
70. ESPIONAJE MANUSCRITO
71. ¿HORAS EXTRA O TURNOS?
72. EL PP, ENTRE EL MUTISMO Y EL "QUEREMOS SABER"
73. RAJOY TRATA DE INYECTAR ENTUSIASMO AL PP Y PIDE UNIDAD "PASE LO QUE PASE"
74. UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID
75. CLAVES PARA UNA INVESTIGACIÓN
76. COSPEDAL SE PREPARA PARA LLAMAR A LOS JEFES DE LOS ESPÍAS
77. EMPLEADOS DE LA COMUNIDAD DENUNCIAN ACOSO POR NEGARSE A ESPIAR A POLÍTICOS
78. "MADRID NO TIENE ESPÍAS".
79. UN EX ALTO CARGO DE PRADA RECHAZA TENER UN 'DOSSIER' SOBRE GRANADOS

80. GRANADOS NIEGA QUE EXISTA UN SERVICIO SECRETO EN SU CONSEJERÍA
82. BARÓN Y PEÑA RECHAZAN DECLARAR ANTE DE COSPEDAL
83. EL JEFE DE LA UNIDAD PARAPOLICIAL DE GALLARDÓN CONTROLA A TODOS LOS
84. PRADA NIEGA QUE TUVIERA DOSSIERES SOBRE NADIE
85. AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
86. LA TRAMA DE ESPIONAJE PONE A PRUEBA A RAJOY
87. LA CONSEJERÍA DE INTERIOR POSEE TRES APARATOS PARALELOS DE VIGILANCIA QUE RECELAN ENTRE SÍ
88. LOS ESPÍAS AUTONÓMICOS INVESTIGARON UN COCHE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
89. LA MALA IMAGEN POR EL ESCÁNDALO SUME AL PP EN EL DESCONCIERTO
90. AGUIRRE: "GALLARDÓN TENDRÁ QUE ACLARAR SI TIENE UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"
91. LA DIRECCIÓN DE UGT SE DESDICE DE SUS PROPIAS DENUNCIAS SOBRE ACTOS QUE "RAYAN LA ILEGALIDAD"
92. EL ESPIONAJE ALCANZA AL 'NÚMERO DOS' DE GONZÁLEZ EN EL CANAL DE ISABEL II
93. EL EX TESORERO DEL PP CUESTIONÓ ADJUDICACIONES "SOSPECHOSAS" DE LA COMUNIDAD DE MADRID
94. LOS INFORMES QUE ALIMENTAN LA GUERRA DEL PP
95. EL SILENCIO DE RAJOY DESATA LA INCERTIDUMBRE EN EL PP
96. LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL ESCÁNDALO
97. AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
98. ESPIONAJES PARA TODOS LOS GUSTOS EN EL PP
99. AGUIRRE REVELA QUE RAJOY SUPO DE LOS DOSIERES HACE TRES AÑOS
100. EL TESORERO DEL PP PRESIONÓ PARA LOGRAR CONTRATOS DE LA COMUNIDAD
101. Blesa se rebela ante Aguirre, y niega actividades de espionaje
102. AGUIRRE CONFIRMA QUE LAPUERTA MANEJÓ UN DOSSIER CONTRA GONZÁLEZ
103. PONS VUELVE A CULPAR AL GOBIERNO DEL ESPIONAJE: "CUANDO ALGO MALO LE OCURRE AL PP, EL PSOE ESTÁ DETRÁS"
104. DE COSPEDAL: "DECIR QUE GÉNOVA VA A POR ESPERANZA AGUIRRE ES UN DISPARATE"
105. ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
106. AGUIRRE INSTA A GALLARDÓN A QUE ACLARE SI TIENE UNA UNIDAD PARAPOLICIAL
107. ESTALLA LA GUERRA DE DOSSIERS EN EL PP
108. AGUIRRE SE ENCARA CON RAJOY POR DAR "PÁBULO" A LA TRAMA DEL ESPIONAJE
109. LOS SECTORES DEL PP EN PUGNA SE ATRINCHERAN MIENTRAS CUNDE LA DESAZÓN

110. EL FISCAL INVESTIGA EL APARATO DE SEGURIDAD AL MANDO DEL EX POLICÍA MARCOS PEÑA
111. ALGUNAS CLAVES DE LA VIGILANCIA A MANUEL COBO Y ALFREDO PRADA
112. EL ENTORNO DE RAJOY ASUME QUE LOS AGUIRRISTAS BUSCAN LA CABEZA DEL LÍDER
113. FRAGA: "EN MIS TIEMPOS ESTAS COSAS NO PASABAN"
114. IGNACIO GONZÁLEZ SOLICITA AL JUEZ QUE INVESTIGUE LOS NUEVOS DOSSIER
115. GONZÁLEZ NO DESCARTA QUE EL ESPIONAJE HAYA PARTIDO DE GÉNOVA
116. GONZÁLEZ: LAS ACUSACIONES DE GALLARDÓN SOBRE LA TRAMA FUERON "ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADAS E INAPROPIADAS"
117. EL PP BUSCA DAR CARPETAZO CUANTO ANTES AL CASO DE ESPIONAJE Y NO SEÑALARÁ CULPABLES
118. AGUIRRE REPLICA A FRAGA QUE EN SUS TIEMPOS SÍ SE ESPIABA
119. AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE LA APOYE Y CIERRE LA INVESTIGACIÓN INTERNA
120. EL PP VASCO ESTÁ "HASTA LAS NARICES" DEL ESPIONAJE
121. EL ESCÁNDALO DE LA TRAMA DE ESPÍAS IMPIDE AL PP CAPITALIZAR LA CRISIS
122. AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PP
123. EL VICEPRESIDENTE DE MADRID QUIERE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA
124. EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA TRAMA DE ESPIONAJE
125. RAJOY: "EL PP DEBE ELEVARSE POR ENCIMA DE SU OMBLIGO"
126. GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
127. GRANADOS EVITA "PONER LA MANO EN EL FUEGO" POR TODOS SUS FUNCIONARIOS
128. GONZÁLEZ NO CREE QUE EL ESCÁNDALO VAYA A INFLUIR EN LAS ELECCIONES
129. GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"
130. CONTRATOS MILLONARIOS PARA EL COMPAÑERO DE VIAJE DE GONZÁLEZ
131. GRANADOS EVITA PONER LA MANO EN EL FUEGO POR NADIE
132. PREGUNTAS DE ESPÍAS CON Y SIN RESPUESTA
133. LA DIFUSA LABOR DE LOS ASESORES SECRETOS
134. EL EX CARGO DEL PP OBTUVO LA RECALIFICACIÓN EN COLLADO VILLALBA
135. FUERTE MALESTAR EN EL PP POR LA DESIGNACIÓN DE COSPEDAL PARA INVESTIGAR LA TRAMA DE ESPIONAJE
136. AGUIRRE Y RAJOY NO ALCANZAN UN PACTO

137. EL PP SE ENFRENTA A SÍ MISMO
138. LAS TRES CLAVES SECRETAS DEL ENREDO
139. EL 71,6% DE LOS ESPAÑOLES CREE QUE LOS CASOS DE ESPIONAJE EN PP SON GRAVES O MUY GRAVES
140. EL GOBIERNO DE AGUIRRE MANEJA UNA RED PARALELA DE MÓVILES PREPAGO
141. PRADA: "ES UN ATENTADO A MI PRIVACIDAD"
142. AGUIRRE ACEPTA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA DE MADRID
143. AGUIRRE ANUNCIA QUE VAN ACEPTAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA
144. COSPEDAL SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EN EL PP SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
145. COSPEDAL ANUNCIA QUE EL PP SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EL CASO DE ESPIONAJE
146. RAJOY CONCEDE UNA TREGUA A AGUIRRE PERO MANTIENE VIVA SU AMENAZA
147. PUNTOS A INVESTIGAR
148. AGUIRRE DUDA DE QUE LA INVESTIGACIÓN HALLE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
149. LOS MÓVILES PREPAGO SE CAMBIABAN CADA SEMANA EN 2007
150. COSPEDAL REHÚYE UN NUEVO PACTO SOBRE EL FIN DEL TRASVASE DEL TAJO
151. EL PP SUSPENDE TEMPORALMENTE LA INVESTIGACIÓN INTERNA SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
152. RAJOY PONE LA MANO EN EL FUEGO POR AGUIRRE
153. RAJOY DA TREGUA A AGUIRRE Y LE CEDE LAS PESQUISAS DEL CASO DE ESPIONAJE
154. CINCO PREGUNTAS PARA EL SEÑOR GONZÁLEZ
155. SERGIO GAMÓN ADMITE QUE NO TIENE ESTRUCTURA NI PRESUPUESTO NI FUNCIONES DELIMITADAS
156. UN PERSONAJE CLAVE DE LA TRAMA DE LOS ESPÍAS EVITA CONTESTAR A LOS DIPUTADOS
157. DE ROLDÁN AL 11-M Y EL 'TAMAYAZO'
158. RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN"
159. RAJOY ENDOSA A AGUIRRE EL COSTE ELECTORAL DEL ESCÁNDALO DE MADRID
160. RAJOY CELEBRA QUE LA ASAMBLEA DE MADRID INVESTIGUE LA PRESUNTA TRAMA DE ESPIONAJE
161. CONTINÚA EL ESCÁNDALO DEL ESPIONAJE: PEDRO CASTRO TAMBIÉN PUDO SER INVESTIGADO
162. EL PP BLINDA EN EL PARLAMENTO REGIONAL A GAMÓN, UN HOMBRE CLAVE EN EL ESPEGATE

163. AGUIRRE SE SALTA LAS NORMAS DE CORTESÍA DEMOCRÁTICA Y EVITA CEDER LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
164. FRAGA NIEGA QUE EL PP CIERRE LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA: "LA HEMOS ENCARRILADO"
165. GÜEMES: "YO NO TENGO LA INFORMACIÓN DE RAJOY"
166. GÜEMES AFIRMA QUE ÉL NO HA VISTO NINGÚN INFORME DE LA TRAMA DE ESPIONAJE
167. EL JUEZ INICIA LA INVESTIGACIÓN POR EL ESPIONAJE AL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE
168. EL VICEPRESIDENTE DE MADRID DESCONOCE LAS FUNCIONES DEL HOMBRE CLAVE DE LA TRAMA DE ESPIONAJE
169. UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO
170. AGUIRRE ACUSA AL PSOE DE HABER ESPiado "DEL REY PARA ABAJO A TODO EL MUNDO"
171. EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE EL DOSSIER DESVELADO POR 'PÚBLICO'
172. EL PP DE MADRID SE QUEJA DE QUE RAJOY CREA EN DOSIERES SIN VERLOS
173. LOS JEFES DE LOS GRUPOS ASUMEN EL CASO
174. LA COMISIÓN NO SERÁ "UN CIRCO", ADVIERTE EL PP
175. AGUIRRE ELUDE DAR EXPLICACIONES DEL "LODAZAL DE 'DOSSIERS'" A LA OPOSICIÓN
176. RAJOY: "NO ME PARECE RAZONABLE COMPARECER"
177. LA COMUNIDAD DA SIETE CONTRATOS A UNA FIRMA VINCULADA AL GERENTE DEL CANAL
178. CREO QUE ES ALGO ASÍ COMO COORDINADOR", DICE GONZÁLEZ SOBRE GAMÓN
179. UN CUÑADO DE IGNACIO GONZÁLEZ FUE "PROMOTOR DEL PROYECTO" DEL CAMPO DE GOLF DEL CANAL
180. GONZÁLEZ NIEGA HABER FAVORECIDO A SUS FAMILIARES
181. EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE FALTA DE NUEVO A LA VERDAD
182. EL PP NO QUIERE QUE TELEMADRID RETRANSMITA LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE
183. TENSA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POR LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
184. EL PP PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
185. EL PP ARRANCA LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS' CON TODO TIPO DE ZANCADILLAS
186. PRIMER DÍA, PRIMERAS TENSIONES
187. IU Y PSOE INTENTAN EVITAR RETRASOS EN LA INVESTIGACIÓN
188. CINCO CASOS PARA UNA COMISIÓN
189. EL PP SE RESISTE A ACLARAR SI APOYARÁ LA CITACIÓN A RAJOY
190. RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE SÓLO ELLOS NIEGAN

191. INFORMES CALIGRÁFICOS SOBRE LOS PARTES DE SEGUIMIENTO A CARGOS DEL PP EN MADRID. LOS ESPÍAS SON DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR

192. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE, AMIGO DEL JEFE DE LA TRAMA

193. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN QUE INVESTIGA EL ESPIONAJE NO DIMITIRÁ

194. EL PP RETRASA EL ARRANQUE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA

195. GONZÁLEZ, ANTE EL JUEZ

196. RAJOY REÚNE AL PP PARA EXIGIR LEALTAD Y PERSPECTIVA ELECTORAL

197. EL PP INTENTA MEZCLAR A RUBALCABA Y EL CNI EN LA CRISIS DE LOS ESPÍAS

198. EL ESPÍA QUE ESCRIBIÓ PARTES DE COBO Y PRADA ESCOLTÓ A AGUIRRE EN MÍTINES

199. PRADA SOLICITA AL FISCAL UN INFORME PERICIAL SOBRE UN AGENTE AUTONÓMICO

200. LA OPOSICIÓN PIDE QUE DIMITA EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE

201. PRADA NO ACUDE AL HOMENAJE

202. EL PP NIEGA DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA INVESTIGAR EL ESPIONAJE EN MADRID

203. NI MÓVILES PREPAGO NI DATOS DE LOS AGENTES

204. EL INFORME DE COSPEDAL SOBRE LOS SEGUIMIENTOS

205. UN PLENO A CARA DE PERRO

206. EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN LA COMISIÓN SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE

207. AGUIRRE BLINDA AL CÍRCULO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y PROTEGE A RAJOY

208. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SOBRE EL ESPIONAJE PIDE ABANDONARLA

B) QUIEN ES QUIEN

C) LOS DOCUMENTOS

1. UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, posee su propio Centro Nacional de Inteligencia o servicio de espionaje, según han confirmado fuentes del ejecutivo regional. Un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles, lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones.

El consejero Granados, de la máxima confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y secretario general del PP madrileño, asegura que el equipo de ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid y bajo su exclusivo control sólo tiene encomendadas tareas de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos", según declaró a este periódico.

Sin embargo, el propio Peña ha confirmado, que su trabajo consiste, sobre todo, en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados.

Fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre aseguran que tanto la presidenta como el vicepresidente, Ignacio González -que mantiene tensas relaciones con Granados-, ignoran qué tipo de informes elabora dicho equipo del consejero de Interior. "Nos llama la atención el volumen de gente que ha fichado para unas labores que desconocemos y que están fuera del organigrama que preside el propio director general de seguridad. Sospechamos de su labor, pero la desconocemos", explican altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Granados asegura que unos 15 funcionarios reportan a Peña, pero éste asegura que sólo cuenta con tres ex guardias civiles: "Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Según el ex policía, no sólo son fiables, sino muy útiles por sus contactos: "Me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía".

Peña contradice a su consejero. De entrada, niega que su equipo haga contravigilancia: "No hacemos contravigilancias. No seguimos a nadie. Mi misión es otra". Y añade sobre sus funciones reales: "Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida".

Cita diversos ejemplos. Peña recuerda que su equipo ha investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal de esa localidad, Ginés Jiménez. Los presuntos hechos delictivos que se imputan a Jiménez y otros miembros de la Policía Municipal de Coslada (extorsión a empresarios del ocio a cambio de licencias o de un trato favorable, así como a prostitutas que ejercen en las afueras del municipio) y que investiga un juez se destaparon en mayo de 2008 por obra de la policía cuando gobernaba el PSOE. No obstante, está imputado un ex alcalde del PP, Raúl López, por presunto trato de favor a Jiménez. La investigación del equipo de Peña ha sido paralela a la investigación policial y judicial, que sigue abierta. Peña asegura haber conocido al elaborar su informe todas las complicidades con las que contó el jefe de la policía municipal de Coslada.

Peña también cita que sus hombres han investigado el caso Ciempozuelos, de 2006, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex alcalde) en la cárcel durante unos meses, justo antes de las pasadas elecciones autonómicas. Ahora, el Gobierno regional ha denunciado las implicaciones de corrupción que siguen pendientes de aclarar en este municipio. Según Peña, sus informes resumen algo parecido: "Los auténticos intereses que se movían allí siguen sin conocerse. Y será una bomba cuando se conozcan". Pero Peña no desvela aún el resultado del sumario particular que ha instruido su unidad.

Este escándalo también sigue en plena investigación judicial. También aquí se produce la irregularidad de que el equipo de espionaje de Granados trabaja en paralelo, sin control político ni judicial, sobre asuntos en los que trabajan la policía y los jueces.

Sobre el caso Ciempozuelos, el ex policía Marcos Peña asegura que su investigación encontró vínculos con un suceso que afectó al propio consejero Granados, como fue el incendio supuestamente intencionado de su coche particular en el aparcamiento de su casa en Valdemoro. "Son lo mismo. El caso Ciempozuelos y el incendio están unidos, y yo lo he descubierto", alardea Peña. Granados, que antes de ser consejero fue alcalde de Valdemoro, negó que tal coche fuera un regalo de un constructor

local, en contra de lo que apuntaban los primeros indicios. Este caso -agonizó sin hallarse culpable del incendio- fue investigado por el juez Agustín Carretero, al igual que el caso Ciempozuelos. Carretero fue fichado posteriormente como director general de Política Interior por Granados, a cuyas órdenes sigue como gerente de la academia regional de policía.

El equipo parapolicial, cuyos informes sólo conoce Granados, según la cúpula del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, también ha investigado, según Peña, las supuestas mafias que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas y todo lo que rodea a este entorno, incluida la supuesta pasividad o connivencia policial o de las autoridades competentes. Granados declaró la semana pasada que las mafias se han adueñado de la noche madrileña, con lo que agitó los ánimos de los empresarios de las discotecas. Éstos rechazaron las declaraciones del consejero de Interior y máximo responsable del PP madrileño, palabras que también habían provocado el malestar del equipo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Nuevamente, el discurso político del consejero coincidía con un informe realizado por su unidad parapolicial.

La labor del servicio de información secreto de Granados tiene, según describe Peña, una serie de peculiaridades: nutren sus informes de la labor de campo que realizan los ex agentes, pero también de los datos que les suministran sus "enlaces" en distintas unidades de Policía y Guardia Civil, incluidas unidades de Asuntos Internos o lucha contra el crimen organizado. Todo ello, al margen de cualquier protocolo oficial establecido y sin el amparo de solicitud judicial alguna. Actúan, en suma, como una agencia de detectives en la que los ex profesionales rentabilizan sus antiguos contactos profesionales, pero con dinero público y amparo del Gobierno regional. ¿Para qué? "A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían", resume Peña. Alude al intento de los enemigos políticos del consejero, en la oposición y dentro del PP o del Gobierno regional, de vincular su coche particular, que fue incendiado, al regalo de un constructor.

Además, meses atrás, Granados también se vio envuelto en el escándalo montado por un ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, que cesó poco después de ser fichado Peña, cuando registró unas oficinas de la consejería de Justicia y requisó un ordenador donde, según altos cargos de la Comunidad, había un dossier contra el propio Granados (sobre sus supuestas relaciones con constructores, incluido el asunto del famoso coche incendiado, y su patrimonio personal).

Granados asegura no tener constancia del robo del ordenador ni de su contenido, pese a que fue denunciado. Los informes de este mini servicio de inteligencia tienen destinatario único. "Yo, mis informes sólo se los doy a Granados, y que él se los dé a quien quiera", admite Peña. El ex policía asegura que no realiza seguimientos de políticos. Granados jura que no se los ordena, pero deja abierta una puerta: "Yo no sé qué hacen mis funcionarios cuando salen del trabajo".

(www.elpais.com, 19/01/09)

2. ALGUNOS CASOS INVESTIGADOS POR LOS 'AGENTES' DEL CONSEJERO GRANADOS

- El 'sheriff' de Coslada. Uno de los informes elaborados para el consejero madrileño aborda la trama corrupta de la Policía Local de Coslada, descubierta en mayo de 2008, cuyo cerebro era el jefe de ese cuerpo, el sheriff Ginés Jiménez. Un grupo de agentes a sus órdenes denominado El Bloque extorsionaba a hosteleros, a veces pistola en mano, para que les entregaran sumas de entre 2.000 y 5.000 euros. La corrupción llegaba incluso a la justicia. Carlos Nogales, juez sustituto en el Juzgado de Instrucción número 3 de ese municipio, informaba a Jiménez de todos los pasos seguidos en el juzgado en causas de su interés. A Jiménez se le imputan delitos de amenazas, secuestro, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, estafa y blanqueo.

- Comisiones en Ciempozuelos. El ingreso de un millón de euros en un banco de Andorra por el ex alcalde socialista Pedro Torrejón y su antecesor, también del PSOE, Joaquín Tejeiro, destapó en 2006 el caso Ciempozuelos. Anticorrupción cree que ambos cobraron varios millones de constructoras del municipio. El dinero iba a parar a una trama de sociedades tapadera al servicio de los regidores, que actualmente se encuentran en libertad bajo fianza. Los empresarios que actuaron como testaferros también están imputados.

- De juez a cargo de confianza. El actual gerente de la Academia de Policía de Madrid y ex director general de Política Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre es, precisamente, el juez que inició la investigación del caso Ciempozuelos. Agustín Carretero dejó el juzgado para convertirse en cargo de confianza del Gobierno regional del PP tras las elecciones de mayo de 2007. Cuando estalló el caso, Carretero, decano de los juzgados de Valdemoro, asumió el caso. EL PP, como acusación particular,

utilizó como testigo a la ex concejal socialista María Pérez, que había investigado en secreto las corruptelas del alcalde. Pérez mantuvo conversaciones casi diarias con Carretero en fechas previas a la detención de los imputados. También investigó el incendio del coche de Granados en su aparcamiento privado en Valdemoro. Los primeros indicios apuntaban que era un regalo de un constructor al consejero y ex alcalde local. Nunca se halló al culpable.

- La mafia de las discotecas. Francisco Granados atribuyó el pasado miércoles la muerte a tiros de un portero de discoteca y de un relaciones públicas del mismo local a la actuación de una supuesta "mafia" de vigilantes. Hablaba con conocimiento de causa ya que uno de los informes elaborados para él por sus agentes versaba sobre ese mundo y la supuesta permisividad de algunos agentes de policía y autoridades locales hacia tales tramas. El autor de los disparos aseguró al juez el pasado jueves que disparó contra los empleados de la discoteca porque no le dejaron entrar debido a su indumentaria, pero fuentes de la investigación aseguran que el presunto homicida y el portero muerto, eran conocidos de la policía por sus antecedentes. El fallecido era considerado uno de los miembros de la banda de Ivo, El búlgaro, un grupo de porteros de discoteca que supuestamente se dedica a controlar la seguridad en los locales de ocio nocturno de la capital.

(www.elpais.com, 19/01/09)

3. EL VICEPRESIDENTE DE ESPERANZA AGUIRRE FUE ESPiado EN SUS VIAJES AL EXTRANJERO

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el hombre con más poder después de la presidenta Esperanza Aguirre, ha sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.

Altos cargos de la Comunidad de Madrid han asegurado que están "muy preocupados" ante estos seguimientos y que tienen "sospechas" de que los documentos y las imágenes que se incluyen en tales informes han precisado "la complicidad" de personal vinculado a la seguridad de la Comunidad de Madrid, ya que evidencian conocer muy al detalle su agenda personal.

Los altos cargos autonómicos manifiestan esta preocupación después de conocer que ex policías y ex guardias civiles al servicio del consejero de Interior, Francisco Granados, elaboraban informes sobre tramas de corrupción que afectaban a ayuntamientos madrileños dirigidos por socialistas.

Sin información interna de la propia Comunidad, resultaría casi imposible espiar, como ha ocurrido, al vicepresidente madrileño en Cartagena de Indias (Colombia), según fuentes autonómicas. Este desplazamiento oficial del vicepresidente, -lo hizo como responsable del Canal de Isabel II-, es vinculado, en uno de los dos informes, a distintas operaciones irregulares. Y evidencia que partieron de una información privilegiada para poder cazarlo fotográficamente cuando pisara suelo colombiano. Las personas que realizaron el seguimiento y grabación de Ignacio González conocían el día de llegada, el vuelo, el hotel en el que se iba a alojar, la habitación, y el programa de actos y visitas del vicepresidente madrileño. Sin esos datos, los supuestos espías nunca habrían estado justo en el instante en que González llegó a Colombia, y a escasos metros de él, pisándole continuamente los talones hasta la propia habitación del hotel donde se alojó.

Tan cerca, a tenor de las fotografías, como para formar parte del séquito o no inquietar con su presencia, según interpretan altos cargos de la Comunidad de Madrid consultados por este periódico.

El viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias data de finales de agosto de 2008. En concreto, como apunta el informe, el 28 de agosto llegó a Cartagena de Indias en el vuelo AV8548, en clase business. El informe detalla que mantuvo una entrevista con el presidente colombiano Álvaro Uribe y luego desarrolla una teoría respecto a la connivencia del vicepresidente regional con una de las personas que se incorporaron a la comitiva, un constructor, J.B., que supuestamente tenía parentesco con el jefe de una trama delictiva.

Para agravar el guión, el informe incluye fotografías tomadas con cámara oculta que son explicadas así: "Acompañantes de Ignacio González acudiendo y entrando en el inmueble ubicado en..., acceden al inmueble con las bolsas blancas que se pueden apreciar y abandonando a los diez minutos el inmueble sin las citadas bolsas. González acompaña a estas personas que han viajado con él desde Madrid". El

vicepresidente madrileño aseguró a este periódico: "A ese constructor del que habla el dossier no lo conozco de nada".

El segundo informe, fruto del otro seguimiento, es más simple: los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de Ignacio González y su esposa en viaje privado a Johannesburgo en vuelo de Iberia el pasado 16 de marzo. Aquí, la presunta acusación era que el viaje (unos 8.000 euros de coste) se lo regaló Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa, entre otras, y contratista de la Comunidad de Madrid, como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos multimillonarios. Todos los billetes de avión se pagaron en metálico. El contratista le acompañó, con su esposa, en tal viaje y pagó también en efectivo. González rechazó las acusaciones del informe: "Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien, y tengo factura de ello. El viaje me lo organizó un amigo que también vino. Fuimos a visitar al embajador de Suráfrica que es amigo nuestro y estaba a punto de ser relevado. El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada", explicó.

El Gobierno regional está ahora preocupado por conocer si los seguimientos tienen relación con la contratación por la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid del ex policía, Marcos Peña, que dirige a un equipo de tres ex guardias civiles para tareas "de contravigilancia", según el consejero Francisco Granados. El propio Peña aclaró que entre sus trabajos figuran investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a dirigentes socialistas o sobre escándalos en el sector de las discotecas de la capital de España. Peña aseguró que en ningún caso había hecho seguimientos personales a políticos.

La Consejería de Interior asegura que nunca se ha ordenado la elaboración de informes relacionados con tramas de corrupción. Entre las competencias legales de la consejería de Interior no figuran tareas de espionaje por parte de los asesores, ni siquiera la recopilación de información sobre tramas de corrupción que están siendo investigadas por la administración de Justicia. Granados contrató al ex policía Marcos Peña en el verano de 2008. Con anterioridad, la Comunidad vivió otro supuesto caso de espionaje que acabó con la destitución del director general de Seguridad, Sergio Gamón, por registrar unas oficinas de la Consejería de Justicia y requisar un ordenador donde, supuestamente había un dossier contra el propio Granados, según explican dirigentes autonómicos.

El vicepresidente Ignacio González no es el único dirigente madrileño que se ha sentido espiado en los últimos meses. Otros tienen noticias de haber sufrido seguimientos. No faltan los anónimos que han llegado a hogares de destacados políticos populares, según han confirmado sus destinatarios.

(www.elpais.com, 20/01/09)

4. LA FISCALÍA DE MADRID NO VE INDICIOS DE DELITO EN EL ESPIONAJE A GONZÁLEZ

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta mañana que se ha dirigido a los servicios jurídicos del Gobierno regional para pedirles que envíen una denuncia al juzgado de guardia para que investigue el espionaje y seguimiento al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. Aguirre ha afirmado que además se dirigirá a la Fiscalía para solicitarle que aclare esta situación "cuanto antes". En respuesta, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha dicho que investigará el caso si recibe la denuncia, aunque por ahora no ve indicios de delito. En todo caso, el consejero de Presidencia, Justicia Interior, Francisco Granados, comparecerá a petición propia y de forma "urgente" en la Asamblea para dar explicaciones.

La presidenta madrileña ha precisado que la denuncia "no va dirigida contra nadie", y ha insistido en que lo que pretende el Gobierno regional con esta acción es esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad de Madrid". La presidenta ha manifestado que el Ejecutivo regional es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje y cree que si se están elaborando informes se está "delinquiendo". Sin embargo, la Fiscalía, ha señalado Moix, no va a actuar de oficio porque entiende "que de los datos que se expresan enno hay indicios suficientes como para entender que hay una actividad delictiva". "Si la presidenta de la Comunidad de Madrid nos presenta una denuncia nosotros vamos a abrir unas diligencias de investigación, obviamente, como hacemos con todas las denuncias, porque es nuestro deber dar un trámite a todas las denuncias e investigarlas", ha agregado.

Tras precisar que dicha denuncia no ha llegado todavía a la Fiscalía, Moix ha explicado que, a tenor de lo publicado, "lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito". No lo es, ha puntualizado además, porque "ese seguimiento se ha realizado con información que emana

de la propia comunidad, por lo tanto alguien en la comunidad ha dicho este señor va a estar en este sitio y en este sitio, y es la propia comunidad la que da esos datos y no vemos actividad delictiva ninguna con los datos que salen en el periódico". "Ahora -ha advertido- si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".

El propio Ignacio González ha calificado de "gravísimo" el seguimiento al que ha sido sometido en dos viajes, uno de carácter oficial y otro privado, y ha considerado que estos hechos incurren en un "grave delito" que atenta contra su persona. González ha confesado sentirse "absolutamente sorprendido" por las "investigaciones ilícitas" de las que ha podido ser objeto durante los últimos ocho meses. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares, informa Francisco Mercado. El número dos del Gobierno madrileño ha anunciado que denunciará estos hechos ante la Justicia, además de acordar junto a Aguirre, solicitar a los servicios jurídicos de la comunidad que interpongan la denuncia. Para González, si se confirman estos hechos "son el resultado de un trabajo organizado para investigar la vida privada de altos cargos del gobierno de Madrid y del PP".

El vicepresidente del Ejecutivo regional ha dicho que confía en que esta actuación judicial permita conocer "quien está detrás de estos seguimientos ilícitos para que recaiga todo el peso de la ley". Granados ha afirmado que, de confirmarse el espionaje a González, es un hecho "absolutamente delictivo" por lo que deberá actuar la Fiscalía y la Policía. En una entrevista por la mañana en Telemadrid, Granados ha subrayado que la información publicada no está relacionada con la noticia de , que denunciaba la existencia de una red de espionaje a su servicio.

El consejero de Presidencia reconoció entonces que el responsable de este servicio, Marcos Peña, trabajaba para él como "asesor de seguridad", pero aclaró que la Comunidad de Madrid ejercía las competencias de seguridad dentro de la Ley. Aguirre se limitó a cargar contra EL PAÍS por publicar tal información. Granados ha considerado esta mañana que la Fiscalía y la Policía deben investigar "quién puede" montar un servicio de espionaje como el mostrado, "con tantos medios como para realizar seguimientos en sitios tan alejados como Colombia o Johannesburgo". Por la tarde, Granados ha enviado un escrito a la Asamblea en el que solicita comparecer en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, como le habían pedido PSOE e IU.

(www.elpais.com, 20/01/09)

5. UN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS GRABADO CON CÁMARA OCULTA

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta. Las imágenes que se captaron, algunas de las cuales se reproducen arriba, fueron incorporadas a un dossier donde se insinuaban prácticas irregulares por parte del vicepresidente autonómico.

(www.elpais.com, 20/01/09)

6. GRANADOS ASEGURA QUE SUS ASESORES DE SEGURIDAD ACTÚAN DENTRO DE LA LEY

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados (PP), negó la información publicada por EL PAÍS sobre la existencia de un servicio de espionaje en su departamento. Lo hizo sin dar detalles, asegurando simplemente que la Consejería cumple estrictamente la ley. PSOE e IU exigen explicaciones más exhaustivas y amenazan con pedir ceses. El sindicato policial SUP solicitó una investigación inmediata.

- Granados: "No comento los mecanismos de seguridad". El consejero de Presidencia y secretario regional del PP, Francisco Granados, calificó de "novela" lo publicado por EL PAÍS y opinó que responde a un intento de "ocultar" los problemas económicos del Gobierno central. Respecto al fondo de la información, afirmó: "La Comunidad desarrolla las competencias en materia de seguridad, nada más y nada menos. No comento los mecanismos de seguridad, simplemente la Comunidad desarrolla las competencias que le da la ley". Aunque no citó la palabra "espionaje", indicó que "este tipo de cuestiones no está dentro de las competencias". El supuesto jefe del servicio, el ex inspector de policía Marcos Peña, sigue en su cargo -"asesor de seguridad"- sin "ninguna estructura a su cargo". ¿En qué trabaja? "En las labores propias" que le han sido atribuidas, contestó Granados. Peña ha confirmado que el servicio que dirige elaboró informes sobre, por ejemplo, corrupción en municipios socialistas.

- Aguirre: "¿Por qué creen a *EL PAÍS*?". La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, no quiso responder a las preguntas sobre el supuesto servicio secreto montado por su Gobierno; una información que, según ella, publicó este periódico para distraer la atención después de que el ministro Pedro Solbes admitiera - en una entrevista de tres páginas en este diario- que no tiene margen de maniobra ante la crisis. "Por eso *EL PAÍS* tiene que atacar al Gobierno de Madrid. ¿Por qué creen a *EL PAÍS*?", inquirió a los periodistas. Cuando éstos le preguntaron si sigue confiando en Granados, Aguirre guardó silencio.

- Cospedal: "Sería muy grave". La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se remitió a lo dicho por Granados y Aguirre. "Se trataría, si fuera cierto, de cuestiones muy graves, pero me remito al desmentido tajante que han hecho", puntualizó.

- PSOE e IU exigen explicaciones. Los grupos del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid solicitaron la comparecencia de Granados en la Diputación Permanente. "Una vez conocida la explicación, los socialistas exigirán todas las responsabilidades al consejero y a la presidenta. Tiene muy mala pinta", anunció Maru Menéndez, portavoz del PSOE. Inés Sabanés, de IU, juzgó "intolerable" que se creen servicios de información "en el marco de la discrecionalidad" y la "impunidad". "Aquí cada cual no pone una contravigilancia donde le parece", protestó. El portavoz federal de IU, Ángel Pérez, reclamó también "explicaciones urgentes".

- Fiscalía: "A priori no hay delito". El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, señaló que va a estudiar lo publicado pero que él, "a priori", no ve delito porque si el supuesto servicio secreto está financiado con fondos de la Comunidad hace "un trabajo presupuestado y, por tanto, no secreto". "Cada uno tiene unos asesores, como cualquier cargo político. ¿Los detectives qué hacen? Investigar, ¿no? La labor de un detective no es delito", concluyó.

- Sindicatos policiales. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) pidió a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía que abran "de forma inmediata" una investigación para saber si agentes en activo han facilitado información al supuesto servicio de espionaje. "No se puede trasladar información policial a ninguna instancia que no sea judicial", subrayó el secretario general del sindicato, José Manuel Sánchez Fonet. Tachó de "impresentable" al ex comisario Marcos Peña y de "reprochable éticamente" la participación de ex agentes, y reclamó al consejero Granados "una decisión política cuanto antes".

"Corrupción mafiosa"

"Esperanza Aguirre tiene que dar explicaciones sobre lo que sería una actitud delictiva de su Gobierno [...] Que todos los españoles conozcan si hay una red de espías financiada con fondos públicos", reclamó Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños. "De confirmarse" la existencia de dicha red, sería "similar a una organización mafiosa y supondría el caso más grave de corrupción de la democracia española", añadió.

Gómez se mostró convencido de que la Delegación del Gobierno en Madrid "cumplirá con su obligación, se interesará y actuará", y no descartó pedir una comisión de investigación parlamentaria.

La secretaria general del PSOE, Leire Pajín, exigió a Aguirre que aclare los hechos y actúe "en consecuencia y con rotundidad".

(www.elpais.com, 20/01/09)

7. GRANADOS Y AGUIRRE NIEGAN CUALQUIER RED DE ESPIONAJE EN EL GOBIERNO DE MADRID

Francisco Granados y Esperanza Aguirre han reaccionado echando balones fuera y disparando contra el mensajero. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha calificado de "novela" la información que revela un supuesto servicio de espionaje dependiente de su departamento.

"Comprendo que en momentos en que el vicepresidente primero del Gobierno (español)", en alusión a Pedro Solbes, dijo Granados, "reconoce que ha agotado sus recetas y medidas para afrontar la crisis, pues haya algún medio de comunicación (...) que pretenda ocultar esa triste realidad mediante la novela, pero no deja de ser una novela", enfatizó.

De igual modo, explicó que Marcos Peña, el inspector de policía que supuestamente dirigiría dicha **organización de espionaje** para el Gobierno de Esperanza Aguirre, ocupa un puesto de asesor en la Consejería de Presidencia pero no dispone de ninguna estructura de personal a su cargo.

El consejero indicó, asimismo, que la Consejería desarrolla las competencias de Seguridad a través de la "colaboración leal de las BESCAM con el Ministerio del Interior". "La Comunidad de Madrid desarrolla las competencias que le marca el Decreto en materia de seguridad, nada más y nada menos. No comento los mecanismos de seguridad, simplemente la Comunidad desarrolla el ejercicio las competencias de seguridad que le da la ley", insistió.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tan solo se ha limitado a decir lo siguiente: "Cada vez que el periódico *El País* tiene problemas, por ejemplo, el señor Solbes, que dijo que el Gobierno ya tiene agotadas todas las posibilidades frente a la crisis, ataca al PP de Madrid o al Gobierno de Madrid", indicó.

Sin embargo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no ha sido tan contundente. De Cospedal ha asegurado que Aguirre y Granados le han "desmentido tajantemente" la supuesta red de espionaje pero cree que sería algo "muy grave" de confirmarse.

El PSOE no se ha quedado callado ante lo revelado por *El País*. La secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que "investigue" si su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha creado un servicio de información privado y, si se confirma, que "actúe con toda la rotundidad".

"El PSOE exige a la presidenta de la comunidad de Madrid que aclare los hechos, porque de confirmarse estamos hablando de hechos muy graves. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene la obligación de investigar y de actuar en consecuencia", dijo Pajín en rueda de prensa tras una reunión de la comisión permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Además, la 'número tres' del PSOE consideró llamativo que "ni siquiera los altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre se hayan enterado" de este servicio de información que, según el diario, ha creado Granados.

(www.publico.es, 20/01/09)

8. "MONTADO EL DISPOSITIVO EN TORNO A COBO"

El equipo de ex agentes al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, hizo seguimientos diarios a Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, en abril de 2008. Desde septiembre de 2007, el departamento de Interior había fichado a tres ex guardias civiles como asesores de seguridad. Actualmente, trabajan a las órdenes del ex policía nacional Marcos Peña, que ha reconocido que entre sus tareas estaba la elaboración de informes sobre tramas de corrupción en ayuntamientos dirigidos por socialistas. Durante el mes de abril de 2008 se había desencadenado con toda su crudeza la batalla por el poder en el Partido Popular tras el fracaso electoral de su líder, Mariano Rajoy, en las elecciones generales de 2008. Los ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid usaron vehículos para sus seguimientos a Cobo y a otros altos cargos del PP, supuestos rivales de Aguirre en aquel momento.

De los seguimientos ha quedado constancia escrita en informes, encabezados por la palabra "Parte". En ellos se reflejan los movimientos de las personas investigadas. Al vicealcalde de Madrid le hacían seguimientos algunos días en los alrededores de su despacho en el Palacio de Correos y otros días desde que salía por la mañana de su domicilio particular, en una población vecina de la capital. Así ocurrió el 2 de abril: "Cobo sale del domicilio a las 08.25 de la mañana, tomando el itinerario particular y llegando a su puesto de trabajo a las 09.02 horas. Se observa que durante los desplazamientos le acompañan una moto y un vehículo turismo con un ocupante por detrás, realizando la contravigilancia. Este mismo vehículo es el que también realiza la contravigilancia en su domicilio".

Las tareas de protección y contravigilancia de concejales en el Ayuntamiento de Madrid están asignadas a la Policía Municipal y a ningún otro cuerpo de seguridad. "Una vez llega el objetivo al puesto de trabajo", continúa el parte de ese día referido al seguimiento de Manuel Cobo, "como quiera que la zona está dotada de fuertes medidas de vigilancia y control, después de un tiempo prudencial, abandonamos la zona y nos dirigimos a montar el dispositivo de otro objetivo".

Los ex guardias civiles temen, y así lo manifiestan en sus partes, que sean localizados por la protección oficial del vicealcalde de Madrid.

Los partes de seguimiento del vicealcalde coinciden con un momento político en el que el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón apoya de manera entusiasta a Mariano Rajoy para que continúe al frente del partido. En ese periodo, tiene un peso vital la información de quién se reúne con quién o quién come con quién dentro del PP para comprobar alianzas, deserciones o cambios de filas en las posturas enfrentadas en el partido. Aguirre y Rajoy pugnan por ganar adeptos a su causa. Y los partes pueden ser un buen guión para saber si alguien de las filas aguirristas coquetea con los marianistas o para percibir qué poder y contactos tienen con Rajoy los fieles a Ruiz-Gallardón, y si están intentando captar fieles en las filas del Gobierno regional.

El seguimiento de los guardias civiles se detiene el 8 de abril en los aledaños de Génova, 13, sede del Partido Popular. "A media mañana, 'C' [Cobo] se encuentra en la sede del PP sita en la calle de Génova, de dónde sale a las 14.25".

Ese día, la reunión del comité regional, cargada de máxima tensión, tuvo como plato fuerte la discusión de cuántos compromisarios debían corresponderle al PP de Madrid en el inminente congreso del partido. Los cargos afines a Aguirre se quejaban de que en el congreso nacional, donde se dirimía la continuidad de Rajoy como líder, a Madrid le correspondían menos compromisarios de los que debería tener en función de su peso por afiliados. Manuel Cobo, presente en la reunión, se quejó de que los estatutos de Madrid también limitaron su propia candidatura en 2004, y entonces los aguirristas no protestaron.

Los seguimientos a políticos por parte de ex agentes al servicio de la Comunidad de Madrid han sido negados tanto por el consejero de Interior, Francisco Granados, como por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. "Creo que la Comunidad de Madrid es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje y si se elaboran dossiers se está delinquiendo", aseguró Aguirre.

Su Gobierno decidió trasladar a la fiscalía una petición para que se investigue el espionaje al vicepresidente, Ignacio González, en sus viajes públicos y privados al extranjero. En el caso del desplazamiento a Cartagena de Indias (Colombia) en viaje oficial, González fue grabado mediante cámaras ocultas. En su viaje privado a Johannesburgo, en compañía de un contratista de la Comunidad de Madrid, los espías lograron copia de sus billetes, pagados en metálico. El propio González sospecha que hubo complicidades internas dentro de la Comunidad para llevar a cabo el espionaje al que fue sometido en Cartagena de Indias, según se desprende de su propia denuncia.

El Ejecutivo regional del PP no ha abierto ninguna investigación interna para esclarecer si ex policías y ex guardias civiles, contratados por la Consejería de Interior entre septiembre de 2007 y junio de 2008, han realizado seguimientos a políticos y han elaborado dossiers sobre distintos escándalos.

(www.elpais.com, 21/01/09)

Algunos "partes" del vicealcalde

- 1 de abril de 2008. "Montado el dispositivo en el puesto de trabajo de Cobo, no observamos movimientos durante la primera parte de la mañana. A lo largo del resto del día, no observamos movimientos de Cobo, teniendo en cuenta la dificultad que entraña la zona de trabajo de éste, decidimos desmontar el operativo".

- 3 de abril de 2008. "Llegada de "C" a su lugar de trabajo a la hora habitual. Permanecemos en la misma hasta media mañana con el fin de ver si sale. Transcurrido un tiempo prudencial, comprobamos que no hay movimientos. Abandonamos la zona".

- 4 de abril de 2008. "Llegada de "C" a la hora habitual al puesto de trabajo. Su vehículo oficial, una vez lo deja dentro, abandona el lugar (maniobra habitual) comprobamos si aparca en la parte de atrás, ya que hay un parking, pero el vehículo toma dirección Atocha por la calle de Alfonso XII".

- 7 de abril de 2008. "Llegada de "C" a la hora habitual al trabajo, quedándose su vehículo en el interior de la puerta principal. Al no observar movimientos nos retiramos al otro objetivo".

(www.elpais.com, 21/01/09)

9. MANUEL COBO, 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN, DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE

El vicealcalde de Madrid y número dos de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, ha denunciado ante la Fiscalía el presunto espionaje sufrido por parte del Gobierno de Aguirre. Cobo ha anunciado que va a denunciar estos presuntos espionajes después de las informaciones publicadas por *El País*. En concreto, Cobo quiere saber quién ha realizado esos seguimientos y "quién o quiénes" lo han ordenado, si esas personas tienen una retribución pública y, en ese caso, si esa administración o entidad que les paga tiene competencias para realizar un seguimiento, a "quién o a quienes" se entregaban los informes y con qué fin se realizaban.

El 'número dos' de Gallardón ha confirmado todas las informaciones publicadas hasta el momento y ha asegurado que los seguimientos se han hecho "de forma ilegal". "No se puede realizar este tipo de actuaciones ni conmigo ni con nadie". Cobo no ha querido apuntar a nadie del Gobierno de la Comunidad de Madrid como responsables de los espionajes. "No quiero lanzar sospechas", ha dicho, y ha añadido que se tiene que poner bajo la tutela judicial. Además, no cree que haya sido por hacerse con el control de **Caja Madrid**, ya que en el mes de abril no tenía nada que ver.

También ha declarado que lo considera un hecho "muy grave" y que no sabe "cuál era el objetivo". "Espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias se depuren responsabilidades", ha agregado. Ha apuntado a posibles equipos parapoliciales, por la jerga que utilizan, y ha asegurado que ha hablado con Granados, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, pero no con Rubalcaba, además de recibir mensajes de Esperanza Aguirre.

El grupo de ex agentes de la Policía y de la Guardia Civil a sueldo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados, habría hecho seguimientos diarios a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón.

Estos seguimientos, según documentos en poder de este diario, se realizaron el pasado mes de abril, cuando en el PP surgieron discrepancias internas sobre la continuidad de Mariano Rajoy al frente del partido tras su derrota electoral en los comicios de marzo. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también fue objeto de distintos seguimientos en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero.

Según *El País*, los ex agentes encargados de estos seguimientos fueron fichados en septiembre de 2007 por la Consejería de Interior como "asesores de seguridad", según Granados, y trabajan a las órdenes del ex policía nacional Marcos Peña.

(www.publico.es, 21/01/09)

10. RAJOY CONFÍA EN LA 'LIDERESA'

El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le ha comunicado que ni ella ni sus asesores están implicados en el supuesto caso de espionaje a altos cargos del Gobierno regional. En cualquier caso, señaló que sería "bueno" abrir una investigación para averiguar quién se dedica a "esta suerte de actividades". "A mi lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto y yo les creo", declaró Rajoy.

Rajoy afirmó que sólo conocía de ese asunto lo que han recogido los medios de comunicación. Eso sí, confesó que había hablado "lógicamente" con Aguirre, quien, según indicó, le ha dicho que "desconoce todo este tema". A continuación, destacó que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, ha solicitado comparecer en la Asamblea de Madrid para "decir lo que sabe" sobre el supuesto caso de espionaje. No obstante, auguró que no puede aportar "grandes cosas".

(www.publico.es, 21/01/09)

11. GRANADOS: "SOMOS VÍCTIMAS DE UNA MANIOBRA CON EL ÚNICO FIN DE DESPRESTIGIAR AL GOBIERNO DE AGUIRRE"

El Consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado que tanto Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, como él, son "víctimas de una maniobra con el único fin de desprestigiar al Gobierno de Aguirre". Granados ha desmentido las informaciones publicadas en los últimos días por el diario *El País*, y ha dicho que "no hay una red de espías que se dedique a investigar a gente del partido". El Consejero de Interior ha confirmado que Cobo va a denunciar el supuesto espionaje, ya que ha hablado con él, y se ha alegrado de que lo ponga en manos de la Justicia.

Por su parte, Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, ha comentado que es un asunto muy serio, y que "tiene que ser alguien con mucho dinero y muy cercano a los movimientos" de Cobo.

(www.publico.es, 21/01/09)

12. EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE PIDE AL FISCAL QUE INVESTIGUE QUIÉN LE ESPÍÓ

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se investigue el espionaje del que supuestamente fue objeto durante dos viajes al extranjero, uno público y otro privado, realizados el año pasado. Esos "seguimientos parapoliciales", destapados por este periódico, no tienen autoría conocida, pero González sospecha que sus responsables pueden estar "muy cerca" de él. La Comunidad presentó anoche otra denuncia idéntica ante el juez de guardia.

"Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma el vicepresidente madrileño en la denuncia presentada ante el fiscal. Los hechos -"desconociendo si su autoría ha de atribuirse a particulares, funcionarios o profesionales"- serían, según González, constitutivos de un delito de "descubrimiento y revelación de secretos", penado con hasta cinco años de cárcel.

La propia Aguirre había anunciado por la mañana que su Gobierno presentaría las denuncias para aclarar el supuesto espionaje, porque, "si se están elaborando dossiers, se está delinquiendo". Aguirre aseguró que la Comunidad de Madrid "no tiene nada que ver" con esos seguimientos y los desvinculó de otro caso denunciado la víspera por *EL PAÍS*: la existencia de un supuesto servicio secreto de vigilancia en el seno de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Francisco Granados. "Se intenta mezclar interesadamente", protestó.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que por la tarde no había recibido aún la denuncia, ya ha adelantado, sin embargo, que él no ve delito. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje que es un personaje público, porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y eso, así, sin más, no es ningún tipo de delito [...] a menos que se vulneren derechos fundamentales como el derecho a la propia imagen o se intercepten sus comunicaciones", afirmó. Tanto Moix como el teniente fiscal, Carlos Ruiz de Alegría, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, comentaron también la información de este diario sobre el supuesto servicio de vigilancia montado en la consejería de Granados y concluyeron que su asesor Marcos Peña, presunto jefe de la red, ha sido contratado "con publicidad" y que otras personas forman parte del organigrama como "asesores", por lo que no se atisba tampoco ninguna ilicitud.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, abundó en declaraciones a Europa Press en que "hoy por hoy no hay nada. Podrá ser correcto o no, pero no es delito".

(www.elpais.com, 21/01/09)

13. AGUIRRE PIDE AL FISCAL QUE ACLARE QUIÉN ESPÍA A SU VICEPRESIDENTE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene tal enredo en el seno de su Gobierno --con espías y dossieres de por medio-- que se ha visto obligada a recurrir a los tribunales y a la fiscalía para que le ayude, si es posible, a aclararlo. , el diario *El País* publicó que el vicepresidente y hombre de máxima confianza de Aguirre, Ignacio González, ha sido espiado en sus viajes oficiales y privados al extranjero. Existen fotos y documentos privados que así lo prueban. Según fuentes del entorno de González, él desconoce por orden de quién o con qué objeto se realizaron esos seguimientos.

Además, el lunes se conoció que el consejero madrileño de Interior, Francisco Granados, había contratado con dinero público a un equipo formado por al menos un expolicía y varios exguardias civiles para hacer informes confidenciales sobre diversos temas. Ese equipo, supuestamente, funciona al margen del director de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique Barón.

Resulta inevitable preguntarse si ambas cuestiones, el espionaje a González y el grupo de seudoespías o asesores constituido por su compañero Granados, están o no relacionados entre sí. El consejero de

Interior lo niega. Y los colaboradores de Aguirre prefieren no dar crédito, al menos por el momento, a esa tesis.

Pero la presidenta, a quien no ha gustado nada que su responsable de Interior tenga asesores-policías, quiere saber qué ocurre en su gabinete. Especialmente, al entender que, sea quien sea quien espía a su vicepresidente, hay un topo en la Comunidad que ha filtrado datos de su agenda que podrían haber comprometido su seguridad. Por eso, solicitó a sus servicios jurídicos que interpongan una denuncia en el juzgado de guardia, y a la fiscalía, que investigue si algunos de sus altos cargos ha sido objeto de seguimiento. Su consejero de Interior también se mostró partidario de que se den estos pasos, ya que desvincula totalmente esa cuestión de la que a él le atañe.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ya advirtió de que no puede actuar de oficio en el caso que afecta a González, aunque, cuando haya una denuncia registrada, iniciará los trámites pertinentes para ver si existen indicios de delito. Por su lado, el PSOE e IU han exigido a Granados que explique a qué se dedican exactamente sus nuevos asesores. Y ya han alertado de que, si esas explicaciones no les resultan satisfactorias, demandarán la creación de una comisión de investigación.

A la espera de que se vayan despejando tan oscuros enigmas, Aguirre no parece tener una semana fácil por delante: el escándalo del espionaje viene a unirse a la guerra que aún mantiene abierta con Caja Madrid, donde está dispuesta a jugar todas sus cartas para intentar apartar a su actual presidente, Miguel Blesa. ¿Y qué dice su partido, el PP de Mariano Rajoy, de todo esto? Pues que hay que investigar asuntos de índole tan grave --en lo que concierne a los dosieres y los espías-- y que deben cesar las maniobras políticas en el seno de las entidades financieras. Respaldo a Aguirre, el justo.

(www.elperiodico.com, 21/01/09)

14. LOS ESPÍAS SIGUIERON AL CONSEJERO PRADA ANTES DE SER DESTITUIDO POR AGUIRRE

Algunos de los ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid espionaron en los meses previos al congreso nacional del PP, en 2008, a Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Esperanza Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy. Aquellos días, el equipo de espías de la Comunidad de Madrid vigilaba también a Manuel Cobo, vicealcalde de Alberto Ruiz-Gallardón, que mantenía posiciones muy críticas con Aguirre por la batalla que estaba dando por desbancar a Rajoy al frente del PP. Tras más de tres meses de seguimiento de estos espías y tras confirmar Rajoy su liderazgo en el congreso del partido, Aguirre destituyó a Prada, el 25 de junio de 2008. En septiembre, Rajoy lo fichaba para su dirección como responsable de exterior.

Los ex agentes iban de un "objetivo" a otro en sus seguimientos, de los que dejaban constancia en partes diarios. Los asesores de seguridad de Granados dedicaron semanas enteras a espiar celosamente a uno de los miembros del Gobierno de Aguirre caído en desgracia. Prada, que llegó a ser vicepresidente y consejero de Justicia e Interior en el primer Gobierno de Aguirre, se mantenía en 2008 sólo como consejero de Justicia. En el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se estaba produciendo la insólita circunstancia de que empleados de una consejería espionaban al máximo responsable de otra. Los seguimientos incluían todo tipo de actividades de Prada: citas privadas, comidas de trabajo, actos públicos... Éstos son los "partes" principales:

- Llega nuestro director. Los partes revelan para quién trabajan los espías. El 22 de abril, mientras vigilan las entradas y salidas en el despacho oficial de Prada, anotan lo siguiente: "A las 17.30 llega al puesto de trabajo habitual de P [Prada] el conductor de nuestro director (Sergio)". Y el 15 de marzo detallaban cuál era su sede: "Prada sale sólo del restaurante, se monta en el vehículo oficial y nos dirigimos a la reunión que tenemos en la D. G. [Dirección General]". El 23 de abril anotan: "A las 18.25 nos desplazamos a la Dirección a requerimiento de Miguel [supuestamente, Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad]".

- Seguimiento a Chinchón. Prada fue vigilado en su desplazamiento hasta el parador de Chinchón, a 46 kilómetros de Madrid, el 13 de abril de 2008. "Sobre las 12.20 horas detectamos el vehículo de P [Prada] en el aparcamiento interno del Parador Nacional de Chinchón. En torno a las 18.15 horas sale P del Parador de Chinchón dirección a Madrid, llegando a su trabajo sobre las 19.35". Los espías luego le seguirán hasta su casa. Ese día, Prada tuvo una reunión en el parador con los 25 miembros de su equipo de trabajo de la Consejería de Justicia.

- De un objetivo a otro. Los partes diarios sobre el objetivo "P" prueban la intensidad del seguimiento al que fue sometido Prada. El 2 de abril de 2008, tras montar una vigilancia en torno a Manuel Cobo, los espías no encuentran nada relevante: "No observamos movimientos del mismo, por tal motivo desmontamos el dispositivo y nos dirigimos a Prada".

- Control de visitas. Los espías, de alguna manera, llegaban a controlar no sólo los pasos de Prada, sino a identificar a sus visitantes oficiales. El 4 de abril se inquietan: "Nos dirigimos al puesto de trabajo de P. Observamos que su vehículo oficial se encuentra aparcado en el lugar habitual y que en la esquina está estacionado con un conductor dentro de un vehículo. Una vez verificados los datos comprobamos que pertenece a Clara R.". Este punto permite dos lecturas: los espías han tenido acceso a los datos de Tráfico, sólo accesibles legalmente a las unidades policiales, algo que no son. Clara R. era promotora de una fundación.

- Comprobar matrículas. El 14 de abril persiguen un kilómetro a Prada cerca de la plaza de Colón. Le pierden la pista. Por fin retoman el seguimiento cuando vuelve a su despacho oficial. "Sobre las 22.10 sale del domicilio y se dirige a un restaurante sito en la calle Comandante Zorita, en el cual entra en compañía de su mujer y de una chica muy joven; permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas, en la que salen. Al mismo tiempo, observamos un grupo de personas sin precisar si en tal evento participaron de la compañía de P. Se tomaron matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios". Los hombres de la Consejería de Interior están practicando contra un consejero del Gobierno de Aguirre las mismas técnicas que sus compañeros en activo utilizan para capturar a delincuentes: pacientes seguimientos del objetivo e identificación de todos sus contactos para después analizar su perfil y vínculos con el investigado.

- Amplio despliegue y fotos. A veces pierden, como el 16 de abril, el rastro de su objetivo: "Esta persona se monta en el coche con P y se dirige dirección Miguel Ángel-Rubén Darío-Almagro, itinerario descubierto [no vigilado] por el dispositivo por falta de medios y personas, estando cubiertas las salidas de General Martínez Campos y de Paseo de Castellana con un vehículo con una persona cada uno y el otro componente dando la salida del objetivo". No menos de tres coches, más de cuatro agentes, conforman el grupo que espía a Prada. "Desde las 20.30 hasta las 22.30 horas nos desplazamos constantemente al domicilio de la persona y a su puesto de trabajo, así como al estadio Vicente Calderón de esta capital siendo infructuosos todos los intentos mencionados, desmontamos el dispositivo a las 22.45 horas".

Nuevo problema el día 18: "A las 22.22 horas lo perdemos debido a que toma un camino que sólo está cubierto por un vehículo y sale otro de un garaje que obstruye nuestra maniobra". El 20 de mayo, Prada acude al restaurante del hotel Hesperia: "Se reúne en el interior con un hombre de edad avanzada y una estatura similar a la de P. Se hicieron fotos por parte de los otros dos hombres del dispositivo que también entraron posteriormente". Prada fue seguido durante tres meses. Al mes, fue destituido.

(www.elpais.com, 22/01/09)

15. CRONOLOGÍA DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

- De noviembre de 2003 a junio de 2007. Alfredo Prada es vicepresidente y consejero de Justicia e Interior desde noviembre de 2003 hasta junio de 2007. Ficha a Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana.

- Junio de 2007. Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia, asume también las competencias de Interior.

- 11 de septiembre de 2007. Granados ficha a tres guardias civiles de Valdemoro (localidad de la que fue alcalde) como asesores de seguridad.

- Abril de 2008. Espionaje de agentes de la Consejería de Interior a Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid) y Prada (consejero de Justicia).

- 27 de junio de 2008. Por recomendación de Jaime Ignacio del Burgo, Granados ficha a Marcos Peña como jefe del departamento de asesores de seguridad.

- Junio de 2008. Mariano Rajoy es reelegido presidente del PP. Prada le apoya. Rajoy le adjudica más tarde un cargo orgánico en la dirección del PP.

- 26 de junio de 2008. Aguirre destituye a Prada como consejero de Justicia.
- 27 de junio de 2008. Sergio Gamón, director general de seguridad ciudadana, registra una sede de la Consejería de Justicia y requisita un ordenador donde había supuestamente informes confidenciales (algunas fuentes aseguran que pertenecían a Granados y otras que se habían elaborado contra Ignacio González).
- Julio de 2008. Granados destituye a Gamón como director general de seguridad ciudadana y ficha a Enrique Barón, hasta entonces jefe superior de policía de Madrid.
- Agosto de 2008. Espionaje a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia).
- Enero de 2009. Peña asegura que hace informes para Granados sobre tramas de corrupción política que afectan a municipios gobernados por alcaldes sociales y sobre diversos escándalos.

(www.elpais.com, 22/01/09)

16. PRADA: "ES UNA ACTIVIDAD ILEGAL CON FONDOS PÚBLICOS"

"Debe caer el peso de la ley sobre los presuntos delincuentes". El ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, último vinculado a la trama de espionaje político en la región, éste como víctima, ha anunciado que pondrá en manos de la justicia el seguimiento al que fue sometido. Prada ha reconocido que los hechos son "muy graves" más si cabe cuando hay fondos públicos de por medio. El miembro del Comité Nacional del partido afín a Mariano Rajoy ha manifestado que denunciará el caso, bien ante un juzgado bien ante la Fiscalía, y ha reconocido que se plantea pedir "amparo" ante la Asamblea madrileña como diputado que es.

"El señor Gallardón dijo anoche que estaba indignado, imagine cuando uno mismo lee en el periódico que ha sido objeto de espionaje e investigación, a su mujer y a su hijo. Es muy grave" ha afirmado Prada. El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, fue el invitado del programa de TVE 59 segundos el día que *EL PAÍS* revelaba que su número dos, Manuel Cobo, también había sido seguido en abril de 2008. Gallardón aclaró que una comunidad "no puede tener un cuerpo parapolicial" y manifestó que habrá que "depurar responsabilidades".

Prada, que fuera consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid desde noviembre de 2003 a junio de 2007, ha descartado que tenga nada que ver con el equipo de asesores de seguridad del actual consejero de Presidencia, Francisco Granados, que según ha informado *EL PAÍS* ha desempeñado labores de espionaje. "Es un equipo ex novo -ha explicado Prada- que se crea en septiembre de 2007 y yo dejo de tener competencia en Interior en junio". El diputado madrileño ha afirmado que pidió a la presidenta Esperanza Aguirre que desmintiera cualquier vinculación con ese cuerpo y así lo hizo. Granados cuenta con un equipo de tres ex agentes de la Guardia Civil dirigidos por el ex inspector de la Policía Marcos Peña para desempeñar, según él mismo ha reconocido labores de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos".

Según publica *EL PAÍS*, algunos de los ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la comunidad espionaron en los meses previos al congreso nacional del PP en 2008 a Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy. En el congreso nacional del partido celebrado en mayo de 2008, Prada fue incluido en el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de Rajoy. Un mes después, el entonces consejero de Justicia fue sustituido en su cargo por Aguirre.

(www.elpais.com, 22/01/09)

17. "BAJA ESTATURA, CABEZA DESPOBLADA, CINTURA GRUESA"

Los seguimientos a Alfredo Prada a lo largo de tres meses, durante la etapa en que fue consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, parecían tener como objetivo identificar a las personas que se veían con el alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre. Por eso, en los partes diarios que recogen el trabajo de investigación, apenas detallan sus descubrimientos salvo cuando descubren una cita de su objetivo, al que denominan "P", y entonces intentan concretar con todos los datos que consiguen de quién se trata.

En alguno de los partes, los espías recurren al número de la matrícula del vehículo en el que llega la persona que se ha citado con Prada para, a través de sus propias pesquisas, averiguar la identidad de sus propietarios. En otras ocasiones, se limitan a una descripción, como ocurrió el 16 de abril de 2008, cuando Prada fue a comer a un restaurante próximo a su lugar de trabajo en la calle del General Martínez Campos.

- "Canoso y nariz puntiaguda". Prada comió supuestamente en el restaurante Yate y prolongó mucho la sobremesa. Cuando salió, los agentes apuntaron en su parte: "Sale con un individuo que se ajusta a la siguiente descripción: baja estatura, cabeza despoblada, color de pelo moreno-canoso, nariz puntiaguda, cintura gruesa. Esta persona se monta en el coche con 'P' y se dirigen en dirección Miguel Ángel-Rubén Darío-Almagro".

- "Edad avanzada, calvo y con gafas". El 20 de mayo, los ex agentes de Granados localizan a Prada a las 20.45 saliendo de su despacho y escriben: "Se dirige caminando al hotel Hesperia. Se reúne en su interior con un hombre de edad avanzada, calvo, con gafas y de una estatura similar a la de 'P'. Se hicieron fotos por parte de los otros dos hombres del dispositivo, que también entraron posteriormente". En los partes, no figuran las fotografías que se tomaron del amigo de Prada.

(www.elpais.com, 22/01/09)

18. RAJOY EXIGE A AGUIRRE QUE ACLARE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID

Mariano Rajoy está muy preocupado por las repercusiones que pueda tener la trama de espionaje destapada alrededor de la Comunidad de Madrid, así como por la circunstancia de que hayan trascendido seguimientos a miembros del PP: hasta ahora, el vicepresidente madrileño, Ignacio González, y el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo. "Quiero que se aclare esto cuanto antes", le dijo por teléfono Rajoy a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, el lunes por la mañana.

Según parece, ella le garantizó entonces que su gobierno --especialmente su consejero de Interior, Francisco Granados-- no estaba vinculado a ningún equipo de espías, pese a que así lo publicaba *El País* ese mismo día. Rajoy dio por buena esa versión, pero avisó de que consideraría "muy grave" que lo publicado por el diario resultara ser cierto. En la misma línea se pronunció ante la prensa, unos minutos después, su secretaria general, Dolores de Cospedal. "La Comunidad de Madrid ha desmentido tajantemente la información y yo me remito a ese desmentido. Se trataría, si fuera cierto, de unas cuestiones muy graves", declaró entonces Cospedal, marcando así la línea oficial del partido: respaldo a Aguirre, pero con reservas.

Una vez que se supo que González y Cobo habían sido espíados, el responsable de Interior en Madrid, Francisco Granados, desmintió por activa y por pasiva que él tenga a su disposición una miniagencia de espías. Y menos, según su versión, para vigilar a compañeros. Eso sí, ha admitido que un expolicía y varios exguardias civiles trabajan para él en calidad de asesores, pese a que la Comunidad ya cuenta con un responsable de seguridad, Enrique Barón.

Aguirre, en un intento de frenar la polémica, anunció que la Comunidad presentaba una denuncia en el juzgado por los seguimientos realizados al vicepresidente González. El propio González denunció a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el asunto. Granados, ante los medios de comunicación, dio su visto bueno a esa estrategia. Y Rajoy y su equipo también, porque vieron "voluntad" de aclarar "un tema turbio que perjudica a todo el partido". El vicealcalde Cobo, al conocer que también él fue sido espíado, recurrió a la fiscalía.

Ante los escritos de los espíados, fuentes de la fiscalía consultadas por este diario se declaran "sorprendidas" por el hecho de que tanto González como Cobo se hayan dirigido directamente a la fiscalía del Tribunal de Madrid, dando por hecho que a quien se tendrá que investigar es aforado. Es decir, diputado autonómico. No obstante, esas mismas fuentes apuntan que el hecho de que la presidenta haya presentado la denuncia en un juzgado ordinario desactiva de inmediato cualquier posible actuación del fiscal, que debe dejar el caso en manos del juez competente.

En cualquier caso, las mismas fuentes prevén una investigación con difícil resolución, dada la complejidad del tema y que es un medio de comunicación el que posee los dosieres sobre González y Cobo. De hecho, la Comunidad ya se enfrentó a otro supuesto caso de espionaje ligado a Granados: el del registro del despacho del exconsejero Alfredo Prada, finalmente archivado.

Y, a la espera de que los tribunales actúen, los afectados barajan todo tipo de hipótesis. El vicealcalde

Cobo dijo , en rueda de prensa, que no cree que tras sus seguimientos estén Aguirre y Granados. Pero su escrito a la fiscalía se sustenta en esa tesis.

El vicepresidente González también aparta a Granados del espionaje al que ha sido sometido. En declaraciones dijo que "no prejuzga ni descarta" nada sobre quién pueda estar detrás de su dossier, pese a que considera que para realizarlo se ha necesitado "una estructura, mucho dinero y medios sofisticados". Los afectados tienen prisa por saber. Rajoy, por lo que a él y a la imagen de su partido atañe, también.

(www.elperiodico.com, 22/01/09)

19. RODARÁN CABEZAS EN EL PP DE MADRID SI SE DEMUESTRA EL ESPIONAJE POLÍTICO

Hay que llegar hasta el final, y si se demuestra que alguien ha espiado a alguien, rodarán cabezas. La dirección nacional del PP no está dispuesta a mirar para otro lado en el caso de espionaje desvelado por el diario *El País*, que implica al consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a quien las informaciones atribuyen la creación de un servicio formado por ex policías y ex guardias civiles que supuestamente tenían como tarea elaborar informes, contravigilancia y seguimiento.

El servicio se creó para investigar casos de corrupción en ayuntamientos socialistas, pero también fue espiado el vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, con el fin de conocer los apoyos que buscaba el alcalde tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en marzo pasado.

La trama se complica cuando trasciende un supuesto espionaje al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que fue seguido en sus viajes al extranjero. Todos estos hechos han acabado en manos de la fiscalía con denuncias en paralelo.

Los principales afectados por el escándalo son personas de la máxima confianza política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el partido y en el gobierno de la comunidad autónoma. Además del potente departamento que dirige en el Gobierno de Aguirre, Francisco Granados es secretario general del PP de Madrid. Ignacio González es vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre. Granados y González han negado cualquier vinculación con los hechos y, de momento, Rajoy se lo cree.

"A mí, lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tiene conocimiento de este asunto, y yo les creo", dijo Rajoy. Pero el presidente del PP considera el caso "especialmente grave", por lo que en la dirección popular se considera que el más mínimo atisbo de verosimilitud en la trama debe concluir con la petición de responsabilidades políticas y dimisiones.

Ya hay quien en el círculo próximo a Rajoy pide mano dura. Pero no sólo en el sector oficial del PP. También en la propia Comunidad se levantan voces que exigen esas responsabilidades. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, subrayó que si se demuestra que Francisco Granados tiene alguna implicación "debe ser destituido, no debe dimitir, que parece que es más digno, sino que debe ser destituido por quien tiene potestad para hacerlo". Sin embargo, no encuentra sentido a una comisión de investigación, al estar el caso en los tribunales.

Granados ha confirmado que contrató a los ex agentes, pero para labores de contravigilancia, dentro de sus competencias como consejero de Interior, pero ha negado, igual que Esperanza Aguirre, que haya servido para espiar a alguien, sea al vicepresidente Ignacio González o al vicealcalde Manuel Cobo.

Los dos dirigentes no sólo lo han negado, sino que han dado la vuelta al caso, y aseguran que todo es una maniobra para desprestigiar a Esperanza Aguirre y al PP de Madrid, enfrentado con la dirección nacional. Desde algunos sectores de dentro y de fuera del PP se relaciona el supuesto espionaje con el caso de Caja Madrid, donde Aguirre y Gallardón mantienen un pulso por el poder.

De momento, Granados ha pedido comparecer en la Asamblea de Madrid para explicarse, pero la oposición quiere que haya una investigación parlamentaria sobre lo ocurrido, que, según los socialistas, constituye "una auténtica vergüenza nacional"

(www.lavanguardia.es, 22/01/09)

20. DIRIGENTES DEL PP RECLAMAN A RAJOY QUE INTERVENGA

Los pasillos del Congreso de los Diputados se convirtieron , según varios diputados populares, en una especie de patio de cárcel, donde los presos hablan en voz baja por temor a ser espiado por los guardias. En corrillos, los dirigentes del PP comentaban las noticias de *EL PAÍS* sobre la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Discrepaban en los pasos a seguir, pero todos coincidían en una enorme preocupación, según narraron después.

Varios dirigentes aprovecharon alguno de estos corrillos para acercarse a personas del equipo de Mariano Rajoy para reclamar que el líder intervenga en este asunto. Es un mensaje que no llegó sólo en el Congreso. Fuentes de Génova, la sede central del partido, confirman la enorme preocupación que se vive tanto en ese edificio como en las sedes regionales. De todas partes han llegado mensajes a favor de que el líder intervenga en el asunto, mientras él se mantiene neutral.

El escándalo, además de afectar a la imagen del Gobierno de Esperanza Aguirre, el buque insignia de un PP en la oposición, tiene un claro trasfondo de partido. Se trata de un espionaje entre compañeros, y no de base, sino personas relevantes. Francisco Granados, el consejero del que dependen los supuestos espías, es secretario general del PP madrileño. Y uno de los investigados, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

El entorno de Rajoy -él estaba de viaje en *El País* Vasco y no acudió al Congreso, que se reunió en sesión extraordinaria para aprobar el envío de 395 militares a luchar contra la piratería en las aguas de Somalia- respondió a todos los que reclamaron una intervención más decidida lo que el propio Rajoy había contado por la mañana en Onda Cero: "A mí lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto y yo les creo".

El entorno del líder señala que él tiene que aceptar el desmentido de Aguirre, que no en vano es la presidenta del PP de Madrid y la dirigente con más poder del partido, y dejar que sea ella la que resuelva la situación, con investigaciones internas o destituciones.

Algunos marianistas señalaban que el líder no puede intervenir en este momento de extrema sensibilidad porque cualquier cosa que haga -iniciar una investigación o realizar una declaración contundente- implicaría "abrir la guerra definitiva" con Aguirre, la principal rival política interna de Rajoy, al que no le conviene nada una nueva guerra interna en pleno proceso electoral en *El País* Vasco y en Galicia, donde se juega su imagen.

"Éste es un asunto muy turbio, pero precisamente por eso el líder no puede meterse en el barro y ensuciarse. Hay que ser prudente y esperar a ver qué hace Aguirre. Ella es la principal interesada en resolver esto", señala un dirigente marianista.

En caso de intervención, tendría que ser Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, quien pusiera orden. De hecho, fue ella la que realizó las declaraciones más contundentes hasta ahora. El lunes, cuando aún no se conocía el espionaje de Cobo, señaló que "se trataría, si fuera cierto, de unas cuestiones muy graves ciertamente", aunque se remitió al desmentido de Granados. La mala relación entre el consejero y Cospedal, que también fue miembro del Gobierno de Madrid, es de sobra conocida en los círculos del PP.

A última hora de la tarde, y después de que llegaran mensajes de todas partes que reclamaban la intervención del partido, Génova hizo correr una versión oficial: "La dirección del PP confía en que las investigaciones judiciales y policiales, así como las decisiones pertinentes que adopte el Gobierno de la Comunidad de Madrid, esclarezcan por completo la supuesta trama de espionaje a altos cargos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre y del Ayuntamiento".

En cualquier caso, la inquietud sigue en el partido. No sólo porque esto demuestra una vez más, según varios dirigentes, que el partido tiene un problema en Madrid, sino también porque Rajoy se ve de nuevo externamente como ajeno a la polémica que mantiene a su partido en las portadas. Sin embargo, fuentes de Génova señalan que el líder "tiene mucha información" y está encima del asunto esperando acontecimientos.

Muchos dirigentes, desconocedores de que Manuel Prada, uno de los hombres del equipo de Rajoy, también fue investigado, se preguntaban quién será el próximo. Y se especulaba con la posibilidad de que todos los enemigos de Aguirre, entre los que se cuentan la mayoría de los fieles de Rajoy, como Javier Arenas, estuvieran también en la lista.

(www.elpais.com, 22/01/09)

21. GALLARDÓN PEDIRÁ DIMISIONES SI LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ES LA RESPONSABLE

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió en el programa de TVE 59 segundos que, si se demuestra que los seguimientos a su vicealcalde, "o cualquier otro cargo público", se han financiado desde la Administración --esto es, desde la comunidad-- pedirá que se depuren responsabilidades. En la misma línea se pronunció también la presidenta de la Asamblea madrileña, Elvira Rodríguez.

Gallardón recordó que Madrid no tiene competencias en seguridad, aún menos para tener "un cuerpo parapolicial que realice funciones que no le corresponden y que son ajenas, completamente, a sus obligaciones". Preguntado por si creía lógico que el consejero de Interior, Francisco Granados, tenga contratados a un expolicía y exguardias civiles en su departamento, el alcalde respondió con un categórico "no".

El dirigente popular se congratuló de que Granados acuda a explicarse a la Cámara de Madrid en los próximos días. "Si esta unidad la montada por Granados hubiera realizado una investigación sobre personas con fondos públicos, habría realizado un hecho ilegal", avisó.

(www.elperiodico.com, 22/01/09)

22. UNA TRAMA TURBIA

20 de junio del 2007 Esperanza Aguirre confía a Francisco Granados la cartera de Interior en perjuicio de Alfredo Prada, que conserva Justicia. Granados mantiene al exinspector Sergio Gamón como director de Seguridad.

Septiembre del 2007 Granados ficha al expolicía Marcos Peña como jefe de los exguardias civiles que había contratado Prada. Su misión, funciones de "vigilancia" no aclaradas.

16 de marzo del 2007 Espías no identificados siguen al vicepresidente Ignacio González en un viaje privado a Suráfrica, según *El País*.

Abril del 2008 Agentes de Granados, según este diario, espían al vicealcalde Manuel Cobo, partidario de Rajoy.

25 de junio del 2008 Tras el congreso del PP en Valencia, donde Prada se alinea con Rajoy frente a Aguirre, esta lo destituye. Granados asume las competencias de Justicia.

26 de junio del 2008 Gamón y otros agentes de Granados registran el despacho de Juan Carlos Fernández, director adjunto de Seguridad del Campus de Justicia con Prada. Acusados de requisar un ordenador y documentos, la causa se acaba archivando.

17 de julio del 2008 Al conocerse el registro, Aguirre destituye a Gamón pero lo repesca con un cargo similar: director del Área de Seguridad de Presidencia. La justicia archivará más tarde las diligencias sobre el robo del ordenador.

28 de agosto del 2008 González es objeto de seguimiento durante un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia), donde es grabado con cámara oculta.

21 enero del 2009 Al desvelarse los seguimientos, Aguirre, González y Cobo presentan denuncia por separado. Granados anuncia una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

(www.elperiodico.com, 22/01/09)

23. GALLARDÓN: "JAMÁS SE ME HUBIESE OCURRIDO CREAR UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado esta noche que "jamás" se le hubiese "ocurrido" crear una **unidad "parapolicial" dentro de la Comunidad de Madrid**, de la que ha sido presidente ocho años, y que se si se hubiera encontrado un órgano así "lo hubiera disuelto". "No es un conflicto entre Ayuntamiento y Comunidad", ha asegurado Ruiz-Gallardón en su intervención en el programa de TVE 59 segundos.

El alcalde de Madrid ha asegurado que no ha hablado con la presidenta Esperanza Aguirre desde que han salido a la luz los supuestos casos de espionaje policial, pero ha dicho que el "diálogo existe" aunque se ha producido "por otros cauces de comunicación" y que el presidente de su partido, Mariano Rajoy, sí ha charlado con ella.

El alcalde ha desvinculado cualquier relación entre las discrepancias con Aguirre en el "conflicto" de Caja Madrid con los casos de espionaje a cargos públicos desvelados por el diario *El País* y ha subrayado que su máxima aspiración política para el "futuro" es que Madrid sea la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

Al ser preguntado sobre si tiene constancia de que en la Comunidad de Madrid exista la citada unidad parapolicial, Ruiz-Gallardón se ha remitido "a las declaraciones de los ex policías que han sido entrevistados por el diario *El País*, donde han reconocido la existencia de este órgano que realiza labores de contravigilancia". "Evidentemente", ha agregado el alcalde, estas labores "están al margen de las competencias de la propia comunidad autónoma".

Ruiz-Gallardón ha hecho hincapié en que si "además de esas labores de contravigilancia", la unidad parapolicial "ha realizado labores de investigación sobre personas con fondos públicos", eso es, en su opinión, "absolutamente ilegal".

Al plantearle si hubiera disuelto esa unidad en caso de saber de su existencia, el alcalde ha considerado que se trataba de una "hipótesis imposible" y ha indicado que "no hubiese tenido necesidad de disolver esa unidad", porque "jamás" se le "hubiera ocurrido crear una unidad de esta naturaleza".

Ruiz-Gallardón ha argumentado que una Comunidad Autónoma "no tiene que tener ningún cuerpo 'parapolicial' que realice funciones ajenas a sus obligaciones" y ha respondido que no le parece "lógico" que un consejero -en este caso, **Francisco Granados**- "monte un dispositivo de ese tipo", si bien aplaude su comparecencia ante la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre este asunto.

El alcalde ha destacado que lo importante no es que el vicealcalde de Madrid o el vicepresidente de la Comunidad hayan sido investigados sino el porqué se ha montado una investigación al margen de la Ley. No obstante, el determinar "quienes son los autores materiales de esas investigaciones ilegales y presuntamente delictivas, quienes las han ordenado y financiado y quienes han sido los destinatarios de sus resultados" corresponde a la "investigación penal de la Justicia", ha sostenido el alcalde, y no a "la depuración de responsabilidades internas dentro de un partido político".

"No hablamos de conductas políticas de militantes del PP" -ha añadido- "sino de hechos ilegales realizados por determinadas personas, cuando esas personas estén acreditadas, entonces actuaremos en consecuencia".

Sobre las declaraciones del vicesecretario del PSOE, José Blanco, quien ha opinado que lo que pasa en la Comunidad de Madrid forma parte de la batalla sin cuartel que hay entre el alcalde y Aguirre, Ruiz-Gallardón ha afirmado que le parece "un comentario frívolo" y que no cree "oportuno intentar hacer un aprovechamiento político de carácter partidario" ante unos hechos "tan graves".

(www.publico.es, 22/01/09)

24. GALLARDÓN CRITICA EL "CUERPO PARAPOLICIAL" DE GRANADOS

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y su vicealcalde, Manuel Cobo, exigieron que "se conozcan todos los hechos" y que "se depuren hasta las últimas responsabilidades" en los casos de espionaje a dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital conocidos esta semana. Ambos se mostraron especialmente interesados en esclarecer si detrás de estos seguimientos, que calificaron de "gravísimos" e "ilegales", hay fondos públicos.

Ante la información publicada por el diario *El País*, que responsabiliza directamente a un grupo de ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, Gallardón aseguró que "los datos que tenemos no son suficientes todavía" para dilucidar quién está detrás de los espionajes. No obstante, el alcalde advirtió de que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna competencia en materia de seguridad y por ello no puede tener "un cuerpo parapolicial", ni tan siquiera para realizar labores de protección, tal y como ha justificado el consejero de Interior, Francisco Granados.

Para Gallardón esa unidad es absolutamente "ilegal". Y ante la hipótesis de que esté involucrada en los espionajes añadió: "En mis ocho años al frente de la Comunidad de Madrid, jamás se me hubiera ocurrido crear una unidad de esa naturaleza y, si me la hubiera encontrado organizada, por supuesto que la hubiese disuelto".

Durante su participación en el programa de TVE 59 segundos, el alcalde de Madrid exigió que se conozca "quiénes fueron los autores de los seguimientos, quién los ordenó, a quién se dio cuenta de los mismos y si se pagaron con fondos públicos". Algo que, de confirmarse, según dijo, sería un "delito". "El Estado de Derecho nos llega a todos sin ningún tipo de excepción", advirtió.

En la misma línea se pronunció en una comparecencia pública Manuel Cobo, uno de los políticos víctimas de la supuesta trama de espionaje. El vicealcalde anunció que ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que investigue los hechos. Este paso judicial se suma al dado por la Comunidad de Madrid y su vicepresidente, Ignacio González, otra de las víctimas del supuesto espionaje, en el juzgado de guardia y la Fiscalía, respectivamente.

Cobo calificó el dispositivo que le ha seguido de "ilegal" y "parapolicial". En su opinión, lo ocurrido es inadmisibles "en un Estado de Derecho". "Todo tiene que quedar absolutamente esclarecido", afirmó, antes de negar que el Ayuntamiento de Madrid disponga de personas que realicen informes y tareas similares a las denunciadas estos días.

Tanto Gallardón como Cobo negaron que el asunto del espionaje tenga algo que ver con la disputa por el control de Caja Madrid que enfrenta al Ayuntamiento con el Gobierno regional, tal y como han sugerido algunos dirigentes autonómicos. "Mezclar una cosa con otra carece de sentido", afirmó el alcalde, quien recordó que los seguimientos se produjeron hace un año y que las diferencias sobre la entidad financiera han surgido estos días.

(www.elmundo.es, 22/01/09)

25. LA COMUNIDAD DENUNCIA UNA 'OPERACIÓN DE ACOSO Y DERRIBO' CONTRA AGUIRRE

Los máximos responsables del Ejecutivo de Madrid lo tienen claro. La trama de espionaje de la que, de momento, han sido víctimas los números dos de Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón es "un montaje" y "una operación de acoso y derribo contra el Gobierno de Madrid y su presidenta". Así lo dijo el consejero de Presidencia, Francisco Granados, y así lo creen en el Gobierno regional. El origen de la operación -en opinión de Esperanza Aguirre y de sus más próximos- es la guerra sucia por el poder desatada en Caja Madrid, que mantiene enfrentados al alcalde de la capital y a la presidenta.

Así, ante preguntas directas de los periodistas, Francisco Granados no lo quiso decir expresamente. Pero no consideró en absoluto "descabellado" que Caja Madrid sea el trasfondo de la trama. El consejero de Presidencia e Interior sí apuntó que su Gobierno "todos los días pone encima de la mesa decisiones que pueden afectar a instituciones, empresas y personas poderosas". Y esas personas "pueden tener razones para montar una operación de este tipo, perfectamente elaborada".

González y Granados acudieron a la antigua sede central de Telefónica, en plena Gran Vía madrileña, para celebrar un acto sobre nuevas tecnologías, pero la nube de periodistas que les esperaba no quería saber nada del acto, sino de los seguimientos realizados contra el vicepresidente y el vicealcalde de Madrid.

En declaraciones a los periodistas, Francisco Granados negó una vez más de forma tajante que "exista ninguna organización de espionaje montada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid" y emplazó al diario *El País* a que pruebe sus acusaciones. "Como sé que eso no existe", añadió, "espero que la Policía investigue hasta sus últimas consecuencias de dónde sale".

El rotativo del Grupo Prisa aseguraba que "el Gobierno de Aguirre" ha espiado al número dos de Ruiz-Gallardón, pero no aportaba documentos que lo acreditaran. Así, se detallan nuevos seguimientos realizados en los meses previos al congreso nacional del PP de 2008. Esta vez, al entonces vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada.

Por eso, en fuentes del Ejecutivo madrileño señalaron anoche que no descartan la presentación de una querrela criminal contra el periódico por publicar "informaciones falsas", según esas fuentes.

Abundando en este asunto un diario asegura en su edición que ex policías y ex guardias civiles espionaron al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, cuando se encontraba en la calle acompañado por su círculo íntimo. Por su parte, el vicepresidente regional, Ignacio González, dijo sentirse "agredido" en su intimidad y aseguró que estas actuaciones "mafiosas" deben investigarse para saber "quién está detrás" y "cuál es el objetivo que se persigue".

González insistió en que para seguirle hasta Colombia o para obtener datos de un viaje privado a Sudáfrica, quienes le espionaron tuvieron "información muy próxima de mi vida pública y privada" y eso "sólo se conoce en mi entorno". Pero, además, apuntó que alguien más "ha tenido mucho interés en gastar mucho dinero para hacer un montaje muy sofisticado".

La trama del espionaje está sorprendiendo a la dirección nacional del PP por su virulencia y por el enfrentamiento soterrado que de nuevo subyace entre los equipos de Aguirre y Ruiz-Gallardón., su presidente, Mariano Rajoy, aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha comunicado que ni ella ni sus asesores están implicados en el supuesto caso de espionaje. En cualquier caso, señaló que sería "bueno" abrir una investigación para averiguar quién se dedica a "esta suerte de actividades".

"A mí lo que me ha dicho Esperanza Aguirre es que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto y yo la creo", declaró Rajoy.

(www.elmundo.es, 22/01/09)

26. LA COMUNIDAD PIDE A GALLARDÓN QUE RECTIFIQUE SU ACUSACIÓN DE ESPIONAJE

La supuesta trama de espionaje que siguió los movimientos de varios altos cargos del PP, entre ellos el vicepresidente regional, Ignacio González, el vicealcalde, Manuel Cobo, o el ex consejero Alfredo Prada, ha devenido en una nueva guerra entre Gallardón y Aguirre.

González ha pedido al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que rectifique sus declaraciones en las que evitaba pedir responsabilidades todavía pero afirmaba que la trama de espionaje estaba dentro del Gobierno regional, como informa el diario 'El País', que atribuye los seguimientos a políticos a los agentes de la Consejería de Interior dirigida por Francisco Granados.

"Salvo que alguien tenga una prueba fehaciente que acredite la existencia de una trama de espionaje, no se puede hacer ninguna afirmación en el sentido de la que hizo el alcalde y si se ha hecho, que rectifique", dijo González en rueda de prensa posterior a un tenso y largo Consejo de Gobierno.

Acompañado del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, González ha amenazado con acudir a los tribunales en caso de "falsas imputaciones", después de calificar la supuesta trama de espionaje en la Comunidad, como ha hecho Granados, de "gran mentira".

Granados, por su parte, exigió que cualquier "persona, medio de comunicación o institución" que tenga información sobre la supuesta trama de espionaje a políticos y personalidades lo ponga en manos de la Justicia para aclarar cuanto antes la situación. "Dado que de las actividades o informaciones que se han producido se pueden derivar actuaciones delictivas y se han imputado, además, al Gobierno de la Comunidad, es exigible que cualquier persona, medio de comunicación, o institución que tenga cualquier dato relacionado que lo acredite, lo ponga en el conocimiento de la Justicia", subrayó.

Granados ha negado que la Comunidad tenga que demostrar que no ha realizado el supuesto espionaje, "sino que son otros los que tienen que demostrar esas acciones delictivas y ponerlas en conocimiento de los juzgados".

El consejero de Interior ha explicado también que la Dirección General de Seguridad y Política Interior de la Comunidad, que supuestamente podría haber realizado esos espionajes, tiene la "única y exclusiva función de cubrir la seguridad de edificios e instituciones y de personalidades de la Comunidad". Asimismo ha precisado que fue montada en 1987 en la presidencia de Joaquín Leguina y continuó luego con Alberto Ruiz-Gallardón.

(www.elmundo.es, 22/01/09)

27. ELVIRA RODRÍGUEZ RECTIFICA TRAS PEDIRLE A AGUIRRE LA DESTITUCIÓN DE GRANADOS

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez (PP), afirmó que si se demuestra que el consejero de Presidencia, Francisco Granados, "ha hecho lo que no debía", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "lo que tiene que hacer es cesarlo". "A veces somos demasiado eufemistas, pero si uno hace lo que no debe lo que tiene que hacer el que tiene potestad para ello es cesarlo; no debe uno dimitir, que parece que es más digno", manifestó en una entrevista con Efe. Rodríguez precisó que, no obstante, ella esperaría "a ver qué es lo que dice Granados" en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid. Más tarde, Rodríguez rectificó y dijo que no se refería a Granados en concreto sino a "cuáles deben ser las consecuencias que han de seguir a hipotéticas actuaciones irregulares de gestores públicos".

- Manuel Fraga: "Desgraciadamente, hay cuestiones no resueltas". El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, consideró que, "desgraciadamente, hay algunas cuestiones que no están resueltas en este momento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento". "Creo que eso se va a resolver", añadió el senador.

(www.elpais.com, 22/01/09)

28. COBO: "QUIERO SABER QUIÉN LO HIZO, QUIÉN LO ENCARGÓ Y CON QUÉ FINES"

"Quiero saber quién ha realizado esos seguimientos; si son personas que tienen una retribución pública y, en ese caso, si esa administración u organismo público que les paga tiene competencias para realizar un seguimiento a mi persona. Quién ha ordenado esos seguimientos... Quién o quiénes. A quién o a quiénes se les entregaban los informes. Con qué fines se realizaban dichos informes, para qué. Qué es lo que se quería saber o para qué se quería utilizar". Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón y supuestamente espionado por ex policías al servicio de la Comunidad de Madrid, desgranó todas estas preguntas por la mañana ante los periodistas y las resumió después en una denuncia en la que pide a la Fiscalía de Madrid que encuentre las respuestas.

Tras conocer por *EL PAÍS* que fue objeto de seguimientos parapoliciales en abril del año pasado —en plena batalla interna por el control del PP—, el vicealcalde compareció con semblante serio y algo nervioso para explicar que había confirmado que todo lo publicado por este periódico "es exacto". "Los horarios y los lugares que aparecen [en el informe de seguimiento] coinciden con lo que hice aquellos días según figura en mi agenda", dijo.

Lo que Cobo rehusó contestar es si cree que detrás del espionaje pueden estar el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, o la presidenta Esperanza Aguirre, ambos del PP como el propio vicealcalde. "No es importante lo que yo crea. No voy a entrar en sospechas. Es el fiscal quien debe aclarar esto", afirmó. "Pero del Ayuntamiento no ha salido, eso lo puedo asegurar".

En la denuncia presentada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento ante la fiscalía sí se apunta directamente a la consejería que dirige Granados: "De la información publicada", concluye el escrito, "se desprende tanto una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen del vicealcalde, al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior, como el encargo directo a asesores contratados por la misma para la ejecución personal de tal irregular cometido, con intenciones que no se alcanzan a comprender".

Justo cuando se dirigía a dar la conferencia de prensa, el número dos de Ruiz-Gallardón recibió una llamada de Francisco Granados y un mensaje de móvil de Esperanza Aguirre. También habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy —después de hacerlo el alcalde—, con dirigentes populares como Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas, Pío García-Escudero y Esteban González Pons, y con el vicepresidente madrileño, Ignacio González, igualmente sometido a seguimientos. "Todos me han dicho que esto es inadmisibile", afirmó. Se refería a los seis últimos, porque de lo dicho por Granados y Aguirre no quiso contar nada.

Cobo subrayó que, si el espionaje fue realizado por ex policías o ex guardias civiles sin que ningún juez lo ordenara se trataría de "seguimientos parapoliciales absolutamente ilegales", y se solidarizó con Ignacio González "y cualquier otra persona que sufra un espionaje de este tipo". "Espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias, tanto en el ámbito judicial como en la responsabilidad que tenga cualquier cargo público. Que se depuren responsabilidades", insistió el dirigente madrileño.

Afirmó que no tiene "conocimiento" de que Ruiz-Gallardón haya sido espiado también, restó importancia a que detrás del caso estén las guerras internas del PP —"no lo sé, pero eso nos debe dar igual"— y descartó por absurdo el rumor de que los seguimientos, realizados hace diez meses, puedan tener algo que ver con la batalla actual entre aguirristas y gallardonistas en Caja Madrid: "Que yo saliera a las 8.25 de mi casa un día del mes de abril del año pasado no sé qué relación puede tener con Caja Madrid...".

(www.elpais.com, 22/01/09)

29. EL CONSEJERO SE PRESENTA COMO VÍCTIMA

La Comunidad de Madrid le da la vuelta a la tortilla y se presenta como víctima de la red de espionaje. Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional, hizo su primera aparición pública tras la noticia adelantada por este periódico de que había sido espiado en viajes oficiales y privados. La esperada comparecencia llegó con sorpresa: González apareció arropado por Francisco Granados, consejero de Interior, departamento que dirige a los ex agentes supuestamente dedicados al espionaje político en la región.

La visita del vicepresidente de la Comunidad de Madrid al edificio de Telefónica en la calle Gran Vía para presentar el proyecto Madrid Región Digital reunió a decenas de periodistas. "Ni cuando viene César Alierta hay tanta expectación", comentaba una de las empleadas de la tienda.

Granados asumió el protagonismo y aseguró que tanto él como Ignacio González y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, son víctimas de un "montaje y de una operación de acoso y derribo a Esperanza Aguirre". El consejero del PP negó que el Gobierno regional haya llevado a cabo "encargos de espionaje, seguimiento o informes sobre nadie y sobre ningún asunto de los aparecidos en los medios de comunicación".

Granados cedió el testigo a Ignacio González, mucho más escueto en sus declaraciones. Afirmó que se siente "agredido" en su intimidad y que le parece "una cosa absolutamente condenable, lamentable y totalmente reprobable" el hecho de que haya sido espiado. El vicepresidente regional dijo no sospechar de quién puede ser el impulsor de "esta actuación inadmisibles y mafiosa que no se puede consentir en un Estado de derecho".

(www.elpais.com, 22/01/09)

30. GONZÁLEZ PONS ACUSA AL GOBIERNO DE COMPLICIDAD CON EL ESPIONAJE AL PP DE MADRID

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho que la información obtenida por la red de espías que ha estado siguiendo a cargos del Gobierno madrileño y del Ayuntamiento no se puede tener sin la connivencia del Ministerio del Interior, y ha exigido la intervención inmediata de la Fiscalía.

En declaraciones a TVE recogidas, González Pons se ha referido a la información publicada, en la que se asegura que los espías llegaron a controlar no sólo al ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, sino a identificar a sus visitantes oficiales mediante las matrículas de sus coches.

"Hay información contenida en los dossiers que no se puede conseguir sin la connivencia de Interior, como identificaciones de personas y matrículas", ha precisado González Pons, y se ha preguntado: "¿quién está detrás de esta investigación a los populares?"

Por todo ello, el vicesecretario conservador ha pedido que se abra una investigación policial, ya que se está hablando "no sólo de fuerzas parapoliciales sino de la vinculación de éstas con las fuerzas policiales", ya que ha insistido en que "la comprobación de la propiedad de un vehículo a partir de una matrícula no se puede hacer sin la connivencia de Tráfico y del Ministerio del Interior".

Tras señalar que "ojalá nunca se hubiera producido esta novela negra", ha exigido una "explicación hasta las últimas consecuencias y no un análisis tan simple como la liquidación de un político cualquiera y a otra cosa mariposa", por lo que ha considerado que el Ministerio del Interior también debe "empezar a dar alguna explicación".

Por último, González Pons ha recordado que cuatro compañeros suyos están pasando un mal momento, tres porque han sido espiados: Ignacio González, Manuel Cobo y Alfredo Prada, y uno, Francisco Granados, porque dice que "sobre él se ha montado un gran montaje periodístico".

Preguntado por la conversación telefónica que ha mantenido esta semana el líder del PP, Mariano Rajoy, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, González Pons ha dicho que ello "no es noticia, porque hablan mucho y todos los días", y ha precisado que la dirección nacional del PP está en permanente contacto tanto con el Ayuntamiento como con la Comunidad.

(www.publico.es, 22/01/09)

31. LA FISCALÍA CITARÁ A DECLARAR A GRANADOS POR EL CASO DE ESPIONAJE

La Fiscalía de Madrid prevé citar a declarar al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en el marco de las diligencias de investigación abiertas para esclarecer la existencia de delito en los hechos denunciados por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por los seguimientos parapoliciales de los que han sido objetos en los últimos meses.

En rueda de prensa, Granados ha asegurado que "las informaciones son una gran mentira que aparece de una trama de espionaje. A partir de ahí cada uno puede colgar lo que quiera". A su juicio, se trata de "un montaje" cuyo único fin es "trasladar a la opinión pública varias mentiras". En primer lugar, sostiene, que desde la Comunidad de Madrid se ha creado una estructura de espionaje y, segundo, que desde la Comunidad de Madrid interesa investigar a la gente.

Por todo ello, y entendiendo que no hay mejor defensa que un buen ataque, ha retado ("exigimos", ha subrayado) a que cualquier persona o medio de comunicación que acredite que la denuncia es verdad, "lo ponga en conocimiento de la justicia". "Son otros quienes tienen que demostrar su inocencia", ha asegurado. No hay delito y, de hecho, ha recordado que "la estructura actual realiza las mismas funciones que se realizaban con Leguina".

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha confirmado a Europa Press que el Ministerio Público incoó diligencias de investigación tras recibir la denuncia interpuesta por González sobre el caso. El vicepresidente fundamenta el escrito judicial en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

A esta denuncia se ha acumulado la presentada por Cobo sobre los mismos hechos, basada en intromisión ilegítima a la intimidad y la propia imagen. Moix adelantó que ya se han acordado una serie de diligencias para esclarecer si hay o no delito en los seguimientos practicados. "Se trata de investigar si los hechos denunciados son delito", recalcó.

Por ahora, se ha citado a declarar como testigo al periodista del diario *El País* Francisco Mercado, quien firma las informaciones.

La calidad en la que vaya a declarar Granados dependerá de la documentación que reciban sobre su implicación en la supuesta trama de espionaje. De este modo, no descartó que se le cite a declarar como imputado.

De manera paralela, el juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, será el encargado de decidir si admite o no la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid. El texto judicial ha recaído sobre este Juzgado conforme al reparto del Decanato después de que el Juzgado de Instrucción número 31, de guardia ante, remitiera el escrito al Decanato, al no querer asumir la causa.

Si el magistrado admite la denuncia y abre diligencias previas, la Fiscalía de Madrid podría remitir sus indagaciones, siempre y cuando se traten de los mismos hechos que investigue el juez Sierra. De este modo, las dos denuncias se acumularían. Se podría sumar la denuncia que prevé interponer Prada sobre los mismos hechos.

"Esto es asqueroso, zafio, repugnante e ilegal". Así ha calificado el vicepresidente regional los presuntos espionajes de los que "he sido objeto".

La denuncia del portavoz del Gobierno regional que ha dado lugar a la apertura de diligencias se basa en delitos de descubrimiento y revelación de secretos. En ella, el vicepresidente emplazó a la Fiscalía a que investigara los hechos por ser "enormemente graves", puesto que afectan a su imagen y honorabilidad.

Los hechos denunciados se refieren en las informaciones de *El País* que destaparon que González había sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero.

González recalca que las fotografías que se le tomaron evidencian que "quien las tomó lo hizo de forma clandestina u oculta" y sin su "consentimiento ni conocimiento". Le llama la atención que los autores de los hechos hayan "utilizado información reservada", que "no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público, y con antelación" a sus "desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías cuando pisara suelo colombiano". "Y estar muy cerca de mí", dice.

En la denuncia, se menciona que en las informaciones se detallan los resultados de un informe de seguimiento sobre las circunstancias de su viaje privado a Johannesburgo. También alude a que el periódico publica copias del billete de avión de Iberia a su nombre, y los detalles relativos al pago y a sus acompañantes.

"Se han producido, sin duda, como mínimo, controles y grabaciones visuales clandestinas, revelación a terceros de imágenes y documentos personales, abusos informáticos sobre datos personales automatizados y apoderamiento de documentos", reseña González.

(www.publico.es, 22/01/09)

32. COBO TIENE CLARO QUE TRAS EL ESPIONAJE ESTÁ EL GOBIERNO DE AGUIRRE

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, dijo que "está claro" que detrás del presunto caso de espionaje del que él ha sido víctima están personas dependientes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. "Es evidente que hay un periódico *El País* que dice que detrás está la Comunidad de Madrid y está claro que son personas dependientes de la Consejería de Interior", señaló Cobo en declaraciones a Onda Cero. "Esas personas obedecen a determinadas instrucciones, por lo que hay que saber quién encargaba los informes, a quién se los daban y por qué los hacían".

Para Cobo, "es evidente con la cantidad de pruebas que hay encima de la mesa y los datos que aparecen en el seguimiento que hacían al vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada, que se trata de cuerpos parapoliciales, porque no son policías en activo, los que realizan esa actividad ilegal".

El vicealcalde, que afirmó desconocer quién encarga los seguimientos y el interés que pueda tener, sí se aventuró a relacionar el espionaje con el momento que vivía el Partido Popular en abril del pasado año.

"La información es poder y en este caso no es información desde un punto de vista profesional sino en un momento en el que había en mi partido legítimamente diferentes posturas a la hora de afrontar el congreso de Valencia, se hablaba de posibilidades, o de a quién apoyaba uno u otro, por lo que si alguien tenía un interés en conocer cuáles eran las reuniones, las comidas, o con qué personas, lógicamente sería una de las posibles explicaciones", indicó.

"En todo caso - prosiguió- los hechos son ilegales, porque en un Estado de Derecho solamente bajo la tutela judicial las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden seguir a una persona, vigilarla, saber cuáles son sus movimientos".

Ante la posibilidad de que las informaciones publicadas tengan por objetivo desestabilizar el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, Cobo aseguró que después será "muy interesante" saber quién filtra esas informaciones y para qué, pero que lo que ahora mismo le preocupa es "quién realizó esas investigaciones, quién se las ordenó, por qué las hacían, a quién le daban esos informes".

Para Cobo lo que es seguro es que las investigaciones se realizaron porque en ellas aparecen movimientos que ni siquiera él recordó hasta que revisó su agenda. "Además se han realizado con esa jerga que conoce solamente los que se dedican a actividades policiales", concluyó.

(www.publico.es, 22/01/09)

33. ZAPATERO, SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE: "QUE EL PP MIRE A QUIEN TIENE QUE MIRAR"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha instado a la dirección del PP a "mirar a quien tiene que mirar", y no al Ministerio del Interior, para aclarar la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid y le ha pedido que "asuma responsabilidades y tome decisiones".

Zapatero ha hablado por primera vez de las informaciones publicadas por el diario *El País* sobre "ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior madrileña" que habrían espiado a políticos de la Comunidad madrileña y del Ayuntamiento de la capital, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Zamora junto al primer ministro portugués, José Sócrates.

A su juicio, se trata de un asunto "muy serio" que exige "un poco de rigor y de seriedad" por parte del PP.

Se ha mostrado especialmente molesto por palabras como las pronunciadas por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien ha dicho que la información obtenida por la red de espías no se puede sostener sin la connivencia del Ministerio del Interior.

Después de que los ciudadanos haya podido leer cosas "realmente asombrosas sobre presuntos espionajes en ámbitos e instituciones de Madrid", ha apuntado Zapatero, van "de asombro en asombro y ahora la dirección del PP dice que se mire a Interior".

"Saben muy bien a quién tienen que mirar desde Génova (calle en la que se encuentra la sede central del Partido Popular), lo saben muy bien; que miren a quien tienen que mirar, que asuman responsabilidades, que tomen decisiones en la dirección del partido", ha manifestado. En este contexto, ha pedido seriedad y ha lamentado que haya políticos que intenten hacer "chistes malos" cuando están hablando de un tema "muy serio".

(www.publico.es, 22/01/09)

34. LAS EVIDENCIAS SOBRE EL SEGUIMIENTO A POLÍTICOS MADRILEÑOS

- El ex policía Marcos Peña reconoce que hace informes para el consejero Granados.

El ex inspector de policía Marcos Peña, asesor del consejero de Interior, Francisco Granados, desde junio de 2008, declara a *EL PAÍS* que su trabajo para Granados consiste, sobre todo, en realizar informes reservados, para lo que cuenta con tres ex guardias civiles. "Yo asesoro o hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida. Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Peña aseguró que había investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal, Ginés Jiménez, y el caso Ciempozuelos, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex regidor) en la cárcel.

- El vicepresidente, Ignacio González, denuncia a la fiscalía que espías que le han seguido han utilizado información reservada. *EL PAÍS* consiguió el dossier que incluía las fotos, tomadas desde una cámara oculta, de González y sus acompañantes durante un viaje oficial que efectuó a Cartagena de Indias en agosto de 2008. Para un segundo informe, los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de González y su esposa del viaje privado que efectuaron a Johannesburgo en marzo de 2008, junto al empresario y contratista de la Comunidad Enrique Sánchez González. En su denuncia a la fiscalía por ambos seguimientos, González explica: "Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener en ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos".

- Los espías que siguen al ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada hablan del coche oficial del que dispone su director. El equipo que espió en primavera al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, describe en su parte del 22 de abril: "A las 17.30 llega al puesto de trabajo habitual de P [Prada] el conductor de nuestro director Sergio con el vehículo oficial del mismo". Sergio es, supuestamente, Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad. Prada, el consejero de Aguirre más afín a Rajoy, fue vigilado en semanas previas al Congreso del partido, tras el cual fue destituido. Granados dijo sobre esa frase referida a Gamón: "Eso no significa absolutamente nada. Es como si [el dossier] dijera 'entra nuestro presidente, Zapatero'"

- El ex delegado del Gobierno en Ceuta con Aznar ofrece a Ignacio González legalizar el servicio de inteligencia regional. Luis Vicente Moro declara a *EL PAÍS* que en verano propuso al vicepresidente Ignacio González un proyecto de servicio de inteligencia "para aplicarle legalidad y legitimidad" al que había, y que se había hecho muy popular "entre los expertos en el sector de la seguridad". "Se decía que

altos cargos de la Seguridad estaban siendo vigilados por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad".

(www.elpais.com, 23/01/09)

35. LA TRAMA DE ESPIONAJE REABRE LAS HOSTILIDADES ENTRE AGUIRRE Y RAJOY

Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre han intentado mantener las formas desde el pasado congreso popular de Valencia. Querían dar apariencia de calma, aunque fuera tensa. Pero la trama de espionaje supuestamente ligada a la Comunidad de Madrid ha demostrado que hay un telón de acero entre el bloque de los partidarios de Rajoy y el de los de Aguirre, que han resucitado una guerra fría de consecuencias impredecibles. , el líder del PP dio instrucciones a su secretaria general, Dolores de Cospedal, para que abra una investigación interna sobre este embrollo, iniciativa que ha encolerizado a Aguirre. Las hostilidades entre ambos se han desatado.

El caso es que, en solo 24 horas, Rajoy ha pasado de expresar su confianza en la presidenta madrileña para zanjar el escándalo a tomar cartas en el asunto. El cambio de criterio se produjo, según fuentes de su entorno, cuando supo que no solo han sido vigilados el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, sino también Alfredo Prada, dirigente del PP cuyo apoyo a Rajoy en el cónclave de Valencia llevó a Aguirre a destituirlo como consejero.

Y, además de anunciar la apertura de dicha investigación, Rajoy quiso comunicárselo a la propia presidenta --que recibió también numerosas llamadas de distintos dirigentes del PP a cuenta del mismo asunto-- y darlo a conocer a la opinión pública a través de un comunicado oficial.

¿Qué es lo que pretende el líder del PP al dar este paso? Pues, según la versión difundida por el partido, exigir "con absoluta firmeza y determinación" responsabilidades políticas, si fuera menester. La traducción del citado comunicado no admite dudas. Que la dirección popular considere que de esta trama pudieran derivarse responsabilidades de carácter político demuestra que otorga credibilidad a la hipótesis de que un político, o una institución, podría estar detrás del escándalo de espionaje. Llegados a este punto, toca preguntarse por lo que opina de todo esto Aguirre. A su juicio, nada tiene que investigar el PP, puesto que el caso está en manos de la fiscalía y de un juzgado. "Aquí, en la comunidad, no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada parecido", sostuvo . Y lanzó una durísima advertencia: "El alcalde de Madrid, o cualquiera que dé por buena esa información de *El País*, tendrá que probarlo o rectificar. O nos veremos en los tribunales".

Tan segura dice estar Aguirre de que desde su gobierno no se han impulsado prácticas de espionaje que , ante una multitud de periodistas, dijo poner "la mano en el fuego" por sus consejeros. Eso incluye a su responsable de Interior, Francisco Granados, señalado como jefe de un equipo de expolicías y exguardias civiles que supuestamente realizó seguimientos a otros políticos del PP.

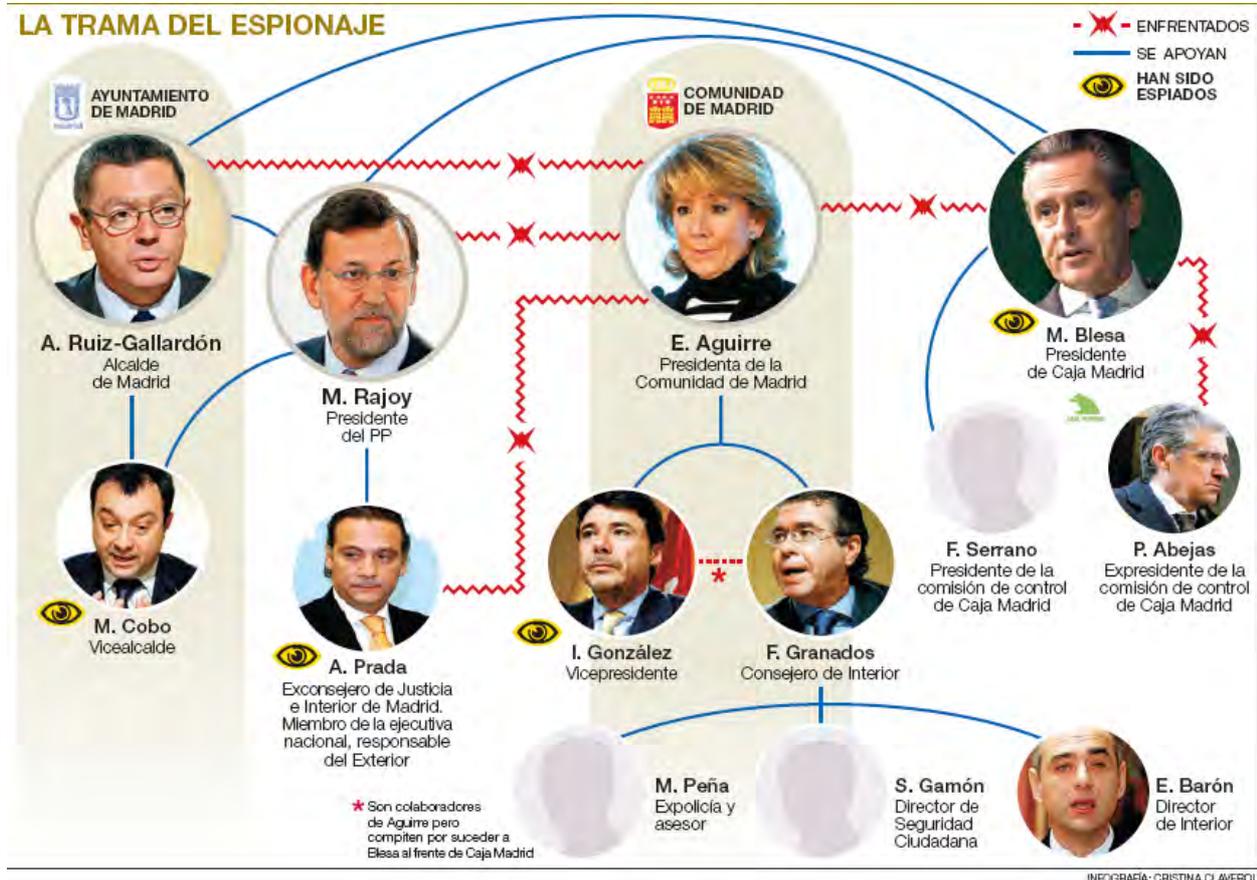
Eso sí, ella advirtió que si alguien posee una "prueba" que afecte a alguno de sus colaboradores, este "será expulsado, tenga el nivel que tenga". Y es que, según Aguirre, ella es la más perjudicada por todas las informaciones que han salido a la luz, aunque insistió en que en un Estado de derecho no hay que demostrar la inocencia sino la culpabilidad. En la misma línea se manifestaron por la mañana su vicepresidente y portavoz, Ignacio González, y el consejero de Interior, Granados.

Sin embargo, el equipo de Rajoy, como hiciera el miércoles en TVE el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, discrepa y da crédito a las crónicas periodísticas sobre esa supuesta red de espionaje. Así se desprende de la literalidad del comunicado: "De confirmarse estas informaciones, nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen", alertan los populares. Para intentar llegar a una conclusión propia al respecto, Cospedal llamará uno por uno a los supuestos espías y a Granados, que dejó claro que no se le pasa por la cabeza dimitir.

Pero el enfrentamiento de Aguirre y de sus consejeros con Rajoy se extiende hasta salpicar a Gallardón, que ha aseverado que la Comunidad no puede contar con un cuerpo "parapolicial". A esto, el vicepresidente González y el consejero Granados respondieron en rueda de prensa, por la mañana, que, si actualmente existe alguna estructura parapolicial, es la heredada del socialista Joaquín Leguina y, principalmente, de la etapa en que el mismo Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad, cuando reformó el modelo de seguridad autonómico.

Tras incidir en que la denuncia sobre la trama de espionaje es "una gran mentira", se desmarcaron también de la tesis que por la mañana había esgrimido el vicesecretario del PP, Esteban González Pons.

El portavoz acusó al Ministerio del Interior de "connivencia" con los espías, que, a su juicio, precisaron del apoyo de las fuerzas de seguridad para cotejar las matrículas de quienes se reunían con los vigilados. La salida de Pons no gustó al equipo de Aguirre --que se niega a dar por buena la existencia de seguimientos, salvo el de González-- ni a su partido. Nadie le siguió, quizá porque cualquier ciudadano puede averiguar quién es el propietario de un vehículo, según fuentes de la Dirección General de Tráfico consultadas por este diario. En el 2008, Tráfico tramitó siete millones de informes relacionados con las placas.



(www.elperiodico.com, 23/01/09)

36. RAJOY EXIGE RESPONSABILIDADES Y ABRE LA GUERRA CON AGUIRRE

Aguantó cuatro días. Se lo pedía casi todo su entorno y, al final, Mariano Rajoy, rompiendo con su tradicional prudencia, decidió abrir la guerra sin cuartel con Esperanza Aguirre. El líder ha hecho caso omiso al desmentido de la Comunidad de Madrid y ordenó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigación interna para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades de carácter estrictamente político, que el PP exigiría con absoluta firmeza y determinación".

Los aguirristas lo tomaron inmediatamente como una agresión directa, porque insisten en que no hay que investigar porque es una "gran mentira". La propia Aguirre ha hablado con dirigentes importantes del PP -Rajoy, Cospedal, Javier Arenas, Ana Mato-, para intentar convencerles de ello. Les ha dicho que la estructura en la comunidad es la misma ahora que en tiempos de Gallardón o Leguina.

El líder le concedió el beneficio de la duda el miércoles -"yo la creo", dijo-, pero explotó y ya no da crédito a su desmentido, que ni siquiera se cita en el comunicado. Después de meditarlo mucho, reunirse con Cospedal, Arenas y Mato, y con una nueva víctima encima de la mesa, esta vez un amigo del líder y miembro de su dirección como Alfredo Prada, responsable del PP en el Exterior, decidió lanzarse al cuello de Aguirre. Incluso los dirigentes que aconsejaban prudencia al líder, porque él no podía, decían, "meterse en este barro", se rindieron, al comprobar la estrategia defensiva de los aguirristas, que en lugar de iniciar una investigación interna, aseguran que todo es una gran mentira y no asumen ninguna responsabilidad. "Cuando hemos visto la rueda de prensa, y encima con la investigación de Prada encima de la mesa, que afecta a su familia, el jefe ya no ha aguantado más", señalaba un marianista.

Aguirre decidió seguir al contrataque y obvió el comunicado para insistir en que ella reta a cualquiera, incluido Gallardón, a probar que el espionaje ha salido de la Comunidad.

A última hora de la tarde, y tras ausentarse del Consejo de Gobierno "por un acto privado", Aguirre acudió a una entrega de premios, repitió los argumentos de sus consejeros y dijo que pone "la mano en el fuego por ellos". Obviando que Rajoy ha ordenado indagar los hechos, aseguró que la Comunidad no investigará nada por tratarse de delitos.

El enfrentamiento entre Aguirre y Rajoy viene de lejos. Estos días ha aguantado expresar en público el profundo malestar que, según sus próximos, le estaba provocando lo que ocurre en Caja Madrid. Algunos fieles del líder temían el miércoles que una guerra con Aguirre en este momento podía perjudicar al PP a poco más de un mes para dos elecciones clave, las gallegas y las vascas, y por eso pedían prudencia a los que reclamaban firmeza. Pero todo reventó.

El comunicado es durísimo. "De confirmarse estas informaciones, nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen. La práctica de escuchas o seguimientos ilegales repugnan al PP y a su presidente, como ha quedado acreditado en su larga trayectoria política".

La investigación parte, según el comunicado, "desde el respeto al principio de presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que debe presidir la vida pública" y la llevarán a cabo la secretaria general, Dolores de Cospedal, y la responsable de Organización, Ana Mato. mismo, contactaron con las personas aludidas en las informaciones para recabarles datos y citarles en los próximos días para conocer su visión de los hechos. Los primeros a los que se pedirá su testimonio serán Ignacio González, Francisco Granados, Alfredo Prada y Manuel Cobo. En principio, no tienen previsto citar a Aguirre ni a Gallardón. Su intención es concluir la investigación lo antes posible. Según fuentes del PP, el objetivo es determinar si existe un servicio de seguridad paralelo en la Comunidad, si se han producido seguimientos y, ante la evidencia documental del espionaje a González, quién lo hizo.

Horas antes del comunicado, el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, intentó implicar al Ministerio del Interior en el caso. Pons aseguró en TVE que Interior debe explicar cómo los autores de los seguimientos manejaban datos como las matrículas a las que, según él, sólo pueden acceder las Fuerzas de Seguridad. "A lo mejor quien está detrás de esta investigación no necesariamente tiene que ser parte del PP", dijo.

(www.elpais.com, 23/01/09)

37. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que pone "la mano en el fuego" por todos sus consejeros y ha considerado que es "la principal perjudicada" por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca.

En una comparecencia ante los medios previa al acto de entrega de los XVIII Premios AEDME, Aguirre ha subrayado que el Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es el primero que quiere que se aclaren".

"Aquí -ha añadido- no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada que se le parezca y quién diga lo contrario tendrá que probarlo y, si no lo acredita, tendrá que rectificar".

Aguirre ha insistido en que "el que tenga pruebas que las ponga sobre la mesa, que ponga en conocimiento de los jueces y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o acreditar que aquí -en la Comunidad de Madrid- se ha montado algo parecido a un servicio de espionaje y si no se presentan estas pruebas, tendrán que vérselas con el Gobierno regional en los Tribunales".

La presidenta ha hecho extensiva esta advertencia a Alberto Ruiz-Gallardón y ha dicho que "el alcalde de Madrid o cualesquier otra persona que dé por buena la información que publica *El País* tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar, y si no tendrán que vernos en los Tribunales".

La presidenta, que ha justificado su ausencia en el Consejo de Gobierno afirmando que tenía un acto personal comprometido desde hace tiempo, ha argumentado que "esto es un Estado de Derecho y esto

quiere decir que la inocencia no se tiene que probar, cómo voy a probar yo que yo no he montado ningún servicio de espionaje, la inocencia se presume, quien tiene que dar pruebas es quien acusa".

No obstante, la presidenta madrileña se ha comprometido a que "si hay una sola persona en la Comunidad de Madrid de la que se demuestre que ha participado en espionajes o seguimiento será expulsado". Aguirre ha asegurado que no ha hablado con el alcalde de Madrid desde que salió a la luz esta supuesta trama pero que sí mantuvo comunicación, a través de varios mensajes de móvil, con el vicealcalde, Manuel Cobo, a quien expresó que "lamentaba que fuera víctima, como lo es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de estas falsas acusaciones".

Con quien si ha estado en contacto desde es con los miembros de la dirección nacional del PP, incluidos su presidente, Mariano Rajoy, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y ha apuntado que le "parecen bien" todos los comunicados que hagan.

La presidenta ha recordado que no es a la Comunidad de Madrid a quien corresponde investigar esta presunta trama porque "aquí se imputan delitos penales y eso corresponde a los jueces y a la Fiscalía investigarlo".

En lo que compete a la Comunidad de Madrid, ha continuado, "tanto el señor Marcos Peña como el consejero Francisco Granados ya han dirigido un escrito a *El País* para que rectifique" y el Gobierno regional ha pedido motu proprio la comparecencia de Granados en la Asamblea de Madrid.

La presidenta ha defendido, además, que sólo da credibilidad al seguimiento al que ha sido sometido su vicepresidente, Ignacio González, porque "es el único caso que está acreditado que ha sido espiado". "El resto, no digo que no se hayan hecho, lo que digo es que el que tenga pruebas de que lo haya hecho la Comunidad de Madrid que las presente", ha concluido.

(www.elperiodico.com, 23/01/09)

38. GOBIERNO DE AGUIRRE SOPESÓ CREAR UN 'CNI' LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO DESDE DENTRO

El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johannesburgo en marzo de 2008.

Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, trató con el vicepresidente madrileño la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro combatía la inmigración irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.

Moro veía claro el problema que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contactó con su amigo: "González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conducían a la elaboración de dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de información para protegerlo".

Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los de *El País* Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma".

Moro reveló a *EL PAÍS* que por aquella época, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque temían que estuvieran siendo espiados desde dentro.

Ignacio González recibió el borrador de servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi conveniente y, además, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explicó a *EL PAÍS*. González enmarcó la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los

dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre él pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto dentro del Gobierno regional.

Cuando Moro y González hablaban de crear un CNI madrileño legal, por más que entrañara una dura batalla competencial conseguirlo, el consejero de Interior, Francisco Granados, estaba fichando al ex inspector de policía Marcos Peña, que asumió la dirección de un equipo de ex guardias civiles. Peña aseguró a este periódico que su grupo realizaba los informes que le pedía su jefe, Granados, que versaban sobre escándalos o corrupciones que afectaban fundamentalmente a municipios socialistas como Coslada, Ciempozuelos...

El propio Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Peña desmiente y que, según los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Esta unidad, al igual que otra que dirige el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, con varios ex policías a sus órdenes, dependen del consejero Granados. No están bajo la estructura orgánica al mando del actual director de Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido tener, bajo sus órdenes.

Su labor escapa así al común de los integrantes de la seguridad de la Consejería de Interior. Las labores definidas por Peña perfilan un auténtico servicio de información. Granados lo niega. En este contexto de creación de unidades "descontroladas" de la estructura ordinaria y jerárquica -sólo responden al consejero, según fuentes de su departamento-, se bloqueó y se vetó la creación de un servicio secreto legal y transparente al servicio de la Comunidad de Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces", ofreció Moro a González. No fue atendido. "Y ahora esto que está lloviendo es tremendo", ironiza.

Moro conocía ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ahí. Las noticias que circulaban era que algunos altos cargos, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid".

El plan de montar un servicio secreto fue redactado por Moro junto a ex agentes del servicio de inteligencia español, con los que conversó *EL PAÍS*. Aseguran que su proyecto quería servir para captar información y compartirla con los servicios de información legales. Y querían evitar fichar a ex guardias o ex policías. "Porque se convierten en espías al servicio de sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador entregado a Ignacio González, a "una necesidad específica de seguridad e inteligencia emergente en el Estado de las Autonomías". En dos folios, Moro resumía las virtudes de la nueva Sociedad:

- Solución afinada y eficaz. "Es una solución más afinada y eficaz ante la necesidad señalada, creciente en el actual contexto sociopolítico (...) acorde con otras experiencias más flexibles y acertadas impuestas en países de nuestro entorno occidental (por ejemplo, las Unidades de Inteligencia de ámbito departamental existentes en Francia", explicaba el texto.

- Recursos externos debidamente filtrados. El servicio secreto autonómico podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".

- Capitalizar las Brigadas de Policías Municipales.

Los impulsores de este CNI autonómico defendían la necesidad de un servicio de este tipo en la Comunidad de Madrid ante las amenazas terroristas y para "reorientar y capitalizar de forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre intentó crear su propia policía autonómica pero ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidió subvencionar la contratación de policías municipales en los ayuntamientos madrileños y englobar a ese grupo de agentes bajo la denominación de BESCAM.

Expertos jurídicos consultados por *EL PAÍS* aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para crear su propio servicio secreto: "El Estatuto de Autonomía de Madrid establece que

las competencias de la Comunidad se circunscriben a la 'vigilancia y protección de sus edificios'. Ámbito que, como reitera a renglón seguido el Estatuto, se ejercerá 'respetando, en todo caso, los dispuesto en la Constitución Española'. En este marco competencial es obvio, y nada discutible, que la creación de un Centro de Inteligencia autonómico, que, por definición, exige todo un conjunto de actividades, eminentemente de carácter policial, para la recogida, almacenamiento, tratamiento y análisis de un amplio espectro de informaciones relevantes para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones, no está amparado en el marco competencial que la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento reconocen a la Comunidad de Madrid".
(www.elpais.com, 23/01/09)

39. LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE UNOS 40 EX AGENTES TRABAJAN EN EL 'SERVICIO DE INFORMACIÓN'

Según ha podido confirmar la CADENA SER con fuentes de la Comunidad de Madrid, estos 40 antiguos agentes dependen directamente de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

Según fuentes del ejecutivo, la mayoría de estos agentes ya estaban en la consejería cuando Francisco Granados llegó al cargo en junio de 2007.

Todos han sido contratados como técnicos de seguridad en el capítulo de cargos de confianza, en definitiva, contratos 'a dedo' puesto que no han superado prueba alguna para acceder a este puesto.

Se ocupan de revisar la seguridad de los edificios públicos, pero también de otras misiones, que en principio, corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado.

En torno a una cuarta parte de este grupo policial ha sido contratado por el actual consejero, el resto, unos 30, ya trabajaban para la consejería. Altos cargos del departamento ven como algo normal que vigilen, investiguen, recaben datos de policías en activo o prevengan a los políticos de la Comunidad de Madrid. La lealtad, dicen, se la deben al consejero.

(www.cadenaser.com, 23/01/09)

40. LA COMUNIDAD DE MADRID SABÍA QUE SUS AGENTES REALIZABAN LABORES FUERA DE LA LEY

La dirección general de Seguridad del gobierno de la Comunidad de Madrid sabía desde el año pasado que sus agentes estaban realizando labores de vigilancia "fuera del marco legal existente", según informa una cadena de radio. Esta emisora señala que las labores de vigilancia a las que se refiere son las tareas de información que los agentes realizaban por motivos de seguridad en los lugares que iban a ser visitados por los consejeros en sus viajes oficiales y destaca que los agentes no tenían competencias para realizar esos trabajos.

Según fuentes internas de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid citadas por esta radio, la dirección de Seguridad convocó a los 36 funcionarios de seguridad en una reunión extraordinaria el pasado 24 de noviembre para informales del nuevo plan de trabajo.

La SER asegura que "la principal preocupación era buscar un marco legal a los trabajos de vigilancia e información" que sus agentes realizaban durante las operaciones de protección y seguimiento de personajes de relevancia.

De este modo, la dirección de Seguridad propuso que los agentes de seguridad fueran acompañados por policías nacionales.

Esta reunión se celebró poco tiempo después de las visitas de Esperanza Aguirre y el consejero de Sanidad Juan José Güemes a varios hospitales madrileños, donde recibieron los abucheos de pacientes y personal sanitario.

(www.publico.es, 23/01/09)

41. ENTREVISTA: LUIS VICENTE MORO, Ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta : "LES DIJE 'APLIQUEMOS A ESTO LEGALIDAD Y ASÍ OS QUITÁIS DE OSCURANTECES"

Luis Vicente Moro fue nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el Ejecutivo de José María Aznar. Durante aquella etapa, que duró hasta 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales, Moro gestionó información sobre seguridad muy delicada en un enclave conflictivo por los problemas de inmigración irregular y de mafias que traficaban con seres humanos.

Durante su etapa como delegado del Gobierno en Ceuta, Moro hizo amistad con Ignacio González, que trabajó en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Inmigración a las órdenes de Ángel Acebes en los últimos años de la segunda legislatura del PP, con José María Aznar como presidente.

Moro y González mantuvieron una relación de amistad e incluso siguieron colaborando en asuntos de seguridad. En junio de 2008, Luis Vicente Moro entregó a Ignacio González el borrador de un proyecto de servicio secreto autonómico, una especie de CNI (Centro Nacional de Inteligencia), ante la preocupación extendida en el Gobierno de Esperanza Aguirre, que se sentía espiado y quería protegerse.

Sólo unos meses antes de aquellos contactos entre Moro y González, ex agentes al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid estaban haciendo, sin amparo legal alguno y con dinero público, seguimiento a distintos altos cargos del PP, según se deduce de los partes diarios que elaboraron entonces. Tanto Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, como Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y alto cargo de la dirección nacional del Partido Popular, han denunciado ante la fiscalía los seguimientos de que fueron objeto durante los meses previos al último congreso nacional del PP, en el que Mariano Rajoy salió reelegido tras varios meses de tensos enfrentamientos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El proyecto de CNI autonómico que le presentó en junio pasado el ex delegado del Gobierno en Ceuta al vicepresidente de la Comunidad de Madrid no cuajó. Luis Vicente Moro lo explica en la entrevista que ha mantenido con *EL PAÍS*.

Pregunta. Hubo un proyecto de servicio secreto legal para la Comunidad de Madrid en 2008 y que al final no salió. ¿Cómo fueron las gestiones?

Respuesta. Yo soy amigo personal de Ignacio González y coincidí con él en la época anterior. Hablamos de la posibilidad de crear algún servicio, con el amparo y la legitimidad que tienen los servicios en *El País Vasco* y en Cataluña. Era un servicio para proteger a los altos cargos de la Comunidad de Madrid, pero nada más que eso.

P. ¿Pero proteger informativamente?

R. Informativamente, porque yo creo que por aquella época estaban preocupados, o alguien estaba preocupado.

P. ¿Y por qué rechaza finalmente Ignacio González montar ese servicio? ¿Hasta dónde se llegó después de presentar el borrador?

R. El borrador... y no hubo nada más. No sé por qué lo rechazó... No lo rechazó, son esas cosas que se dejan encima de la mesa diciendo 'esto es interesante'. Y [González] no veía la necesidad en aquel momento, porque lo que está lloviendo ahora es tremendo.

P. ¿No lo rechazarían porque ya existía uno que no era legal y transparente?

R. Yo no lo sé. Allí parecía que había un aparato. Y lo que hacemos un amigo y yo es decir, 'vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces'. Nada más que eso.

P. ¿Quién le dijo que existía un servicio secreto no transparente?

R. Tengo alguna información de mis amigos, que no tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Empezaba a hacerse popular en los medios que están acreditados como grandes expertos en el sector de la seguridad, naturalmente todos ellos legales, no esa mierda que se ha montado ahí...

P. ¿Y qué noticias circulaban?

R. Las noticias que circulaban es que algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid. No sé si esto es lo que está pasando ahora.

P. ¿Por qué pensaban que eran objeto de vigilancia?

R. Yo creo que Ignacio González tenía datos. En esta situación, a alguien de la Comunidad le molestaba Ignacio. Él pisó algunos callos. Un servicio secreto, si no nace con las condiciones de seguridad jurídica que nosotros planteamos modestamente, no puede estar en la Comunidad de Madrid. Y si no aparece en el organigrama, es un disparate absoluto. Yo no me preocupé más porque cuando nuestro papel durmió el sueño de los justos, yo me dediqué a mis cosas. Sé que Ignacio González es un currante que puede hacer daño a personas muy, muy, muy sinvergüenzas.

(www.elpais.com, 23/01/09)

42. LA TRAMA DESATA LAS AMENAZAS EN EL PP MADRILEÑO

La trama de espionaje está minando las relaciones entre los populares madrileños. El intercambio de acusaciones ha llegado incluso a la amenaza de acudir a los tribunales. En un bando están los que no dudan que detrás del grupo de agentes está la Consejería de Interior, como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el vicealcalde, Manuel Cobo, o el ex consejero de Interior Alfredo Prada. Los dos últimos fueron sometidos a vigilancia. Y en el otro están los que lo niegan, como el propio consejero de Interior, Francisco Granados, y al que se ha sumado, un poco más tarde, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, éste también investigado.

En un principio, ni siquiera González dudó de que esas grabaciones y seguimientos sólo los podía haber hecho alguien que estuviera "muy cerca" de él. Y así lo hizo constar en su denuncia ante la fiscalía. Varió su discurso y negó tener la menor idea de quién le ha estado espionando, en una rueda de prensa que dio junto a Granados. Y fue más allá: negó que el espionaje pudiera venir de la Consejería de Interior y amenazó con denunciar a todo el que culpe a la Comunidad de Madrid de estar detrás de la trama sin pruebas en la mano.

En concreto, se refirió al alcalde de Madrid y a sus declaraciones el miércoles en el programa 59 segundos de Televisión Española. Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que era ilícito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por estas personas, es un delito", aseguó Gallardón.

"Salvo que alguien tenga una prueba fehaciente que acredite la existencia de una trama de espionaje no se puede hacer ninguna afirmación en el sentido de las que hizo el alcalde", le respondió González. Y amenazó con denunciarle: "Vamos a exigir a quien haga este tipo de imputaciones sin acreditarlas, que rectifique y, en el caso de que no se proceda a estas rectificaciones, tendremos que actuar judicialmente".

Tanto González con Granados sostuvieron que la trama de espionaje en el Gobierno de Aguirre es "una gran mentira". Sólo reconocieron las grabaciones a González. Lo demás, dijo el vicepresidente regional, "no está acreditado". Para intentar desmontar la información publicada por *EL PAÍS*, Granados se escudó en que Marcos Peña, jefe del departamento de asesores de seguridad, entró a trabajar "meses después" de los seguimientos. Una información que ya publicó este periódico. El consejero, sin embargo, no explicó por qué los espías identifican en sus notas como "nuestro director" al que era el director de Seguridad de la consejería, Sergio Gamón, en ese momento. "Eso no significa absolutamente nada. Es como [el dossier] si dijera 'entra nuestro presidente, Zapatero'", respondió Granados.

Aseguró que ya ha llevado a cabo "una investigación verbal" en su equipo de seguridad y que "todos niegan de forma categórica que se hayan producido esas actividades". Y añadió que el Gobierno regional no tiene "que demostrar que eso no se está produciendo". Para él, la responsabilidad recae en las "personas, medios o instituciones" que poseen pruebas o documentos.

Granados remitió una carta a *EL PAÍS* en la que, acogiéndose al derecho de rectificación, afirma que "es falso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya ordenado seguir, vigilar o investigar a los altos cargos del PP de Madrid". Asimismo, Granados niega que en su Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "se dedique personal o cualquier otra infraestructura que tenga como finalidad el seguimiento, investigación o vigilancia que suponga la quiebra de derechos constitucionales de ciudadanos o empresas".

(www.elpais.com, 23/01/09)

43. GRANADOS ASEGURA QUE DETRÁS DE LOS SEGUIMIENTOS A GONZÁLEZ ESTÁ "ALGUIEN MUY PODEROSO"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aseguró que detrás del seguimiento al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "el único que está probado", tiene que haber "alguien muy poderoso". En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Granados afirmó que el único de los espionajes que está probado es el de González y que se realizó "con una estructura importante". "Trasladar gente a Cartagena de Indias (Colombia) a hacer un seguimiento en condiciones requiere un gran despliegue de medios y desde luego no tengo ni idea de quién está detrás, pero quien esté es alguien muy poderoso", indicó.

El consejero de Presidencia considera que estos seguimientos pueden tener algo que ver con el caso Caja Madrid, aunque no descarta ninguna hipótesis. "No sé si tiene que ver o no, es verdad que coincide temporalmente la puesta en escena de este montaje en general, pero nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones en beneficio del interés general y que también afectan a gente en sus intereses particulares y algunas veces a gente muy poderosa, si esto sale de ahí o de otro vector de poder, no me extrañaría", señaló.

Por otra parte, Granados puso en duda los seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, "porque no se han presentado pruebas". "No tengo constancia de que los seguimientos a Cobo y a Prada estén probados. Se trata de un relato que hace 'El País' de la agenda de Cobo, tengo que decir monótono y por lo tanto fácilmente reproducible, y una descripción un poco más detallada de la agenda de Prada, pero cuando uno tiene escoltas, asesores y conductores hay mucha gente que puede conocer esa agenda y realizar ese tipo de informaciones, pero concluir que han sido objeto de seguimiento no lo puedo hacer", indicó. En este sentido, el consejero de Presidencia tampoco se aventuró a afirmar si los seguimientos a los tres políticos han sido realizados por el mismo equipo. Lo que sí descartó fue que detrás de la trama esté el Ministerio del Interior. "Un seguimiento que consiste en 'sale de su casa, llega al Ayuntamiento, levantamos el dispositivo, no se lo atribuyo al Ministerio del Interior", dijo con sorna.

Granados se mostró muy enfadado con que se haya dado por hecho que el espionaje parte de un equipo de la Consejería de Interior que dirige. "Me parece inaceptable en general que la gente, los medios, hagan imputaciones gratuitas y sin pruebas, y además imputaciones de hechos que pueden ser constitutivos de delito", criticó y añadió: "En un Estado de Derecho nadie tiene que demostrar la inocencia de nada sino que aquí lo que hay que demostrar es la culpabilidad de los hechos, primero su existencia y luego su autoría, y por tanto quien no rectifique o pruebe estas imputaciones tendrá que ir a explicárselas al juez", concluyó.

Por otro lado, el responsable de Interior en el Gobierno de Esperanza Aguirre explicó que, en cualquier caso, los datos de los que se está hablando con el ex policía Marcos Peña como principal percha de la trama no cuadran porque, primero, "no se dedica a ese tipo de menesteres" y cuando, "al parecer se recaba la información sobre Cobo y Prada, Peña no trabajaba en la Comunidad".

"Entonces difícilmente podía estar recabando esa información a la que se refiere 'El País'", insistió Granados, quien subrayó que si Peña llega al Gobierno regional cuatro meses después de que supuestamente se produjeran los seguimientos, "difícilmente Peña puede ser el autor". Así, señaló que cuando se establece a una persona como cabeza de una trama de espionaje y luego los hechos que se espían son muy anteriores a constituirse la supuesta trama "parece que el argumento pierde un poquito de fuerza, pero bueno, puestos a que cuadren las cosas pues terminará habiendo viajes de Peña a Colombia o Cartagena de Indias", ironizó.

Preguntado por si duda de la palabra de alguno de sus trabajadores a los que se les está investigando de forma verbal, Granados señaló que es el encargado de la función pública en la Comunidad, que está constituida por unos 175.000 funcionarios, y que, en concreto, en la Consejería de Presidencia hay unos 20.000, por lo que no puede descartar "absolutamente nada". "Ni siquiera cómo voy a descartar que uno de los cien más cercanos al área de interior haya puesto en circulación, haya prefabricado una información de este tipo, es evidentemente que eso no se puede descartar", subrayó, al tiempo que reiteró que, no obstante, lo que sí puede asegurar es que ni desde la Comunidad ni desde la Consejería se ha montado un red de espionaje ni se han hecho informes sobre nadie. En este sentido, insistió en que no tiene el "menor interés de saber a qué hora sale de su casa Manuel Cobo, ni con quién come Alfredo Prada" y mucho menos, ningún interés en seguir al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, hasta Cartagena de Indias. "Que alguien de alguna Consejería o de alguna otra administración haya prefabricado una historia de este tipo yo no lo puedo descartar", añadió.

Por ello, apuntó que aunque nadie descarta los seguimientos, tampoco nadie pone pruebas. Así, aseguró que se ha reunido de uno en uno con todas las personas que han podido verse implicadas por las informaciones aparecidas en los últimos días como directores anteriores, o agentes "para apretarles las tuercas y ver si esto tendría algún viso de veracidad", pero todas esas conversaciones le han llevado a la conclusión "de que ahí no hay absolutamente nada", apostilló.

En la misma dirección, tampoco quiso desmentir si el conflicto interno de Caja Madrid puede estar por detrás de todo este embrollo. "No he negado que detrás de esto esté Caja Madrid... De los enfrentamientos que en el seno de la entidad se está produciendo se derivan intereses muy importantes", justificó.

De hecho, subrayó que es "muy significativo" que un consejero de Caja Madrid adelante que las fotos del vicepresidente "se van a poner encima de la mesa" en relación a la información publicada en la que se afirmaba que el consejero independiente en el Consejo de Administración de la Caja, Guillermo Marcos, anunciaba el pasado 11 de enero que iban a salir cosas sobre González. "Nosotros no sabemos de dónde parte. Eso lo tiene que investigar la Justicia pero lo que es evidente es que quien sea, no tiene mucho interés en perjudicar a mí o a González, sino en ir desbrozando para perjudicar a quien tiene la notoriedad en la Comunidad y en la política nacional, que es Esperanza Aguirre", sentenció.

(www.lavanguardia.es, 23/01/09)

44. RAJOY: "ACTUAREMOS DE FORMA FULMINANTE, SEA QUIEN SEA"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que actuará "de forma fulminante, sea quien sea" si se confirma la implicación de algún dirigente de su partido en la **supuesta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid**.

Rajoy ha hecho estas declaraciones en Intereconomía televisión, según un comunicado de este medio de comunicación, y en las que ha subrayado que los 10,4 millones de votantes del PP y sus 700.000 militantes "tienen derecho a que se actúe con contundencia".

No obstante, ha precisado que hay que salvaguardar la presunción de inocencia y no se debe actuar hasta que se confirmen las informaciones porque, de lo contrario, "se podría cometer la injusticia de condenar a un inocente".

Tras recordar que todos los supuestos implicados en esta trama han negado su implicación en la misma, ha insistido en que habrá que esperar al informe que ha ordenado redactar sobre este asunto, que ha reconocido que le preocupa y no le hace "ninguna gracia".

Rajoy ha descartado que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, pudiera ser el beneficiario de esta polémica, y ante las palabras de Esteban González Pons en las que sugería que el Ministerio del Interior podría conocer la trama, ha señalado que no sabe "lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir". Pero sí ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que colaboren, y ha instado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que si sabe dónde tiene que buscar para encontrar el origen de lo que está ocurriendo, que se lo diga.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comenzado la investigación abierta por la dirección nacional sobre la supuesta trama de espionaje en Madrid y ha mantenido contactos personales con la presidenta, Esperanza Aguirre, y con el consejero Francisco Granados.

También ha hablado personalmente con el ex responsable de Justicia del Ejecutivo madrileño Alfredo Prada, ahora dirigente en el aparato nacional del PP, y, según ha publicado el diario "El País", otra hipotética víctima de los seguimientos de la red parapolicial al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, que dirige Granados.

Según ha recalcado la número dos del PP, la presidenta madrileña le ha comunicado que desconocía completamente la existencia de esa trama de espías, lo que De Cospedal, según ha dicho, ha creído. "Cómo no la voy a creer", ha apostillado.

El procedimiento abierto por el PP tras la orden dada por el líder nacional, Mariano Rajoy, abarcará el tiempo "necesario" y contará con el testimonio y las explicaciones de "muchas personas", y no sólo las que pertenezcan al partido por militancia, sino también de aquellas que, sin estar afiliados, quieran comparecer y ayudar en el esclarecimiento de los hechos.

(www.publico.es, 23/01/09)

45. EL PAÍS ENTREGA AL FISCAL LOS DOCUMENTOS QUE REVELAN LA TRAMA

El periodista de *EL PAÍS* Francisco Mercado ha entregado al Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, la información que demuestra que en la Comunidad de Madrid ha existido una trama de espionaje apoyada en dossieres "sucios" para "chantajear, quitar rivales de en medio o destruir hogares". Así lo ha indicado Francisco Mercado, que destapó los seguimientos a políticos del PP madrileños el pasado lunes y la existencia de un equipo de espías en la Consejería de Interior de la comunidad, ha prestado declaración esta mañana durante una hora en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a instancias del Fiscal Superior, Manuel Moix. *EL PAÍS*, que ya publicó imágenes de la vigilancia a Ignacio González, recopila las principales evidencias.

A su salida, el periodista ha manifestado que ha pedido al discal que el caso se esclarezca "hasta las últimas consecuencias" y se "llegue hasta el final de la investigación" para averiguar quién o quiénes están detrás de esta trama y ha asegurado que con la documentación que ha aportado, la Justicia, el PP "y quien quiera investigar tiene elementos para tirar del hilo". Mercado, que no ha precisado el origen de la documentación que obra en sus manos, ha asegurado tener "pruebas" de que "han sido espía mucha más gente" además del vicepresidente regional, Ignacio González; del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o del ex consejero Alfredo Prada, los casos que hasta ha desvelado este periódico.

Ha dicho que de todos ellos posee documentación y datos profesionales y personales que van más allá de los de una agenda laboral o personal y que en el caso de González, ha recordado que ha publicado documentos gráficos que demuestran que alguien le siguió "muy de cerca" en un reciente viaje a Cartagena de Indias y tuvo que contar para ello "con la complicidad de personas próximas a la Comunidad". Mercado ha asegurado que "es bueno para los partidos, para la democracia y para los ciudadanos" que se investigue quién o quiénes "están detrás de esto" porque de acuerdo "no solo han investigado a altos cargos del PP, sino a todos los que se han acercado a ellos", como familiares o personas anónimas.

"Según en qué manos caiga este material puede tener una repercusión bastante dolorosa para determinada gente, pues puede haber relaciones sentimentales rotas o conversaciones que nunca se deberían saber" que podrían utilizarse para "chantajear y extorsionar con ello", ha afirmado el periodista, que ha calificado el caso de "muy grave". Ha opinado que podría llegar a haber "responsabilidades penales" siempre y cuando "se compruebe quienes son los autores" y ha recordado que este periódico "nunca ha dicho que el Gobierno de Aguirre está detrás de esto" pero sí que poseen datos que apuntan a que funcionarios de Justicia e Interior, departamento dirigido por Francisco Granados, "han hecho labores" de investigación.

En esos datos aparecen reflejados entre otros el ex director general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, o el ex subdirector general de este área, Miguel Castaño, y que ambos en activo en el momento en que se cometieron los presuntos seguimientos. "Tenemos diversos soportes documentales y declaraciones de personas con alta relevancia en el Gobierno regional para decir lo que estamos diciendo", ha sentenciado. A juicio del periodista, quien se esconde detrás de esto "sabe que la información es poder" y que en este caso "es un poder muy sucio, que necesita dossieres muy sucios para extorsionar, quitar rivales de en medio, chantajear o destruir hogares". En definitiva, ha añadido, "esta información es un poder incontrolado".

También en el ámbito judicial, la Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía del TSJM la denuncia del ex consejero Prada para que la incorpore a la investigación que ha abierto con las denuncias de Cobo y González. La denuncia del diputado regional del PP ha llegado al fiscal general esta misma mañana y en ella pone estos hechos en conocimiento de Conde-Pumpido para que lo investigue y adopte las medidas oportunas.

(www.elpais.com, 23/01/09)

46. LOS ESPÍAS DE LA COMUNIDAD SIGUIERON A UN ALTO CARGO AL QUE REQUISARON EL ORDENADOR

Los ex agentes que trabajan en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid incluyeron en sus seguimientos y espionajes al director de Seguridad de la Consejería de Justicia, Juan Carlos Fernández, al que identificaban en sus partes como "el cabezón". Era un viejo conocido del departamento de Interior

porque había trabajado como directivo en este organismo entre 2004 y 2007, fecha en la que el consejero Alfredo Prada, de quien dependía, fue relevado de su puesto como titular de Interior y se quedó solo al frente de Justicia. En ese momento, Fernández pasó a dirigir la seguridad de una empresa pública dependiente de Justicia y denominada Campus de la Justicia.

Los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid que hicieron el seguimiento a "El Cabezón" -Alfredo Prada y otras personas de ese departamento autonómico confirman que se conocía por ese apodo a Juan Carlos Fernández- le encontraron siempre en los alrededores de la Consejería de Justicia, en la calle de Miguel Ángel, a la que acudía a trabajar bajo la dirección del consejero Prada.

El 3 de abril, los espías le localizan junto a otras personas a las que también identifican por sus apodos: "Sobre las 14.50 sale el ENANO acompañado de otra persona que no conocemos (la misma del día anterior) y no regresa. Poco después sale el del PAÑUELO (persona que en alguna ocasión acompañó al CABEZÓN). Al poco tiempo sale el CABEZÓN, come por la zona y regresa a las 15.45".

El 23 de abril, vuelven a referirse a Juan Carlos Fernández: "Sale del trabajo a las 19.35, vuelve a los 40 minutos y vuelve a salir a las 20.45, todo en su vehículo habitual". En algunas ocasiones, le siguen por la calle: "A las 14.20 horas, el Cabezón sale del lugar de trabajo, sale andando hacia Castellana y en la puerta del hotel Intercontinental coge un taxi".

La preocupación por los pasos de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de Alfredo Prada, que le había tenido como director de seguridad tanto en su etapa de consejero de Interior como en la de titular de Justicia, tuvo un desenlace escandaloso a partir del 25 de junio de 2008, cuando Prada fue destituido y apartado del Gobierno regional por Esperanza Aguirre. Al día siguiente, el ex comisario de policía Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad Ciudadana y jefe de las unidades donde trabajaban los ex agentes que espionaban a cargos públicos, se dirigió a las diez y media de la mañana a la sede de la Sociedad Pública Campus de la Justicia, dependiente de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Gamón se llevó a cuatro subordinados de la Consejería de Interior para requisar diversos documentos de la mesa del despacho de Juan Carlos Fernández, que ese día se había ausentado del trabajo para acudir al funeral de un pariente. Gamón pidió las llaves del despacho y lo cerró hasta el lunes. El sábado por la mañana, alguien retiró el ordenador personal de Juan Carlos Fernández donde, supuestamente, figuraban algunos dossiers patrimoniales de consejeros.

El episodio no pasó inadvertido para Alfredo Prada, que se quejó ante el consejero de Interior, Francisco Granados, quién aseguró que no había dado orden alguna de registrar el despacho de Juan Carlos Fernández. Gamón, sin embargo, aseguró que siempre obraba a las órdenes de Granados. El escándalo acabó con la destitución oficial de Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, Esperanza Aguirre, le mantuvo como asesor de la Consejería de Interior y con un sueldo similar al que cobraba, para lo que tuvo que darle el cargo de director del Área de Seguridad. Granados, en privado, ha asegurado que intentó apartarlo sin éxito de su consejería por lo que consideraba una torpeza.

A raíz del escándalo desatado esta semana tras conocerse el espionaje y seguimiento a altos cargos del PP, Esperanza Aguirre aseguró que si alguien de la Comunidad de Madrid está implicado será expulsado. Gamón fue destituido en su día, pero no expulsado.

El ex comisario Gamón aseguró que el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, le había ordenado que revisase cómo estaba el asunto de la Seguridad en la Ciudad de la Justicia y por eso acudió allí, aunque negó que hubiera requisado documentos o el ordenador personal de Juan Carlos Fernández.

Fernández denunció el espionaje de que fue objeto ante la Fiscalía de Madrid, cuyas gestiones resultaron inútiles pues cuando pidió las imágenes de las videocámaras de vigilancia del lugar donde ocurrieron los hechos las cintas ya habían sido destruidas porque, según la versión de la Comunidad de Madrid, sólo se guardaban cinco días de grabación.

(www.elpais.com, 24/01/09)

47. QUIÉN ES QUIÉN EN LOS SEGUIMIENTOS A POLÍTICOS MADRILEÑOS

Sergio Gamón. Ex comisario de Policía, ex jefe de escoltas de vicepresidencia del Gobierno en Moncloa, ex jefe de seguridad de Esperanza Aguirre como presidenta del Senado. Fichado por Aguirre en 2006

como director general de Seguridad Ciudadana, a las órdenes de Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Alfredo Prada. Vicepresidente y consejero de Justicia e Interior hasta 2007. Su hombre de confianza en Interior es Juan Carlos Fernández, director de Seguridad, hasta que llega Sergio Gamón en 2006. Prada pierde la cartera de Interior en 2007 y se queda sólo con Justicia, adonde se lleva a Juan Carlos Fernández como director de Seguridad del Campus de la Justicia. Prada es relevado en junio de 2008.

Francisco Granados. Secretario general del PP, asume la cartera de Interior en 2007. Mantiene el organigrama de altos cargos de seguridad pero ficha para ese equipo a tres guardias civiles que trabajaban en Valdemoro, municipio donde fue alcalde. En junio pasado, Granados ficha al ex policía Marcos Peña, que elaborará para el consejero informes sobre tramas de corrupción en ayuntamientos socialistas. En julio, al conocer que Gamón ha irrumpido en el despacho de Juan Carlos Fernández para requisar documentación y, supuestamente, un ordenador personal, le destituye.

(www.elpais.com, 24/01/09)

48. MENSAJE ENTRE LÍNEAS DE GALLARDÓN

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aprovechó el acto de presentación de la 44ª promoción de la Policía Municipal para dejar caer un mensaje en su discurso en pleno escándalo por el seguimiento a miembros del PP en Madrid: "Toda esta labor [la de la policía local] se desarrolla como se debe, con transparencia, con arreglo estricto a nuestras competencias", dijo. A la derecha del alcalde, el fiscal Manuel Moix, que investiga los espionajes que han sufrido altos cargos del PP.

(www.elpais.com, 24/01/09)

49. COSPEDAL EXCULPA A ESPERANZA AGUIRRE TRAS UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha empezado ya las entrevistas personales y telefónicas que componen la investigación interna sobre el espionaje en Madrid que ordenó el jueves Mariano Rajoy. Para arrancar, la tarde de ese mismo día mantuvo una conversación telefónica con Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad le aseguró que no sabe nada de los seguimientos ni del grupo de ex agentes creado en la Consejería de Interior y Cospedal se dio por satisfecha.

"Ya he hablado con Aguirre y me ha dicho que no tenía conocimiento de este asunto, y yo la creo. ¿Cómo no la voy a creer?, claro que la creo", aseguró en rueda de prensa.

Cospedal también ha hablado ya con otros miembros del partido involucrados en distinto grado en el caso. Por ejemplo, con el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados, su antecesor, Alfredo Prada, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Con este último, Cospedal se reunió por la tarde durante 15 minutos, según fuentes del PP. El número dos de Aguirre negó tener conocimiento de la existencia de un grupo de ex policías y ex guardias civiles dependientes de la Consejería de Justicia, dedicados a hacer labores de espionaje. Negó conocer a Marcos Peña, responsable actual del grupo.

Otra parte de la conversación se refirió al seguimiento del que él mismo fue objeto en un viaje a Cartagena de Indias. La versión del PP es que González transmitió su opinión de que en ese seguimiento se utilizaron medios muy sofisticados que no están al alcance de cualquiera, pero desconoce el origen. Respecto al resto de los seguimientos, también aseguró desconocer el origen. Francisco Granados negó también ante Cospedal tener relación con los hechos, según el PP.

La versión de la Comunidad sigue siendo que la estructura de seguridad es la misma de la etapa de los anteriores presidentes, Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina. La secretaria general del PP pretende tener concluido el informe en breve. Cuando tenga conclusiones lo remitirá al Comité Nacional de Derechos y Garantías que preside Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Interior y Justicia de Castilla y León y secretario general del PP en esa comunidad.

La investigación abierta por Rajoy ha irritado a la Comunidad, que desmiente todo y lamenta no tener respaldo de la dirección del PP en esa posición. En este ambiente, el PP abre en Madrid su I Foro de militantes, una especie de convención bajo el lema "Queremos". Investigados, investigadores, espiados y afectados coincidirán en el acto todo el fin de semana.

(www.elpais.com, 24/01/09)

50. EL EQUIPO DE AGUIRRE ALEGA QUE SUS AGENTES PUDIERON ESPIAR POR LIBRE

La trama del espionaje de Madrid se enreda día tras día. Al enfrentamiento abierto entre el PP de Mariano Rajoy y el Gobierno de Esperanza Aguirre se suma el temor a que las explicaciones políticas de colapsen ante las revelaciones periodísticas de mañana. De ahí que el equipo de la presidenta madrileña, aun negando que los seguimientos de políticos del PP fueran obra de la Comunidad de Madrid, alegue ahora que alguno de los expolicías y exguardias civiles contratados por la Consejería de Interior sí pudieron espiar por libre. O al servicio de terceros.

Quien esta tesis sostiene no es otro que el consejero regional de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, acusado de haber organizado una suerte de servicio secreto al que se atribuyen, al menos, los dosieres sobre el vicealcalde de la capital, el gallardonista Manuel Cobo, y el exconsejero madrileño Alfredo Prada, afin a Rajoy. "No puedo poner la mano en el fuego por todo el personal de la Consejería", declaró Granados a este diario.

El titular de Interior, que se dice inocente de las maniobras que se le imputan, asegura haber preguntado a sus más estrechos colaboradores si sabían algo de esta trama de espionaje. Cita en concreto al director del Área de Seguridad, Sergio Gamón, destituido tras haber espiado a Prada pero luego ascendido; el de Seguridad e Interior, Enrique Barón; el asesor Marcos Peña; y exguardias civiles de su confianza, algunos procedentes de Valdemoro, donde Granados fue alcalde. Todos, asegura, se desvinculan de la trama.

"A partir de aquí, lo que no puedo garantizar es que algunos de los empleados eventuales, cuya retribución no es demasiado alta, no hayan podido hacer seguimientos a espaldas de sus superiores, incluido yo. De hecho, sé que algunos realizan tareas de vigilancia fuera de su horario laboral. Tengo la convicción de que no ha sido así, pero no lo puedo asegurar", alega Granados.

Horas antes, entrevistado en Radio Nacional, el consejero apuntó que detrás de este entramado tiene que haber alguien "muy poderoso", aunque no quiso alimentar las sospechas respecto al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, enfrentado a Aguirre. Las cautelas de Granados, en todo caso, delatan su temor a que aparezcan pruebas de que empleados suyos, en efecto, siguieron a Cobo, Prada y a quién sabe cuántas personalidades más.

Seguramente, estos mismos argumentos son los que Granados esgrimió ante la secretaria general de su partido, Dolores de Cospedal, a la que Rajoy ha encargado la investigación interna destinado a depurar responsabilidades. Cospedal ya se ha visto con Aguirre y con el responsable autonómico de Interior, aunque piensa invitar a sus interrogatorios a "muchos otros" que pudieran aportar luz: prevé llamar a los responsables de seguridad de la Comunidad, aunque admite que tienen derecho a negarse a acudir a la cita.

Con toda la información que recabe, piensa acudir al comité de derechos y garantías del partido y, si lo considerase oportuno, al juzgado. Según Cospedal, es momento de velar por la dignidad de los espionados y, de paso, demostrar que el PP está en contra de esas prácticas ilegales, sea quien sea su autor. "Pido prudencia y diligencia", dijo en rueda de prensa. "Lo mejor para todos es que esto se aclare cuanto antes", avisó.

La petición de prudencia de Cospedal iba dirigida, básicamente, a su vicesecretario Esteban González Pons, que quiso pasar la pelota del escándalo al tejado del Ministerio de Interior. La jugada no gustó ni a propios ni a ajenos. Precisamente sobre esta salida de González Pons se le preguntó, en una entrevista radiofónica, al presidente del PP. Rajoy evitó desautorizar en público a su compañero y achacó esa tesis a un sindicato policial. Eso sí, aprovechó la ocasión para reclamar colaboración, a la hora de desenredar esta madeja de espionaje, a las fuerzas de seguridad. Y avisó de que no se precipitará condenando a inocentes, pero que no tendrá piedad, "sean quien sean", con los culpables.

(www.elperiodico.com, 24/01/09)

51. PSM E IU SE PERSONARÁN COMO ACUSACIÓN POR EL ESPIONAJE EN MADRID

En el Parlamento y en los tribunales. El PSM-PSOE e Izquierda Unida (IU) quieren estar en primera fila para seguir todos los avatares jurídicos y políticos que rodean el caso de espionaje político a altos cargos del PP. Las direcciones de ambas formaciones han decidido personarse como acusación popular

en la causa abierta en la Administración de Justicia y, por otro lado, forzar la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Para esto último, se requieren las dos quintas partes de la Cámara, lo que consigue la izquierda parlamentaria si une sus fuerzas.

Este despliegue ofensivo tomó cuerpo después de que el PSM, con la total aquiescencia del PSOE, decidiera hacer de este conflicto interno del PP, con derivaciones políticas y eventualmente judiciales, el elemento esencial de su política de oposición, singularmente contra la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Para justificar las acciones, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, envolvió sus iniciativas con palabras trascendentes. "Se está viviendo la mayor crisis política, social y moral que nunca haya sufrido la Comunidad de Madrid", señaló Gómez al anunciar la personación popular como partido en la causa, informa Javier S. del Moral.

Sin ocultar sus intenciones, inscribió la decisión de forzar una comisión de investigación en la Asamblea en su afán de que "se depuren responsabilidades políticas". Los socialistas quieren dosificar su exigencia de responsabilidades a medida que avance la investigación, por lo que, en principio, no piden la dimisión de nadie, sino que apelan a principios éticos y morales para considerar que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, "no tiene autoridad moral para seguir en sus cargos".

Aunque el PSM e IU tengan una coincidencia de intereses y unan sus fuerzas para crear una comisión de investigación, los estilos políticos son diferentes. Por eso, la portavoz parlamentaria de IU, Inés Sabanés, califica de "inadmisible" la permanencia aún en su cargo del consejero. Este grupo político ha centrado su interés en Granados (también secretario general del PP madrileño) por pertenecer a su consejería los ex agentes a sueldo que espionaron a altos cargos de la Comunidad. Desde el primer momento, IU pidió la comparecencia de Granados en la Asamblea; el lunes lo reiterará, y para entonces el PP habrá decidido si acepta o no esa comparecencia inmediata.

La investigación sobre la Consejería de Interior se antoja al PSM e IU de un valor muy notable para conocer qué ocurría en ese departamento. Así, IU ya ha registrado la petición de comparecencias urgentes del director general de Seguridad, Enrique Barón, del director del Área de Seguridad de la consejería, Sergio Gamón, y del jefe del Departamento de Asesores de Seguridad, Marcos Peña. "Estas personas deben explicar el entramado de seguridad de la región, ya que algunas de sus actividades, según lo publicado, bordean, cuando no atentan directamente, la legalidad", expone IU. "Las cárceles están llenas de gente que dice que es inocente". Ésta es la frase pronunciada por Tomás Gómez, secretario general del PSM-PSOE, que ha levantado las iras del PP. "Son palabras despreciables", enjuició el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Gómez hizo ese comentario respecto a la persistencia del consejero de Interior, Francisco Granados, en mantener que nunca ha ordenado espionar a nadie. Lo cierto es que desde que se ha desatado este escándalo del supuesto espionaje a altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre por ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior, el PSM no suelta la presa.

En la dirección del socialismo madrileño no ocultan que este asunto va a ocupar buena parte de sus energías. Además, no hay duda de que así será por el despliegue de iniciativas que el PSM, y también Izquierda Unida, han puesto en marcha para tratar de averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades en la existencia de un cuerpo de seguridad, dependiente de la Consejería de Interior, formado por ex agentes, que ha espionado a altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.

Según la interpretación del PSM, el fondo de este asunto es político, ya que supone la puesta en evidencia de la lucha sin cuartel entre los afines de Esperanza Aguirre contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El hecho de que también haya sido vigilado Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional y persona de confianza de la presidenta, supone para los socialistas un "incidente" en el camino, porque es sabido que no todos los colaboradores de la dirigente madrileña tienen buenas relaciones entre sí.

Por mucho que desde el PP se critique a Gómez por "esperar a ver qué dicen los periódicos por las mañanas para hacer oposición", como le ha espetado David Pérez, el PSM no va a mirar hacia otro lado. "Se trata de una trama probablemente de carácter delictivo, tanto por el uso de fondos públicos como por su propia constitución que atenta contra el Estado de derecho", señaló Gómez.

Que va a por todas lo demostró Gómez al convocar una reunión extraordinaria para el próximo lunes con todos los secretarios generales de su partido. Se trata de lanzarse en tromba contra el Gobierno de Aguirre en particular, y contra el PP madrileño en general, informan en la dirección socialista. De esta estrategia es consciente el PP. David Pérez acusó al líder del PSM de practicar una política "indecente, inquisitorial, oportunista, carroñera e injuriosa".

Aunque el PSM tiene autonomía plena para articular su estrategia en este asunto, cuenta además con la aquiescencia del PSOE. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aunque sin adjetivos, pidió al PP de Madrid que "salde esta cuenta con los ciudadanos".

(www.elperiodico.com, 24/01/09)

52. LA COMUNIDAD DE MADRID EMPRENDERÁ "ACCIONES LEGALES" CONTRA 'EL PAÍS' POR FALSEDAD

El Gobierno de Esperanza Aguirre está dispuesto a "llegar hasta el final" para salvar su honor en la **trama de espionaje** en el seno del Ejecutivo regional. El primer paso será emprender acciones legales contra el periódico *El País*, medio que sacó a la luz el caso, por haber creado la "gran mentira" y dar pábulo a "noticias falsas, entre ofensivas y calumniosas", se ha quejado el secretario de Comunicación del PP madrileño, Juan José Güemes, durante el I Foro Abierto celebrado esta mañana por el partido. "Estamos en un Estado de Derecho y, aunque no le guste a *El País*, quien tiene que demostrar es quien hace la acusación".

Güemes ha recordado que el autor de la información de *El País*, Francisco Mercado, tuvo que "reconocer", durante su declaración ante la Fiscalía, "que no tenía ninguna prueba" de que el Gobierno de la Comunidad tuviera relación con los informes publicados. Además, el también consejero de Sanidad madrileño ha aconsejado a *El País* que considere si le conviene seguir contando con los servicios de un periodista que "ya tiene muchos antecedentes de fabricar noticias falsas".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha llegado al mismo encuentro con simpatizantes del PP en medio de una gran expectación mediática y a su entrada al Palacio Municipal de Congresos, donde tenía lugar, ha opinado que "parece que amaina", en relación al "temporal" que ha sacudido a su equipo de Gobierno esta semana.

Aguirre ha confiado en que la Justicia tomará una decisión sobre la supuesta trama de espionaje "lo más pronto posible" y se ha incorporado a la reunión de los populares, donde ha protagonizado un mediático abrazo con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que llega tras el cruce de declaraciones que ambos dirigentes han mantenido durante toda la semana por al supuesta trama.

Al Foro de los populares también ha asistido el ex consejero madrileño de Justicia supuestamente espionado, Alfredo Prada, que ha expresado su deseo de que, "de manera urgente se pueda dilucidar lo que es la responsabilidad penal de unos hechos que, de ser ciertos, son evidentemente muy graves y delictivos". Unos hechos que además han afectado, en su caso, no sólo a él, sino a su familia y, al parecer, a algunos de los que fueron sus colaboradores en la Consejería, en concreto al que fuera director de Seguridad de la Consejería de Justicia Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de Prada, según publica *El País*.

El ex consejero de Justicia ha hecho hincapié en que "si se ha utilizado dinero público para fines ilícitos, estamos ante unos hechos graves" y ha querido dejar claro que él no acusa a nadie en concreto.

Desde la filas socialistas, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha instado al presidente del PP, Mariano Rajoy, a que "llegue hasta las últimas consecuencias para esclarecer la supuesta trama de espionaje" que afecta a altos cargos de la Comunidad de Madrid.

En un acto con militantes socialistas en Valdepeñas, Pajín ha subrayado que los ciudadanos tienen el derecho a saber qué es lo que está pasando y ha demandado de Rajoy que "no mire de un lado a otro", sino que investigue y depure todas las responsabilidades que haga falta.

La dirigente socialista se ha preguntado "cómo un partido en el que supuestamente unos espían a los otros pretende que los ciudadanos confíen en ellos y pueda garantizar algo cuando no se fían entre sí".

En otro acto con militantes en Madrid, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha considerado una "indecencia" que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, "siga formando parte del Gobierno de la Comunidad" y ha vuelto a exigir que Aguirre comparezca en la Asamblea.-

(www.publico.es, 24/01/09)

53. AGUIRRE: "¿A TI NO TE HE ESPIADO, CON LO TODOPODEROSO QUE ERES?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue este sábado la primera en recibir al presidente del PP, Mariano Rajoy, a su llegada al Palacio de Congresos y Exposiciones donde se celebra el I Foro abierto de partido y para romper las tensiones de esta última semana donde el caso del supuesto espionaje ha estado en el orden del día, nada más acercarse, rodeada de unos pocos, se dirigió a él y le dijo: "Parece que amaina el temporal..."

"¿Parece que amaina todo el temporal, todo menos el tiempo?", apuntó la presidenta mientras que Rajoy, algo ajeno a las palabras de la jefa del Ejecutivo madrileño, daba dos besos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que junto con Aguirre, esperaban a la llegada de su presidente, que ha sido el último en hacer entrada.

Precisamente, mientras esperaban a Rajoy, Aguirre también le ha dicho la misma frase a Cospedal pero más afirmativa: "¿Has visto como amaina el temporal?". Las dos sonrientes se han limitado a hablar en voz baja y en hacerse fotos con la gente que se acercaba a la presidenta para mostrarle su apoyo.

El presunto espionaje de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior a altos cargos ha sido la comidilla durante todo el inicio del acto. De hecho la presidenta ironizaba con cada uno de los compañeros que se iba encontrando en el camino y les decía: "¿A ti no te he espiado, con lo todopoderoso que eres?".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha expresado este sábado su deseo de que la Justicia tome una decisión "lo más pronto posible" sobre la supuesta trama de espionaje que vigilaba a miembros del gobierno regional y del ayuntamiento de la capital.

Ante una gran expectación de los medios de comunicación, Aguirre ha hecho unas breves declaraciones a su llegada al Palacio de Congresos de Madrid, donde su partido, el PP, celebra este fin de semana el I Foro abierto de militantes.

Un evento en el que esta misma mañana la presidenta madrileña ha coincidido con el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, quien no ha querido hacer declaraciones a la entrada al foro. Tras la insistencia de los periodistas, Aguirre ha decidido efectuar una pequeña declaración. "El asunto del que ustedes quieren hablar está judicializado, en manos de los jueces y de los fiscales. Será la Justicia la que tenga que decidir y espero que lo haga lo más pronto posible", ha dicho.

Ha pronunciado estas palabras porque si no, "me matan", confesaba Aguirre segundos después a personas de la organización que habían intentado convencer a los periodistas para que no insistieran porque la presidenta de la Comunidad de Madrid no tenía intención de hacer declaraciones.

(www.publico.es, 24/01/09)

54. EL 'NÚMERO DOS' DEL EX CONSEJERO DE JUSTICIA PRADA TAMBIÉN FUE SUPUESTAMENTE ESPIADO

El director de Seguridad de la Consejería de Justicia, Juan Carlos Fernández, 'número dos' del por entonces consejero de Justicia de Madrid, Alfredo Prada, también fue supuestamente espiado por agentes parapoliciales.

Según informa el diario *El País*, Fernández, identificado como "el cabezón", no sólo fue objeto de seguimiento, sino que los espías asaltaron su despacho y se llevaron documentos y su ordenador personal, en el que, supuestamente, figuraban algunos 'dossiers' patrimoniales de consejeros.

El ex comisario de policía, y entonces director general de Seguridad Ciudadana, Sergio Gamón, fue el encargado de llevar a cabo el supuesto asalto, para lo cual dispuso de cuatro subordinados de la Consejería de Interior.

Tras esto, el propio Juan Carlos Fernández denunció que le habían sustraído su ordenador, y Gamón fue destituido de su cargo, aunque sigue en la Consejería de Interior. Prada también se quejó ante el consejero de Interior, Francisco Granados, quién aseguró que no había dado orden alguna de registrar el despacho de Fernández. Sin embargo, Gamón aseguró que siempre actuaba bajo las órdenes de Granados.

Alfredo Prada también fue destituido como consejero de Justicia por Esperanza Aguirre, y de inmediato pasó a formar parte del equipo de Mariano Rajoy. Esta semana salió a la luz que **el propio Prada también fue supuestamente espiado** tras haber mostrado públicamente su apoyo a Rajoy.

Prada, ahora director del departamento de Exteriores del PP, opinó que "incluso" el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, debe colaborar con la Fiscalía para esclarecer "inmediatamente" el caso de los supuestos seguimientos, y no bromear con estos "hechos gravísimos", en referencia a las palabras del socialista que este jueves ironizó con que el caso es como "de Mortadelo y Filemón".

(www.publico.es, 24/01/09)

55. LAS NOTAS SECRETAS DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DEL PP EN MADRID

Seis partes de los seguimientos efectuados por ex policías a sueldo de la Consejería de Interior
El vicealcalde investigado

- Los espías controlan los movimientos de Manuel Cobo desde que sale de su vivienda, en una localidad vecina de la capital, y expresan su temor a que los sorprendan policías municipales.

Fotos del acompañante de Prada

- En el espionaje al entonces consejero de Justicia, se meten junto a él en el hotel y dos de los agentes toman fotografías del acompañante de Alfredo Prada.

"Nuestro director Sergio"

- Los agentes encargados del seguimiento a políticos también recogen en los partes la llegada de su director, Sergio [Gamón], en ese momento director general de Seguridad de la Consejería de Interior.

Una diputada del PP, controlada

- En la operación, los ex agentes a sueldo de la Comunidad descubren coches sospechosos, toman sus matrículas y luego investigan a sus propietarios. Aquí hallaron a una diputada del PP.

"Sale El Cabezón"

- A Juan Carlos Fernández, apodado El Cabezón por los agentes, también le controlaron. Fernández era uno de los hombres de confianza del consejero de Justicia, también espiado.

Bajo, canoso y gordo

- A un desconocido que se encuentra con el consejero Prada Presa le describen con estas palabras: "Baja estatura, cabeza despoblada, nariz puntiaguda, cintura gruesa...".

Diputado histórico

La de Álvaro Lapuerta es una vida dedicada a la política. Casado y con 10 hijos, a sus 80 años pertenece a la directiva nacional del PP.

Pragmático y silencioso, fue durante un tiempo el diputado más antiguo del Congreso (ha estado en siete legislaturas). Sumando sus años como procurador en el régimen franquista, ostentó un escaño más de 30 años. Participó en 2008 en los actos del 30º aniversario de la Constitución, junto a los padres de la ley fundamental.

En su partido, donde ha sido tesorero y es considerado un miembro histórico, guarda una estrecha relación con muchos dirigentes de la cúpula. A pesar de la renovación en el seno del PP que llevó a cabo Rajoy el año pasado, él se mantuvo en la directiva.

Los que le conocen, dicen que es leal y muy serio. Tras dejar su trabajo como abogado del Estado, durante la dictadura fue delegado especial del Ministerio de Hacienda, entre otros cargos. Posee la Gran Cruz del Mérito Civil.

(www.elpais.com, 24/01/09)

56. AVISÉ A MARIANO RAJOY DE QUE ME ESTABAN ESPIANDO"

El líder del PP, Mariano Rajoy, fue informado en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. El histórico dirigente del Partido Popular Álvaro Lapuerta, a la sazón tesorero nacional del PP, alertó entonces a su presidente de que estaba siendo vigilado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid. La máxima dirección del PP ha confirmado estos hechos.

En su denuncia verbal, Lapuerta exoneró a la presidenta Esperanza Aguirre de tales seguimientos, pero, según aseguran altos cargos del PP con los que ha tenido contacto, explicó que era objeto de vigilancia como respuesta a sus críticas a determinadas adjudicaciones del Gobierno regional que consideraba sospechosas.

Lapuerta, un hombre afín a Rajoy, ocupaba el cargo de tesorero nacional del PP en las fechas en que fue objeto de vigilancia, un periodo especialmente turbulento en la vida del partido por la batalla desatada entre el presidente del partido y Aguirre. "Avisé a Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado, pero el resto de detalles y de mis sospechas, prefiero dejarlas en reserva", confirmó a este periódico al ser consultado.

Frente a estos hechos y declaraciones, el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad del Gobierno de Aguirre, Juan José Güemes, acusó a *EL PAÍS* de "fabricar una gran mentira y un bulo calumnioso" en relación con la trama de espionaje político destapada por este periódico.

Tras descubrir que era víctima de seguimientos, Lapuerta trasladó su preocupación a dos de sus colaboradores más estrechos: Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, que ahora ocupan los cargos de tesorero y gerente del PP, respectivamente.

Posteriormente, esta denuncia también ha sido comunicada a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, responsable de la investigación interna abierta por el partido tras destaparse las actividades de la red de espionaje radicada en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados.

Otro de los conocedores de estos hechos es Alfredo Prada, antiguo consejero de Justicia y miembro de la dirección del PP. Prada fue espiado tras las últimas elecciones generales, en las mismas fechas que Lapuerta, un periodo en el que se libraba una feroz batalla política entre Aguirre y Rajoy. El seguimiento a Prada incluyó citas privadas con personas de las que los agentes tomaron fotografías, según indicaron en los partes de seguimiento a los que ha tenido acceso *EL PAÍS* y que se reproducen en esta página.

Prada era uno de los dos principales objetivos del equipo de espías. El otro era el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Aguirre en la batalla por el poder dentro del PP.

Al mes de cesar los partes de seguimientos a Prada, Esperanza Aguirre le destituyó de su puesto de consejero de Justicia como castigo por su alineamiento en el congreso nacional del PP y, sobre todo, por ser fichado por Mariano Rajoy para su equipo directivo.

Durante el espionaje al tesorero nacional del PP, Lapuerta fue fotografiado cuando salía de una residencia religiosa en compañía de su mujer y dos días después al anochecer, cuando regresaba a su domicilio.

En la primera ocasión, siempre según los testimonios recabados por este periódico, el chófer de Lapuerta salió corriendo detrás del misterioso fotógrafo, pero éste se escabulló por las calles adyacentes, en torno a San Bernardo. El segundo síntoma de espionaje fue una foto tomada con flash cuando volvía a su domicilio. Tampoco pudo ser interceptado el fotógrafo.

Otra de las personas espiadas es la diputada autonómica del PP María del Carmen Rodríguez Flores. Su nombre y la matrícula de su coche figura en uno de los partes elaborados por el servicio de espionaje vinculado a la Consejería de Interior. Este informe (ver en los documentos de la parte superior) muestra que este aparato parapolicial no sólo marcó los pasos, públicos y privados, del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, del entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, o de su jefe de seguridad, Juan Carlos Fernández, sino de otras personas más que creían, con o sin motivo, que tenían relación con ellos.

En algunos casos, se espió a personas que simplemente tuvieron la mala fortuna de aparcar el coche en las inmediaciones o estar compartiendo restaurante con ellos. El caso de la diputada Rodríguez es sintomático.

Figura en un parte de seguimiento a un "objetivo" no precisado el 27 de mayo que come en el restaurante madrileño O Cruceiro, escenario frecuente de comidas de Rodríguez y otros altos cargos del partido. Sólo se sabe lo que aporta el parte sobre el espiado: "13.00. Se monta el dispositivo. 14.15: Sale del trabajo, se dirige a calle Núñez de Balboa 23, restaurante O Cruceiro; 16.50: Sale del restaurante anterior, se dirige a la calle León donde se desmonta el dispositivo a requerimiento para otras labores". A mano, los ex agentes apuntan una matrícula y, debajo, el nombre del propietario del vehículo, que es la diputada autonómica del PP.

María del Carmen Rodríguez asegura que ese día no estuvo en dicho restaurante, y no halla razones para que su coche y su nombre figuren en un parte de vigilancias, pero no oculta sus sentimientos: "Mi vida es tan clara, que no tengo nada que ocultar. Lo que siento es que si estas personas lo han hecho, que me imagino que sí porque está saliendo mucha porquería, que francamente que todo esto es muy poco bonito. ¿Qué quieren buscar en mí, si soy el último mono?".

Pero podría haber una clave: "Ah, he sido amiga de Prada desde hace muchísimo tiempo porque es un hombre honesto, ¿Y eso bastaba? Pues puede ser. Y que soy de Mariano Rajoy. Eso lo puedes decir. Soy del núcleo duro del partido. Soy Mariano Rajoy. Me han dado una importancia que no tenía. Todo esto me produce un rechazo natural. Me parece tan bajo, tan barriobajero que no cuadra con mi forma de ser".

En los partes de seguimiento que firman los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid citan expresamente al que entonces era su jefe [Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana], a otros superiores de su departamento y a la Dirección General a la que tenían que acudir en ocasiones cuando estaban en pleno seguimiento de políticos.

Hay tres tipos de partes, lo que podría indicar que han sido realizados por agentes distintos. Uno de ellos siempre escribía en mayúsculas; el segundo cuida la presentación mientras el tercero utiliza un cuerpo de letra más pequeño y prefiere guardar el nombre de su objetivo; simplemente refleja sus movimientos, que en algún caso implican a empresas de seguridad, a las que se dirige la persona espiada.

(www.elpais.com, 25/01/09)

57. AGUIRRE SE DESHILACHA ENTRE ESPÍAS

Cuatro hombres y su jefe entran en un despacho ajeno, requisan varios documentos y cierran con llave. Uno se queda de guardia para que nadie pueda acceder a la habitación y, dos días después, los mismos hombres regresan al despacho y se llevan un ordenador personal cuyo disco duro guarda supuestamente informes patrimoniales que comprometen la honestidad de políticos con mucho poder.

Todo ha quedado grabado en las cámaras de videovigilancia. Los intrusos trabajan para la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. El jefe es el ex comisario Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y los cuatro hombres son ex agentes de policía. Han irrumpido en dependencias de la Consejería de Justicia. No son extraños, todo queda en casa.

Pero la persona que trabaja cada día en el despacho asaltado (Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia) y el hombre al que rinde cuentas (Alfredo Prada, consejero de Justicia) protestan al conocer el inquietante episodio y denuncian lo que consideran un escándalo. Ha ocurrido sólo un día después de que Prada fuera relevado en su puesto por Esperanza Aguirre. Ambos han caído en desgracia.

El asalto al despacho se cierra con la destitución de Gamón como director general, aunque el Gobierno regional prefiere no despedirle y le mantiene con un salario de alto nivel en la dirección del Área de Seguridad de la Consejería de Interior.

Pese a que la justicia investiga el suceso, llega tarde. Las imágenes del asalto al despacho captadas por las cámaras de videovigilancia han sido destruidas porque sólo se guardan cinco días de grabación, según cuenta el Gobierno de Madrid al fiscal. El caso se archiva por falta de pruebas. Parece un episodio aislado de burdo espionaje pero en realidad se trata del desenlace final de un largo desencuentro entre

dirigentes del Gobierno que preside Aguirre, aderezado con prácticas ilegales de presión a base de amenazas con dossiers.

Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2008, en plena tormenta política dentro del PP por el fracaso electoral y el debate sobre la continuidad de Rajoy, un grupo de ex policías y ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid y destinado en la Consejería de Interior desarrolla tareas de espionaje pagadas con dinero público y para las que no tiene competencias legales atribuidas.

"C" y "P" son los objetivos principales de los seguimientos durante aquellos meses de máxima fractura política en el PP. Rajoy se asegura el apoyo mayoritario mientras Aguirre, en minoría, no se resigna a la derrota.

"C" es Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Esperanza Aguirre a la que a veces critica con ironía y otras abiertamente. Unos años antes, Cobo intentó disputar a Aguirre, sin ningún éxito, la presidencia del PP en Madrid. Cuando Cobo conoce por *EL PAÍS* esos partes de seguimiento se mueve entre el estupor y la incredulidad. Repasa en su agenda personal lo que hizo aquellos días. Y comprueba que el seguimiento es real. No hay ningún dato erróneo.

"P" es Alfredo Prada, ex vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Justicia cuando sufre el espionaje. En los últimos tiempos se ha distanciado de Aguirre. De todopoderoso vicepresidente, con competencias en Interior, pasó a simple consejero de Justicia.

En la batalla por el poder dentro del PP, Prada eligió a Rajoy frente a su jefa, que le puso de patitas en la calle. Cuando recibe la llamada de este periódico y conoce los pormenores del seguimiento confirma que todos los detalles son ciertos.

El operativo de vigilancia especial a políticos de Madrid, que ningún miembro del Gobierno de Aguirre asume como propio, se organiza desde el número 33 de la calle de Gobelias (Madrid), donde está situada la sede de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

Ex policías y ex guardias civiles forman parte de una unidad que intenta "proteger" a algunos miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid con unos métodos secretos muy peculiares. Los expertos lo llaman "bloqueo de seguridad".

Sergio Gamón es el jefe de los ex agentes. Tiene experiencia de mando. Fue jefe de seguridad en el Senado cuando Esperanza Aguirre era presidenta. Y también fue jefe de escoltas en La Moncloa en Vicepresidencia del Gobierno. Su labor era proteger a la socialista María Teresa Fernández de la Vega.

Aguirre le ficha para la Comunidad de Madrid en 2006. Su primer jefe es Alfredo Prada, al que, según los documentos que obran en poder de *EL PAÍS*, terminaron espionando los propios hombres de Gamón, citado en los partes de seguimiento al consejero de Justicia. Su segundo y actual jefe fue Francisco Granados, secretario general del PP, al que Aguirre ha ido endosando distintas consejerías y responsabilidades desde que llegó al Gobierno. Asumió el área de Interior que la presidenta le quitó a Prada.

Altos cargos de la Consejería de Interior recalcaron a *EL PAÍS* que pese a esta dependencia orgánica, Gamón "sólo" despachaba con el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y con el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, al que supuestamente fichó el propio González. El vicepresidente autonómico lo niega. Nadie quiere saber nada de Gamón.

González, se defiende recordando que él mismo ha sido víctima de espionaje. El vicepresidente ha denunciado a la Fiscalía los seguimientos de que fue objeto cuando viajó a Cartagena de Indias en marzo de 2008. González sostiene que ese seguimiento precisó de complicidades internas en la Comunidad de Madrid. Se trata de informes mucho más elaborados que los "partes" realizados sobre otros miembros del PP, con una factura distinta y que apuntan a supuestas conductas delictivas del vicepresidente. Por aquella época, González evaluó crear un CNI legal autonómico y su amigo personal, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta llegó a presentarle un borrador que dejó aparcado en un cajón. El vicepresidente consideró que no era conveniente y, además, esa materia dependía de la Consejería de Interior.

Granados introdujo ciertos cambios en la Consejería de Interior cuando se hizo cargo de esa cartera. Contrató como asesores en septiembre de 2007 a tres guardias civiles destinados en Valdemoro, donde

el consejero fue alcalde. Y nueve meses más tarde, en junio de 2008, colocó en el departamento a un ex policía llamado Marcos Peña que venía recomendado por el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, uno de los dirigentes que más trabajó a favor de la teoría de la conspiración que pretendía involucrar a ETA en los atentados del 11-M. Y puso a sus órdenes a los ex guardias. Estos ex agentes tienen una singularidad: sólo responden ante el consejero. No están bajo las órdenes del actual director de seguridad, Enrique Barón, quien ha desechado controlarlos. Pero no sólo Barón receló de su labor. El sindicato UGT lo dice a las claras: "Existe un grupo de asesores nombrados por el consejero de Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex policías, ex guardias civiles y personal de confianza, de los que se desconoce qué trabajo realizan". Granados sostiene que sus guardias civiles sólo le hacen tareas de escolta.

UGT también muestra su sorpresa al conocer que Sergio Gamón sigue en nómina de la Consejería de Interior. Gamón fue destituido como director general tras conocerse que había entrado con un comando en una sede autonómica de la Consejería de Justicia para requisar distinto material de un director que también fue sometido previamente a seguimientos.

Peña, el otro fichaje de Granados, se dedicó, entre otras cosas, a elaborar informes sobre tramas corruptas vinculadas a ayuntamientos socialistas. El consejero de Interior ha escuchado a Peña estos meses exponerle algunas teorías sobre la relación entre el incendio intencionado del coche particular de Granados en Valdemoro y la trama de corrupción socialista en el vecino municipio de Ciempozuelos. También ha escuchado Granados teorías de sus colaboradores sobre la implicación del CNI en el espionaje a Ignacio González. Los dos dossiers sobre los viajes públicos y privados al extranjero del vicepresidente, sobre los que el propio González sospecha que pudieron tener su origen dentro de la propia Comunidad por la información que manejaban, no aparecen citados en ninguno de los partes de seguimiento de personajes políticos elaborados por los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid. González y Granados compartieron mesa ante la prensa el pasado jueves. Ambos negaron que ex agentes de la Comunidad de Madrid hubieran hecho seguimientos de políticos del PP. Incluso llegaron a poner en duda que hubieran existido esos seguimientos. Era su puesta en escena para hacer frente a una situación que intentaron desprestigiar el lunes -"¿Por qué hacen ustedes caso a lo que cuenta *EL PAÍS*?", espetó Aguirre a los periodistas que le preguntaron ese día por el caso- y que a lo largo de la semana ha desencadenado indignación en los dirigentes nacionales del PP. Tanto que Rajoy ordenó abrir una investigación interna para depurar responsabilidades tras comprobar Aguirre intentaba cerrar el escándalo acusando a compañeros del partido de mentir.

Antes de la conferencia de prensa del jueves, González y Granados habían llamado por teléfono a Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid que fue espiado por ex agentes a sueldo de la Comunidad, para justificarse. "Yo no he sido, Manolo", proclamaron. Aguirre no levantó el teléfono. Recurrió a lo que más le gusta, un mensaje escrito por el móvil. En ninguna de las llamadas se atrevieron González y Granados a poner en duda que el espionaje político se había producido. A partir de ahí, pensaron que para su exposición pública, la mejor defensa era el ataque.

En sus declaraciones, ambos exculpan a los ex policías y ex guardias civiles que trabajan al servicio de la Consejería de Interior y amenazan con querrelas a *EL PAÍS*, a Manuel Cobo, Alfredo Prada y Alberto Ruiz-Gallardón, todos los que han dado credibilidad a los testimonios de altos cargos de la Consejería de Interior y al contenido de los partes del espionaje en Madrid.

(www.elpais.com, 25/01/09)

58. MARIANO RAJOY. Primero se fío de ella y ahora la investigará

Observó, escuchó y dejó hacer. En un primer momento, Rajoy cerró filas en torno a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto, y yo les creo". Pero los nuevos capítulos de la red de espionaje, de la que había tenido noticia meses antes por la denuncia del entonces tesorero del partido, obligaron al líder del PP a tomar cartas en el asunto. Atrás quedó la confianza en Aguirre. Ordenó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigación para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades".

59. ESPERANZA AGUIRRE. "Nos vemos en los tribunales"

La presidenta regional prefirió ver el toro desde la barrera. Los tres días siguientes a la publicación de la noticia no compareció públicamente. Incluso no presidió el Consejo de Gobierno del jueves porque tenía "un acto privado". Al cuarto día apareció para desmentir de forma tajante que los seguimientos hayan

sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administración. Tras poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenazó a *EL PAÍS*: "Nos vemos en los tribunales". Y a renglón seguido pidió a todo aquel que sostenga la tesis contraria a la suya que lo denuncie ante el juez.

60. ALBERTO R.-GALLARDÓN. "Sabemos que ha habido espionaje"

El alcalde de Madrid se desmarcó una vez más del discurso de Esperanza Aguirre. Gallardón manifestó su rechazo a la red de espionaje desde un principio -el vicealcalde, Manuel Cobo, fue sometido a vigilancia-. "Sabemos que se ha realizado esa investigación, porque no se ha hecho tacha de falsedad de la totalidad de los documentos [que publicó *EL PAÍS*]".

Para echar más leña a la hoguera, Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que es ilícito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por estas personas, es un delito", aseguró en TVE.

(www.elpais.com, 25/01/09)

61. EL ESCÁNDALO DEL ESPIONAJE ROMPE LOS ÚLTIMOS PUENTES ENTRE RAJOY Y AGUIRRE

No lo logró la larguísima crisis interna, ni el abandono de María San Gil, ni la ruptura con UPN, ni las malas encuestas, ni las feroces críticas de los medios conservadores. Pero al final, el escándalo de los espías ha conseguido que Mariano Rajoy confesara a todo su entorno algo que ya creían imposible: está muy preocupado.

Dicen que considera gravísimo lo publicado por *EL PAÍS*, que le da crédito -tanto como para abrir una investigación interna, algo muy excepcional-, porque afecta a los suyos y además porque le ha dado una gran baza al PSOE, precisamente en un momento de gran debilidad para el Gobierno por los pésimos datos del paro.

Esta crisis, y la reacción tanto de Rajoy como de Esperanza Aguirre, ha roto definitivamente los escasos puentes que unían a estos dos grandes rivales internos, según coinciden fuentes de uno y otro sector. El marianismo está muy enfadado con la presidenta de Madrid porque, en lugar de abrir una investigación interna, como esperaban, ha desmentido todo sin más, como si la cosa no fuese con ella.

La dirección del PP cree que con esta actitud, y con el ataque que ha lanzado hacia cualquiera, incluido Alberto Ruiz-Gallardón, que diera credibilidad a la información, Aguirre ha forzado a Rajoy a iniciar una investigación interna. "No lo entendemos, les hemos dicho desde el principio que deberían ellos interrogar a su gente y dilucidar responsabilidades, pero están cerrados en banda", explica un miembro de la dirección.

A su vez, los aguirristas están indignados porque el líder, en vez de dejar las cosas en manos de la justicia, que con sus tiempos lentos habría diluido el asunto, se ha lanzado a una investigación de resultado imprevisible.

"Esto deben resolverlo los tribunales. Es una investigación política. El partido tiene una fórmula, que es la comisión de investigación interna, que se aplicó en el caso Naseiro, pero esto es totalmente atípico, aunque públicamente no vamos a criticarlo para evitar más lío", señala un aguirrista. "Van a conseguir que esa investigación interna esté todo el día en la prensa", insiste otro.

La desconfianza entre los dos sectores, que estuvieron a punto de enfrentarse por el liderazgo del PP en el último congreso interno, es total. Dolores de Cospedal, la secretaria general, se ha tomado muy en serio la investigación interna. Rajoy le ha ordenado, según fuentes de la dirección, llegar hasta el final para dar ejemplo en el partido y disipar la enorme preocupación que se extiende por todas las sedes regionales, sobre todo la gallega y la vasca, que preparan sus elecciones.

Cospedal ya ha estado un buen rato en su despacho de la calle Génova interrogando a Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González, siempre con un testigo, Ana Mato, vicesecretaria de Organización, para darle mayor oficialidad. Todos ellos han alegado su absoluto desconocimiento de los espionajes. La secretaria general les ha confirmado que seguirá investigando y les ha adelantado que ella llamará a toda la gente que considere necesaria, incluidos los policías y responsables de la consejería de Interior que aparecen en las informaciones de *EL PAÍS*.

Algunos podrán negarse porque no son miembros del PP, pero eso no contará precisamente a su favor en las conclusiones que elaborará Cospedal. El lunes tiene citado en su despacho a Manuel Cobo y Alfredo Prada, dos víctimas del espionaje precisamente en los días en los que eran personajes importantes del grupo que apoyaba la continuidad de Rajoy frente al asalto de Aguirre a la presidencia del PP. Esta apuesta le costó el puesto a Prada, expulsado del Gobierno de Madrid y recuperado por Rajoy.

La preocupación se multiplica. Sólo algunos dirigentes ironizan -"a mí no me han espiado, yo no soy nadie"-, pero la mayoría están cabizbajos. "Esto va a acabar fatal, aunque no sé para quién. No puede acabar bien. Es un asunto muy feo", sentencia un veterano que lo ha sido todo en el partido.

"El problema de fondo es el PP de Madrid. No sólo por la pelea Aguirre-Gallardón. En el Gobierno de Esperanza se odian casi todos, y de esos polvos vienen estos lodos", sentencia otro veterano.

La guerra ha reabierto el enfrentamiento entre Aguirre y Gallardón. ambos dejaron claro que siguen siendo los dos personajes clave del partido. En la convención del PP, con el lema Queremos, un novedoso encuentro abierto y protagonizado por las nuevas tecnologías y redes sociales, organizado por Esteban González Pons, ambos protagonizaron sendos discursos ideológicos de fondo.

Más que la presentación de una convención interna, parecían discursos de dos candidatos a la presidencia del Gobierno o al liderazgo de su partido.

Gallardón, en un estilo claramente inspirado en la retórica de Barack Obama, aprovechó la idea expresada por Pedro Solbes en *EL PAÍS*, de que ya no hay margen para actuar en la economía, para concluir que sí hay margen, que tiene que haberlo, y que debe dimitir el que no lo encuentre para dejar paso al PP. Pero sobre todo entró al choque con Aguirre y su discurso de los principios. "Cuando oigo hablar de principios y valores, pienso que nadie tiene derecho a sustituirlos por un fosilizado conjunto de dogmas. No es día para enfrentar público y privado, ni levantar barreras. Tenemos que reconciliar a España con su pluralidad".

Si Gallardón se inspiró en Obama, Aguirre citó a Ronald Reagan, y contestó a su rival: "En la solidez moral e ideológica radica la fuerza del partido. Necesitamos valores e ideales claros. Hay que reducir el gasto de las administraciones, con ejércitos de funcionarios, y bajar los impuestos".

"Estos dos están como siempre, pero ahora con un escándalo gravísimo entre las manos que se puede llevar por delante a todos, Rajoy incluido", sentenciaba a la salida uno de los muchos dirigentes preocupados.

(www.elpais.com, 25/01/09)

62. GÜEMES ACUSA A EL PAÍS DE "FABRICAR UNA GRAN MENTIRA"

El secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad, Juan José Güemes, descalificó a *EL PAÍS* y al redactor que ha destapado la trama de espionaje, Francisco Mercado. "El diario *EL PAÍS* ha fabricado una gran mentira. Quiero recordar en este sentido que Mercado tiene un largo historial de fabricar noticias falsas, y por lo tanto yo creo que los editores del periódico deberían pensarse si les conviene para la calidad del periódico y para sus lectores el seguir dejando que un redactor pueda publicar noticias falsas, fabricar cuatro o cinco portadas falsas y engañar a sus lectores", afirmó públicamente.

Mercado es el redactor de varias informaciones sobre Carlos Fabra, suegro de Güemes y presidente de la diputación de Castellón, imputado por tráfico de influencias y fraude fiscal. Respecto a la investigación interna abierta por el PP nacional, Güemes señaló: "La caradura y desfachatez con la que *EL PAÍS* edita esas noticias ha podido llevar a alguien a la conclusión de que tienen algo de verdad".

El Comité de Redacción de *EL PAÍS*, órgano de representación profesional, emitió un comunicado en el que "lamenta y condena las declaraciones de Güemes, en las que descalifica con insultos a Francisco Mercado, además de pedir su censura, en un exceso que traspasa todos los límites de su competencia".

El comunicado afirma: "Defendemos, apoyamos y felicitamos a Mercado por las informaciones en las que se destapa una trama de espionaje ilegal montada en el seno de la Comunidad de Madrid. Comprendemos que estas revelaciones, publicadas con el rigor y las garantías que han hecho de nuestro periódico la referencia absoluta de los medios de comunicación en español de todo el mundo,

levanten nerviosismo e inquietud en su partido. Pero queremos hacer saber tanto al señor Güemes como a los dirigentes del PP que le sustentan lo siguiente: la coacción y los excesos verbales no nos arredran. Son un motivo más para practicar con mayor empeño, si cabe, la libertad de información que todo ciudadano en ejercicio de sus responsabilidades democráticas debe respetar".

(www.elpais.com, 25/01/09)

63. EL PP ESCENIFICA UNA FRÁGIL UNIDAD PERO AGUIRRE PASA AL CONTRAATAQUE

El PP ha invertido mucho tiempo y energía en organizar su primer foro abierto a la sociedad concebido para la participación libre de los internautas, cuya jornada de inauguración tuvo lugar, en Madrid. Por eso, el líder del partido, Mariano Rajoy, maniobró a través de sus colaboradores para intentar dar, al menos durante unas horas, imagen de unidad. Y logró que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, se hablaran, besaran y hasta fingieran que entre ellos no pasa nada, pese a haberse lanzado, en los últimos días, mensajes más propios de adversarios irreconciliables que de compañeros de partido. Eso sí, en medio de esa frágil tregua, Aguirre cargó contra el diario *El País* por sus informaciones sobre los casos de espionaje, o por "la gran infamia", como ella lo llama. Y avisó de que habrá querrela.

Así, la presidenta regional llegó al recinto donde se celebra el evento alrededor de las 10 de la mañana. Minutos después, salió a la puerta, con la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, a recibir a Rajoy. Se saludaron. Y cuando más soplabla el viento, ella le dijo: "Parece que amaina el temporal". Tan inoportuna predicción no pretendía ser meteorológica, sino mediática.

Mientras, los militantes del partido ocupaban sus asientos. Como si de un congreso de novela negra se tratase, allí no se hablaba más que de espías y espíados. Hasta que llegó el momento de los discursos. Los oradores, entre los que se encontraban Aguirre y Gallardón, se besaron y susurraron palabras al oído. Las cámaras plasmaron tan forzado gesto.

El primero en subir a la tribuna fue el líder de nuevas generaciones, Nacho Uriarte. A continuación, Ruiz-Gallardón. Saludos generalizados. Y "un saludo muy especial para la presidenta de Madrid", enfatizó no sin cierta sorna. En su intervención, exigió a su partido dureza en la oposición ante la crisis y alternativas para ganar espacio social. Fue un elaborado discurso, con tono presidencialista. Ni una palabra de dossieres, aunque uno de los vigilados haya sido su vicealcalde, Manuel Cobo. El siguiente fue el candidato popular en Euskadi, Antonio Basagoiti. Y tras él, Aguirre.

De nuevo, saludo general al auditorio. "Querido alcalde, y un saludo muy especial para ti también". De pillo a pillo, Aguirre devolvía al regidor el tramposo guiño. La baronesa hizo un discurso basado en la defensa de los principios tradicionales del PP. "En la solidez moral e ideológica radica la fuerza de un partido", sostuvo. Llegado ese momento, cargó contra José Luis Rodríguez Zapatero. Le criticó por casi todo, especialmente por convertir a España en "una fábrica de parados". Y tal y como se pactó, silencio absoluto sobre el espionaje.

En la misma línea se pronunció De Cospedal. Pero, fin de los discursos, fin de la paz: Aguirre ordenó a su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que ejerciera de portavoz ante la prensa. Con ese encargo, Güemes arremetió contra el periodista que ha desvelado la trama y se preguntó por qué dijo ante el tribunal que no culpaba a Aguirre y, sin embargo, no pide "perdón a lectores y al Gobierno de Madrid". Y avisó de que le exigirán responsabilidades penales.

todo el equipo de Aguirre estaba muy crecido. Tanto, que se jactaba de que la investigación interna de Rajoy no es más que un intercambio "de opiniones". "Aquí no se ha abierto una comisión de investigación, como sí se hizo por orden de José María Aznar, con el caso Naseiro", apuntaba un colaborador. En 1989, con Aznar recién llegado a la dirección del PP, estalló un caso de presunta financiación ilegal y enriquecimiento personal en Valencia. El caso fue archivado por irregularidades en las escuchas telefónicas policiales, pero la investigación interna acabó con alguna expulsión.

(www.elperiodico.com, 25/01/09)

64. LOS 'MORTADELOS' AMENAZAN LA CARRERA DE AGUIRRE

Francisco Granados es un hombre poderoso. Acumula tres consejerías en el Gobierno de Esperanza Aguirre: Presidencia, Justicia e Interior. Y además es secretario general del PP de Madrid, partido hegemónico que, cuando perdió la mayoría absoluta en el 2003, tuvo la suerte de que dos tráfugas

privaran a la izquierda de la mayoría. Pero Granados está ahora en el ojo del huracán. Según ha publicado *El País*, (que ha entregado los documentos a la fiscalía), personal policial adscrito a Interior -- queda por ver con conocimiento de quién-- espió al exconsejero de Justicia Alfredo Prada (que optó por Rajoy), a un director general de este y al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, hombre de confianza de Gallardón. Y queda aún más en la nebulosa el seguimiento realizado en el extranjero al vicepresidente González (aguirrista). Granados empezó negando todo pero ahora no descarta que personal de su departamento pudiera trabajar por cuenta de otros. El escándalo revela que las luchas en el PP de Madrid (Caja Madrid, Gallardón-Aguirre) y en el PP español (Rajoy-Aguirre) son fuertes. Y ponen en duda la autoridad de Rajoy. Los hechos apuntan a que el coeficiente de inteligencia política de Granados dista bastante del óptimo. Y sus mortadelos (el espionaje parece muy chapucero) pueden colocar a Aguirre en situación complicada. Y no ayudarán al PP en las próximas elecciones gallegas, vascas y europeas.

(www.elperiodico.com, 25/01/09)

65. EL EX POLICÍA QUE FICHÓ GRANADOS URDIÓ UN BULO CONTRA EL GOBIERNO DE ZAPATERO

El ex policía Marcos Peña estuvo en el origen de una información falsa contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2006. La información se refería a un supuesto trato de favor en el escándalo del fraude de la filatélica Afinsa (que estafó supuestamente a 140.000 clientes y que tenía un agujero patrimonial de 1.105 millones de euros), según una sentencia conocida en el mes enero de 2008. Apenas seis meses después, el Gobierno de Esperanza Aguirre fichó a Peña como asesor de la Comunidad de Madrid.

Desde entonces, Marcos Peña forma parte del equipo de confianza en materia de seguridad del consejero de Interior de la Comunidad, Francisco Granados. Lo contrató por recomendación del diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, según fuentes del Gobierno autonómico. Del Burgo se distinguió como parlamentario por alentar otro bulo, el del 11-M, que pretendía involucrar a ETA en el atentado islamista en los trenes de Madrid.

La información falsa cocinada por Marcos Peña apareció entre mayo y junio de 2006 en el diario *El Mundo* e involucraba a Jorge Blázquez Lidoy, número dos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, que entonces dirigía Miguel Sebastián, actual ministro de Industria.

La información atribuía a Blázquez Lidoy gestiones para bloquear una investigación del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) contra una empresa encargada de auditar a Afinsa por no detectar el fraude que se estaba produciendo ni el descomunal agujero patrimonial que sufría la filatélica, destapados aquel año.

La empresa auditora de Afinsa era Gestynsa, propiedad del padre de Jorge Blázquez. Éste, según el dossier que difundía el ex policía Marcos Peña, presionó desde la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno al ICAC (organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda) para bloquear la investigación e impedir una multa a la empresa de su padre. El ICAC sancionó a Gestynsa por una falta grave.

Jorge Blázquez Lidoy, en la actualidad alto cargo (asesor ejecutivo para asuntos internacionales) del Ministerio de Industria, que dirige Miguel Sebastián, confirmó a *EL PAÍS* que durante el juicio que se celebró tras denunciar él mismo las falsedades de las noticias publicadas, el director de *El Mundo*, Pedro J. Ramírez, confesó al juez que "Marcos Peña había sido el origen de la información".

En la página 5 del fallo judicial se explican los pormenores de la fabricación del bulo: "D. Pedro J. Ramírez identifica como origen de la noticia a dos personas, D. Ángel Zarabozo y D. Marcos Peña. El Director del ICAC, si bien afirmó conocer a estas personas y mantener con ellas cierta relación de amistad, negó haber transmitido dicha información, al igual que negó haber mantenido la reunión que relató Pedro J. Ramírez entre una periodista de *El Mundo*, el director del ICAC, D. Ángel Zarabozo y D. Marcos Peña.

Y lo cierto es que la mera amistad existente entre estos dos últimos y el director del ICAC no es suficiente para atribuir a la fuente de la información la nota de solvencia que acreditaría el cumplimiento de la diligencia exigible a los demandados en la comprobación de la veracidad de la noticia difundida, lo que unido a que no se contrastó ningún dato objetivo, lleva a declarar que la información ha lesionado el derecho al honor del demandante".

La sentencia de aquel juicio, fechada en enero de 2008, sólo cinco meses antes de la contratación de Marcos Peña por parte de la Comunidad de Madrid como asesor de Seguridad, acredita que las informaciones para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eran falsas. La sentencia, recurrida por *El Mundo*, la firmó la juez titular del juzgado número 43 de Madrid.

La maniobra de intoxicación para desprestigiar al Ejecutivo socialista, montada por Marcos Peña y Ángel Zarabozo, ex socios en la empresa de seguridad Keytech Sistemas Integrales, fue ampliamente difundida por *El Mundo* durante la última semana de mayo y la primera de junio de 2006. No consta cuál era la relación de ambos con dicho escándalo para haber realizado dicho informe y ser el origen de la información falsa a la que *El Mundo* dedicó una decena de páginas. Cuando Jorge Blázquez Lidoy presentó una demanda por las falsas informaciones, los responsables del periódico que las habían publicado alegaron que sus noticias "debían encuadrarse dentro de la crítica política" y que exigir a ese medio de comunicación la prueba de veracidad "implicaría una probativo diabólica", según se recoge en la propia sentencia.

La juez condenó a los autores del bulo a abonar 18.000 euros al alto cargo de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno que ahora asesora al ministro de Industria.

Marcos Peña, el ex policía que fabricó el bulo sobre Blázquez Lidoy, explicó hace ocho días a este periódico que su cometido en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid consistía básicamente en elaborar informes para su jefe, el consejero Francisco Granados. Y citó entre sus investigaciones rematadas con informes algunos casos de corrupción que afectaban a ayuntamientos dirigidos por socialistas, como el de Ciempozuelos y el de Coslada, y otros como el escándalo de las mafias de las discotecas de Madrid, bajo el gobierno del PP.

66. LOS TRES EQUIPOS DE INTERIOR

- El primer equipo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tras la victoria electoral de Esperanza Aguirre en las segundas elecciones autonómicas de 2004 (las primeras no sirvieron porque dos tráfugas socialistas arrebataron la presidencia del Gobierno a Rafael Simancas con su traición) lo dirigió Alfredo Prada, con su hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, al frente de la Seguridad autonómica.

- En 2006, dos años después de iniciada la era Aguirre, ésta ficha a Sergio Gamón, que había sido su jefe de Seguridad en el Senado, como director general de Seguridad Ciudadana. Gamón se convierte en el hombre fuerte de ese departamento en la consejería que dirige Alfredo Prada.

- En 2007, Prada pierde Interior, que pasa a depender de Francisco Granados. Gamón sigue al frente de la Dirección de Seguridad Ciudadana, pero el nuevo consejero ficha como asesores a tres ex guardias civiles que conocía de Valdemoro. Meses después contrata a un ex policía, Marcos Peña, como asesor. Luego destituye a Gamón por irrumpir en el despacho de Juan Carlos Fernández, el hombre de confianza de Prada. Enrique Barón, jefe superior de Policía de Madrid, ocupa el puesto de Gamón.

(www.elpais.com, 26/01/09)

67. LOS ESPÍAS REQUISARON UN 'DOSSIER' DEL CONSEJERO DE INTERIOR Y DE SU ESPOSA

El espionaje desde dentro. Un dossier con información supuestamente comprometedor para el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, circulaba por dependencias de la propia Comunidad de Madrid, según sostienen altos cargos del Ejecutivo regional. Granados, sin embargo, nunca ha tenido conocimiento de que existiera ese dossier sobre su patrimonio, según fuentes próximas al consejero.

Uno de los principales cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre ha confirmado a *EL PAÍS* que ex agentes que trabajan en el área de Seguridad de la Consejería de Interior, desde donde se han hecho seguimientos a políticos del PP, requisaron el ordenador donde se encontraba presuntamente el dossier contra Granados en un despacho de la Ciudad de la Justicia, sociedad dependiente de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

La documentación supuestamente comprometedor para Granados se encontraba, según las mismas fuentes del Gobierno regional, en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. Fernández era director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, y, meses antes de que le requisaran documentos en su despacho, había sido uno de los objetivos de los

seguimientos a políticos por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid. El consejero Alfredo Prada también fue investigado y seguido por los espías.

El 27 de junio, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado por la presidenta Esperanza Aguirre, y cuatro de sus colaboradores, aprovecharon la ausencia de Juan Carlos Fernández para entrar en su despacho y requisar documentos. Lo hicieron un día después de que el jefe de Fernández, el consejero Alfredo Prada, fuera destituido por Esperanza Aguirre.

El dossier incluía información sobre el patrimonio de Francisco Granados y de su esposa, e intentaba vincular al consejero con empresas constructoras, tomando como base el vehículo particular del consejero de Interior que estaba a nombre de una empresa y que resultó intencionadamente incendiado para centrar la atención sobre su propietario. Por contra, personas del entorno de Granados apuntan en privado que el dossier no le comprometía a él sino al vicepresidente, Ignacio González. Lo sorprendente es que distintos miembros del Gobierno de Aguirre reconozcan en privado saber el contenido de un ordenador cuya requisa -robo, según la denuncia- nunca han reconocido oficialmente, ni devuelto.

En efecto, en octubre de 2006, el coche del consejero Granados fue incendiado cuando estaba estacionado en el aparcamiento de la urbanización de Valdemoro en la que reside. La investigación descubrió que el incendio había sido intencionado (la policía encontró aceleradores del fuego en el interior del coche) y que el vehículo, un Mini Cooper descapotable, estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios.

Granados explicó entonces que el vehículo era de su esposa, pero que el concesionario en el que lo compró no había tramitado aún el cambio de titular por problemas burocráticos. El PP pidió inmediatamente que la Fiscalía General del Estado investigase si el incendio en el domicilio del consejero Granados tenía relación con el caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos, donde acababa de dimitir el alcalde socialista, Pedro Torrejón, por un escándalo urbanístico de supuesto cobro de comisiones ilegales. El juez que investigó el caso Ciempozuelos, Agustín Carretero, fue fichado posteriormente por el consejero Granados como alto cargo de su consejería.

(www.elpais.com, 26/01/09)

68. GAMÓN Y HALFFTER

Un día después de que la presidenta Esperanza Aguirre destituyera a Alfredo Prada como consejero de Justicia, los agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, con su jefe, Sergio Gamón, al frente, se pusieron manos a la obra.

Gamón y cuatro de sus colaboradores se presentaron en la Ciudad de la Justicia, entraron en el despacho del director de Seguridad, Juan Carlos Fernández, y requisaron documentos.

Gamón lo explicó así en este periódico: "El viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter me ordenó que mirara cómo estaba el asunto de la seguridad en la Ciudad de la Justicia. Yo siempre he actuado a las órdenes del consejero o del viceconsejero. No hago nada por mi cuenta".

Fuentes de la consejería de Interior indicaron a este periódico que Gamón no reportaba directamente con Francisco Granados, su último jefe, sino con el viceconsejero Alejandro Halffter, fichado para ese puesto por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

(www.elpais.com, 26/01/09)

69. GONZÁLEZ RECOLOCA A UNO DE LOS ALTOS CARGOS CITADOS EN LOS SEGUIMIENTOS

Miguel Castaño, ex subdirector general de Seguridad de la Consejería de Interior, uno de los altos cargos de la Consejería de Interior a los que presuntamente se alude en los partes de espionaje publicados por este diario y entregados a la fiscalía de Madrid, ha sido nombrado asesor de seguridad del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio González. Castaño es aludido en los partes del espionaje perpetrado supuestamente por personal de la consejería de Interior, que dirige Francisco Granados. El 28 de abril de 2008 escriben: "A las 18.25, nos desplazamos a la dirección por requerimiento de Miguel".

Tras la destitución del director de Seguridad, Sergio Gamón, a raíz del escándalo de la operación que dirigió de requisita de un ordenador de una empresa de la Consejería de Justicia, su segundo, Castaño, también fue apartado del puesto. Ambos fueron recolocados.

Gamón fue nombrado director del área de seguridad bajo el exclusivo mando de Granados. Y Castaño fue designado asesor. El primero tiene un equipo de ex policías a su cargo. El segundo, no, según fuentes de Interior. El personal de la Consejería de Interior desmiente, a través de UGT, que la estructura sea heredada de anteriores gobiernos: "Existe un grupo de asesores nombrados por el consejero de Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex policías, ex guardias civiles y personal de confianza, de los que se desconoce qué trabajo realizan".

"Siguen en nómina"

El personal funcionario de la consejería, según la nota de UGT, "se siente perjudicado por la deriva en la gestión de seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general". "Ambos ex altos cargos siguen aún, sorprendentemente, en nómina de la Comunidad", señala UGT. La nota denuncia que estos puestos se crearon para reubicarlos tras su destitución aparente.

Los trabajadores de la Consejería de Interior han trasladado su malestar al actual director, Enrique Barón, bajo cuya estructura y mando no se hallan los equipos del ex inspector Marcos Peña y Sergio Gamón. Barón ni siquiera ha sido informado de cuál es la labor de dichas células parapoliciales que reportan a Granados. Los trabajadores, ante la situación creada por las informaciones, han elevado su disgusto a distintos cargos de la Comunidad.

(www.elpais.com, 26/01/09)

70. ESPIONAJE MANUSCRITO

Entre las decenas de partes de seguimiento a políticos que mecanografiaron los agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid -departamento del que dependían, puesto que se referían al mismo en sus relatos o partes diarios del trabajo de espionaje- hay algunos donde aparecen notas manuscritas cuya autoría se puede investigar judicialmente con peritos caligráficos.

Los supuestos espías vigilaban a los objetivos que alguien les había ordenado espiar: "P", era Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid al que Esperanza Aguirre destituyó cuando se puso del lado de Mariano Rajoy; y "C" era el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado abiertamente con la presidencia regional. Cualquier persona que se viera con los dos objetivos señalados era anotada en los partes de seguimiento.

En ocasiones, los agentes localizaban a vehículos que creían sospechosos en los alrededores de los restaurantes donde comían sus espías. Y entonces, apuntaban la matrícula y luego la trasladaban a los partes de seguimiento poniendo anotaciones al margen que escribían de su puño y letra.

Estas incidencias llenaron al menos tres partes de seguimiento, a los que ha tenido acceso *EL PAÍS*. El primero corresponde a un almuerzo del consejero de Justicia, Alfredo Prada, en un restaurante situado en la calle de Fernando El Santo. Los agentes escriben en su parte: "Observamos que hay varios vehículos oficiales de los que tomamos las matrículas". Al margen, en la nota, aparecen tres matrículas manuscritas aunque no se identifica a sus propietarios.

El 27 de mayo, en otro de sus seguimientos, donde no se precisa el objetivo, apuntan al margen una matrícula a mano y, justo debajo, el nombre de su supuesta propietaria, una diputada autonómica del PP que se ha declarado afín a Mariano Rajoy y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.

Por último, el 14 de marzo, en una salida nocturna de Prada con su familia para cenar, los agentes que le espían toman "matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios". Y añaden: "Se detecta un vehículo, tanto por las proximidades a su domicilio como por la zona del restaurante perteneciendo el mismo a...". Debajo anotan a mano "Secretaría Estado".

(www.elpais.com, 26/01/09)

71. ¿HORAS EXTRA O TURNOS?

Los ex policías contratados por la Comunidad de Madrid que investigaron a políticos mediante seguimientos por la capital de España y otros municipios de la región se emplearon a veces hasta la madrugada. O cobraron horas extra, o el equipo de espías era muy amplio y se hacían tres turnos de vigilancia.

Los partes de seguimiento abarcan vigilancias que se inician a primera hora de la mañana -"Cobo [vicealcalde de Madrid] sale de su domicilio a las 08.25 horas de la mañana tomando el itinerario habitual y llegando a su puesto de trabajo a las 09.02 horas"-, continúan a la hora de los almuerzos - "sale solo del restaurante, se monta en el vehículo oficial. Nosotros nos dirigimos a la reunión que tenemos en la D. G. [Dirección General]"- y se alargan hasta la madrugada -"[Prada] sale sobre las 22.10 del domicilio y se dirige a un restaurante sito en la calle Comandante Zorita, en el cual entra en compañía de su mujer y de una chica muy joven, permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas en la que salen".

El ritmo de trabajo que reflejan los partes de seguimiento apunta a la existencia de varios equipos de espionaje (de hecho hay tres tipos de letra distinta en los partes mecanografiados) y de distintos horarios, que salvo que sean remunerados con el pago de horas extra no están previstos en ningún contrato del personal de la Comunidad de Madrid.

Por los detalles que aportan en sus notas del seguimiento a políticos, los equipos de vigilancia tampoco eran demasiado numerosos porque se quejan constantemente de algunas lagunas en su zona de cobertura. "[Prada] sale con su esposa a las 22.15 horas. A las 22.22 horas lo perdemos debido a que toma un camino que sólo está cubierto por un vehículo y sale otro de un garaje que obstruye nuestra maniobra de seguimiento, no pudiendo volver a detectarlo aunque damos repetidas vueltas por zonas cercanas a la que nos encontramos. A las 23.15 decidimos desmontar el dispositivo".

En otra ocasión, los agentes localizan a Prada junto a una persona de "baja estatura, cabeza despoblada, color de pelo moreno-canoso, nariz puntiaguda y cintura gruesa". En ese seguimiento, los supuestos espías reconocen sus dificultades: "Esta persona se monta en el coche con Prada y se dirigen dirección Miguel Ángel-Ruben Darío-Almagro, itinerario descubierto [no controlado por el dispositivo por falta de medios y personas, estando cubiertas las salidas de General Martínez Campos y de Paseo de la Castellana con un vehículo-persona cada uno y el otro componente dando la salida al objetivo".

(www.elpais.com, 26/01/09)

72. EL PP, ENTRE EL MUTISMO Y EL "QUEREMOS SABER"

Las revelaciones sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid lo han convertido en un tema inevitable en cualquier comparecencia pública de casi cualquier cargo del PP. Fuera de ese partido, sólo el ministro del Interior se refirió , en tono estrictamente institucional, al asunto.

- Alfredo Pérez Rubalcaba. El ministro del Interior dijo que las Fuerzas de Seguridad están "como siempre" a "plena disposición" de los jueces y los fiscales que están investigando el caso del supuesto espionaje a cargos del PP de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. El ministro rechazó comentar nada más de este tema.

- Mariano Rajoy. En una entrevista en el diario El Correo, el presidente del PP decía que van a recabar "toda la información posible para saber qué ha pasado; es lo menos que cabe esperar cuando tres dirigentes del partido parecen haber sido objeto de seguimientos". Añade que "se trata de unos hechos que, de confirmarse, serían gravísimos. Por eso queremos saber qué ha ocurrido, eso sí, desde el respeto más absoluto al principio básico de presunción de inocencia".

- Esperanza Aguirre. La presidenta de Madrid se defendió en una entrevista en Abc en la que decía: "Lo que tiene usted que preguntarse es cui prodest, ¿a quién beneficia? Al PSOE, sobre todo, que quiere recuperar el poder en Madrid y debilitar al PP ante las próximas citas electorales. Y al Gobierno le sirve para tapar los 3.200.000 parados".

- Cristóbal Montoro. "Lo que se oye es un ruidito de fondo que no tiene ningún sentido frente a la naturaleza y la envergadura de los problemas sociales, económicos y políticos que tiene España", respondió el portavoz de Economía del PP.

- Alberto Núñez Feijoo. "Que sean los jueces los que nos digan quién está detrás", dijo el líder del PP gallego. "Queremos saber quién está detrás de estos casos que entendemos que pueden ser delictivos,

queremos saber como todos los ciudadanos a quién interesan, qué buscan y qué es lo que se está ocultando en este asunto", reiteró.

- Javier Arenas. El responsable de Política Territorial del PP no quiso pronunciarse y señaló que la justicia lo "aclarará todo y pondrá todo en su sitio".

(www.elpais.com, 26/01/09)

73. RAJOY TRATA DE INYECTAR ENTUSIASMO AL PP Y PIDE UNIDAD "PASE LO QUE PASE"

La envidia que ha generado en los cuarteles del PP el entusiasmo desatado en torno a Barack Obama ha puesto a trabajar a todos los estrategas de la formación en un radical cambio de discurso, y de estilo. Este fin de semana se han visto las primeras consecuencias. Primero fue la apuesta por Internet, por Facebook en particular, una herramienta que, con las donaciones por la web, llevó a Obama a arrasarse entre los jóvenes. El PP, comandado aquí por Esteban González Pons, está gastando mucho dinero para instalarse en la web y ganar esa batalla al PSOE.

Así, fue el día del cambio de estilo de Mariano Rajoy. Con un discurso muy bien preparado, hecho para emocionar, el presidente del PP trató de darle la vuelta al calamitoso estado anímico de su partido. Acosado por batallas internas, desconfianzas, mala valoración del líder y un escándalo de espionaje entre compañeros que le ha enfrentado definitivamente con su gran rival, Esperanza Aguirre, Rajoy se esforzó por inyectar confianza y, al menos por un día, lo logró. La mayoría de los dirigentes salía contento por la fuerza del nuevo discurso.

En un tono apasionado, a ratos populista -las cifras del paro "no son dígitos rojos, sino sueños rotos"- y muy pensado, el líder lanzó una idea de fondo. En política, explicó, se está para servir a los ciudadanos y no "para tener un puesto". Por eso, y porque España y el PP están muy por encima de los intereses de sus dirigentes, dijo, los ciudadanos exigen "un partido unido y cohesionado". "Yo me comprometo a garantizar la unidad pase lo que pase", clamó. Rajoy, hartado, según sus colaboradores, de la guerra cainita entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, y muy preocupado por las consecuencias que ha tenido el escándalo del espionaje, pidió a sus dirigentes -los dos madrileños escuchaban en primera fila- "responsabilidad y grandeza".

Todo estaba pensado. También la respuesta a quienes, como Aguirre o Jaime Mayor, piden que no se olviden los valores del PP y se dé la batalla de ideas contra el PSOE. Rajoy les dio satisfacción con un discurso de fondo en el que reivindicó un "nuevo patriotismo". "No basta con un plan económico, necesitamos recuperar los valores que puedan sostenerlo. Hay que dar la batalla de las ideas. Una sociedad vacía de valores será peor y más pobre. Y esa batalla la vamos a dar con nuestro discurso, pero sobre todo con nuestra conducta. Como siempre", dijo en lo que podía ser una velada referencia al escándalo del espionaje. "España tiene que recuperar valores como el trabajo bien hecho, la austeridad, el espíritu de superación, el esfuerzo, el mérito y el espíritu cívico. Esos valores están en crisis".

La palabra esperanza, el eje central del discurso de Obama -y título de su libro político, La audacia de la esperanza, un superventas en EE UU-, estuvo constantemente en boca de Rajoy. Hay varios obamistas en su equipo, y el nuevo PP, a pesar de sus vínculos con el Partido Republicano, reforzados en la época de Aznar, insiste en que coincide con muchos de los planteamientos del nuevo presidente de EE UU, que para nada son socialdemócratas, aseguran.

A los tres voluntarios, Cándido, Ana y Antonio, en los que personalizó su discurso, Rajoy les dijo que son "héroes silenciosos, el rostro de la esperanza que debe ayudar a confiar en el futuro". En esta época de crisis, Rajoy trató de convencer a los suyos -había más de mil personas en la sala- de que la oposición puede conectar con la gente si les hace ver que el Gobierno está agotado y que ellos son la ilusión de cambio de los que sufren la crisis. "El PP ofrece una alternativa de esperanza, un guión distinto al goteo de desánimo que llega desde el Gobierno", cerró entre el entusiasmo de unos dirigentes que, por un día, querían olvidar los problemas que acosan al partido.

(www.elpais.com, 26/01/09)

74. UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID

José Sierra, titular del juzgado número 47 de Madrid, ordenó incoar diligencias en el caso de los espionajes en la Comunidad de Madrid, al hallar indicios de delito en la denuncia presentada por Ignacio

González, vicepresidente del Gobierno regional, sobre los dossiers que hacían referencia a dos de sus viajes al extranjero, uno público y otro privado, en los últimos ocho meses.

La actuación del juez se une a la emprendida hace varios días por el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, que decidió abrir una investigación sobre los casos de espionaje que habían denunciado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada.

Estos dos últimos han sido objeto de seguimientos por un grupo de agentes que, según apuntan en sus partes de espionaje, dependen de la dirección general de Seguridad Ciudadana de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.

En dichos documentos, que acreditan el espionaje político -y que *EL PAÍS* puso a disposición de la Fiscalía de Madrid-, se detalla la dependencia de los supuestos espías tanto del "director Sergio [Gamón]", como de "Miguel [Castaño]", subdirector de la dirección general de Seguridad Ciudadana cuando ocurrieron los hechos. Ambos altos cargos fueron destituidos de sus puestos en junio de 2008, aunque el Gobierno de Esperanza Aguirre los ha mantenido en nómina con un salario de alto nivel en asuntos relativos a la seguridad.

Tanto el consejero de Interior, Francisco Granados, como el vicepresidente, Ignacio González, y la presidenta, Esperanza Aguirre, han rechazado que hubieran dado orden para los seguimientos a políticos en Madrid por parte de algunos de los trabajadores de la dirección general de Seguridad Ciudadana.

El titular del juzgado 47 de Madrid, José Sierra, se centra en el caso del espionaje que sufrió Ignacio González durante dos de sus viajes (uno público y otro privado) al extranjero.

En el primero, realizado en la Semana Santa pasada, González se trasladó a Johannesburgo junto a su amigo Pedro Antonio Martín Marín, y el empresario Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Securisa. Los espías elaboraron un dossier donde se apuntaba que Sánchez González, que ha recibido contratos multimillonarios en el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, le había regalado el viaje a Johannesburgo. Las fotocopias de los billetes de avión reflejan que González pagó su viaje y el de su mujer, 8.000 euros, en metálico. El vicepresidente aseguró a *EL PAÍS* que lo hizo así porque le venía bien.

El segundo viaje, en el que sufrió seguimientos con cámara oculta del que hay testimonios gráficos, tuvo lugar a finales de agosto de 2008. González se desplazó como presidente del Canal de Isabel II hasta Cartagena de Indias (Colombia), donde fue fotografiado cuando entraba y salía del hotel en el que se alojó. González relata en su denuncia ante el juzgado que, basándose en la información publicada por *EL PAÍS*, podría haber sido objeto "de distintos seguimientos parapolicias en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados".

En la denuncia también se resalta que el espionaje podría haber afectado a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid. Se refiere a los partes de seguimiento, publicados por este periódico, en que personal a sueldo de la Consejería de Interior -y que citan expresamente a sus jefes- habrían seguido al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.

Los meses del seguimiento parapolicial por presuntos agentes de la Consejería de Interior del Gobierno de Madrid -marzo, abril y mayo de 2008- coincidían con la mayor crisis interna del PP. Tanto Cobo como Prada se habían situado del lado de Mariano Rajoy, y enfrente de Esperanza Aguirre, en la batalla por el poder dentro del partido.

En el mismo periodo precongresual, en mayo de 2008, el entonces tesorero nacional del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, denunció ante su jefe, el presidente del partido, Mariano Rajoy, que tenía fundadas sospechas de que un aparato al servicio de la Comunidad de Madrid le estaba espiando. De hecho, en dos ocasiones le intentaron tomar fotografías en distintos actos privados.

Aunque Lapuerta exculpa expresamente a Esperanza Aguirre del supuesto espionaje, señala que se había enfrentado a algunos dirigentes de su Gobierno en relación con adjudicaciones de contratos que consideraba irregulares.

(www.elpais.com, - 27/01/09)

75. CLAVES PARA UNA INVESTIGACIÓN

Seguimiento a Cobo

- El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, fue espiado en abril de 2008, en plena batalla por el poder en el PP. Cobo confirma que lo publicado por *EL PAÍS* coincide con su agenda esos días y denuncia al fiscal el caso: "Quiero saber quién lo hizo, quién lo encargó y con qué fines".

Gamón y el 'dossier'

- Los espías siguieron al director de Seguridad de Justicia, Juan Carlos Fernández, al que apodaban El Cabezón y que dependía de Prada.

Tras ser destituido, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, requisó de su despacho documentación y un ordenador personal.

Viajes de González

- El vicepresidente de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, fue espiado en un viaje realizado a Cartagena de Indias (Colombia) en agosto de 2008. González viajaba como presidente del Canal de Isabel II; los informes de los espías apuntan a la supuesta connivencia del mandatario con un constructor que iba con él en la comitiva.

- Otro dossier revela que González viajó a Suráfrica en marzo pasado junto al empresario Enrique Sánchez. Los billetes (8.000 euros) fueron pagados en metálico. González afirma que lo pagó de su bolsillo.

- "Para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma González en su denuncia.

Espionaje a Prada

- Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, fue espiado antes de su destitución. En junio de 2008, tras más de tres meses de seguimiento y después de que Prada apoyase a Rajoy, Aguirre lo destituyó. Los espías llaman a su jefe "Sergio", supuestamente Sergio Gamón, director de Seguridad de la Comunidad.

El tesorero avisó

- Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, alertó a Mariano Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales de la Comunidad de Madrid. Lapuerta, afín a Rajoy, exoneró en su denuncia a la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

(www.elpais.com, - 27/01/09)

76. COSPEDAL SE PREPARA PARA LLAMAR A LOS JEFES DE LOS ESPÍAS

La investigación interna del PP sobre el escándalo del espionaje en Madrid sigue su marcha. La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, citó a Manuel Cobo, otro de los espiados, mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Cobo le comentó lo ya sabido, según fuentes del PP, esto es, que tiene la absoluta certeza de que le siguieron.

La investigación entra ahora en una fase clave. Cospedal también quiere escuchar al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, un veterano muy respetado en el partido, que en mayo de 2008 informó a Mariano Rajoy de que estaba siendo espiado. Sin embargo, lo más relevante es la intención de Cospedal de interrogar también a los jefes de los supuestos espías que han aparecido citados en las informaciones. La secretaria general tiene la orden de Rajoy de llegar hasta el fondo, "caiga quien caiga", en expresión del líder.

Entre los mandos citados estos días, y que sin duda tienen información para aportar a Cospedal, está Sergio Gamón, director de Seguridad cuando se hicieron los espionajes -"entra nuestro director, Sergio", se dice en un informe-. También Miguel Castaño, ex subdirector general y mano derecha de Gamón, aparece supuestamente citado en esos informes como "Miguel". Marcos Peña, responsable de un equipo de investigación a las órdenes de Francisco Granados, podría ser citado. Y Enrique Barón, el actual director general, que sustituyó a Gamón después del escándalo por el robo de un ordenador de Juan Carlos Fernández, el responsable de seguridad de Prada, al día siguiente de que el consejero fuera destituido.

Posible rechazo

Cospedal, según fuentes de la dirección, asume que algunos de estos cuadros podrían rechazar acudir a su despacho, porque no son miembros del PP, pero cree que no lo harán porque eso sería perjudicial para ellos a la hora de elaborar las conclusiones.

La investigación de Rajoy ha sentado muy mal en el Gobierno de Aguirre, que ha decidido no abrir ninguna. Francisco Granados, consejero de Interior, dejó en evidencia ese malestar al ser preguntado en Onda Cero si el PP madrileño había sido abandonado por la dirección nacional. "No diría que el PP se siente solo, pero en alguna ocasión sí hubiera preferido una declaración más contundente [de la dirección nacional]".

(www.elpais.com, - 27/01/09)

77. EMPLEADOS DE LA COMUNIDAD DENUNCIAN ACOSO POR NEGARSE A ESPIAR A POLÍTICOS

Los representantes de los trabajadores en la Comunidad de Madrid han denunciado que desde la Consejería de Interior se han encargado seguimientos a políticos que "rayan la ilegalidad" y que los trabajadores que se han negado a realizarlos han sufrido "acoso y hostigamiento".

El sindicato UGT, que asegura contar entre sus afiliados con 18 de los 40 miembros que conforman el núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior, ha enviado una explosiva carta -con fecha de 22 de enero y firmada por el secretario del sector de la Administración autonómica de Madrid, Francisco Javier Sanz-, al director general de la Función Pública del Gobierno regional, Miguel López González. "Como usted sabe, este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad".

El representante de UGT se refiere en su carta, sin mencionarlo expresamente, a tareas de seguimiento a políticos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada efectuado por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid que en sus notas del espionaje mencionaban expresamente a sus dos jefes Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y Miguel Castaño, subdirector.

La misiva de UGT añade: "Como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (...), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la 'supuesta trama' que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo".

El sindicato, que representa junto a otras centrales a los trabajadores de la Comunidad de Madrid, exige al director general de la Función Pública que "se actúe hasta las últimas consecuencias contra aquellos trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de la supuesta trama a la que hacen mención determinados medios, extralimitándose en las funciones que tienen asignadas".

La carta toma como base las informaciones de este diario: "Durante los últimos días hemos estado asistiendo a diversas informaciones en los medios que imputan actividades supuestamente ilegales cometidas por personal de seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos actos hasta el día de han sido, insisto según los medios de comunicación, imputados al personal de confianza (asesores de seguridad, o lo que es lo mismo funcionarios de empleo)".

Hasta ahí el colectivo de trabajadores mantenía silencio, pero cuando Granados insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma. Porque ellos sabían que las actividades sospechosas o secretas que ha destapado este diario no tienen como foco el personal clásico al servicio de la Consejería de Interior, sino a "los paracaidistas" que han puesto pie en ella en calidad de "asesores" fichados por el consejero de Interior, Francisco Granados, u otros altos cargos del Gobierno, como el ex director general Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.

De ahí la ira del colectivo de trabajadores de la Seguridad de la Comunidad de Madrid al constatar que por "por algún medio de comunicación se ha trasladado que podrían estar o haber participado en la supuesta trama técnicos especialistas en seguridad propios de la Comunidad de Madrid y, en concreto, encuadrados en la Consejería de Interior".

El colectivo tradicional de seguridad se declara ajeno a las labores que realizan los asesores de Granados. Por el contrario, según la nota de UGT, "se siente perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno regional, especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".

(www.elpais.com, - 27/01/09)

78. "MADRID NO TIENE ESPÍAS".

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, hizo todo lo posible en Bilbao por evitar cualquier comentario sobre el espionaje político. La Comunidad "no tiene espías", se limitó a afirmar ante la insistencia de los periodistas tras haber presentado en un acto a Antonio Basagoiti, candidato del PP a lehendakari. Basagoiti (con Aguirre en la foto) mostró su confianza en su compañera de partido y resumió su respuesta a varias preguntas al respecto diciendo: "No estoy por ayudar a nuestros rivales".

79. UN EX ALTO CARGO DE PRADA RECHAZA TENER UN 'DOSSIER' SOBRE GRANADOS

El ex responsable de Seguridad de la Ciudad de la Justicia Juan Carlos Fernández afirmó en un comunicado que nunca ha tenido ningún informe sobre el patrimonio de Francisco Granados, sucesor de Alfredo Prada en la Consejería de Justicia. "Es rotundamente falso que yo haya jamás elaborado ningún dossier sobre el consejero de Presidencia de Madrid, Francisco Granados, ni de otra persona pública o privada", señala el comunicado.

Fernández añade que "jamás" ha recibido "el encargo de nadie para elaborar ningún informe o dossier" sobre "ninguna persona pública o privada". Sí admite que le fue robado su ordenador en el Campus de la Justicia: "Desapareció de mi puesto de trabajo y estos hechos fueron en su momento denunciados por mí ante la fiscalía". Los días previos al robo del ordenador -que, según fuentes del Ejecutivo regional, contenía un informe sobre el patrimonio de Granados y su esposa- Fernández fue seguido por ex policías que trabajan para la Comunidad de Madrid.

El ex alto cargo se mostró "absolutamente indignado por haber sido víctima de intolerables seguimientos ilegales que han sido desvelados por un medio de comunicación", en alusión a *EL PAÍS*.

(www.elpais.com, - 27/01/09)

80. GRANADOS NIEGA QUE EXISTA UN SERVICIO SECRETO EN SU CONSEJERÍA

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, insistió, a través de una carta remitida a *EL PAÍS*, en que "es falso que el Gobierno de la Comunidad ordenara seguir, vigilar e investigar al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo". En la misma carta, recuerda que el ex policía Marcos Peña, al que Granados contrató en junio pasado, "no formaba parte del personal de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior" en las fechas en que se realizaron los seguimientos. Granados asegura que "es falso" que en su consejería "exista un departamento, se dedique personal o cualquiera otra infraestructura que tenga como finalidad el seguimiento, investigación o vigilancia que suponga la quiebra de derechos constitucionales de ciudadanos o empresas".

Granados comparecerá en la Asamblea de Madrid el próximo viernes para dar explicaciones sobre el caso de espionaje entre políticos en esta comunidad. La presencia de Granados, solicitada, entre otros, por él mismo, se aprobó en la Diputación Permanente de la Cámara.

(www.elpais.com, - 27/01/09)

81. EL TESORERO DEL PP EXHIBIÓ UN DOSSIER CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

Poco tiempo después de las elecciones de marzo, Rajoy llamó a Aguirre y le explicó que tenía informaciones sospechosas de su 'número 2' - Aguirre envió a Granados a Génova y Rajoy le remitió al

despacho del aún tesorero, Alvaro Lapuerta, quien le mostró los documentos - El propio González le pidió explicaciones y Lapuerta sacó una placa y le dijo que como policía honorario recibía mucha información. El ex tesorero del Partido Popular Alvaro Lapuerta ha manejado dossiers que afectan a altos cargos de la Comunidad de Madrid.

En el mes de marzo de 2008, tras las elecciones generales, Lapuerta -entonces todavía tesorero del PP- comentó al presidente del partido, Mariano Rajoy, que tenía en su poder datos teóricamente comprometedores que afectaban a dos altos cargos de la Comunidad de Madrid: Ignacio González y Francisco Granados, vicepresidente y consejero de Interior del Gobierno madrileño, respectivamente. Rajoy transmitió la información a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quien, a su vez, comunicó el mensaje a sus dos consejeros. El primero en acudir a Génova para tratar de aclarar el asunto fue Granados, quien, tras una breve reunión con Rajoy, despachó con Lapuerta. Posteriormente, fue Ignacio González quien se presentó en la sede central del partido con el fin de recibir de primera mano los detalles de la supuesta información comprometedor para él.

Alvaro Lapuerta, según diversas fuentes, sacó del cajón de la mesa de su despacho una carpeta en la que había anotaciones con cifras muy concretas sobre el patrimonio de ambos. En particular, sobre el número dos de la Comunidad de Madrid.

El tesorero del Partido Popular le espetó a González que no veía justificación a su patrimonio personal y le mostró datos sobre la compra de su casa, sobre sus créditos e, incluso, sobre el coste de su mobiliario. Además, criticó algunas de las adjudicaciones de la Comunidad, al margen de otros comentarios de índole personal.

Cuando González negó la veracidad de la información, le recriminó su actitud inquisitorial y le preguntó sobre el origen de los documentos que exhibió en su presencia, Lapuerta se limitó a decirle que él había trabajado en Interior, que era policía honorario -llegó a mostrarle una placa del Cuerpo Nacional de Policía- y le aseguró que tenía muchos contactos en la Policía y en la Guardia Civil.

González transmitió a Rajoy la insólita conversación con Lapuerta (de la que también tuvo conocimiento el entonces todavía secretario general del partido, Angel Acebes), pero el presidente popular le restó importancia: "Ya sabes, Lapuerta es un hombre muy mayor.No te preocupes". De hecho, el asunto no tuvo mayor trascendencia y el PP no abrió ningún tipo de investigación interna sobre las supuestas irregularidades de los consejeros de Esperanza Aguirre. Hay que tener en cuenta que en esas fechas ya se comenzaba a especular sobre la posibilidad de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se presentase como candidata a la Presidencia del PP en el congreso que se celebró en el mes de junio.

Mariano Rajoy no utilizó en ningún momento esa información en su beneficio. Sin embargo, un par de meses después de las citadas comparecencias en la sede del partido (es decir, en torno al mes de mayo de 2008), Lapuerta, según declaró y ha confirmado el PP, denunció ante Rajoy que estaba siendo sometido a vigilancia. De la misma sospecha fueron informados su segundo y ahora tesorero, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente y consejero de Justicia de Madrid, Alfredo Prada.

El propio Lapuerta señaló ante sus interlocutores a elementos de la Comunidad de Madrid como responsables de los supuestos seguimientos de los que estaba siendo objeto. Según fuentes del PP, Lapuerta en ningún momento comentó previamente con Rajoy su conversación con *El País*, en la que daba cuenta de que había sido objeto de seguimientos.

(www.elmundo.es, - 27/01/09)

82. BARÓN Y PEÑA RECHAZAN DECLARAR ANTE DE COSPEDAL

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, continuó la investigación interna abierta por su partido para determinar presuntas responsabilidades en el supuesto caso del espionaje. En primer lugar, pasó por su despacho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, como uno de los presuntos espías, al igual que la semana pasada lo hicieron Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González y Alfredo Prada.

Sin embargo, la número dos del PP recibió también las primeras calabazas. Llamó al director general de Seguridad, Enrique Barón, y al técnico de la Dirección General Marcos Peña, pero ninguno de los dos quiso acercarse hasta la calle de Génova. Fuentes próximas al primero explicaron que había decidido no acudir a la sede del partido porque él no es militante del PP y no tiene por qué responder ante nadie,

salvo ante los jueces o sus superiores. Un argumento similar debió utilizar Marcos Peña, que tampoco quiso ser interrogado por De Cospedal.

Por su parte, la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid decidió que el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, comparecerá -a petición propia- ante la Comisión homónima. El consejero tendrá oportunidad de dar explicaciones. Granados ya ha avanzado que dará todos los detalles que obren en su poder sobre el asunto y que explicará que lo publicado por el diario *El País* es “una gran mentira”.

(www.elmundo.es, - 27/01/09)

83. EL JEFE DE LA UNIDAD PARAPOLICIAL DE GALLARDÓN CONTROLA A TODOS LOS EDILES

El grupo de Unidad de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid, una unidad parapolicial al servicio del alcalde de la capital, está integrada por 21 agentes y está dirigida por Juan Carlos Durán, un antiguo sargento de la Guardia Real. Este grupo funciona al margen de la estructura de la Policía Municipal y escapa del control del inspector jefe del Cuerpo, Emilio Monteagudo, según denunció la Unión de Policía Municipal, el sindicato mayoritario en esta institución de la capital de España.

Como ya publicó este periódico, en teoría este grupo se encarga de la seguridad del alcalde y en ocasiones también escoltan a los seis concejales delegados del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, nadie sabe a qué se dedican estos agentes cuando no acompañan al alcalde como grupo de avance. Sus actividades no se recogen en ningún parte.

Juan Carlos Durán, el responsable de este grupo parapolicial, es un hombre de absoluta confianza de Alberto Ruiz-Gallardón y de Pedro Calvo. Durán es muy temido dentro del Cuerpo de Policía Municipal. Y no sólo manda en la Unidad de Seguridad Operativa, sino que también maneja a su antojo el Grupo de Escoltas y Contravigilancias (GEP), al que está negando continuamente las libranzas. Es decir, que controla todos los movimientos de los concejales y tiene acceso diario al registro en el que los policías municipales informan de su turno de escolta y protección.

Durán tiene a su disposición 21 agentes. Además, cuenta con un sargento que responde a las iniciales de J. E., y con el cabo J. L. S. R. El agente L.R.M. actúa como unión entre los responsables y el resto de agentes. El sargento tiene un plus de 1.800 euros al mes, mientras que el cabo y el coordinador reciben un sobresueldo de 400 euros.

Estos agentes del grupo de Durán tienen privilegios especiales y cobran más que otros policías. En cambio, no gozan del mismo estatus los agentes del Grupo de Escoltas y de Contravigilancia a los que Durán les impide librar desde hace varias semanas.

Según el sindicato UPM, Durán usurpa funciones básicas del GEP con el beneplácito de la oficial de la Unidad de Vigilancia y Protección y del resto de mandos del Cuerpo. Fuentes sindicales han denunciado que Durán ha llegado a amenazar a los agentes uniformados y que es famoso por su arrogancia.

En el día de , Durán se reunió con el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y con varios de sus agentes. En uno de los encuentros se amenazó a quien contara algo de las actividades a la prensa. Durán ocupó el cargo de jefe de Seguridad cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid y fue una de las personas que llegó al Ayuntamiento cuando éste ganó las elecciones y se convirtió en alcalde de la capital.

(www.elmundo.es, - 27/01/09)

84. PRADA NIEGA QUE TUVIERA DOSSIERES SOBRE NADIE

El ex consejero de Justicia de Madrid y director del PP en el exterior, Alfredo Prada, manifestó que el ordenador de la Consejería de Justicia que fue requisado cuando él fue destituido de su puesto en la Comunidad no contenía “la mas mínima información referida a ninguna persona” ni “a ningún miembro del Gobierno regional”, en contra de lo que publicó *El País*.

En declaraciones a Efe, Prada se ha mostrado “convencido” de que en ese ordenador, que fue requisado a Juan Carlos Fernández, no habría más que “correos, archivos o documentos, pero desde luego ninguno referido a ningún miembro del Gobierno”. El propio Fernández también desmintió la noticia. En un comunicado, afirmó que nunca ha obrado en su poder ningún dossier sobre nadie.

(www.elmundo.es, - 27/01/09)

85. AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reclamado "transparencia" para que se aclare la supuesta **trama de espionaje en la Comunidad de Madrid**, de la que se siente "una víctima" porque "políticamente van a por mí". Aguirre, que ha presidido un homenaje a las víctimas del Holocausto nazi en la Asamblea de Madrid, ha reclamado insistentemente "transparencia" y que la Justicia investigue la supuesta trama de espionaje pues, ha insistido, "yo soy la principal interesada" en que todo esto se aclare".

La presidenta ha recordado que el Juzgado de Instrucción ha decidido **abrir diligencias sobre este caso**, a raíz de una denuncia presentada por la Comunidad de Madrid, lo que, ha dicho, "quiere decir que ha visto **indicios de delito en el espionaje**" al vicepresidente de su Gobierno, Ignacio González.

Se ha mostrado convencida de que "todo esto se aclarará y saldrán a la luz los **responsables de este asunto** y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto".

"Mi interés es transparencia y aclarar absolutamente todas las imputaciones falsas que se nos han hecho a los miembros del Gobierno de Madrid y los indicios de delito que se nos han puesto de manifiesto en estos días" ha señalado Aguirre que desea que "singularmente" se averigüe la responsabilidad del espionaje a Ignacio González.

(www.publico.es, - 27/01/09)

86. LA TRAMA DE ESPIONAJE PONE A PRUEBA A RAJOY

Los dirigentes del PP están preocupados por la marcha de su partido. El conflicto de Caja Madrid y la supuesta trama de espionaje, que afecta a varios de sus compañeros, ponen de nuevo a prueba el liderazgo de Rajoy.

Son muchos los que consideran que la situación que se está viviendo es el resultado de una mala gestión. Y no dudan en culpar, en ese sentido, a Mariano Rajoy. Hay quien cree que tenía que haber dado hace mucho tiempo un puñetazo sobre la mesa para poner fin a las **peleas** entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

"Es un **lío eterno** y él nunca ha sido capaz de parar este enredo que daña la imagen del partido", afirma un diputado. Otro considera que "se le ha ido de las manos" y que tendría que "ejercer de presidente". Es verdad que en más de una ocasión **les ha dado un toque** de atención pero ha resultado inútil. Y se ha demostrado que esta herida lleva un año sin cerrarse. Nadie olvida que el 15 de enero de 2008, Rajoy comunicaba a ambos líderes que no irían en las listas para las generales. El regidor había mostrado gran interés por estar en el Congreso y Aguirre estaba dispuesta a renunciar a la Comunidad para convertirse en diputada. Ella lanzó su órdago y ganó el primer round.

El segundo se disputó antes del Congreso Nacional. Hasta el último minuto se barajó la posibilidad de que Aguirre presentara una candidatura alternativa. Todos lo pensaron tras escucharla en una encendida defensa de las ideas liberales.

Rajoy llegó sólo a la cita y finalmente salió respaldado con algo más del 70 por 100 de la militancia. Incluyó a Gallardón en su equipo. Y buena parte de los que le habían cuestionado se refugiaron bajo el techo del PP de Madrid.

Las peleas entre Aguirre y Gallardón han continuado. Para algunas personas del partido conservador, Rajoy se tenía que haber plantado y no haber esperado a que le estallara un escándalo "tan bochornoso como éste". Creen que Caja Madrid era un aviso de lo que se avecinaba y que no quiso verlo. Prefirió mantenerse neutral y callado. Mientras Aguirre trataba de hacerse con el control de la entidad financiera, Gallardón se aliaba con su presidente, Miguel Blesa. El silencio de Rajoy se rompió hace unos días. Su consejo: recomendar que fuera el **Banco de España quien tutelara la caja** para que está se despolitizara por completo.

Cuando saltó la polémica del espionaje, Rajoy dijo que creía a Aguirre. Pero un día después lanzaba un rotundo comunicado que desataba definitivamente la guerra entre ellos. "Más vale tarde que nunca", piensa un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

No obstante, hay en el partido quien cree que pese a que pueda parecer que su líder ha actuado con un poco de retraso, lo ha hecho "con la prudencia que le caracteriza". En este sentido, una diputada nacional recuerda que Rajoy "lidera el primer partido de la oposición y mide mucho que sus actuaciones puedan ir en contra del PP".

Ahora en este juego a tres bandas, Rajoy debe demostrar su capacidad de liderazgo. Para muchos se juega su prestigio. Y también su fuerza porque ésta ha sido la primera vez que se enfrenta de verdad a Aguirre. Por eso, a los marianistas les recorre un temor: que si la presidenta de la Comunidad de Madrid sale ilesa vaya a por él sin miramientos.

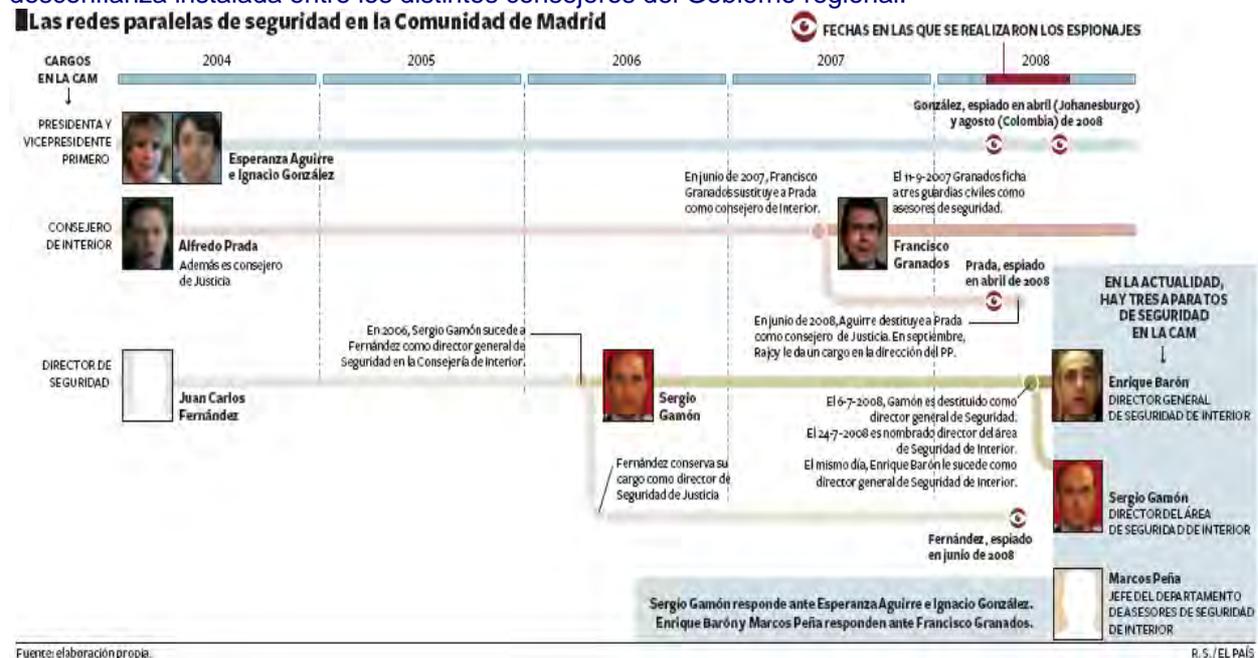
A este contexto se le suma además otro elemento. El líder del PP ha tenido que soportar esta semana cómo altos cargos Ruiz-Gallardón, Fraga o Mayor Oreja recordaban que había que seguir contando con el ex presidente Aznar.

(www.publico.es, - 27/01/09)

87. LA CONSEJERÍA DE INTERIOR POSEE TRES APARATOS PARALELOS DE VIGILANCIA QUE RECELAN ENTRE SÍ

El departamento de Seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tiene tres cabezas. Un director general, Enrique Barón (ex jefe superior de Policía de Madrid); un director del área de Seguridad, Sergio Gamón (ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre y ex director general de Seguridad), y un asesor de Seguridad, Marcos Peña (ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero pasado).

Pese a este organigrama, no hay ninguna dependencia jerárquica entre Barón, Gamón y Peña. Los dos últimos no responden ante el que debería ser su jefe natural, Enrique Barón. Esta insólita estructura en un departamento cuestionado por prácticas de espionaje a políticos (existen partes de seguimiento entre marzo y mayo de 2008 al vicealcalde, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, en los cuales los agentes señalan su dependencia de la Dirección General de Seguridad) obedece a la desconfianza instalada entre los distintos consejeros del Gobierno regional.



El más antiguo de los tres jefes de la seguridad autonómica es Sergio Gamón, fichado el 12 de mayo de 2006 como director general. Gamón era un viejo conocido de Esperanza Aguirre, con quien había trabajado en su etapa de ministra y presidenta del Senado. Cuando llegó a la Consejería de Interior, su

titular, Alfredo Prada, tenía su propio hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, que descendió un escalón en la consejería y se puso a las órdenes de Gamón.

Con el paso del tiempo, la desconfianza se instaló entre ambos, hasta el punto de que un día después de que Aguirre destituyera de su puesto de consejero a Alfredo Prada (26 de junio de 2008), Gamón acudió con sus hombres al despacho de Fernández y, según ha denunciado éste a la Fiscalía, le requisaron documentos y se llevaron su ordenador personal.

Durante todo el mandato de Gamón (mayo de 2006 a julio de 2008), según indican los colaboradores de Prada (consejero de Interior hasta junio del año 2007) y de Granados (consejero de Interior), el director general no despachaba ni daba cuenta de sus actividades ante ellos, sino ante el vicepresidente regional, Ignacio González o ante el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, hombre de González.

Cuando Granados llegó a la consejería intentó montar su propio equipo, aunque no pudo echar a Gamón. Primero fichó a tres guardias civiles de Valdemoro como asesores de seguridad (septiembre de 2007) y nueve meses después contrató al ex policía Marcos Peña como jefe de estos tres.

Granados destituyó el 17 de julio de 2008 a Gamón cuando se hizo público el episodio del robo de documentos y de un ordenador en un despacho de la Consejería de Justicia. Había perdido la confianza en el principal jefe de Seguridad, pero no pudo deshacerse de él. Ese mismo día, cambió la estructura de su consejería para crear una dirección de Área de Seguridad. Una semana después nombró a Enrique Barón como sustituto de Gamón y, el mismo día de ese nombramiento creó otro cargo para poner a Gamón al frente de la dirección del área de Seguridad recién creada. Barón asegura que ni Gamón ni Peña dependen de él.

De los tres jefes, sólo uno de ellos, Sergio Gamón, estaba en la Consejería de Interior durante los meses en que, según ha quedado acreditado por distintos documentos, se hicieron seguimientos a políticos y, al menos, a un directivo de la Comunidad de Madrid al que se le acabaron requisando documentos y un ordenador personal cuando estaba ausente de su despacho.

La veracidad de los partes de seguimientos a políticos ha quedado acreditada por los datos secretos y exactos que contienen respecto a la actividad pública y privada a cualquier hora del día de las al menos dos víctimas del espionaje: Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia. También ha quedado probada por las anotaciones manuscritas que aparecen en los partes de seguimiento de matrículas de vehículos sin relación con la causa del espionaje político, que pasaban por determinados lugares y eran identificados por los espías. En los partes, los ex policías también hacían referencia al departamento de Interior de la Comunidad mediante distintas fórmulas refiriéndose a sus jefes inmediatos: Sergio Gamón, director General, y Miguel Castaño, su mano derecha y subdirector del departamento.

(www.elpais.com, 28/01/09)

88. LOS ESPÍAS AUTONÓMICOS INVESTIGARON UN COCHE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid -en sus partes reflejan su dependencia orgánica de la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior- siguieron los pasos de Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y enfrentado a la presidenta Esperanza Aguirre, en la batalla por el poder dentro del PP. En una de las salidas privadas de Prada a cenar con su mujer en la calle Comandante Zorita de Madrid, los espías investigaron todo lo que se movía alrededor del restaurante donde había entrado el consejero y apuntaron la matrícula de un coche que les resultó sospechoso o interesante para sus pesquisas.

Tras las oportunas averiguaciones -ilegales tratándose de trabajadores de la Comunidad que no tienen competencia para esa tarea- los espías apuntaron a mano quién era el propietario del vehículo: "Secretaría Estado". No se equivocaron, aunque el trabajo para averiguar de quién era el vehículo tuvo que resultar especialmente complejo: la matrícula, reservada y confidencial, correspondía a un vehículo policial de contravigilancia antiterrorista asignado a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Los espías dejaron un rastro de sus pesquisas al consultar a sus colaboradores externos para conocer, en bases de datos de la Seguridad del Estado, a quién correspondían determinados vehículos que los agentes de la Consejería de Interior querían identificar.

Los partes han dejado constancia de numerosas anotaciones que la investigación de los espías para identificar a determinadas personas no llegó a resolver. Las anotaciones prueban que los agentes al servicio de la Comunidad de Madrid no se limitaban a constatar datos del dirigente político al que espían, sino que hacían un seguimiento continuado, noche y día, del personaje objeto de su interés y radiografiaban el espectro de personas que podría tener relación con él. Una tarea que tenía un horario flexible sólo propio de asesores, según fuentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

(www.elpais.com, 28/01/09)

89. LA MALA IMAGEN POR EL ESCÁNDALO SUME AL PP EN EL DESCONCIERTO

Por fuera todos aparentan normalidad, como si la crisis de los espías no fuera con ellos. Pero por dentro, en el PP, tanto madrileño como nacional, comienza a extenderse el desconcierto. En privado, en las múltiples conversaciones mantenidas estos días, la idea más repetida se resume así: "Este asunto no puede acabar bien, porque, pase lo que pase, la marca PP se ha visto muy afectada y no será fácil rehacerse".

El PP tuvo un respiro el domingo, cuando Mariano Rajoy triunfó con un discurso novedoso que buscaba la emoción, al estilo de la política estadounidense. Pero volvieron las hostilidades. En Génova, la sede popular, se tomó como una agresión aguirrista la información de *El Mundo* en la que se explica que en la sede nacional del partido circulaban dossiers sobre Ignacio González y Francisco Granados, y que Rajoy llamó a Aguirre para contárselo. La propia presidenta confirmó esa llamada, aunque dijo que se produjo en 2006 y no en 2008 (en pleno proceso precongresual) como señalaba el diario. Fuentes de la dirección de Rajoy confirman que fue en 2006, por lo que el líder conocía del juego sucio dentro del partido hace casi tres años, aunque no llegó a ver ningún dossier.

El comentario general en los pasillos de Génova era, según varios dirigentes, la indignación por el hecho de que Aguirre y su entorno, a quien atribuyen el origen de la información, hayan utilizado la transparencia de Rajoy -puso en conocimiento de la presidenta la información que circulaba sobre su gente- para mezclarlo en la crisis del espionaje.

El PP ha acusado los ataques y la sensación que se transmitía desde el cuartel general era de desánimo porque en cualquier caso, acabe como acabe la crisis, la marca PP se habrá resentido precisamente cuando queda poco más de un mes para unas elecciones clave. De hecho, los estrategas electorales de Galicia y *El País Vasco*, los que de verdad se la juegan el 1 de marzo, están cada día más nerviosos porque la crisis no amaina, empeora.

Mientras, Aguirre utilizó la noticia para defenderse: "Me siento una víctima. Políticamente van a por mí. Yo soy la principal interesada en que esto se aclare", aseguró. Sin embargo, su Gobierno no ha abierto una investigación interna y ni siquiera tiene claro si apoyará la petición de comisión de investigación que registraron PSOE e IU.

Los dos grupos enfrentados del PP, aguirristas y marianistas, parecen ya irreconciliables, y el enfrentamiento empeora cada día. Los aguirristas están, a su vez, muy molestos con la investigación interna -información interna, corrigió Federico Trillo tras hacer un llamamiento a la "fortaleza interna en estos momentos tan difíciles"- que dirige Dolores de Cospedal, la secretaria general. David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, despreció esta iniciativa. En su opinión, "no ha lugar" y "carece de base".

Los aguirristas también están muy molestos por el hecho de que Rajoy confirmara la información de *EL PAÍS* según la cual el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, un hombre muy respetado en el partido, informó al líder en mayo de 2008 de que estaba siendo espionado por personas vinculadas al Gobierno de Aguirre. Otros dirigentes están preocupados por el hecho de que haya entrado en liza Lapuerta, que fue tesorero durante la etapa de Aznar y por tanto conoce todos los secretos de la financiación del partido. Eso, y la guerra sin cuartel entre Génova y la Puerta del Sol (sede de la Comunidad), hace temer a muchos dirigentes que las consecuencias para el partido son imprevisibles.

(www.elpais.com, 28/01/09)

90. AGUIRRE: "GALLARDÓN TENDRÁ QUE ACLARAR SI TIENE UNA UNIDAD PARAPOLICIAL"

Entrevistada esta mañana por Federico Jiménez Losantos en la cadena Cope, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,

"tendrá que aclarar", probablemente a instancias de la Asamblea, si el Ayuntamiento tiene una unidad parapolicial, como se ha publicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido esta mañana que en 2008, su número dos en el Gobierno de la región, Ignacio González, mantuvo una conversación con el líder del PP, Mariano Rajoy, en la que "se quejó de que se diera pábulo a dossiers sobre él". Aguirre, en entrevista en la cadena Cope, ha reiterado, como ya hiciera, que dos años antes, ya habló con Rajoy sobre los documentos que circulaban en la sede nacional y que hacían mención a González y el consejero de Presidencia, Francisco Granados.

Aguirre ha insistido en que su charla con el presidente del partido fue en 2006 y que el pasado año sólo asistió a la sede nacional de la calle Génova (Madrid) cuando fue informada junto al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón de que no iría en las listas electorales, y en otra ocasión a finales de año.

Aguirre ha manifestado, no obstante, que "los informes de [Álvaro] Lapuerta", **el que fuera tesorero del PP** en la época de José María Aznar, no eran "comprometedores". La presidenta madrileña ha explicado que en 2006, tanto González como Granados fueron a hablar con Lapuerta sobre los dossiers en su contra y se resolvió el asunto. Aguirre ha puntualizado también que entonces no se acudió a la fiscalía de Madrid, como sí se ha hecho ahora para denunciar la trama de espionaje contra su mano derecha, porque "no había indicios de nada incorrecto". **Un juez ha visto ahora** y tras poner en sus manos González la trama destapada por *EL PAÍS* indicios de delito por el posible uso de información reservada.

A preguntas de los oyentes, Aguirre ha vuelto a rechazar "frontalmente" que exista una trama de espionaje en la comunidad que preside y ha afirma con contundencia que el escándalo "favorece" al PSOE y al Gobierno. "Ya lo dijo Zapatero -ha añadido-: 'Vamos a ganar en Madrid como sea'. La jefa del Ejecutivo madrileño ha reconocido también que "al PP le debilita" la crisis abierta por el espionaje político en Madrid con dos citas electorales a la vista en Galicia y País Vasco.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por su parte ha asegurado que es un disparate afirmar que la dirección del partido vaya a por Aguirre y ha subrayado que el mayor daño político de la supuesta trama de espionaje se le está haciendo al PP. En declaraciones a Telemadrid recogidas, De Cospedal ha respondido así al ser preguntada por si, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmara que se sentía "una víctima" de las informaciones sobre una supuesta trama de espionaje, se puede pensar que "Génova va a por Esperanza Aguirre". "De ninguna manera, eso es un disparate", ha sentenciado la número dos del PP.

De Cospedal -a la que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ordenado una investigación interna sobre el supuesto espionaje- ha asegurado a continuación que "el mayor daño político", aparte del que se pueda hacer a las personas, "se le hace al Partido Popular". La secretaria general del PP ha eludido explicar cómo está desarrollando la investigación interna que le ha encargado Rajoy, pero ha recalado que tiene "la obligación" de defender "el buen nombre" de su partido. "Tenemos la obligación de defender la trayectoria intachable del PP. Haré todo lo que esté en mi mano para que sea así", ha señalado.

(www.elpais.com, 28/01/09)

91. LA DIRECCIÓN DE UGT SE DESDICE DE SUS PROPIAS DENUNCIAS SOBRE ACTOS QUE "RAYAN LA ILEGALIDAD"

La Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid pidió disculpas a la Consejería de Interior, desautorizó a los trabajadores a los que representa y aseguró que ni "acusa ni acusará" a este departamento de realizar misiones ilegales.

EL PAÍS informó que el sector de administración pública de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT remitió el 22 de enero un escrito a la dirección general de Función Pública de la Comunidad de Madrid (que se muestra en el documento adjunto) donde denunciaba que empleados públicos, personal fijo y funcionarios de carrera, habían sufrido "hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años por no prestarse a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender, con buen criterio, que eran una extralimitación de sus funciones y podrían rayar en la ilegalidad".



COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL
SECTOR DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
D. Miguel Ángel López González

Durante los últimos días hemos estado asistiendo a diversas (plemáticas en los medios de comunicación que imputan actividades supuestamente ilegales cometidas por personal de seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos actos hasta el día de hoy han sido: retiro según los medios de comunicación, impedidos al personal de confianza (asesores de seguridad, el lo que es lo mismo funcionarios de empleo).

En cualquier caso, desde el día de hoy, por algún medio de comunicación se ha trasladado que podían estar o haber participado en la supuesta trama Técnicos Especialistas en Seguridad propia de la Comunidad de Madrid y, en concreto encuadrados en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

Como Ud. sabe, este colectivo conformado por unas 40 personas, y que son Empleados Públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menoscabo durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están desempeñando los medios de comunicación en la actualidad, el entender estos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación de sus funciones y podían estar en la ilegalidad.

En consecuencia, y como en nuestra opinión es absolutamente intolerable que todo el colectivo de seguridad este o haya participado en los hechos mencionados anteriormente y de los que se hace así la granja, solicitamos de esa Dirección General que se abra una investigación sobre la imputación de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del Servicio de Seguridad de la Comunidad de Madrid han participado de la "supuesta trama" que se plantea, ya sean sólo personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirma y respaldada la honestidad y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo, así como que se actúe hasta las últimas consecuencias con aquellos trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de la supuesta trama a la que hacen mención determinados medios de comunicación extralimitándose en las funciones que tienen asignadas.

Respecto a los datos:



C/ Miguel Ángel, 17 - 28007 MADRID - Telf.: 91 189 10 82/83/84 - Fax: 91 189 10 11
E-mail: comisionejecutiva@ugt.org - www.fsp-ugt.org



Sección Sindical de Presidencia
Hacienda y Justicia

UGT solicita que se abra una investigación interna en la Dirección General de Seguridad e Interior

El Madrid, a 22 de enero de 2009.

La Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Madrid, a través de la Secretaría del Sector de Administración Autonómica, ha enviado una carta al Director General de Presidencia, Justicia, Miguel Ángel López González, solicitándole que abra una investigación para determinar la responsabilidad de los hechos en la Dirección General de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid que se plantean en el siguiente escrito que se plantea en estos días en los medios de comunicación:

UGT quiere que se haga una investigación y todo el personal que trabaja en la misma, de altos cargos, altos cargos, personas de confianza, asesores nombrados por el Gobierno, personal laboral, funcionarios de carrera y personal externo.

Ante la situación creada con las informaciones de los medios de comunicación, en los que se plantea confianza, es necesario hacer la siguiente afirmación:

- Por una parte, está el gobierno propio de la Comunidad de Madrid (Técnicos Especialistas en Seguridad y Servicios de Seguridad) en cuanto a los hechos que se plantean en el Convenio Colectivo y Acordo de Funcionarios con sus respectivos trabajos (atribución de su puesto en la Comunidad de Madrid a partir del año 1987, cuando se creó el Servicio).
- Por otra parte, existe un grupo de personas nombradas por el Consejo de Presidencia Justicia e Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex policía, ex guardia civil y personal de confianza, de los que se desconoce sus trabajos reales.

El colectivo de seguridad, en el que está todo el personal laboral fijo, el grupo C en funcionamiento, se siente perjudicado por la deriva en la gestión de la Seguridad operada por los actuales integrantes de estos dos grupos de confianza y asesores que ha hecho al Gobierno regional, especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual Director General. Ante esta situación, especialmente en materia de la Comunidad de Madrid. En el caso de Gamón se le dio la Dirección de Área de Seguridad dependiente del Consejo de Presidencia, Justicia e Interior y no es de Miguel Castaño, se ha creado un puesto como Asesor de Seguridad al servicio del Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno.

Ante la situación creada por las informaciones de los últimos días y tras la carta enviada desde la FSP de UGT Madrid, esta Sección Sindical es el día de hoy trasladando información al vicepresidente regional a través de la Sección Sindical de Presidencia, Justicia e Interior, así como de la Secretaría General Técnica, solicitando se realice de posible, el cobramiento de la carta dirigida al Director General de Función Pública para que abra una investigación sobre estos hechos.

Comisión Ejecutiva Regional Madrid - UGT - FSP de UGT Madrid
E-mail: comisionejecutiva@ugt.org - www.fsp-ugt.org

Las únicas tareas destapadas por los medios estos días, a las que aludían los autores de la nota en los dos párrafos con los que arrancaba el escrito, se referían al seguimiento de políticos del PP por parte de agentes de la Consejería de Interior. Un día después de esa nota, el 23 de enero, la misma Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT elaboró otro escrito donde acusaba a ex agentes de Policía y Guardia Civil y personal de confianza de la Consejería de Interior de hacer trabajos desconocidos. Y aseguraba que el colectivo de trabajadores se sentía "perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por el grupo de cargos de confianza y asesores del Gobierno regional".

E incluso llegaba a citar a los responsables de esta situación: "Especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".

Los sindicalistas de UGT, que pidieron disculpas "si los responsables de la consejería de interior se han podido sentir aludidos por la información aparecida", llegan a censurar abiertamente que Gamón y Castaño sigan "sorprendentemente" en nómina de la Comunidad de Madrid. "En el caso de Gamón, se le creó la dirección de área de Seguridad, dependiente del consejero de Presidencia, Justicia e Interior [Francisco Granados], y en el de Miguel Castaño, se ha creado un puesto como asesor de Seguridad, al servicio del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno [Ignacio González]. UGT asegura que trasladó "su inquietud" a Enrique Barón por lo que ocurría y exige en el escrito se haga una profunda investigación a todo el personal que trabaja en la consejería.

(www.elpais.com, 28/01/09)

92. EL ESPIONAJE ALCANZA AL 'NÚMERO DOS' DE GONZÁLEZ EN EL CANAL DE ISABEL II

Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II, también ha sido objeto de espionaje como otros muchos altos cargos del PP. La cadena SER adelantó el contenido de un dossier sobre el patrimonio privado de De Miguel, hombre de confianza del vicepresidente regional, Ignacio González, en la compañía pública que ahora quiere privatizar el Gobierno regional.

El propio González también ha sufrido en los últimos tiempos ataques a su honradez a través de informes patrimoniales, y sobre viajes públicos y privados al extranjero que ahora investiga la fiscalía y un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid.

El documento que prueba el espionaje al gerente del Canal de Isabel II consta de 32 páginas que se centran tanto en la supuesta fortuna del hombre de confianza de González como en detalles de su vida privada: entre ellos los domicilios que los presuntos espías creen que ha ocupado e incluso las propiedades que están a nombre de su esposa. Los autores del informe se identifican a sí mismos como miembros de un "centro de investigación". El dossier arranca en sus primeras páginas con un detallado recorrido por los supuestos actuales domicilios del gerente del Canal de Isabel II. Para probar sus informaciones, los redactores del informe acuden al Registro de la Propiedad aportando documentación para acreditar que De Miguel es el titular de las casas.

El dossier atribuye al hombre de confianza del vicepresidente del Gobierno la propiedad de dos pisos y un chalé de grandes dimensiones en la zona oeste de Madrid. De todas las propiedades aparecen numerosas fotografías y direcciones en el dossier.

Los supuestos espías también han buscado propiedades de Ildelfonso de Miguel fuera de Madrid y citan una zona de viñedos del sur de Burgos, en la denominación de origen Ribera del Duero, donde supuestamente el gerente del Canal de Isabel II y su esposa poseen casi 25 hectáreas de viñedo.

La compra de los terrenos, según el informe, se habría realizado en 2004. Los espías también habrían averiguado que una empresa de De Miguel contrata directamente con la Comunidad de Madrid, Administración en la que trabaja como gerente del Canal de Isabel II. La empresa de De Miguel, Secuencia Pixels, logró presuntamente un contrato de casi dos millones de euros con la Consejería de Justicia en 2007. Al frente de esta empresa aparece un hermano de su mujer.

Como ejemplo del espionaje, los autores del dossier escriben: "Acudimos a una zona residencial, conocida como Vía de las dos Castillas, accedemos al portal de la vivienda y nos entrevistamos con conserjes de fincas cercanas que nos dicen que hablemos con Eduardo, el conserje más antiguo de la zona, quien nos confirma que el señor De Miguel vivió allí".

(www.elpais.com, 28/01/09)

93. EL EX TESORERO DEL PP CUESTIONÓ ADJUDICACIONES "SOSPECHOSAS" DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Álvaro Lapuerta, tesorero nacional del PP hasta junio pasado, avisó a Mariano Rajoy en mayo, en plena batalla interna por el poder ante el congreso que el partido iba a celebrar en junio, de que se sentía espiado por un aparato parapolicial a las órdenes, según sus sospechas, de algún alto cargo de la Comunidad de Madrid.

Lapuerta explicó a su entorno que los seguimientos estaban directamente relacionados con su posición muy crítica sobre algunas adjudicaciones de obras o contratos realizadas desde departamentos de la Comunidad de Madrid vinculados al vicepresidente Ignacio González y otros altos cargos.

Por aquellas fechas, González había contactado con el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, que le redactó un borrador para crear un CNI legal en la Comunidad de Madrid y defenderse así de los dossiers que alguien preparaba contra altos cargos regionales. Entre las obras sobre las que Lapuerta puso su sospecha están algunas carreteras nuevas dependientes de la Comunidad y que suponen contratos multimillonarios.

La presidenta Esperanza Aguirre aseguró que en 2006, dos años antes del espionaje denunciado por Álvaro Lapuerta, conoció que el tesorero nacional del PP manejaba dossiers contra Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y contra el vicepresidente González. Aguirre asegura que cuando surgieron aquellas noticias, las sospechas sobre González y Granados se deshicieron al demostrarse que todo era "falso y calumnioso".

Los servicios de seguridad de la Consejería de Interior, con el entonces director general Sergio Gamón al frente, irrumpieron el 26 de junio en un despacho oficial de la Consejería de Justicia en busca de documentos comprometedores contra altos cargos regionales. Prada ha negado tajantemente que ninguno de sus subordinados hubiese realizado dossier alguno. Pero lo cierto es que Gamón requisó el ordenador porque temía su contenido, porque creía que afectaban a algún alto cargo o por razones personales. Prada fue destituido un día antes de registrarse el asalto a ese despacho, que era el de su director de seguridad, Juan Carlos Fernández.

(www.elpais.com, 28/01/09)

94. LOS INFORMES QUE ALIMENTAN LA GUERRA DEL PP

Esperanza Aguirre sostiene que en Madrid no hay espías. Pero lo cierto es que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha tenido sobre su mesa un mínimo de dos informes sobre patrimonio, relaciones y adjudicaciones sospechosas realizadas por el número dos de Aguirre, el vicepresidente de la Comunidad Ignacio González. De acuerdo con la versión oficial del PP, Rajoy ni siquiera leyó los dossiers y se los trasladó a la presidenta madrileña, quien no adoptó ninguna medida al entender que todo era legal.

Público ha tenido acceso a dos de los informes. El principal es un dossier de 69 páginas, que recoge una detallada información sobre González. Expertos en temas de seguridad consultados por este diario indicaron que "para su elaboración se pudo tardar meses", ya que la investigación abarca desde el núcleo familiar hasta las principales relaciones profesionales y de amistad establecidas por el vicepresidente. Aunque la copia del dossier que obra en poder de este diario no está fechada, un análisis de la múltiples referencias temporales que se realizan en el documento permite concluir que fue redactado a finales de 2006 o principios de 2007.

La conclusión básica del informe es que el vicepresidente madrileño lidera "un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtiene beneficios extra de la Comunidad o el Canal de Isabel II". En el documento manejado por la cúpula del PP se cifra el patrimonio de González y su esposa en 1,8 millones de euros. Además, se indica expresamente que tiene una "caja de caudales" y que en ocasiones "paga en negro". Igual que otras afirmaciones contenidas en el dossier están respaldadas documentalmente, no hay ninguna prueba que demuestre esos supuestos abonos irregulares. Las formas de pago de Ignacio González se convirtieron en noticia la semana pasada, cuando el propio vicepresidente madrileño aseguró que había pagado "en metálico" los 8.000 euros que costó un viaje a Suráfrica porque le "venía bien".

El viaje a Johannesburgo es, precisamente, la clave del segundo dossier. Se trata de un documento más modesto, que no llega a diez páginas, donde se relatan las relaciones de González con el empresario Enrique Sánchez González. Parte de este informe fue desvelado por *El País*, el pasado 20 de enero, y provocó una denuncia de la Comunidad de Madrid que ha llevado a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, al entender que hay indicios de delito. Los autores de este documento sostienen que el viaje a Suráfrica de González y su esposa fue abonado en realidad por el empresario, como supuesto pago por contratos públicos. El vicepresidente aseguró que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez. Público demostró la semana pasada que esa afirmación no era cierta, ya que el Canal de Isabel II que preside González otorgó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez.

En el dossier de 69 páginas, se repasan una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, realizadas por organismos controlados por el vicepresidente. En concreto, se habla de la concesión de un campo de golf en el centro de Madrid (en el barrio de Chamberí), del reparto de televisiones digitales en la comunidad autónoma, de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas y de la gestión del Palacio de Deportes. En el documento también se destaca la amistad personal y las relaciones entre González y el ex secretario de Estado Pedro Antonio Martín Marín. Diversas informaciones indican que Pedro Antonio Martín Marín fue otro de los pasajeros en la excursión a Suráfrica.

(www.publico.es, 28/01/09)

95. EL SILENCIO DE RAJOY DESATA LA INCERTIDUMBRE EN EL PP

Mariano Rajoy se convirtió el martes en el protagonista de la polémica pero prefirió esquivarla. No quiso hablar sobre la supuesta trama de espionaje que afecta a varios altos cargos de su partido. Y menos aún después de que *El Mundo* le acusara de conocer desde hace tiempo la existencia de un informe sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y otro sobre el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, porque se lo había comunicado personalmente el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta.

El líder del PP utilizó a sus colaboradores para dar su versión de los hechos. No podían desmentirlo porque era cierto que Rajoy sabía que Lapuerta tenía varios dossiers en su poder. Pero estos se afanaban en recalcar que él jamás los llegó a ver o a leer. Lo único que hizo fue ponerlo en conocimiento de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, para que decidiera ella si adoptaba o no alguna medida.

Mientras la noticia caía como una bomba sobre la sede nacional de los conservadores, Rajoy pasaba la jornada en su tierra, Galicia, de precampaña. No se escondía pero prefería tratar otros asuntos como la actuación de Zapatero en el programa 'Tengo una pregunta para usted'..., la crisis económica o el "espanto de comparecencia" de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. El silencio de Rajoy comienza a incomodar a sus filas, que más que "preocupadas" se sienten ya "alarmadas". A varios dirigentes les gustaría que su presidente saliera a dar explicaciones y calmara la incertidumbre que les rodea.

Desde que saltó el escándalo, Rajoy no ha dado la cara para comentar expresamente este tema ni una sola vez. Mientras la secretaria general, María Dolores de Cospedal, prosigue con sus reuniones y la investigación judicial continúa su curso, Rajoy dribla a la prensa y mantiene en vilo a sus compañeros.

Es cierto que el pasado jueves activó la investigación interna pero lo hizo a través de un comunicado. Es verdad que durante todo el fin de semana se le pudo ver en el I Foro de militantes del PP pero desde allí se limitó a enviar un críptico mensaje: "Yo garantizaré la unidad del partido, pase lo que pase". Además, el lunes no reunió al comité de dirección. Y el PP no dio su rueda de prensa habitual. A cambio, hubo una intervención de Rajoy en un acto con alcaldes. Así era imposible que se sometiera al interrogatorio de los medios de comunicación.

En el partido también están "bastante cabreados" porque todo lo que está ocurriendo "tapa nuestro trabajo". Se quejan de que nadie se haya detenido "sobre el espectacular discurso que hizo Rajoy" el domingo pasado, que nadie haya reparado en las ponencias de la convención o que el trabajo parlamentario pase desapercibido por el espionaje...

"Esto nos pasará factura. Ya es bastante difícil de reconducir", cuenta un parlamentario. Un compañero suyo tiene toda la impresión de que se "está rompiendo el partido en mil pedazos". Pero no quiere hablar de "refundación". La mayoría del partido piensa que después de esto van quedar "tocados" tanto Rajoy como Aguirre.

(www.publico.es, 28/01/09)

96. LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL ESCÁNDALO

Esperanza Aguirre

Presidenta de la Comunidad. Sus dos principales colaboradores –Ignacio González y Francisco Granados– están implicados en el caso. Ella los ha respaldado y se presenta como víctima de una conspiración para acabar con su carrera política. Su entorno afirma que detrás de esa maniobra están sus principales adversarios internos: Rajoy y Ruiz-Gallardón.

Ignacio González

Vicepresidente autonómico y persona de la máxima confianza de Aguirre. Alguien ordenó investigar su patrimonio, sus relaciones y las adjudicaciones de los organismos bajo sus órdenes. También fue espiado en dos viajes a Colombia y Suráfrica. Rajoy fue informado sobre la existencia de los 'dossiers', pero no hizo nada. Tras publicarse que había sido espiado, la Comunidad presentó una denuncia ante los tribunales. El Juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha abierto diligencias.

Francisco Granados

Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 'El País' lo acusó de montar un servicio secreto de espionaje con ex guardias civiles y ex policías. Él lo ha negado con vehemencia. Aguirre dice que la dirección del PP también manejó un 'dossier' sobre Granados.

Álvaro Lapuerta

Ex tesorero del PP y persona que ha mantenido durante años una estrecha relación con Rajoy. Recibió los informes comprometedores sobre González y Granados e informó sobre ello al presidente del partido.

(www.publico.es, 28/01/09)

Índice		Páginas
	Conclusiones	1
1.0.	Datos personales	11
2.0.	Su mujer: Lourdes Caveró	11
2.1.	La DPA de ENDESA	12
2.2.	Negocios particulares de la mujer de Nacho González	14
2.3.	Su socia: Carmen Cafranga	17
2.4.	Su socio: José Antonio Jiménez Barrado	20
2.5.	Los padres	21
2.6.	Los hermanos y cuñados	23
2.6.1.	Isabel Gemma González González	23
2.6.2.	Manuel Jesús González González	25
2.6.2.1.	Cámara de Cuentas	26
2.6.3.	Pablo Manuel González González	27
2.6.3.1.	José Antonio Clemente Martín	29
2.6.4.	Luis Miguel González González	32
2.6.5.	María Carmen Caveró Mestre	34
2.6.6.	Jorge Hernández Aliques	35
2.6.7.	Pilar Caveró Mestre	36
3.0.	El Canal de Isabel II	38
3.1.	Ignacio Zebala Trueba. El cuñado de Ignacio González	38
3.1.1.	CH2M Hill y Prointec: el escándalo del ex director General de Urbanismo de la CCAA de Madrid	40
3.2.	Idelfonso de Miguel Rodríguez	42
3.2.1.	A través de Secuencia Pixals De Miguel obtiene concursos de la CCAA de Madrid	43
3.2.2.	El reparto de la TV digital	45
4.0.	Las Ventas	50
4.1.	Taurovent Madrid S.A.	50
4.2.	Delitos de Prevaricación	51
4.3.	Otras Demandas	53
4.4.	Fidel San Román	54
4.4.1.	Fidel San Román: Caso Malaya	54
4.4.2.	Fidel San Román: caso Ciempozuelos y pisos de protección público	54
4.4.3.	Fidel San Román: Las Rozas y Otras	56
4.5.	Pedro Antonio Martín Marín	58
5.	Economía Familiar	62
5.1.	Su segunda vivienda	62
5.2.	Su primera vivienda	63
5.3.	Bancos	68
5.4.	Otros	68
5.5.	Bulsa	69

97. AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA

O todos o ninguno. Esperanza Aguirre no piensa quedarse sola en la supuesta red de espías que acecha su casa, la Comunidad de Madrid. Si se investiga, que también se mire debajo de las alfombras de Génova, la sede nacional del PP. La presidenta regional tenía ya preparado el mensaje al líder de los conservadores cuando llegó a las 12.30 de a la Asamblea de Madrid, antes de inaugurar la conmemoración del Día del Holocausto. La esperaba un muro de periodistas: "En 2006, me llamó el presidente de mi partido, Mariano Rajoy, para decirme que el tesorero [Álvaro Lapuerta] tenía unos dossieres de Ignacio González y Francisco Granados. Inmediatamente, yo pedí a los señores González y Granados que hablaran con el tesorero y que aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad. Se demostró que todo ello era falso y calumnioso".

Aguirre parecía desafiar a Rajoy, que ordenó la semana pasada a la secretaria general, Dolores de Cospedal, instruir una investigación interna. Primero, daba por bueno lo publicado por *El Mundo*: que el líder del PP había recibido, de manos de Lapuerta, un informe que contenía datos comprometedores contra González, vicepresidente de Madrid, y Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

Pero, en segundo término, la jefa del Ejecutivo regional aumentó el grado de la sospecha al situar esa llamada telefónica en 2006 y no en marzo de 2008, tras los comicios generales, como afirmaba el rotativo. Es decir, el aviso de Rajoy habría llegado dos años antes de que la guerra por el poder en el PP se recrudeciese.

Fuentes del Gobierno autonómico no negaron la intención de Aguirre de lanzar un mensaje a Rajoy. "Ha sido suficientemente explícita, no hace falta interpretarla", aseguró un portavoz a Público.

En paralelo, la presidenta buscó fortalecerse. Pidió una y otra vez "transparencia, transparencia, transparencia", porque es la "primera interesada en que todo esto se aclare". Eso es lo que ocurrirá, pronosticó: "Saldrá a la luz quiénes son los responsables y quiénes hemos sido falsamente acusados".

Aguirre dejó otra idea escrita en su minicomparencia ante la prensa. Que ella no es la culpable: "Me siento una víctima. Políticamente, van a por mí", lamentó. Tampoco habrá ceses: "Tengo toda la confianza puesta en todos los miembros de mi Gobierno y, por supuesto, en los miembros de la cúpula nacional de mi partido". Mejor no reventar aún demasiadas heridas.

(www.publico.es, 28/01/09)

98. ESPIONAJES PARA TODOS LOS GUSTOS EN EL PP

¿Cuántos 'dossiers' hay sobre Ignacio González?

Es imposible saberlo con exactitud. Pero sí se puede asegurar que, como mínimo, en la cúpula del Partido Popular circulan dos documentos con datos sobre el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. Uno es el que desvela 'Público', cuyo índice se reproduce junto a estas páginas, y el otro hace referencia a las relaciones entre el número dos de Aguirre y el empresario Enrique Sánchez González.

¿Existe alguna investigación sobre el consejero Granados?

'El Mundo' aseguraba el martes que en la dirección del PP también se había manejado un 'dossier' sobre el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Al igual que en el caso de González, contendría información sobre el patrimonio y las relaciones del consejero. Aunque de momento no ha aparecido públicamente ningún documento que demuestre la existencia de dicho dossier, Esperanza Aguirre aseguró que Granados sí había sido investigado.

¿Tienen relación estos informes con el seguimiento a Cobo o Prada?

Los expertos consultados por este diario establecen una distinción clara entre los 'dossiers' sobre Ignacio González, que parecen realizados por "profesionales" y que se podrían catalogar con propiedad como espionaje, y los seguimientos realizados a otros políticos del PP, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el responsable de Exterior en la Ejecutiva del PP, Alfredo Prada. En estos dos últimos casos no consta investigación patrimonial alguna y tampoco se habla de sus relaciones personales o profesionales. Se trataría de "seguimientos propios de una vigilancia o contravigilancia", que, eso sí, permitía conocer la agenda personal de Cobo y Prada. Una información que puede llegar a ser altamente sensible. Al tratarse de "trabajos" tan distintos, los expertos consideran que lo lógico es pensar que fueron realizados por equipos diferentes.

¿Se sabe algo sobre los autores de los distintos documentos?

Habría que diferenciar entre las personas que encargan las investigaciones y aquellas que las llevan a cabo. Aunque no hay ningún dato cierto sobre los primeros, en el propio PP se da por supuesto que unos dirigentes del partido han decidido espiar a otros con los que están enfrentados. No es un secreto para nadie en el PP la rivalidad nada amistosa entre Ignacio González y Francisco Granados, o entre los principales dirigentes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. En cuanto a las personas que realizaron las investigaciones, Manuel Cobo y Alfredo Prada apuntaron a la Consejería de Interior como lugar donde podrían trabajar los autores de sus seguimientos.

(www.publico.es, 28/01/09)

99. AGUIRRE REVELA QUE RAJOY SUPO DE LOS DOSIERES HACE TRES AÑOS

El caso del espionaje interno en el PP no deja de generar nuevos episodios día tras día. fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la que sorprendió a todo el mundo al revelar que tanto ella como Mariano Rajoy supieron hace tres años de la existencia de dossieres contra sus consejeros Ignacio González y Francisco Granados.

Concretamente, Aguirre explicó que fue el propio presidente del PP quien la llamó en el 2006 para comunicarle que "el tesorero tenía unos dosieres" sobre González y Granados. La presidenta asegura que pidió a sus consejeros que hablaran con el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Tras esta conversación --y siempre según la versión que , por vez primera, ofreció Aguirre--, "se demostró que todo ello era falso y calumnioso".

La presidenta desautorizó de este modo las versiones periodísticas que apuntan a que Lapuerta no informó a Rajoy de estos dosieres hasta el pasado año. Aguirre, por lo demás, se presentó como la principal "víctima" de una operación política en la que dice percibir el aroma de la vendetta. "Políticamente van a por mí", proclamó la presidenta. Su versión, de acuerdo con la cual prácticamente todo es mentira --excepto el seguimiento que sufrió el vicepresidente González--, la desplegó también el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Para David Pérez, la investigación interna abierta por el PP no tiene sentido porque, a su juicio, quienes han culpado de espionaje a la Comunidad se han echado atrás.

Pese a ello, las pesquisas ordenadas por Rajoy siguen su curso. No así la investigación parlamentaria que promueven IU y el PSOE de Madrid, convencido de que el PP usará su mayoría absoluta en la Asamblea para abortarla. Los socialistas se han personado como acusación popular en el procedimiento judicial abierto sobre los supuestos espionajes.

(www.elmundo.es, 28/01/09)

100. EL TESORERO DEL PP PRESIONÓ PARA LOGRAR CONTRATOS DE LA COMUNIDAD

El actual tesorero y miembro de la Ejecutiva nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, hizo gestiones ante la Comunidad de Madrid en favor de la empresa de seguridad Serygur para que fuera adjudicataria de concursos públicos. Así lo han confirmado a *EL MUNDO* tanto en el Ejecutivo regional como en Serygur.

El hecho se remonta a diciembre de 2007, cuando Bárcenas pidió al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, que adjudicara a Serygur la seguridad de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital, un contrato valorado en 700.000 euros. Serygur fue finalmente la ganadora.

La actuación de Bárcenas pudo ser fácilmente interpretada en el Ejecutivo regional como una presión, puesto que era de facto el máximo responsable de finanzas de su propio partido político.

Bárcenas aún no había reemplazado en el cargo de tesorero a Alvaro Lapuerta, el octogenario responsable entonces de la gestión económica del PP, pero era su mano derecha. "El presidente del PP no tiene la más remota idea", afirmó un portavoz del partido preguntado por la gestión de Bárcenas.

Al conocer su intervención en favor de Serygur, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, telefoneó a Bárcenas para que aclarara cuál era su interés en la sociedad. Este negó al lugarteniente de Aguirre que tuviera acciones de Serygur o algún interés económico. Justificó su gestión por su relación personal con los gestores de la empresa, que son el ex concejal de Madrid Ignacio del Río y, sobre todo, el ex director de Innovación Tecnológica del PP Alvaro de la Cruz.

"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar al consejero Prada. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", explicó a este diario Alvaro de la Cruz.

De la Cruz es consejero delegado de Serygur y mantiene una larga relación de amistad con Bárcenas, puesto que ambos trabajaron juntos en la pasada década en la sede del PP en Génova. De la Cruz fue jefe de gabinete del entonces secretario general popular, Francisco Alvarez Cascos. Subraya que el contrato obtenido fue finalmente de 400.000 euros porque había una parte del servicio que no podía suministrar Serygur.

La empresa se jugaba más en otro contrato, el de la seguridad de la sede de la Presidencia madrileña, en el emblemático edificio de la Puerta del Sol. Serygur era la responsable de la vigilancia desde el año 2000, cuando la ocupaba Alberto Ruiz-Gallardón, pero podía perder la renovación en la pasada primavera y la necesitaba. Su facturación, que había superado los cinco millones de euros con la Comunidad, había decrecido en los últimos tiempos. El propietario de Serygur es, según el Registro Mercantil, José Luis Cuadros. "Nosotros no somos accionistas. En el verano de 2007 la empresa nos

pidió que nos hiciéramos cargo de la gestión y firmamos un contrato mercantil”, asegura De la Cruz. Este y Del Río son socios en Ciudad 21, que es la firma contratada por Serygur.

Llegó febrero de 2007 y el problema de Serygur, que cuenta con 400 empleados, era que había una decena de empresas, las más importantes del sector, que también pretendían encargarse de la importante vigilancia del edificio de la Puerta del Sol.

En la Comunidad aseguran que Bárcenas también se interesó por este caso concreto, pero De la Cruz lo niega. Del Río se reunió con González para sondear las posibilidades de continuar con el contrato, pero éste se remitió a su hombre de confianza Borja Sarasola. Este aseguró a De la Cruz y Del Río que sería un concurso abierto a todos los candidatos, incluido Serygur, pese a que sugirió que algunos de sus vigilantes habían incurrido en hurtos.

Las presiones de distintas empresas se sucedieron y, en coincidencia con este proceso, la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, recibió un anónimo. En él se le advertía de las relaciones entre la empresa que el sector considerada favorita, Segurisa, y el ex secretario de Estado de Comunicación y suegro de Sarasola, Pedro Antonio Martín Marín.

Segurisa está dirigida por Enrique Sánchez que, según el diario *El País*, es el empresario amigo de Ignacio González que viajó con él a Sudáfrica en marzo de 2007 junto a Martín Marín. No obstante, Segurisa, que se había adjudicado en 2006 la seguridad del Canal de Isabel II, no ganó el concurso de la Puerta del Sol. Tras el anónimo recibido, el Ejecutivo regional y Segurisa convinieron en que no era adecuado que concurriera a este concurso.

De la Cruz niega cualquier relación de su empresa con anónimos, espionajes o dossiers, y asegura que mantiene una relación normal con los dirigentes regionales. La adjudicataria final del contrato de la Puerta del Sol fue finalmente Segur Ibérica por decisión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2008. Logró el contrato para la vigilancia de Sol, las dependencias del Boletín Oficial regional y el Museo de la Plaza de Toros por 2,6 millones de euros.

“Bárcenas reaccionó con malestar al no resultar ganadora Serygur, pero no era la mejor oferta”, aseguran fuentes de la Comunidad. Segur Ibérica está participada por distintos fondos extranjeros de capital riesgo y cuenta, como secretaria del consejo, con Marta Gil de Biedma, prima de Aguirre. “Gil de Biedma no ocupa ningún puesto ejecutivo en Segur Ibérica ni es accionista de esta sociedad”, explican en el Gobierno, que niega irregularidades.

(www.elmundo.es, 28/01/09)

101. Blesa se rebela ante Aguirre, y niega actividades de espionaje

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se mantiene en rebelión y da un nuevo paso. Tiene previsto presentar mañana al Consejo de Administración de la entidad un proyecto de nuevos estatutos que no recoge la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid para la renovación, este año, de la cúpula de la entidad financiera. Es decir, que no limitan el poder del Ayuntamiento de Madrid ni el de Izquierda Unida ni complican la continuidad del propio Blesa.

El argumento del presidente de Caja Madrid, apoyado por sus servicios jurídicos y Uría Menéndez, entre otros bufetes, es que la nueva ley no se puede aplicar al proceso electoral porque fue iniciado en octubre, antes de que entrara en vigor.

Sin embargo, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, sostiene que la ley incluye una disposición transitoria que la hace aplicable a los procesos electorales “que no hayan concluido” a la entrada en vigor de la misma, el pasado día 1. Las elecciones se completan en septiembre. Blesa intentará formar una mayoría en favor de sus estatutos y muy probablemente la consiga, porque los consejeros afines a Alberto Ruiz-Gallardón, Izquierda Unida y Comisiones Obreras suscriben su visión de que no cabe retroactividad.

Fuentes de la Comunidad relativizaron este hecho, puesto que la autoridad al respecto corresponde al Ejecutivo regional, ya que tiene el deber de tutela para que Caja Madrid aplique la normativa vigente. Beteta es competente para incluir o eliminar lo que considere oportuno en los estatutos para ajustarlos a la ley. No obstante, la posición de Blesa complica el golpe de autoridad que ha impulsado Esperanza Aguirre con su Ley de Cajas, al tener ésta abierto el frente político de los espionajes y de los dossiers.

Juan José Güemes, consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP de Madrid, relacionó el pasado domingo el escándalo de los espionajes con Caja Madrid, lo que rechaza Blesa. El presidente de la entidad negó en la Comisión Ejecutiva de la caja del pasado lunes cualquier relación con los dossiers contra Aguirre o los espionajes al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Aseguró ante los miembros de este organismo que la caja nunca entraría en maniobras de este tipo y reivindicó la "decencia" de las actuaciones de la cuarta entidad financiera *dEl País*, según fuentes próximas.

(www.elmundo.es, 28/01/09)

102. AGUIRRE CONFIRMA QUE LAPUERTA MANEJÓ UN DOSSIER CONTRA GONZÁLEZ

La presidenta del Gobierno de Madrid, Esperanza Aguirre, confirmó que el tesorero nacional del PP Alvaro Lapuerta manejó dossiers que afectaban a los dos hombres fuertes de su Gobierno: su vicepresidente, Ignacio González, y el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados.

Aguirre explicó que Rajoy le llamó para decirle que el tesorero tenía dos dossiers con presuntas irregularidades de los dos miembros de su Ejecutivo. "Inmediatamente les pedí que hablaran con el tesorero y aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad".

Ambos fueron a la sede nacional del PP y se entrevistaron con Rajoy y con Lapuerta. Según Aguirre, "se demostró que todo ello era falso y calumnioso", con lo que el asunto se cerró. Incluso, como añadió Aguirre, "el presidente del partido no le dio demasiada importancia".

Los hechos ocurrieron en marzo de 2008, después de las elecciones; aunque Aguirre aseguró que fue en 2006. Distintas fuentes confirmaron a este diario que los hechos sucedieron el año pasado, dos meses antes del XIV Congreso Nacional del PP que se celebró en Valencia.

En aquellas fechas, González mantuvo otra reunión muy violenta con Rajoy. En la misma, el vicepresidente espetó a su jefe de filas que estaba "harto" de que se le estuviera investigando y de que "desde el partido" se estuvieran diciendo cosas que ponían en duda su honor y su honestidad.

Aguirre reclamó "transparencia" para que se aclare la supuesta trama de espionaje, de la que dijo ser "una víctima". "Políticamente, van a por mí, no les quepa ninguna duda", aseguró. Volvió a pedir que la Justicia investigue la supuesta trama y añadió que ella es "la principal interesada en que todo esto se aclare".

La presidenta se mostró convencida de que "todo esto se aclarará y saldrán a la luz los responsables de este asunto y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto". Aguirre reiteró que tiene toda su "confianza puesta en los miembros" de su Gobierno "y, por supuesto, también en los miembros de la cúpula nacional de mi partido".

(www.elmundo.es, 28/01/09)

103. PONS VUELVE A CULPAR AL GOBIERNO DEL ESPIONAJE: "CUANDO ALGO MALO LE OCURRE AL PP, EL PSOE ESTÁ DETRÁS"

El virus de "la culpa es del otro" continúa extendiéndose entre los principales partidos españoles. Si era la ministra de Fomento, *Magdalena Álvarez, quien culpaba a todos los demás del caos creado en Madrid* a raíz de la nevada del pasado 9 de enero, le toca al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

"Al PSOE le viene muy bien la presunta *trama de espionaje en la Comunidad de Madrid*", ha asegurado Pons, quien ha sentenciado que "cuando algo malo le ocurre al PP, el PSOE está detrás o anda cerca". González Pons ha recalcado que la presunta trama saltó a los medios en la semana en la que más le convenía al PSOE y al Gobierno. "Esa semana supimos que 1,2 millones de españoles habían perdido su trabajo. Si el año que viene volvemos a tener los mismos datos tendremos cinco millones de parados", ha matizado Pons.

El vicesecretario de Comunicación del PP, quien culpó al Ministerio del Interior de estar detrás de la trama, ha explicado que "no lo dije yo, lo dijo el SUP -Sindicato Unificado de Policía-. "Había informaciones que sólo era posible acceder desde el Ministerio del Interior", ha añadido González Pons. González Pons ha culpado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de estar infestado de ese virus de "la culpa es del otro". "Zapatero culpa a todo el mundo de las cosas que suceden, como

si él no tuviera ninguna responsabilidad", ha asegurado Pons en referencia al **programa de TVE Tengo una pregunta para usted**.

"Zapatero trata a los ciudadanos como si creyeran en los Reyes Magos. Empezó el programa diciendo yo no he mentado, me puedo equivocar, y luego mintió en directo. Me importa lo que sucedió porque el presidente mintió en directo... y quien puede hacerlo en una cosa pequeña en directo, lo puede hacer en diferido en una cosa grande", ha argumentado González Pons.

(www.publico.es, 28/01/09)

104. DE COSPEDAL: "DECIR QUE GÉNOVA VA A POR ESPERANZA AGUIRRE ES UN DISPARATE"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que es un disparate afirmar que la dirección del partido vaya a por Esperanza Aguirre y ha subrayado que el mayor daño político de **la supuesta trama de espionaje** se le está haciendo al PP.

En declaraciones a Telemadrid, De Cospedal ha respondido así al ser preguntada por si, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmara que **se sentía "una víctima"** de las informaciones sobre una supuesta trama de espionaje, se puede pensar que "Génova va a por Esperanza Aguirre". "De ninguna manera, eso es un disparate", ha sentenciado la 'número dos' del PP.

De Cospedal -a la que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ordenado una **investigación interna sobre el supuesto espionaje**- ha asegurado a continuación que "el mayor daño político", aparte del que se pueda hacer a las personas, "se le hace al Partido Popular".

La secretaria general del PP ha eludido explicar cómo está desarrollando la investigación interna que le ha encargado Rajoy, pero ha recalado que tiene "la obligación" de defender "el buen nombre" de su partido. "Tenemos la obligación de defender la trayectoria intachable del PP. Haré todo lo que esté en mi mano para que sea así", ha señalado.

Ha considerado "lógico" que su partido esté "absolutamente indignado" porque algunos de sus miembros puedan haber sido objeto de seguimientos.

Para la secretaria general, Rajoy "ha hecho lo que tenía que hacer" al abrir una investigación que llegará "hasta las últimas consecuencias", aunque ha recordado que su partido solo puede depurar las responsabilidades políticas.

(www.publico.es, 28/01/09)

105. ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

EL PAÍS destapa una trama de seguimientos a altos cargos del PP madrileños críticos con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por parte de ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior de Madrid. Éstos son sus principales personajes del escándalo.

Francisco Granados

Actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha ido escalando posiciones desde la alcaldía de Valdemoro a la secretaria general del PP de Madrid y al departamento de Presidencia del Gobierno regional para, más tarde, heredar el cargo que deja libre la salida de Prada, al que aspiraba también Ignacio González. Su departamento dirige a los ex agentes supuestamente dedicados al espionaje político en la región, aunque ha negado tajantemente la existencia de la trama.

Ignacio González

El número dos del Gobierno de Madrid fue objeto de seguimientos parapoliciales entre abril y mayo de 2008, en plena crisis del PP tras la derrota electoral. Fue espiado no sólo en Madrid sino también en un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) y está documentado con imágenes. Es vicepresidente primero y portavoz del Gobierno y aspiraba a la cartera de Prada al igual que Francisco Granados, con quien mantiene una tensa relación.

Manuel Cobo

Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, fue el segundo espiado del que dio cuenta *EL PAÍS*. Fue seguido en sus desplazamientos entre abril y mayo de 2008, unos meses en los que el equipo del

alcalde respalda a Rajoy para que continúe al frente del partido tras perder las elecciones. Cobo ha confirmado que los datos publicados por *EL PAÍS* "son exactos" y ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid.

Alfredo Prada

Sufre seguimientos entre abril y mayo de 2008, cuando era consejero de Justicia. En esos meses, apoya la continuidad de Rajoy al frente del partido frente a los que piden su cabeza, liderados por Aguirre. En junio de 2008, sólo un año después de haber formado gobierno, la presidenta regional lo remodela para relevar a Prada junto a otro fiel a Rajoy, Manuel Lamela. En el Congreso del PP de Valencia, tres días antes de la crisis en el Ejecutivo madrileño, Prada entró a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de Rajoy y Lamela fue elegido como miembro. También vigilan en las mismas fechas al director de seguridad de la Consejería de Justicia, Juan Carlos Fernández, que dependía de Prada.

Álvaro Lapuerta

El histórico dirigente del PP Álvaro Lapuerta, tesorero del partido, alertó a Rajoy en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. El propio Lapuerta estaba siendo vigilado, a su juicio por sus críticas a adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional, y sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Mª Carmen Rodríguez

Diputada autonómica del PP, su nombre y la matrícula de su coche figuran en uno de los partes del servicio de espionaje. El documento señala que el 27 de mayo come en el restaurante O Cruceiro, aunque ella lo niega. Este informe muestra que el aparato parapolicial marcó a personas que creían, con o sin motivo, que tenían relación con los espías.

Alberto Ruiz-Gallardón

En contra de la línea oficial del PP de Madrid, que habla de un "gran bulo" orquestado contra Aguirre, el alcalde de Madrid ha dado credibilidad a la trama desde el principio y ha acusado a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" ilícito, puesto que la Comunidad de Madrid "no tiene competencia en seguridad". Este posicionamiento enojó a Aguirre, que le llamó a capítulo.

Mariano Rajoy

Cuando estalló el escándalo, respaldó a Aguirre: "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento del asunto y yo les creo". Pero la negativa de la presidenta a investigar, sus intentos de negarlo todo y sus amenazas con los tribunales le han convencido de la necesidad de intervenir. Ordenó a María Dolores de Cospedal abrir una investigación para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades". De Cospedal es, a la sazón, discípula de Aguirre.

Esperanza Aguirre

"¿Y usted por qué hace caso a *EL PAÍS*?", dijo la presidenta regional al ser preguntada por el asunto por primera vez. No compareció hasta el cuarto día y lo hizo para negar tajantemente que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administración. Además de poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenazó con los tribunales a *EL PAÍS* y a cualquiera que crea que la trama se gesta en la Consejería de Interior.

Sergio Gamón

Ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre, fue director de Seguridad cuando se hicieron los espionajes (de mayo de 2006 a julio de 2008). "Entra nuestro director, Sergio", se dice en un informe. Su mano derecha es Miguel Castaño, ex subdirector general. Aparece supuestamente citado en esos informes como "Miguel".

Enrique Barón

Ex jefe superior de Policía de Madrid y actual director general de Seguridad de la Consejería de Interior. Sustituyó a Gamón después del escándalo por el robo de un ordenador de Juan Carlos Fernández, el responsable de seguridad de Prada, al día siguiente de que el consejero fuera destituido.

Marcos Peña

Responsable de un equipo de investigación a las órdenes de Francisco Granados. Es asesor de Seguridad, ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero de 2008.

(www.elpais.com, 28/01/09)

106. AGUIRRE INSTA A GALLARDÓN A QUE ACLARE SI TIENE UNA UNIDAD PARAPOLICIAL

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "tendrá que aclarar", probablemente a instancias de la Asamblea, si el Ayuntamiento tiene una unidad parapolicial, como se ha publicado.

En una entrevista en la Cadena COPE, Aguirre ha señalado que un periódico -'El Mundo'- ha publicado "que quien sí ha creado una unidad parapolicial al margen de la Policía Municipal es el Ayuntamiento de Madrid y ya le ha preguntado la oposición y tendrá que contestar".

Preguntada por si la Comunidad se va a encargar de saber qué es esa unidad y, si es ilegal, disolverla o pedir su disolución, ha contestado: "Me está dando usted una idea, yo creo que será la Asamblea de Madrid, como parlamento autonómico, la que haga las preguntas que corresponda. El alcalde tendrá que aclarar esa cuestión".

En medio de la guerra interna en el PP y las acusaciones de espionaje, la presidenta madrileña ha revelado que en 2008 "hubo una conversación" entre el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, en la que aquel "se quejaba de que se diera pábulo a algunos dossiers que se hacían contra él".

"La verdad -ha añadido- es que todas las redacciones [de medios de comunicación] tienen miles de dossiers contra Ignacio González porque políticamente quieren atacarme a mí".

Preguntada por si su vicepresidente fue en esa reunión a quejarse a Rajoy porque entendía que era el PP el que estaba creando o difundiendo esos dossiers, Aguirre dijo: "Eso tendrá que preguntárselo a Ignacio González, yo creo que sí".

En todo caso, Aguirre ha querido dejar claro que tanto Rajoy como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "han dicho que creían que yo no tenía ninguna relación con este asunto".

(www.lavanguardia.es, 28/01/09)

107. ESTALLA LA GUERRA DE DOSSIERS EN EL PP

Rajoy informó a Aguirre de que el tesorero del PP tenía datos del matrimonio de sus consejeros | La presidenta de Madrid opta por la táctica del victimismo: "Políticamente van a por mí" | Los dossiers que circularon en el PP datan del 2006, antes del actual pulso Aguirre-Rajoy: Génova tenía datos sensibles sobre González y Granados

Todo se enmaraña. Hasta el punto de que ya nadie sabe quién espiaba a quién en el PP, aunque la conclusión es que todos espiaban a todos. Lo único claro es que el PP vive una auténtica guerra de dossiers, y que no es nueva. La guerra por el poder en el PP, cuando Esperanza Aguirre pensó en disputarle a Mariano Rajoy la presidencia popular, tras la derrota electoral del 9 de marzo del 2008, no es el inicio de la batalla de dossiers, sino que parece remontarse al 2006.

Los señalados hasta ahora como supuestos instigadores de informes sobre los demás eran los responsables de la Comunidad de Madrid, a los que se implicaba en la supuesta trama de espionaje a altos cargos.

Pero la propia Esperanza Aguirre y un portavoz de Rajoy confirmaron, tras la publicación de nuevos datos sobre el caso de los espías, que en la calle Génova -sede central del PP- se manejaron en el 2006 dossiers que comprometían a dos pesos pesados del gobierno Aguirre: el vicepresidente, Ignacio González, y el consejero de Interior, Francisco Granados.

Un claro intento de "morir matando", opinan sectores próximos a Rajoy, que creen que la información ha sido filtrada por el entorno de la presidenta madrileña para frenar la determinación de Rajoy de cobrarse las cabezas de González y Granados por el caso de espionaje de Madrid.

Desde el otro bando, creen que se ha puesto al descubierto un intento de acabar con Esperanza Aguirre. "Van a por nosotros desde el principio". La expresión es de una persona cercana a Aguirre, y ella misma corroboraba esta sensación. "Me siento una víctima. Políticamente van a por mí".

El último episodio, publicado por 'El Mundo', es que Rajoy llamó a Aguirre el año pasado -en el 2006 según los protagonistas- para decirle que el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta -que ahora se siente espiado-, le había comentado que contaba con datos comprometedores sobre el patrimonio de González y Granados. Aguirre informó a los afectados, que se reunieron con el tesorero y aclararon los datos.

Según conocedores del caso, no se trataba de dossiers, sino un folio doblado con anotaciones. Cuando González preguntó al tesorero de dónde había sacado los datos, este sacó su placa de policía honorario e insinuó que tiene amigos. (Lapuerta tiene la placa porque fue secretario general del Ministerio del Interior). Consideran que todo quedó aclarado, pero se demostró que eran investigados.

Un nuevo capítulo de una guerra que primero pareció enfrentar a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, para luego subir un peldaño y enfrentar a Aguirre y Rajoy, y que se ha convertido en una auténtica batalla interna en el PP, a la que la mayoría de los dirigentes del PP asisten atónitos, al igual que los militantes.

Lo que todos reclamaban era que se haga algo y pronto. Lo decían en público Alberto Núñez Feijóo, que ve como el caso interfiere en su campaña electoral, o la presidenta del PP catalán, a la que también perjudica su trabajo por hacer un nuevo PP. Hay quien pide que caiga quien tenga que caer, pero que se haga algo pronto.

Rajoy, de viaje en Ourense, sigue sin pronunciarse sobre el caso, salvo el comunicado en el que anunció la apertura de la investigación interna. ningún comentario, aunque un portavoz del PP aseguró que Rajoy jamás ha tenido ningún dossier de nadie y se limitó a informar a Aguirre de lo que le transmitía el tesorero.

La presidenta no tuvo ningún problema en hablar sobre el asunto, que confirmó, aunque puntualizó que "se demostró que todo era falso y calumnioso". Incluso no descarta apoyar la comisión de investigación que han pedido PSOE e IU. Gaspar Llamazares ha presentado varias preguntas en el Congreso sobre este caso, dirigidas al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, para conocer la posible implicación de agentes o ex agentes, pero la Cámara le ha pedido que reformule las preguntas para admitirlas.

(www.lavanguardia.es, 28/01/09)

108. AGUIRRE SE ENCARA CON RAJOY POR DAR "PÁBULO" A LA TRAMA DEL ESPIONAJE

Esperanza Aguirre se defiende con uñas y dientes del ataque de que dice ser víctima. La presidenta niega tener espías a sueldo de la Comunidad de Madrid y no oculta su enojo con el líder del PP, Mariano Rajoy, por dar crédito a las denuncias sobre esta trama, hasta el extremo de abrir una investigación interna. Si hasta ahora eran colaboradores quienes expresaban tales quejas, fue la propia Aguirre la que censuró que el partido dé "pábulo" a los dossiers sobre su vicepresidente Ignacio González. "Todas las redacciones periodísticas tiene dossiers contra González, porque políticamente me quieren atacar a mí", enfatizó, en un reproche a Rajoy por ordenar pesquisas a golpe de titular de prensa.

El entorno de la líder del PP madrileño no cesa de preguntarse por qué las denuncias sobre presuntos seguimientos a políticos populares afines a Rajoy, como el vicealcalde Manuel Cobo o el dirigente Alfredo Prada, han llevado al partido a iniciar la investigación que dirige su secretaria general, Dolores de Cospedal. Máxime cuando el asunto ya está en manos del juez y la fiscalía. Para esta pregunta retórica solo hallan una respuesta: la sospecha, si no convicción, de que Rajoy da carta de naturaleza a esta trama de espionaje para dañar la imagen de Aguirre, cabeza visible del sector crítico.

Así, coincidieron en la investidura de Rodrigo Rato como doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, donde, estampándose un gélido beso, ilustraron la crudeza de su batalla. Y es que, según la versión que difundió la presidenta en los micrófonos que le brindó la COPE, no es la primera vez que Rajoy da crédito a las sospechas sobre el equipo de Aguirre. El precedente fue en el 2006, cuando el líder del PP la avisó de que había informes comprometedores para sus vicepresidentes, el propio González y Francisco Granados.

Todo aquello quedó en nada, pero tras las elecciones de marzo del 2008, en plena batalla por la sucesión al frente del PP, se reactivó la guerra de dossiers a cuenta de un supuesto enriquecimiento de González, quien reprochó en persona a Rajoy que diera "pábulo" a estos rumores. Aguirre suscribió estas quejas de su lugarteniente.

La intención de la presidenta madrileña al revelar ahora esta conversación privada es dejar claro que Rajoy sabe desde hace tiempo que hay informes rondando por los despachos, y que ha esperado a que los espionados fuera otros, y no González o Granados, para abrir una investigación interna. Desde el entorno de Rajoy se sostiene, con todo, que hasta hace unos días no había indicios de seguimientos a miembros del partido, y que por ello investigará "pase lo que pase". "El partido no mirará para otro lado", advirtió Javier Arenas, vicesecretario del PP.

Pero, por mucho que intente desviar el foco de atención mediática, Aguirre es consciente de que tendrá que dar explicaciones sobre las funciones que realizan los expolicías y exguardias civiles que trabajan en la Consejería de Interior. ¿Hacían seguimientos o no a políticos del PP o de otras siglas? Ella se remite a lo que mañana contará en la Asamblea de Madrid su consejero Granados. Eso sí, en plena ofensiva, Aguirre aprovechó también para ajustar cuentas con su otro gran rival: Alberto Ruiz-Gallardón. Avanzó que la Asamblea de Madrid --donde dispone de mayoría absoluta-- puede exigir al alcalde que aclare si, como denuncia un sindicato y la oposición municipal, ha montado una "unidad parapolicial" en el Ayuntamiento de Madrid. El delegado municipal de Seguridad, Pedro Calvo, aclaró que esa unidad se limita a coordinar a los escoltas.

(www.elperiodico.com, 29/01/09)

109. LOS SECTORES DEL PP EN PUGNA SE ATRINCHERAN MIENTRAS CUNDE LA DESAZÓN

No hay salida, y cuantos más días pasen, peor. Es la sensación generalizada en el PP, que mira a Mariano Rajoy en busca de un gesto de autoridad que les haga intuir que la guerra interna desatada con los casos de espionaje en la Comunidad de Madrid y el cruce de dossiers va a parar, pero no lo encuentran.

El pesimismo, al que es tan dado el PP, se ha vuelto a instalar en las filas populares, y la mayoría ya no confía en una solución pacífica al escándalo. Nadie confía ya tampoco en el resultado de la investigación que el presidente del PP encargó a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, para esclarecer los hechos, ir al fondo del asunto y adoptar las medidas disciplinarias oportunas.

La cada vez más complicada interrelación de tramas, cruces de dossiers y personas implicadas en el asunto ha llevado a la número dos del PP a un callejón sin salida. Este pensamiento extendido en el seno del PP se traduce en el convencimiento de que "ya no es posible un apaño", tiene que haber "muertos". Sin embargo, son muchos los que opinan que Rajoy está atado de manos para adoptar decisiones, después de las informaciones sobre la circulación de dossiers en la calle Génova, y las supuestas gestiones de los tesoreros del PP, el actual y el anterior, interesándose por determinadas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a determinadas empresas.

Si esto es así, el contraataque de los afectados inicialmente por el supuesto espionaje en la comunidad de Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, habría tenido éxito. Los dossiers, aún sin hablar explícitamente de corrupción, apuntan a prácticas no del todo correctas, que afectarían si no al PP, por lo menos a responsables de la dirección nacional, sus tesoreros, nombramientos de Mariano Rajoy. Así las cosas, si en los primeros días del escándalo, la semana pasada, cuando Mariano Rajoy hizo público un comunicado en el que anunciaba la apertura de una investigación, todo parecía que se iba a desarrollar de forma rápida y tendría consecuencias, ahora la recopilación de información sufre un impasse y nadie aventura cuándo y cómo puede terminar.

Y no es para menos. Las informaciones se siguen sucediendo, y afectan a todos los sectores. Por un lado, la cadena Ser hizo público un dossier sobre el supuesto patrimonio de la mano derecha de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en la empresa de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II. Por ese lado seguiría el acoso a Esperanza Aguirre y la Comunidad de Madrid, mientras continúan las informaciones sobre supuestas y entrelazadas redes de espías organizadas o amparadas por responsables del Gobierno autonómico.

Pero desde el otro lado la situación no es mejor. Desde que el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, denunció en el diario *El País*, que había sido espionado, supuestamente por esos grupos de la Comunidad, las denuncias sobre su manejo de dossiers, su gestión y la de su sucesor se incrementan.

Así, el diario *El Mundo*, desvelaba que Luis Bárcenas, actual tesorero y hasta la jubilación de Lapuerta su mano derecha, había hecho gestiones para que Serygur obtuviera la seguridad de la sede de la Comunidad, y de la Ciudad de la Justicia, la obra emblemática de Alfredo Prada, cuando era consejero de Justicia e Interior de Esperanza Aguirre, y representante del PP en el exterior, designado por Rajoy.

Ni las personas ni las acusaciones son gratuitas. Álvaro Lapuerta es un hombre de la vieja guardia del PP, antes Alianza Popular, del que el partido echa mano tras el escándalo que afectó a su tesorero, Rosendo Naseiro, para poner orden en las finanzas del PP. Un gallego, como Fraga y como Rajoy, en el que ambos confían, y que designa como sucesor a Luis Bárcenas, con la aquiescencia de Rajoy.

Dicho de otra forma, las acusaciones contra Lapuerta y Bárcenas van dirigidas a Mariano Rajoy, lo que estaría impidiendo que pudiera adoptar decisiones rápida y contundentes.

Y con este panorama, los dos sectores, atrincherados en sus posiciones y odios, lo único que hicieron fue responderse a través de los medios de comunicación. Todos menos Mariano Rajoy, que de nuevo se negó a responder a las preguntas de la prensa. Y de nuevo también, Rajoy y Esperanza Aguirre posaron y se besaron, como si no pasara nada y se llevaran de maravilla. El escenario, la investidura de un ex político del PP, Rodrigo Rato, como doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, que congregó a todo el PP, desde Manuel Fraga - que genio y figura le dio un tirón de orejas al partido: "Esto en mi época no pasaba"-hasta Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy... Todos menos Alberto Ruiz-Gallardón, ausente los últimos días, muchos creen que intencionadamente. María Dolores de Cospedal fue la encargada de responder a Esperanza Aguirre para decirle que es "un disparate" pensar "que alguien va a por ella" desde el partido".

(www.lavanguardia.es, 29/01/09)

110. EL FISCAL INVESTIGA EL APARATO DE SEGURIDAD AL MANDO DEL EX POLICÍA MARCOS PEÑA

Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha fijado su atención en uno de los tres equipos paralelos de Seguridad de la Consejería de Interior, el que dirige el ex policía Marcos Peña y en el que se encuadran tres ex guardias civiles, todos ellos contratados a dedo por el consejero Francisco Granados entre septiembre de 2007 y junio de 2008.

Moix ha realizado ya su primera petición de datos sobre el espionaje a políticos madrileños presuntamente efectuado por agentes de dicho departamento. En un escrito cursado el pasado viernes, requirió a Granados que informase sobre los datos que tuviese acerca de los seguimientos ilegales sufridos por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, publicados por este diario y que ambos políticos han denunciado ante la fiscalía.

Ese mismo día, Moix recibió de manos de este diario las pruebas documentales de dichos marcajes por parte presuntamente de agentes de la Consejería de Interior, que aludían en sus partes de seguimiento a dos cargos de la Dirección General de Seguridad de los que dependían: Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad, respectivamente.

El fiscal ha puesto su primer foco de investigación en las funciones que desempeñaba la unidad que dirige el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado en junio de 2008, y en la que trabajan los tres ex guardias civiles que contrató Granados en septiembre de 2007, sobre los cuales también ha solicitado datos (contratos, funciones y dependencia jerárquica).

Moix ha solicitado al Gobierno de Esperanza Aguirre un detallado perfil del ex inspector Marcos Peña, responsable de una unidad que presuntamente elaboraba informes sobre escándalos de corrupción en municipios socialistas y en Madrid para su consejero, Granados. Peña explicó a este diario que ése era su cometido y que incluso recababa información para su trabajo de servicios policiales dependientes del Ministerio del Interior.

El fiscal jefe del TSJM ha pedido a Granados que confirme si este ex agente pertenece a su departamento y, en caso afirmativo, cuáles son sus funciones, de quién depende jerárquicamente y qué dice su contrato. Antes de fichar por la Comunidad de Madrid, Peña era jefe de Seguridad en Iberdrola y, en sus ratos libres, suministraba informaciones delicadas a algún medio de comunicación. Peña colocó en mayo de 2006 a *El Mundo* un dossier sobre el presunto trato de favor de un asesor de La Moncloa a la empresa auditora de su padre. El dossier resultó falso y el medio de comunicación, que identificó a Marcos Peña como su fuente, fue condenado a pagar 18.000 euros al agredido.

Hace días, Peña sostuvo que hacía informes sobre escándalos de municipios socialistas como Ciempozuelos o Coslada, e incluso sobre el Ayuntamiento de Madrid, bajo gobierno del PP. Y explicó que sólo respondía ante el consejero Granados, pese a que su departamento tiene un director general:

antes era Sergio Gamón, que fue destituido un mes después de que Peña llegara a la Consejería de Interior -porque requisó documentación de un despacho de Justicia- y ahora lo es Enrique Barón, ex jefe superior de Policía de Madrid fichado para sustituir a Gamón. Barón proclama que no tiene ningún control sobre Peña y su grupo.

Cuando el ex inspector Marcos Peña llegó a la Consejería de Interior, en junio de 2008, ya se habían efectuado los seguimientos a políticos que se han conocido ahora. Entre abril y mayo de ese año, en plena batalla interna en el PP tras el fracaso electoral de marzo, dos dirigentes alineados con Mariano Rajoy -el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el consejero de Justicia, Alfredo Prada- fueron espiados en sus movimientos públicos y privados por agentes que, según sus propias notas, dependían de la Consejería de Interior. En aquellos meses, el jefe de seguridad de la Comunidad de Madrid era Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre, de quien había sido jefe de seguridad durante su etapa como presidenta del Senado.

La investigación abierta por el fiscal jefe de Madrid podría quedar interrumpida en los próximos días si el titular del Juzgado número 47 de la capital, José Sierra, incorpora a la causa que ha abierto por supuesto espionaje al vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, los hechos denunciados por Manuel Cobo y Alfredo Prada, también relacionados con seguimientos a políticos en la Comunidad de Madrid.

En ese momento, el fiscal debería inhibirse y pasar todo lo actuado al juez de Plaza de Castilla. El espionaje a González, del que existen pruebas documentales también aportadas por *EL PAÍS* a la fiscalía, no tiene autoría conocida, a diferencia de los de Cobo y Prada.

(www.elpais.com, 29/01/09)

111. ALGUNAS CLAVES DE LA VIGILANCIA A MANUEL COBO Y ALFREDO PRADA

La fiscalía investiga si el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia de la Comunidad Alfredo Prada fueron espiados por un aparato parapolicial -compuesto por ex policías y ex guardias civiles- a sueldo de la Comunidad de Madrid. De lo conocido hasta ahora se desprenden algunos aspectos clave de la investigación.

- **Objetivos.** Los dos objetivos de la investigación, "P" (Prada) y "C" (Cobo), son miembros del PP. Durante las fechas del seguimiento recogido en los partes de los agentes (de abril a mayo de 2008), ambos políticos tenían una cosa en común: se habían alineado con Mariano Rajoy y frente a Esperanza Aguirre en la batalla por el poder en el PP. Prada, sin embargo, no es un hombre de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón; todo lo contrario: Ruiz-Gallardón revocó el nombramiento de Prada como viceconsejero en su primer Gobierno regional, en 1995, tras leer algunas noticias sobre el pasado político de Prada.

- **Agendas.** Tanto Cobo como Prada comprobaron que los hechos reflejados en los partes de seguimiento de los supuestos espías correspondían fielmente a lo que hicieron aquellos días. En muchas ocasiones sus movimientos eran privados, imposibles de conocer ni siquiera por sus colaboradores próximos. Salvo que hubieran sido espiados.

- **Fotografías.** Había un afán de los espías por conocer a las personas que se acercaban o comían con Alfredo Prada, a quien acabó destituyendo Aguirre un mes después de que cesaran los seguimientos. En algunos de los partes se recoge cómo los agentes fotografiaron incluso a la persona que almorzaba con Prada.

- **Dependencia orgánica.** Los agentes deslizaron en sus escritos el nombre de sus jefes: aludieron a la llegada del coche de su "director Sergio" (presuntamente Sergio Gamón) o a que les llamaba a una reunión su subdirector "Miguel" (presuntamente Miguel Castaño).

(www.elpais.com, 29/01/09)

112. EL ENTORNO DE RAJOY ASUME QUE LOS AGUIRRISTAS BUSCAN LA CABEZA DEL LÍDER

Llamar a cualquier dirigente del PP estos días implica escuchar frases de parte de guerra. "Hoy han contraatacado". "Estamos tocados pero ellos también". "Esto es un aviso, el bombardeo puede ser mucho peor". Son algunos de los comentarios de dirigentes de uno y otro lado. Nadie es ajeno a una de las mayores crisis de la historia del partido, que empezó con un espionaje entre compañeros revelado

por *EL PAÍS* y ahora ya es un cruce inclemente de dossiers con las finanzas del partido, lo más delicado, en el medio de la pelea.

Tras la publicación en *El Mundo* de sendas acusaciones contra el actual tesorero, Luis Bárcenas, y el anterior, Álvaro Lapuerta, sobre supuestas presiones para obtener contratos de la Comunidad de Madrid, el entorno de Mariano Rajoy llega a una conclusión: para los marianistas, los aguirristas -algunos acusan directamente a Esperanza Aguirre, otros a su vicepresidente, Ignacio González- están detrás de esta información. Con el único objetivo, sostienen, de implicar a Rajoy en un escándalo que al principio afectaba a los dirigentes madrileños. "Buscan la cabeza de Mariano", insisten.

Los aguirristas están muy molestos por la falta de apoyo de Rajoy a la presidenta. "Ha sido la peor semana desde que gobernamos, y estamos muy solos", señalaba este fin de semana un aguirrista. Los fieles a la presidenta sostienen que es él quien abrió la guerra al ordenar una investigación interna que necesariamente pone en cuestión la gestión de Aguirre del escándalo. Génova dio mucha credibilidad a las informaciones de *EL PAÍS* mientras los aguirristas las desmentían con crudeza. La presidenta de Madrid llegó incluso a afirmar, sin señalar a nadie: "Van a por mí". , María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, respondió: "De ninguna manera. Eso es un disparate. El mayor daño es al partido".

En el entorno del líder la preocupación es creciente: la guerra de Rajoy con Aguirre puede acabar muy mal. Pero los marianistas están convencidos de que, como sucedió tras las elecciones generales, los barones, claves para la estabilidad del partido, siguen con Rajoy. "Aguirre está tan sola como hace un año. Fuera de Madrid no tiene apoyos, y la gente del partido está muy harta de la guerra madrileña", sentencia un marianista. "Esperanza quiere morir matando", dice otro.

Otros dirigentes más neutrales pero que apoyan a Rajoy creen que los críticos, liderados por Aguirre y apoyados por *El Mundo* y la cadena Cope, han aprovechado la crisis de los espías para adelantar la batalla contra Rajoy que preparaban para después de las elecciones gallegas, en caso de derrota, o las europeas. En cualquier caso, todos coinciden en que ya no hay marcha atrás y acabará mal. "Esto es como una película del Oeste, esas con peleas en los salones. La pelea empieza entre dos, pero acaba todos contra todos. Así estamos", resume un diputado.

Mientras, Génova ha establecido un bloqueo informativo a la espera de que escampe. Nadie habla del escándalo, no se informa sobre la investigación de Cospedal, y Rajoy lleva una semana evitando a los periodistas, o haciendo, como , declaraciones sin preguntas para poder salir en televisión hablando de la crisis pero no decir palabra sobre las gravísimas acusaciones que pesan sobre su partido. El viernes llegó al extremo de mandar a los servicios de prensa del PP a su casa para que le grabaran en el jardín una declaración sobre el paro y así evitar que alguien hiciera preguntas incómodas.

(www.elpais.com, 29/01/09)

113. FRAGA: "EN MIS TIEMPOS ESTAS COSAS NO PASABAN"

Manuel Fraga, el veterano fundador del PP, dejó claro su malestar por el escándalo de espionaje y dossiers en su partido. "Yo no sé absolutamente nada de este asunto, en mi tiempo no pasaban esas cosas [...] Y si alguien lo intentaba, yo le cascaba", dijo durante el acto de concesión del doctor honoris causa a Rodrigo Rato en la Universidad Rey Juan Carlos, que contó con la presencia de toda la cúpula del PP, incluidos Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre.

Rajoy evitó hablar del escándalo, pero no Aguirre, que estuvo por la mañana en la Cope. Allí insistió en que ella es la víctima de esta historia y aseguró que será Alberto Ruiz-Gallardón quien tenga que "aclarar" la existencia de "una unidad parapolicial" en el Ayuntamiento. Preguntada por si su vicepresidente, Ignacio González, se quejó ante Rajoy porque entendía que era el PP el que estaba creando o difundiendo dossiers contra él, Aguirre contestó: "Tendrá que preguntárselo a Ignacio González. Yo creo que sí".

(www.elpais.com, 29/01/09)

114. IGNACIO GONZÁLEZ SOLICITA AL JUEZ QUE INVESTIGUE LOS NUEVOS DOSSIER

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, solicitó este miércoles al juez que investigue todos los informes relativos a su persona con el fin de conocer quién está detrás de los mismos. La petición del número dos de la presidenta regional se producía el mismo día que **Público**

revelaba las claves de un nuevo dossier que, entre otros datos, ofrece detalles sobre su patrimonio personal. "Voy a pedirle al juez que investigue todas las informaciones que aparecen [en los medios] en los que cada día descubren que existe un papel nuevo", indicó el vicepresidente. Una vez más, González mantuvo que se sentía "indefenso" y "acosado" ante esta situación y que él es el principal interesado en saber quién está detrás de estos dossiers.

La mano derecha de Esperanza Aguirre dijo desconocer los informes que manejan los medios. No obstante, señaló que el objetivo de estos documentos es el de hacerle daño "en lo personal y en lo político" y "perjudicar al Gobierno regional".

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista a la cadena Cope, volvió a tildar de "absolutamente falso" que la Comunidad de Madrid haya creado una red de espionaje. También explicó que, además de en 2006, González se reunió con Rajoy el pasado año para quejarse de que "se diera pábulo a algunos dossiers que se hacían contra él".

La líder de los conservadores madrileños aprovechó los micrófonos de la emisora episcopal para cargar contra el alcalde madrileño. Aseguró que Alberto Ruiz-Gallardón tendrá que responder en la Asamblea a las informaciones que apuntan a que ha creado una unidad parapolicial al margen de la Policía Municipal. El entorno de Aguirre se muestra sorprendido por los nuevos dossiers sobre Ignacio González. "Qué contradicción. Se está hablando de una red de espionaje en la Comunidad de Madrid y resulta que los espionados somos nosotros", explica un aguirrista.

Las mismas fuentes siguen lamentándose de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no haya recibido el apoyo expreso de los cargos más representativos del partido. En la Comunidad de Madrid sigue escociendo que mientras Aguirre daba la cara por su equipo ante la prensa, la dirección nacional del PP emitiera un "rotundo comunicado" anunciando la apertura de una investigación interna.

El equipo de la presidenta cierra filas en torno a ella. Uno de sus consejeros mantiene que "ha hecho todo lo que tiene que hacer en una situación como esta".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, no tiene previsto pronunciarse sobre los últimos dossiers aparecidos hasta el viernes, cuando está prevista su comparecencia en la Asamblea de Madrid. No obstante, desde su entorno aseguran que no se aportarán grandes novedades. Todo apunta a que el también secretario general de los conservadores madrileños se limitará a recopilar la información que ha facilitado en sus últimas comparecencias.

(www.publico.es, 29/01/09)

115. GONZÁLEZ NO DESCARTA QUE EL ESPIONAJE HAYA PARTIDO DE GÉNOVA

El vicepresidente regional censura las declaraciones de Gallardón por "desproporcionadas e inapropiadas" y elude aclarar si el PP apoyará la comisión de investigación en la Asamblea. El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, no descarta que la trama de espionaje que afecta al Gobierno regional y al PP haya partido desde el entorno de la calle Génova. "Soy el primer interesado en aclararlo", ha insistido el número dos de la presidenta Esperanza Aguirre. "He sufrido un espionaje intolerable a mi intimidad personal, es un montaje mafioso, que supone un atentado al Estado de Derecho", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El vicepresidente regional ha subrayado que no puede obligar a ningún funcionario de la Comunidad a participar en una comisión interna de un partido, en referencia a la negativa de dos de los principales investigados en la trama de espionaje a comparecer ante la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

González ha censurado las declaraciones del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, en las que daba credibilidad a la trama y acusaba al consejero de Presidencia, Francisco Granados de tener "un cuerpo parapolicial". Para el vicepresidente regional, se trata de unas afirmaciones "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas". Gallardón realizó estas declaraciones en el programa 59 segundos de TVE tres días después de que saltara la trama, aunque posteriormente las matizó y ha asegurado que no va a hacer más valoraciones. "Cuando una investigación pasa a ser judicial, creo que no es el tiempo de los políticos, sino de los jueces", ha dicho el alcalde.

El vicepresidente de la Comunidad ha lanzado un dardo más a Gallardón al ser preguntado sobre si en el Ayuntamiento de Madrid hay una trama parapolicial que funcione al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal, tal y como ha publicado *El Mundo*. González, que niega la existencia de una red en su propio gobierno da sin embargo verisimilitud en el Consistorio: "Cuando menos es extraño que el primer Ayuntamiento de España, con 6.000 policías locales, necesite una estructura adicional al margen de la policial".

Preguntado por si el PP apoyará la iniciativa del PSOE e IU para que se cree una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, González ha señalado que "como afectado" está "muy interesado" en conocer los hechos, pero ha evitado comprometerse al apuntar que esa decisión corresponde a la Asamblea.

González ha pedido a la Justicia que aclare pronto el seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" acusaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".

(www.elpais.com, 29/01/09)

116. GONZÁLEZ: LAS ACUSACIONES DE GALLARDÓN SOBRE LA TRAMA FUERON "ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADAS E INAPROPIADAS"

El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas" las **declaraciones que hizo Alberto Ruiz-Gallardón** sobre la presunta existencia de una **red de espionaje** controlada por el Gobierno regional y se ha mostrado seguro de que las rectificará.

González ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, el primero que preside la Jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, desde que se desatara la polémica en torno a los espionajes de que, supuestamente, han sido objeto políticos y altos cargos del Gobierno madrileño.

En su comparecencia, el "número dos" de la Comunidad ha pedido en todo momento a la Justicia que aclare pronto el "inadmisible, intolerable y torticero" seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" imputaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".

Ha asegurado que desconoce que en el Ayuntamiento de Madrid exista una unidad "parapolicial" al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal y que "cuando menos" le parece "extraño que el primer Ayuntamiento de España", con 6.000 policías locales adscritos, necesite contar con una "estructura adicional" que opere al margen de la policial. En todo caso, ha opinado que el Consistorio debe explicar si existe alguna actuación "paralela" de este tipo ya que, ha insistido, le "extraña" que así sea.

El vicepresidente ha calificado de "atentado a la base del estado de Derecho" que hayan "hurgado" en su vida pública, privada e incluso, en la de sus familiares y amigos por el hecho de ser un cargo público y, cuando ha sido preguntado si echa en falta el apoyo de la cúpula nacional de su partido, ha aseverado: "yo lo único que quiero es el apoyo de la Justicia y lo quiero rápido".

Ha comentado que mantuvo una reunión "corta y agradable" con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, cuando ésta la llamó a declarar en la investigación interna abierta en el partido, de la que no ha querido hacer más comentarios pues considera que la cuestión corresponde a la dirección nacional.

Lo que sí ha dicho es que le parece "bien y razonable" que Cospedal esté llamando a algunos militantes del PP y a empleados de la Administración regional a declarar, pero ha añadido que no puede recomendarles u obligarles que lo hagan porque "no tengo autoridad directa sobre ellos" y porque se trata de una investigación del partido y no de la Comunidad.

González ha asegurado que colaborará para aclarar "en todos los extremos precisos" las imputaciones que se le han hecho en los últimos diez días y que lo mismo harán todos aquellos que hayan sido investigados para ayudar a esclarecer cualquier circunstancia relacionada con el ejercicio de sus cargos.

Entre ellos está el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que mañana comparecerá en la Asamblea de Madrid para aclarar su presunta implicación en la trama de espionaje madrileña y su gestión al frente del área donde, según el vicepresidente, "ha actuado con total transparencia". Por ello, González ha informado de que con "seguridad" la Consejería de Presidencia Justicia e Interior no va a ser reorganizada en estos momentos ni por este asunto.

También ha negado cualquier trato de favor por su parte en las **contrataciones de la Comunidad** y ha dicho que todas están sujetas a la legalidad, son revisadas "escrupulosamente" por las mesas de contratación y que "ningún miembro del Gobierno acepta ninguna presión o injerencia" en estas cuestiones.

(www.publico.es, 29/01/09)

117. EL PP BUSCA DAR CARPETAZO CUANTO ANTES AL CASO DE ESPIONAJE Y NO SEÑALARÁ CULPABLES

La factura política del escándalo de la trama de espionaje en el PP madrileño tiene novedades. La estrategia de la calle Génova pasa por dar carpetazo, lo antes posible, a la investigación interna. Fuentes de toda solvencia consultadas por la Cadena SER no dudan en decir que "sería un suicidio político" que Rajoy y su número dos, Dolores de Cospedal, señalaran públicamente responsabilidades políticas entre los dirigentes del partido en Madrid. Según fuentes populares señalar públicamente culpables perjudicaría a Esperanza Aguirre, pero también a Rajoy.

Algunos en el partido piensan que la investigación interna debería habersele encargado al comité de derechos y garantías y no a Dolores de Cospedal. Pero en lo que todos están de acuerdo es que se debe cerrar cuanto antes este debate.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha hablado esta mañana con los periodistas, aunque ha declinado hacerlo de la bronca interna en su partido. Gallardón y Esperanza Aguirre han tenido que coincidir en público en la Feria Internacional de Turismo y han felicitado a los periodistas por su masiva asistencia para cubrir el evento. El alcalde de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "no es tiempo de políticos, sino de jueces".

Por su parte, el número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, ha hablado en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno de la Comunidad que sí ha estado encabezado por la presidenta autonómica Esperanza Aguirre.

Insiste Ignacio González en que en una democracia nadie está obligado a probar que es inocente, porque se presupone. Aún así, asegura el vicepresidente que, como víctima que es, es de los más interesados en que esto se aclare cuanto antes, de tal manera que si finalmente la Asamblea de Madrid decide crear una Comisión de Investigación él se compromete a colaborar. Sobre la cuestión de fondo, el asunto de los dosieres, admite González que está preocupado, pero no por lo que digan esos informes, sino por la intromisión ilegítima al que le han sometido a él y a su familia.

Además, González repite que ya le gustaría saber quién está detrás de todo esto y, en cuanto a la falta de apoyo de la dirección nacional de su partido, opina que el apoyo que le interesa de verdad es el de la Justicia, sin entrar en detalles acerca de si alguien desde la sede de Génova pudiera haber contribuido a difundir los dosieres. De momento, sale al paso de las supuestas irregularidades cometidas diciendo que todos los contratos del Gobierno de Aguirre cumplen estrictamente la legalidad.

(www.cadenaser.com, 29/01/09)

118. AGUIRRE REPLICA A FRAGA QUE EN SUS TIEMPOS SÍ SE ESPIABA

La lideresa del PP, Esperanza Aguirre, ha querido refrescar la memoria al presidente fundador de su partido, Manuel Fraga, quien **aseguró que en sus tiempos "no pasaban estas cosas"** —en referencia a la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid— y, al que intentaba espiar, "les cascaba". "En el PP sólo se ha abierto una comisión de investigación y fue en sus tiempos", ha replicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, en referencia al **Caso Naseiro**.

En febrero de 1990, poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del PP, un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del partido tras haberse realizado escuchas telefónicas al concejal conservador de Valencia, Salvador Palop.

Aguirre y Fraga ya tuvieron un desencuentro público cuando el presidente fundador la mandó callar en pleno enfrentamiento de la lideresa con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón: "Está más guapa callada", afirmó entonces.

Aguirre ha constatado que la supuesta trama de espionaje en esta comunidad "favorece al PSOE" y le perjudica a ella "en lo político y al PP en su conjunto", ya que "nuestro electorado está absolutamente desconcertado". La lideresa del PP, al igual que hizo recientemente el consejero de Presidencia, **Francisco Granados**, ha echado en falta un apoyo más contundente de la cúpula del PP en este asunto.

Ha afirmado sin embargo que la investigación que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha abierto para recabar información y que ha encargado a la **secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal**, ha servido para "dar pábulo a que los periódicos digan que ya no confían" en ella, por lo que considera que ambos "tendrán que desmentirlo".

La presidenta ha insistido en la "falta de pruebas" para imputar cargos a los miembros de su Gobierno y ha vuelto a poner la mano por la inocencia de sus consejeros. También ha vuelto a pedir a la Justicia "transparencia" y que investigue "qué, por qué, a cuenta de quién y con qué intereses" se ha investigado a políticos y altos cargos madrileños.

Personalmente ha asegurado que no tiene "ni idea de quien está detrás" de estos seguimientos, pero sospecha que su intención es "sugerir que hemos utilizado nuestros cargos políticos para enriquecernos", lo que ha negado amparándose en las declaraciones de bienes que tanto ella, como su equipo, presentan al inicio y al final de su mandato.

La presidenta regional ha opinado que su partido tendría que estar "muy por delante" del PSOE en las encuestas de intención de voto y por ello opina que la alternativa del PP "no consigue calar suficientemente en los ciudadanos".

Aguirre ha afirmado que la crisis económica está teniendo efectos más graves en España que en el resto de Europa, especialmente en la destrucción de empleo y, por eso, ha dicho que "tal y como están las cosas" el PP tendría que estar mejor. Para ello, la presidenta cree que el PP necesita aumentar los apoyos en España y que sus miembros tienen que "hacer autocrítica, ser humildes y hacerlo mejor".
Daño al PP

La presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, ha reconocido que la supuesta trama de espionaje que implica al PP de Madrid "afecta a toda la clase política, desprestigia a los políticos y hace especialmente daño al PP".

En declaraciones a Rac1, Sánchez-Camacho ha coincidido con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que afirmó que con el supuesto espionaje "el mayor daño político se le hace al PP".

La presidenta del PPC ha señalado que espera que el PP salga de esta situación con "transparencia" y ha destacado que "lo más importante" es que el partido aclare todo lo sucedido y que se averigüe las responsabilidades y consecuencias que se puedan derivar de la investigación.

Asimismo Sánchez-Camacho ha deseado que esta situación "pase lo más pronto posible" y ha posicionado al PP como un partido "serio" y capaz de ser la alternativa al gobierno para combatir la crisis.

Por otra parte, la presidenta del PPC ha criticado al presidente de la Generalitat, José Montilla, por ser el "responsable" de la gestión del temporal que azotó el pasado 24 de enero a Catalunya y por "escudarse" en el conseller del Interior, Joan Saura.

(www.publico.es, 29/01/09)

119. AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE LA APOYE Y CIERRE LA INVESTIGACIÓN INTERNA

El nivel de tensión entre Génova, sede del PP, y la Puerta del Sol, sede del Gobierno de Madrid, crece cada día. El escándalo del espionaje ha profundizado la enorme división que dejó el congreso del partido el pasado junio entre estos dos sectores, marianistas y aguirristas. Sobre todo porque estos últimos no perdonan a la dirección nacional que haya abierto una investigación interna, dirigida por la secretaria general, Dolores de Cospedal, que todo el partido ha interpretado como una muestra de desconfianza hacia el equipo de Esperanza Aguirre.

La propia presidenta de la Comunidad dejó muy claro su malestar y presionó sin disimulo a Mariano Rajoy para que apoye su tesis -que todo es una gran mentira de *EL PAÍS* y que la Comunidad nada tiene que ver en ningún espionaje- y se olvide ya de la investigación interna.

Aguirre fue aún más tajante que de costumbre en Onda Cero. En su opinión, la investigación de Cospedal ha servido para "dar pábulo a que los periódicos digan" que Rajoy y la secretaria general "ya no confían" en la presidenta del PP de Madrid, por lo que considera que ambos "tendrán que desmentir" esa tesis que se ha instalado tanto en la prensa como en el partido.

La actuación de Rajoy ha descolocado a los aguirristas. El miércoles pasado, cuando *EL PAÍS* destapó el seguimiento a Manuel Cobo, mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el líder del PP dijo que había hablado con Aguirre, que ésta le había negado cualquier responsabilidad de su gente y que él la había creído. Pero al día siguiente, cuando *EL PAÍS* destapó que otros funcionarios de la Dirección General de Seguridad, dependiente de la Consejería de Interior, habían espiado a Alfredo Prada -ex consejero de Aguirre, amigo de Rajoy y ahora miembro de su equipo en Génova-, el líder cambió de tercio, promovió un comunicado durísimo que no apoyaba para nada a Aguirre y ordenó abrir una investigación interna.

La presidenta no se conformó con esa carga de profundidad contra el líder. Insistió en la idea de que este escándalo, y por tanto la investigación interna que lo acompaña, "favorece al PSOE" y la perjudica a ella "en lo político" y al PP "en su conjunto". "Nuestro electorado está absolutamente desconcertado", insistió. Puesta a repartir mandobles que cualquier buen entendedor, sobre todo Rajoy, podía interpretar muy fácilmente, Aguirre tocó el punto débil del líder: su partido, dijo, tendría que estar "muy por delante" del PSOE en las encuestas de intención de voto. La alternativa de Rajoy "no consigue calar suficientemente en los ciudadanos", dijo. "Tal y como están las cosas" el PP tendría que estar mejor, en su opinión. Como receta, sólo ofrece "hacer autocrítica, ser humildes y hacerlo mejor".

Aguirre también devolvió el golpe a Manuel Fraga, el fundador del PP, que el día anterior había dicho que en su época "estas cosas no pasaban". La presidenta recordó que en toda la historia del PP sólo se ha abierto una vez una comisión de investigación y que fue precisamente "en tiempos" de Fraga, cuando estalló el caso Naseiro, un escándalo de financiación ilegal.

Mientras Aguirre presiona para buscar una tregua con Rajoy que amaine las aguas del partido y deje que sean los jueces quienes investiguen, en Génova no ofrecen ninguna información sobre la investigación de Cospedal; pero fuentes del partido descartan que se vaya a cerrar en breve, entre otras cosas porque siguen apareciendo noticias en los periódicos sobre el escándalo. Rajoy tiene muy claro, aseguran, que una vez tomada la decisión de abrirla no se puede cerrar en falso, señalan estas fuentes de Génova.

Una de las claves de la investigación de Cospedal es el interrogatorio a los jefes de los supuestos espías. Algunos de ellos pueden negarse, porque no son del PP, pero otros, como Sergio Gamón, hombre clave que aparece en los informes de los seguimientos, sí es militante.

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad, dejó muy claro que él no piensa obligar a esos altos cargos de su Gobierno a colaborar con Cospedal. "Yo no soy su superior directo, pero en cualquier caso, aunque lo fuera, esas personas están en sus puestos por sus méritos, como miembros de la administración, y no por ser miembros del PP, con lo que no les puedo obligar a que acudan a la llamada de Cospedal. No me consta que les haya llamado, ni que se hayan negado a ir. En cualquier caso, me parece bien que les llamen, y que ellos decidan", sentenció.

De nuevo, González, como cada jueves, desgranó los acuerdos de gestión -un hospital, un trazado del metro, datos de turismo- y empezó a escuchar preguntas sin alterar la sonrisa. Todas se referían a la trama de espionaje en Madrid, a sus tormentosas relaciones con el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y al dossier que circula sobre el propio González. "Esto es una mafia infame, un montaje muy molesto, ilícito y que ataca al Estado de derecho. Quiero saber qué hay detrás de ello porque soy uno de los afectados", fue su respuesta a la mayoría de las cuestiones. "Yo soy el primero que quiere saber qué demonio ha pasado aquí", insistió. Cuando se le preguntó si descarta que el dossier sobre él se haya elaborado o pagado en Génova, la sede del PP, González esquivó la pregunta sin aclarar nada.

(www.elpais.com, 30/01/09)

120. EL PP VASCO ESTÁ "HASTA LAS NARICES" DEL ESPIONAJE

La frase que el candidato popular a lehendakari en los comicios del próximo 1 de marzo empleó en una entrevista con Radio Euskadi resume el disgusto de un partido que se está viendo indirectamente afectado por "otra guerra que no sientes como algo tuyo", según fuentes de la formación.

"Las elecciones autonómicas en Madrid son dentro de dos años y sería muy injusto que ahora pagásemos nosotros por ello en plena campaña electoral", indica un dirigente de la máxima confianza de Basagoiti. Una sensación que se acrecienta cuando los populares sienten que por vez primera en bastante tiempo el voto a sus listas puede tener un valor fundamental en la configuración del nuevo Parlamento de Vitoria y el futuro Gobierno.

Los dirigentes de la formación en Euskadi recuerdan que, frente a lo que sucede en Madrid, y con las excepciones en su momento de la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, el PP nunca ha ocupado posiciones de poder en Euskadi. A lo que se suma el coste social y personal que supone militar o apoyar visiblemente al PP en *El País Vasco*. "Ya bastante soportan aquí con escoltas", apunta otra fuente de la formación. "Puede hacernos daño porque no proyecta una buena imagen, pero nuestra actividad no tiene que verse salpicada", añade.

Rodar cabezas

Las dudas de los populares surgen más al pensar en la evolución que pueda tener la trama del espionaje político y la división en el partido a nivel nacional. "Igual deberían rodar una o dos cabezas", apunta otro dirigente muy cercano a Basagoiti.

El nuevo PP vasco que surgió del congreso del pasado mes de julio, tras la crisis que supuso la renuncia de María San Gil a la presidencia, se ha alineado en todo momento como una piña detrás de Mariano Rajoy. El propio Basagoiti, quien mantiene una muy buena relación personal con Esperanza Aguirre, insistía en que "todo el partido tiene que estar unido detrás de Rajoy, entre otras cosas, porque si no, no se van a resolver los problemas principales de España".

(www.elpais.com, 30/01/09)

121. EL ESCÁNDALO DE LA TRAMA DE ESPÍAS IMPIDE AL PP CAPITALIZAR LA CRISIS

El pesimismo por la crisis económica "impregna a todos los españoles", pero no es el Gobierno quien más acusa el descontento ciudadano, sino la oposición: el PP está peor valorado que hace seis meses; el Ejecutivo del PSOE, mejor (aunque suspenden ambos). Y la intención de voto directa deja a los populares casi ocho puntos por detrás de los socialistas (en las elecciones generales la diferencia en voto sobre censo no llegó a tres puntos). Son las conclusiones de un sondeo-flash de Metroscopia para *EL PAÍS* a partir de 800 entrevistas realizadas entre el 22 y el 27 de enero, en pleno escándalo por la presunta trama de espionaje en el Gobierno de Madrid, del PP.

La encuesta contiene sólo cuatro preguntas: tres sobre la crisis económica y una con datos sobre intención directa de voto (sin cocinar). Los populares están a 7,6 puntos del PSOE, mientras que hace apenas un año, "en las elecciones del pasado marzo, la distancia entre ambos partidos, en voto sobre censo, fue de 2,9 puntos". Los autores del sondeo subrayan, eso sí, que estas cifras reflejan "un estado de opinión en buena medida parcial y sin duda coyuntural". "En modo alguno cabe interpretarlas como predisposiciones reales de voto [...] pero sí indican que el 'ruido de la calle' es más propicio al partido del Gobierno que a la oposición".

El partido de Rosa Díez, UPyD, cuadruplica su apoyo (3,6%) y se sitúa al mismo nivel que IU, que sube ligeramente.

El panorama que arrojan las preguntas referidas a la situación económica es desolador: el 73% cree que la crisis "va a acabar siendo tan dura como se dice" (el 85% en el caso de votantes del PP). Sólo uno de cada cuatro encuestados es optimista y responde que "al final no será para tanto". Los autores del sondeo resumen el pensamiento de esa amplia mayoría: "La crisis va en serio: ni se trata de un hecho coyuntural ni se ha tocado fondo. Más bien al contrario: lo peor está por venir". Y subrayan que el pesimismo es mayor en quienes tienen entre 35 y 54 años, "probablemente por el impacto más directo que en estas edades tiene el paro".

"La amplia mayoría de españoles vislumbraba ya el pasado julio la trascendencia y dimensión" del problema, señala el informe. Porque, en otra encuesta realizada entonces, el 73% respondía que la crisis iba a ser muy importante (sólo un 9% creía que no) y siete de cada diez auguraban que sería "larga".

Son mayoría quienes piensan que, al menos, la llegada de Barack Obama a la presidencia de EE UU puede hacer que el fin de la crisis llegue antes: el 52% (sobre todo, votantes del PSOE) confía en ello, frente a un 42% (sobre todo, votantes del PP) que no cree que afecte en nada. Eso, interpretan los responsables del sondeo, podría significar que los españoles están "de acuerdo, en cierta medida, con Rodríguez Zapatero al situar el epicentro de la crisis en EE UU": al buscar en *aquEl País* la solución al problema podrían querer decir que en *aquEl País* estuvo el origen.

La pesadumbre ciudadana, en cualquier caso, no perjudica al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tanto como éste podría temer: los encuestados le dan una nota de 4,8; es un suspenso (hace un año el Gobierno aprobaba), pero es una valoración algo mejor que la de hace seis meses; y, sobre todo, en el mismo periodo el PP no sube sino que se estanca o baja: recibe una nota de 3,9 (era de 4 hace seis meses y de 3,8 hace un año).

"La extendida percepción de que las causas de la actual crisis económica no son exclusivamente españolas, por un lado, y, por otro, el perfil relativamente bajo que en este asunto mantiene el principal partido de la oposición, probablemente como consecuencia de la serie de tensiones y conflictos internos que experimenta en la actualidad, pueden explicar que el actual estado de cosas no pase, por el momento, la factura que parecería esperable al Gobierno", concluye el texto de *Metroscopia*.

La encuesta se elaboró justo en los días en los que en el PP comenzaba la tormenta por el escándalo de la presunta trama de espionaje político. Las revelaciones sobre seguimientos a distintos políticos populares, supuestamente realizados por ex policías y ex guardias civiles al servicio de la Consejería de Interior del Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre, dieron pronto paso a un enfrentamiento poco disimulado entre el equipo de Aguirre y la dirección nacional de Mariano Rajoy. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, advirtió el pasado miércoles que el principal perjudicado por esta polémica "es el partido".

(www.elpais.com, 30/01/09)

122. AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PP

Esperanza Aguirre quiso lanzar unas cuantas advertencias al líder de su partido, Mariano Rajoy. Para empezar, avisó que dar credibilidad a la existencia de una red de espionaje en la Comunidad de Madrid perjudica "al PP en su conjunto". Y enfatizó que Rajoy, al ordenar una investigación interna sobre este asunto, "da pábulo" a esta cuestión.

Segundo mensaje. O golpe dialéctico directo a la cabeza de la organización. Los primeros en pagar las consecuencias de mantener vivo el escándalo serán los candidatos populares en Galicia y Euskadi. "Nuestro electorado está desconcertado. Esto beneficia al PSOE. Tenemos ahí unas citas electorales, y debilitar al PP para el 1 de marzo --fecha de los comicios gallegos y vascos-- también interesa a los socialistas", remató Aguirre en *Onda Cero*.

Esta última tesis es compartida, al menos en parte, por el propio Rajoy. Anoche, acompañó a un acto en Madrid a su aspirante en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y reclamó a todos sus dirigentes que se eleven "por encima del ombligo" para volcarse en los elecciones.

Pero la presidenta aún tenía más que decir. Señaló que hubiera preferido un apoyo "más contundente" de la dirección del PP en vez de una investigación interna, especialmente cuando el caso ya está en los tribunales. ¿Y no tendría usted que haber ordenado, en el seno de la consejería de Interior, una investigación para saber si se espío?, se le preguntó en la entrevista radiofónica. Respondió que su consejero Francisco Granados ya "apretó las tuercas" a quien correspondía. Por lo visto, Granados --que comparece en la Asamblea de Madrid-- no encontró culpables.

Aguirre no se cree obligada a dar más explicaciones, ya que garantiza que su Gobierno "no espía a nadie". Pero esa máxima en la que ella se escuda no la aplica por igual a su compañero a la par que adversario, Alberto Ruiz-Gallardón: sentenció que el alcalde debe explicar si tiene una red de espionaje en su ayuntamiento. Aguirre tuvo para todos.

(www.elperiodico.com, 30/01/09)

123. EL VICEPRESIDENTE DE MADRID QUIERE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró que es partidario de que se abra, como pide la oposición, una comisión de investigación parlamentaria sobre la red de espionaje. González ha sido espiado y es, a la vez, objeto de varios dossiers en los que se le achacan casos de corrupción. González confirmó, además, que su entrevista con su secretaria general, Dolores de Cospedal, fue "corta y agradable". Sin más. Ella realiza, por orden de Rajoy, una investigación interna.

(www.elperiodico.com, 30/01/09)

124. EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA TRAMA DE ESPIONAJE

Las informaciones publicadas en los últimos días en las que se asegura que la dirección del PP y su propio presidente Mariano Rajoy tenían conocimiento de los **dossieres anónimos** que en últimos años circulaban en Madrid sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha provocado una gran indignación entre dirigentes populares próximos a Mariano Rajoy. De hecho, fuentes cercanas al líder del PP consideran la filtración de esas noticias como un ataque al corazón del partido, ya que se ha metido por medio al tesorero. Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, se reprocha a Génova que optara por abrir una investigación interna en vez de cerrar filas en torno al Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

También que el ex tesorero Alvaro Lapuerta dijera que él también había sido espiado desde la Comunidad de Madrid. Dos versiones de una polémica que ha avivado el enfrentamiento y la lucha interna en el seno del PP. Dirigentes próximos a Rajoy ven en las filtraciones periodísticas de los últimos días una estrategia por parte de algunos sectores del Gobierno de la Comunidad de Madrid para implicar a la dirección nacional del PP en la **'guerra de dossiers'**, al revelar que Mariano Rajoy sabía de este asunto desde el año 2006.

También admiten que ha causado un gran enfado e irritación en Génova que se haya puesto en la picota al ex tesorero Alvaro Lapuerta, así como a su sucesor Luis Bárcenas, y que se hayan "aireado" conversaciones que se mantuvieron en 2006 y 2008 a raíz de supuestos informes sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Este malestar de algunos miembros de la Ejecutiva nacional se suma a su preocupación por las últimas informaciones publicadas, que revelan que el asunto del espionaje podría tener detrás un trasfondo económico que podría poner en duda la honorabilidad de todo el Partido Popular.

En este contexto, varios parlamentarios del PP coincidieron en la necesidad de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dé a conocer cuanto antes el resultado de su investigación interna para zanjar el asunto y evitar que perjudique electoralmente en *El País* Vasco y Galicia. "Hay que cerrarlo inmediatamente porque si no, los acontecimientos nos comen", confiesa un veterano diputado. En la dirección nacional se comparte esta tesis de que hay que cerrar ya la polémica y volcarse en las tres citas electorales que están a la vuelta de la esquina, y se recuerda que el partido no puede permitir un minuto más que se siga dañando su imagen de esta manera.

También hay quien exige un **gesto de autoridad por parte de Mariano Rajoy**, a la vista de que las declaraciones llamando a la unidad y la cohesión que hizo el presidente nacional el pasado domingo no han servido para poner freno al desgaste que está sufriendo "la imagen del PP en toda España".

Sin embargo, el presidente de los 'populares' ha optado en estos últimos tres días por no hablar del asunto ante los medios de comunicación. Esta actitud contrasta con la que ha mantenido en los dos últimos días la presidenta de la Comunidad de Madrid y algunos de los miembros de su gobierno.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho a Mariano Rajoy conocedor de los presuntos espionajes desde 2006 al afirmar que el presidente del PP la llamó ese año para comentarle que circulaban dossiers en los que figuraban su 'número dos' y su 'número tres', Ignacio González y Francisco Granados.

Esas declaraciones, que para Génova son un ataque, se deben, según algunos dirigentes, al malestar que ha causado en el entorno de Aguirre la investigación abierta por Mariano Rajoy y que, a su entender, pone en duda la credibilidad que el líder del PP dijo tener en ella.

Sin embargo, la percepción que tienen algunos miembros de la Comunidad de Madrid, es muy distinta. Reprochan que la dirección nacional en vez de cerrar filas y apoyarlos, diera pábulo a las informaciones

sobre presunto espionaje abriendo una investigación y sin hacer ningún reproche al alcalde Madrid, **Alberto Ruiz Gallardón**.

Asimismo, critican que Alvaro Lapuerta, un hombre de Génova, echará aún más leña fuego asegurando que él también había sido espiado por la Comunidad de Madrid, aseguraron fuentes del Gobierno regional.

(www.publico.es, 30/01/09)

125. RAJOY: "EL PP DEBE ELEVARSE POR ENCIMA DE SU OMBLIGO"

El líder del PP, Mariano Rajoy, pidió a todo el partido que "se eleve por encima del ombligo" y apoye a los candidatos en las próximas elecciones autonómicas, en concreto al de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. No en vano, estas palabras fueron pronunciadas en la presentación de una conferencia del líder de los conservadores gallegos.

Las palabras del presidente nacional del PP fueron interpretadas como un mensaje en clave interna en un momento en el que la formación política sufre el escándalo de las supuestas tramas de espionaje. Además de pedir a sus compañeros que pensasen en el partido, les recordó que ha llegado el momento de "ofrecer grandeza y altura de miras" para "atacar los problemas de los ciudadanos". También les marcó las "coordenadas": "Los valores del esfuerzo, el trabajo bien hecho y la austeridad".

Se trata del segundo mensaje de este tipo que lanza el presidente de los conservadores a sus compañeros de partido desde que el domingo, en la clausura del I Foro de militantes, se comprometió a garantizar la unidad del partido "pase lo que pase".

Rajoy alabó a Alberto Núñez Feijóo. Dijo de él que era "el capitán capaz de navegar en épocas de tormenta". Precisamente de lo contrario le acusan a él algunos integrantes de las filas conservadoras.

"Se está tomando el asunto de los espías con una tranquilidad que exaspera y esto va a acabar pasándonos factura en las próximas citas electorales", se lamenta un dirigente conservador, que mantiene que este escenario habría sido impensable en la etapa de José María Aznar. "¿Si conocía la existencia de dossiers hace tiempo por qué no puso orden?", se pregunta un diputado autonómico, que sugiere que es la "falta de liderazgo" de Rajoy la que está generando peleas por la sucesión. Mientras, su entorno sigue defendiéndolo. "Rajoy sabe manejar los tiempos", dicen.

(www.publico.es, 30/01/09)

126. GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha afirmado este viernes que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia".

En su comparecencia en la Asamblea con motivo del supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid desvelado por *El País*, el consejero ha asegurado además que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características".

Granados, que comparece a petición propia en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, ha hecho hincapié en su primera intervención en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su Consejería tiene las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón".

También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes".

Granados ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual".

Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".

Más de 80 medios de comunicación acreditados han concurrido en la Cámara autonómica para seguir la comparecencia del consejero, solicitada por él mismo para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".

Granados pidió disculpas a todos los ciudadanos por los molestias ocasionadas por la **gestión del temporal de frío y nieve** que azotó la región el pasado 9 de enero y que generó un colapso en las carreteras de la región y en el aeropuerto de Barajas.

"Asumo la responsabilidad y pido disculpas a los ciudadanos en lo que es competencia de la Comunidad de Madrid", destacó Granados en su intervención, a la que no acudió ningún miembro del Gobierno regional. "Es verdad que las carreteras competencia de la Comunidad estuvieron cerradas unas horas, es evidente que siempre se puede hacer mejor y que los responsables políticos prácticamente todos los días debemos pedir disculpas porque las cosas se pueden hacer mejor", señaló y añadió que piden "disculpas por los fallos que se hayan podido proceder".

Granados consideró que la Comunidad de Madrid cuenta con los medios técnicos necesarios para hacer frente a un temporal, pero apostó por modernizar los protocolos de actuación. Así, indicó que la labor de la Comunidad requiere "no en medios, pero sí en protocolos una revisión". "Desde ese día ordené a los servicios de la Dirección General de Protección Ciudadana que revise los protocolos, que han quedado obsoletos. Creo que los medios son adecuados y los protocolos no son los adecuados", apostilló.

El titular de Interior, que achacó el caos a la "imprevisión" del Ministerio de Fomento y a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, señaló que la colaboración con el Ministerio del Interior fue "extraordinaria".

127. GRANADOS EVITA "PONER LA MANO EN EL FUEGO" POR TODOS SUS FUNCIONARIOS

"Hemos hecho una investigación reservada en la consejería [Presidencia, Justicia e Interior] que ha dado un resultado negativo", ha precisado esta mañana el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, tras su comparecencia en la Asamblea de Madrid. Pero, a renglón seguido, ha rehusado poner la mano en el fuego por todos sus funcionarios. "Evidentemente, la Comunidad de Madrid es muy grande y yo he hablado con los que he hablado", ha sentenciado el consejero, que ante los diputados ha vuelto a insistir en que "el Gobierno de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características". Como se temía la oposición, no ha dado explicaciones sobre la trama de espionaje que, **según ha destapado EL PAÍS**, se ha gestado bajo su paraguas, sino que ha detallado sus competencias y estructura en seguridad y vigilancia y ha vuelto a decir que son las mismas que definió Alberto Ruiz-Gallardón. La falta de respuestas ha colmado la paciencia de PSOE e IU que, por primera vez, han pedido al consejero que dimita o si no, a Esperanza Aguirre que le destituya.

Granados ha llegado sonriente -y solo, ya que ningún miembro del Gobierno regional ha acudido a presenciar su intervención- al Parlamento regional y no ha hecho declaraciones. Más de 80 medios de comunicación han acudido a seguir la comparecencia del consejero -solicitada por él mismo pero no ante todos los diputados como pretendían PSOE e IU sino en **una comisión extraordinaria del ramo**- para informar sobre cómo su consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".

Minutos después de las 11.00, Granados **ha empezado su comparecencia** analizando la actuación del Gobierno regional el 9 de enero ante la nevada que sumió a la región en el caos, dado que se colapsaron las carreteras y el aeropuerto de Barajas. Posteriormente, el consejero ha pasado al tema que suscitaba todo el interés y ha comenzado por reiterar que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia".

Granados ha hecho hincapié en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su consejería tienen las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón". También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el

Gobierno de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes". El también secretario general del PP de Madrid ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual". Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".

Tras escucharle, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, le ha espetado que "o da respuestas o tendrá que marcharse" porque su grupo "no le cree". Sabanés ha acusado a Granados de poner en peligro la credibilidad y la democracia en las instituciones. "Usted va tarde, va mal y no ha dado explicaciones, así que debe ser cesado o debe dimitir", le ha reclamado la diputada. Tras ella, la portavoz de Presidencia del PSOE, Encarnación Noya, ha señalado que los hechos "son tan graves" que le parece una "burla" que el consejero se haya limitado a leer la lista de sus competencias, a la sazón "perfectamente conocidas y definidas". "Quien no las tiene claras es usted, que le ha traicionado el subconsciente y en lugar de decir protección ha dicho vigilancia", le ha criticado Noya. La diputada socialista le ha recordado que aún no se sabe quién manda a los espías ni ante quién responden, dos puntos esenciales que le ha pedido que aclare, aunque sí saben "quién es la máxima responsable, Esperanza Aguirre".

Noya ha subrayado que Aguirre "no ha dado la cara, ha mandado al yerno de [Carlos] Fabra [Juan José Güemes] a lanzar exabruptos y se ha presentado como una víctima como tanto le gusta". Si es así, Noya se ha preguntado por qué no ordena una investigación a Granados y por qué no da el visto bueno a una comisión de investigación. Y ha apuntado dos motivos: "O porque son concededores de lo que sucede o porque temen las consecuencias de la investigación. Por eso lo llevan a la Justicia con la esperanza de que amaine el temporal, pero parece que el temporal cobra mas fuerza". "Quien algo teme, algo debe", ha añadido para lanzar nueve preguntas al consejero: por qué no investiga "con su batallón de asesores" lo que está pasando, si piensa dismantelar la "estructura paralela" de vigilancia de su departamento, quién ordena los seguimientos, cómo se financian, organizó el espionaje o tiene algo que ver, lo sabía Aguirre, con qué medios cuentan, cuáles son sus retribuciones y si van a permitir la comisión de investigación.

A su juicio, la situación es tan grave que impide el normal funcionamiento del Ejecutivo de Aguirre, que ha descrito como "agotado, en crisis, degradado", razones por las que ha reclamado unas "dimisiones o ceses", que "en cualquier país democrático ya se habrían producido" por responsabilidad política en los hechos, por conocerlos o no conocerlos, por acción o por omisión". "¿Piensa dimitir?", ha concluido, a lo que Granados a respondiendo que, si cada vez que la oposición pide dimisiones las hubiera, "el banco azul estaría vacío".

(www.elpais.com, 30/01/09)

128. GONZÁLEZ NO CREE QUE EL ESCÁNDALO VAYA A INFLUIR EN LAS ELECCIONES

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no cree que la red de espionaje vaya a influir de forma negativa para el PP en las próximas elecciones, "porque el electorado es lo suficientemente maduro para saber que aquí hay una campaña interesada de acoso y derribo al Gobierno de la Comunidad de Madrid".

En la localidad madrileña de Collado Villalba, ha reconocido que "evidentemente, siempre que hay ruido, influye", pero se ha mostrado convencido de que "esto no tiene nada que ver con el fondo de las elecciones" y que no influirá en las citas electorales de *El País* Vasco y Galicia.

(www.elpais.com, 30/01/09)

129. GRANADOS: "ES FALSO QUE HAYA UN DEPARTAMENTO DE ESPIONAJE EN MI CONSEJERÍA"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha afirmado este viernes que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia". En su comparecencia en la Asamblea con motivo del supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid desvelado por *El País*, el consejero ha asegurado además que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características".

Granados, que comparece a petición propia en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, ha hecho hincapié en su primera intervención en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su Consejería tiene las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón". También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes".

Granados ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual".

Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".

Más de 80 medios de comunicación acreditados han concurrido en la Cámara autonómica para seguir la comparecencia del consejero, solicitada por él mismo para informar sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".

Granados pidió disculpas a todos los ciudadanos por los molestias ocasionadas por la **gestión del temporal de frío y nieve** que azotó la región el pasado 9 de enero y que generó un colapso en las carreteras de la región y en el aeropuerto de Barajas. "Asumo la responsabilidad y pido disculpas a los ciudadanos en lo que es competencia de la Comunidad de Madrid", destacó Granados en su intervención, a la que no acudió ningún miembro del Gobierno regional.

"Es verdad que las carreteras competencia de la Comunidad estuvieron cerradas unas horas, es evidente que siempre se puede hacer mejor y que los responsables políticos prácticamente todos los días debemos pedir disculpas porque las cosas se pueden hacer mejor", señaló y añadió que piden "disculpas por los fallos que se hayan podido proceder". Granados consideró que la Comunidad de Madrid cuenta con los medios técnicos necesarios para hacer frente a un temporal, pero apostó por modernizar los protocolos de actuación.

Así, indicó que la labor de la Comunidad requiere "no en medios, pero sí en protocolos una revisión". "Desde ese día ordené a los servicios de la Dirección General de Protección Ciudadana que revise los protocolos, que han quedado obsoletos. Creo que los medios son adecuados y los protocolos no son los adecuados", apostilló.

El titular de Interior, que achacó el caos a la "imprevisión" del Ministerio de Fomento y a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, señaló que la colaboración con el Ministerio del Interior fue "extraordinaria".

(www.publico.es, 30/01/09)

130. CONTRATOS MILLONARIOS PARA EL COMPAÑERO DE VIAJE DE GONZÁLEZ

La empresa de Enrique Sánchez obtuvo por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro - El suburbano rescindió el acuerdo por incumplimiento. La empresa de seguridad Securisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) ha sido adjudataria de dos contratos de la Comunidad de Madrid que suman 59,3 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez González, viajó a Johannesburgo en marzo de 2008 con el número 2 del Gobierno de Esperanza Aguirre y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González. Fue un viaje privado que aparece en el informe de un seguimiento parapolicial a González.

La presunta acusación del dossier (cuya existencia fue revelada por *EL PAÍS*) era que el viaje suponía un regalo a Ignacio González por la adjudicación de contratos públicos millonarios a Securisa. El informe incluye una fotocopia de los pasajes de vuelo de González y de su esposa a Suráfrica. El vicepresidente de la Comunidad señaló a este periódico que había pagado su pasaje "en metálico" y que estuvo en Johannesburgo para visitar al embajador de Suráfrica que es amigo suyo.

Respecto al presidente de Securisa, Ignacio González fue tajante: "No es amigo mío, ni le adjudiqué nada". Pero la empresa de seguridad resultó adjudataria de dos contratos para prestar servicios de

vigilancia entre 2005 y 2006. Uno en el Canal de Isabel II, por dos años prorrogables a cuatro, y otro en Metro, que fue rescindido antes de tiempo por incumplimiento de contrato, según confirmó a *EL PAÍS* la empresa que gestiona el suburbano.

El primer contrato a Securisa data de octubre de 2005. La empresa resulta adjudicataria de los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II, del que ya era presidente Ignacio González.

El periodo propuesto en el pliego del concurso convocado por la vicepresidencia era de dos años prorrogables a dos más a razón de 19.423.665 euros anuales. El procedimiento era restringido, una figura incluida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que supone que el adjudicador invita al concurso a un número determinado de empresas.

Securisa obtuvo la concesión por 33.489.078 euros, cinco millones menos que el presupuesto de salida (38.847.330 euros). Y actualmente sigue al frente de la seguridad en el Canal, según confirman trabajadores de la empresa.

En el segundo contrato público, firmado seis meses después, Securisa aparece entre las adjudicatarias de la vigilancia de Metro de Madrid.

El servicio de seguridad en el suburbano se divide por líneas y tramos que se repartieron en cinco contratos a los que optaron nueve empresas diferentes en 2006. El plazo era de dos años prorrogables a cinco. A Securisa le correspondieron 25,9 millones de euros -la cuantía más baja de las cinco adjudicaciones- por prestar servicio en la línea 3 y en un tramo de la línea 4. Pero no llegó a cumplir ni siquiera los dos primeros años. Metro le rescindió el contrato en enero de 2007, nueve meses después de la adjudicación, por "incumplimiento" de la empresa, según un portavoz del suburbano. Ese incumplimiento supone que Securisa dejó sin cubrir "hasta el 50% de los servicios" a los que se había comprometido, según Metro, al no aportar el número necesario de trabajadores a sus tramos de la red. El portavoz de la empresa pública del suburbano asegura que Securisa sólo ha cobrado "la parte proporcional del dinero" por el servicio prestado durante el tiempo que el contrato estuvo en vigor. No especificó la cantidad. Securisa, creada en 1988 y con sede principal en Madrid, dispone de 1.326 empleados.

Las líneas de metro que gestionaba Securisa fueron repartidas entre otras tres empresas. Antes de la rescisión, fue una de las adjudicatarias que se vieron envueltas en el escándalo de las agresiones de los vigilantes de Metro a viajeros. En uno de los vídeos difundidos por *EL PAÍS*, un trabajador de seguridad de la línea 3 con uniforme golpeaba a un pasajero junto a la puerta de salida de una estación.

Este periódico intentó recabar sin éxito los testimonios de Enrique Sánchez González y de Ignacio González sobre las adjudicaciones de ambos contratos públicos.

Ignacio González denunció a la Fiscalía de Madrid los seguimientos durante dos viajes a Colombia y a Suráfrica recogidos en dos informes. El titular del Juzgado número 47 de Madrid ordenó el pasado 26 de enero incoar diligencias al hallar indicios de delito en la denuncia del vicepresidente del Gobierno regional.

En el dossier de la visita de González a Johannesburgo aparece una fotocopia de los billetes de avión del vicepresidente y de su esposa. La presunta acusación del informe era que el viaje era un regalo de Enrique Sánchez González como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos millonarios. El documento refleja que Ignacio González pagó su viaje y el de su mujer (unos 8.000 euros) en metálico. González aseguró a *EL PAÍS* que los abonó así porque le venía bien. El número 2 del Gobierno de Aguirre negó entonces que fuera amigo del presidente de Securisa y que le hubiera adjudicado nada.

www.elpais.es 31.01.09

131. GRANADOS EVITA PONER LA MANO EN EL FUEGO POR NADIE

Llevaba una noticia en la manga, y con eso creía haber salvado un día muy complicado. Francisco Granados, el consejero de Justicia e Interior de Esperanza Aguirre, el hombre sobre el que cae todo el peso del escándalo de espionaje, esperó al último minuto de su comparecencia en la Asamblea de Madrid, después de una importante paliza dialéctica de las dos portavoces de la oposición, para buscar la salida: "Se ha hecho por parte de la secretaria general técnica una información reservada. Se ha tomado testimonio a los altos cargos, se entrevistó a asesores y personal eventual que se insinúa en las

informaciones podrían estar implicados. Hemos comprobado turnos de noche, viajes... La comprobación ha sido absolutamente negativa".

Era lo que todos, incluso en el PP, pedían hace días: una investigación. Granados había esperado para ofrecer esa comprobación y así obtener ese triunfo mediático. Pero algo falló. Inés Sabanés, de IU, le hizo la pregunta más complicada: "¿Puede usted poner la mano en el fuego por todas las personas que trabajan en su consejería?". Granados rehuyó la respuesta. Y no puso la mano en el fuego. Y a la salida, preguntado por la prensa, dejó muy claro cómo está la situación interna en la Comunidad de Madrid, donde ya nadie se fía de nadie y los políticos viven en vilo esperando nuevas revelaciones periodísticas. "¿Por qué no ha contestado cuando le preguntan si puede poner la mano en el fuego?", le preguntaron. "Yo he dicho que se ha hecho una comprobación con resultado negativo. Evidentemente, la comunidad es muy grande y yo he hablado con los que he hablado".

Con esta frase críptica, Granados no hacía más que confirmar el comentario generalizado de los políticos del PP estos días. Todos dan por hecho que el espionaje a Manuel Cobo y Alfredo Prada salió de la Dirección General de Seguridad -en uno de los partes se llega a decir "sale nuestro director, Sergio", el nombre propio de Gamón, entonces director de ese centro- aunque nadie hace apuestas sobre quién lo ordenó.

Granados sólo pudo garantizar que él no ha hecho nada y que sus comprobaciones para buscar al culpable no han tenido éxito. Nada más. De hecho, el consejero, en tono comedido, lejos de la agresividad de otros miembros de su Gobierno, como Juan José Güemes, abrió la posibilidad de que los periódicos aún aporten novedades: "Si siguen apareciendo cuestiones en los medios, seguiremos investigando, pero de lo que tenemos hasta ahora, nada nos lleva a concluir que hubo espionaje en la Consejería de Interior". La clave política a partir de ahora, además de la investigación interna del PP nacional, con su secretaria general, Dolores de Cospedal, a la cabeza, es saber si el equipo de Esperanza Aguirre acepta una comisión de investigación que piden PSOE e IU. Granados apuntó hacia el sí. Pero fuentes del PP de Madrid señalan que hay un fuerte debate en el seno de la cúpula aguirrista, y que aún no hay una decisión. El asunto se votará la próxima semana.

Granados se aferró en todo momento a la presunción de inocencia para pedir a la oposición que espere a que se aclaren más las cosas para sacar conclusiones. La diputada popular Cristina Cifuentes se quejó de que, incluso antes de escucharle, ya le habían declarado culpable. Sin embargo, Granados no ofreció pruebas concluyentes y más bien apeló a la confianza de Sabanés y la socialista Encarnación Noya. Dijo que se habían comprobado todo tipo de pistas que podían conducir a los autores del espionaje, pero no habló de pruebas caligráficas (los informes publicados por *EL PAÍS* contienen notas manuscritas) ni entregó pruebas de esa investigación interna que habría descartado el espionaje (como serían las horas extra que se pagaron el día que Prada fue seguido mientras salía de cenar con su mujer y su hija a la una de la madrugada).

El consejero aguirrista armó su defensa con un pase constante de la pelota a otros rivales. Sobre todo a Alberto Ruiz-Gallardón, ex presidente de la Comunidad, que fue quien, dijo, desarrolló la unidad de seguridad creada por el socialista Joaquín Leguina y que en épocas del alcalde llegó a tener hasta 60 personas, 20 más que ahora. Gallardón, gran rival de Aguirre, ha dado públicamente credibilidad a las informaciones de *EL PAÍS* (en privado casi todos los dirigentes de Génova se la conceden) por lo que Aguirre amenazó con llevarle a los tribunales si no rectificaba. Granados insistió en la línea de defensa de los aguirristas en los últimos días: "Somos víctimas, han espiado al vicepresidente, somos los primeros interesados en que se aclare todo".

Sabanés y Noya armaron su ataque en torno a la ausencia de una investigación interna, algo que Granados desmontó parcialmente al final de su intervención, aprovechando el turno de cierre. Las dos le pidieron insistentemente su dimisión ante la gravedad de las revelaciones periodísticas. "Usted viene aquí a divagar y explicarnos la estructura de su consejería. Sin embargo, la realidad es que su consejería está cuestionada, esto es una catástrofe democrática, usted va tarde y mal, debería ser cesado o dimitir. Váyase, y así será más fácil que la democracia se recupere de este escándalo", sentenció Sabanés. Especialmente dura fue también Noya, que calificó de "burla" que Granados se limitara a explicar las competencias de su consejería con la que está cayendo. "Aguirre dice que quiere esperar a que amaine. Son sus palabras. Pero el temporal va a peor. Porque ustedes están todos contra todos. Y niegan lo evidente, lo cual es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie podrá entender que no apoyen una comisión de investigación. Si no lo hacen, a usted que le gustan los refranes, harán bueno ese que dice 'El que algo teme, algo debe'".

La investigación interna ordenada por Mariano Rajoy para aclarar el escándalo de los espías sigue avanzando, con gran sigilo. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha interrogado esta semana a un personaje clave, Sergio Gamón, según fuentes del partido. Gamón era director general de seguridad de la Comunidad de Madrid cuando se produjeron, en la primavera de 2008, en plena guerra interna del PP, los espionajes a Manuel Cobo (mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón), y Alfredo Prada (entonces vicepresidente de la comunidad y afín a Rajoy).

Uno de los informes del espionaje publicados por *EL PAÍS* muestra que eran sus funcionarios quienes espionaron a Cobo y Prada. "Entra nuestro director, Sergio", se lee en uno de los partes. Gamón es el único de los policías citados en las informaciones que ha acudido a Génova porque él sí es militante del partido. Los otros se han negado, según fuentes del PP. De Cospedal también ha llamado a Alejandro Halffter, viceconsejero de Interior y la persona ante quien reportaba Gamón. Halffter responderá a De Cospedal, según las mismas fuentes.

Gamón fue el artífice del espionaje en julio de 2008 en los despachos de la Ciudad de la Justicia al hombre de confianza de Prada al día siguiente de que Aguirre cesara al consejero. Por esta actuación, en la que desapareció un ordenador, Francisco Granados, el consejero de Interior, decidió destituirle, aunque después le buscó un puesto en la Dirección General de Seguridad. De Cospedal quiere cerrar pronto la investigación. Antes deberá preparar un informe para dar cuenta a la máxima dirección del partido, el Comité Ejecutivo Nacional.

www.elpais.es 31.01.09

132. PREGUNTAS DE ESPÍAS CON Y SIN RESPUESTA

Inés Sabanés (Izquierda Unida) y Encarnación Noya (PSOE) se convirtieron , especialmente la primera, en una especie de fiscales con muchas preguntas para el consejero de Interior, Francisco Granados. A pesar del formato, típico del parlamentarismo español -una sucesión de monólogos sin posibilidad de repreguntas- es posible hacer una reconstrucción de la mayoría de los asuntos clave, partiendo de las preguntas y las respuestas, o la ausencia de ellas, por parte de Granados. Éstas son las más importantes:

» ¿Despachaba usted con todos los asesores de seguridad? Yo despacho con los viceconsejeros y, de vez en cuando, con algún director general.

» ¿Puede sostener que nadie de su consejería ha hecho tareas de espionaje? ¿Pone usted la mano en el fuego por todas estas personas? La carga de la prueba la tiene usted. Yo puedo probar que no hicieron lo que usted dice. Pero no hemos encontrado pruebas de espionaje. El periodista de *EL PAÍS* que ha hecho las informaciones sí ha respetado la presunción de inocencia, y ha dicho que no hay pruebas de que el consejero o la presidenta ordenaran nada, ni siquiera de que lo conocieran. Respétenla ustedes.

» ¿Han comprobado horarios, horas extra, informes de los policías que pueden estar implicados en las fechas de los espionajes? Se ha comprobado todo, turnos de noche, salidas, viajes, y nada apunta hacia el espionaje.

» ¿Por qué contrató a Marcos Peña si tenía ya un departamento de seguridad completo? [Sin respuesta].
» ¿Si destituyó a Sergio Gamón porque robó un ordenador, por qué después le buscó un puesto? [Sin respuesta].

» ¿Despacha frecuentemente con Gamón? [Sin respuesta].

» ¿Por qué su servicio no detectó el espionaje a González? Es compatible que el servicio funcione bien y que se espíe al vicepresidente en el extranjero.

» Está comprobado que se espío a Cobo y Prada a altas horas de la madrugada. ¿Han comprobado si esos días alguien de su oficina cobró un servicio a esas horas? Se ha comprado todo, con resultado negativo.

» ¿Ante quién responden los ex guardias civiles que ha ido usted contratando? Todo el personal eventual depende del consejero. Incluso algún conductor o secretarias. Los guardias civiles no dependen de Marcos Peña.

» ¿Permitirá la comisión de investigación que le pedimos? Siempre estoy dispuesto, si lo quieren los grupos, encantado. Nosotros somos los más interesados en que se aclare todo. Somos víctimas de esto, el vicepresidente ha sido espiado.

» Si todo es mentira, ¿por qué no se ha querellado contra *EL PAÍS*? [Sin respuesta].

» ¿Cómo se han financiado los espionajes? ¿Hay fondos reservados en la Comunidad de Madrid? [Sin respuesta].

» ¿Qué función realizan los cuatro ex agentes que usted contrató? Es una imprudencia dar esos nombres. Algunos de ellos volverán algún día a Interior a realizar labores delicadas. Lo que hacen son funciones de vigilancia, avanzadas (llegar antes a los actos, impedir que agredan a la presidenta como en la inauguración de un hospital en Parla). Informan a los escoltas por dónde tienen que entrar para evitar problemas. Comprueban que se cumplen los contratos de seguridad que firmamos con empresas privadas. También se han ocupado de resolver encierros en edificios, hay centenares de pruebas fotográficas de todo.

» ¿Qué retribuciones perciben? [Sin respuesta].

» ¿Se da cuenta de la alarma social provocada? En un partido como IU, con una larga tradición de defensa de los trabajadores, creo que deberían preocuparse por alguna cuestión que causa más alarma y afecta a los trabajadores [en referencia a la crisis].

» ¿Va a dimitir? ¿Echará a alguien? Si dimitiéramos todos los que piden, el banco azul estaría vacío. No se ha constatado nada, creo en la presunción de inocencia. Ustedes me piden un ejercicio imposible, que es demostrar que soy inocente. Éste es un pilar básico del Estado de derecho.

www.elpais.es 31.01.09

133. LA DIFUSA LABOR DE LOS ASESORES SECRETOS

Francisco Granados, consejero de Interior, reveló que había ordenado una investigación reservada sobre “los indicios” (las noticias publicadas por *EL PAÍS*) de la trama de espionaje anclada en su departamento, pero con “resultados infructuosos”, salvo que surjan “nuevas informaciones” periodísticas. Una investigación tan reservada que la ignoraba el presidente de su partido, Mariano Rajoy, quien encargó dicha tarea a la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal. Una investigación, la de Granados, que se resume así: preguntar a la decena de asesores de Seguridad sospechosos de espiar si habían realizado ese trabajo ilegal.

—¿Tú has espiado por tu cuenta o por orden mía?

—No, jefe.

Granados dijo también que había cotejado facturas y dietas de los agentes sospechosos del periodo en el que se produjeron los seguimientos, pero no las aportó a la comisión. Unos asesores a los que, según reprochó Granados, es “imprudente identificar” porque “pueden estar inmersos en cuestiones que no interesen, por su propia seguridad, que aparezcan”. Los asesores del ministro del Interior, con algunas competencias más que Granados en asuntos de seguridad —terrorismo, crimen organizado, etcétera—, figuran en el FAC (Fichero de Altos Cargos).

Unos asesores, los de Granados, que, según proclamó, no despachan con él. Pero si no despachan con el director general de Seguridad, Enrique Barón, ni con el consejero, ¿a quién reportan estos asesores fichados personalmente por Granados? El ex inspector Marcos Peña aseguró a este diario que sólo despacha con el consejero. Y lo aseveran algunos cargos de su consejería. Más sorpresa: “los ex guardias civiles no dependen de Marcos Peña”. Peña dijo en su día que estaban bajo sus órdenes. ¿Ante quién responden entonces los ex agentes asesores? ¿Son autónomos? ¿Hacen fila para despachar uno tras otro con un cargo aún no identificado? “Yo sólo despacho con los viceconsejeros y la secretaria general”. Granados puso de este modo un cortafuegos sobre el control de tales asesores.

¿Qué hacen los asesores? Un trabajo variado que incluye el análisis de los contratos de seguridad y de su ejecución —Granados parece considerar una garantía que un ex policía o un ex guardia civil supervise una tarea competencia del interventor general o de la mesa de contratación—;

contravigilancias, actividad que tiene legalmente vedada la Comunidad de Madrid, y actuaciones de "avanzada". Esta última consiste en acudir antes a los actos donde se prevén incidentes para cargos de la Comunidad y alertar a sus escoltas. Esta difusa labor de difusa legalidad está ampliamente documentada. "Hay cientos de pruebas gráficas de esto", desafió. ¿Significa que graban los incidentes con vídeos? Las dos portavoces de la oposición, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU), manejan desde justo esta sospecha: que los vídeos donde se identificaba a sindicalistas que arruinaban actos inaugurales de hospitales de su presidenta y de su consejero de Sanidad eran obra de camarógrafos del equipo de asesores de Granados.

Peña "informa al consejero de todas las cuestiones que le parece relevante desde el punto de vista de la seguridad; cualquier cuestión relevante que pueda afectar a la seguridad de la Comunidad de Madrid", dijo Granados. Lo que no dijo es qué es relevante para Peña. ¿Escándalos del PSOE como los de Coslada o Ciempozuelos? ¿Las mafias de las discotecas de Madrid que afectan a Ruiz-Gallardón? ¿Lo plasma por escrito? ¿Y dónde obtiene tales datos sensibles? ¿Mientras investiga a sindicalistas en el hospital de Parla? Pero su investigación interna no da para más. Granados parece esperar un impulso de la prensa.

www.elpais.es 31.09.09

134. EL EX CARGO DEL PP OBTUVO LA RECALIFICACIÓN EN COLLADO VILLALBA

Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una "especial protección ecológica". Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. "Me pidió que recalificara sus terrenos", denunció el jueves Ortiz en la cadena SER. Él se negó porque "era ilegal". Fue entre 1995 y 1996. Finalmente, logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Martín es amigo de González y le acompañaba en el viaje a Johannesburgo, donde fue espiado. Es presidente de Madrid Deportes y Espectáculos, que gestiona el Palacio de Deportes.

González se desvinculó de la petición ilegal de recalificación de Martín a Ortiz. "Es evidente que yo conozco a Pedro Antonio Martín Marín pero en 1995 y 1996 yo no conocía a este señor. Le conocí cuando llegamos al gobierno en el 96", subrayó. "Si alguien quiere insinuar que aquí hay algún tipo de connivencia para una recalificación de hace 14 años es claramente una tergiversación", añadió, en la firma de un convenio entre el Canal de Isabel II y Collado-Villalba.

Martín inició la gestión de recalificación de las 11,9 hectáreas en 1995. Junto a los otros cuatro propietarios de la zona Arroyo Arriba -entre ellos, una concejal del PP del municipio, Esperanza Seoane- pidió al Ayuntamiento que cambiara el uso de la finca. Los terrenos, pegados al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estaban protegidos, igual que la cuenca del río, puesto que la norma subsidiaria de 1986 que ordenaba el territorio (a falta de un plan general) sólo distinguía entre suelo protegido y urbanizable.

El Gobierno municipal del PP consideró que como el terreno linda por el sur con una urbanización, podía recalificarse, y que además eso convenía a las necesidades de crecimiento del municipio. En consecuencia, el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó en octubre de 1995 un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo multifamiliar (pisos de hasta tres plantas) en la zona.

En esa primera gestión, y en todas las posteriores el PP y el PSOE se aliaron para aprobar la recalificación y se encontraron de frente tanto a IU como a Ecologistas en Acción. El proyecto se discutió en cuatro ocasiones en pleno entre 1995 y 1997, y acabó en 144 viviendas, en lugar de las 613 previstas inicialmente.

En ese intervalo, Martín acudió supuestamente a Ortiz y le pidió que autorizara la recalificación, que necesitaba la aprobación de la Comisión de Urbanismo regional. Ortiz, según lo declarado a la cadena SER, se negó. En 1997 se discutió por última vez en pleno el cambio de uso del suelo. La recalificación estaba casi acabada. Pero entró en juego la fiscalía. Tras examinar las denuncias de IU y de Ecologistas en Acción, dijo que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad que la finca que pretendía hacer

urbanizable tenía una catalogación de "especial protección ecológica". El alcalde de entonces, José Luis Peñalvo (PP) lo negó. Y replicó que un informe de Medioambiente aseguraba que "los valores ecológicos de Arroyo Arriba" estaban "notablemente deteriorados". El que era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que después de la revelación de la fiscalía, la recalificación estaba denegada.

Pero no fue así porque esos terrenos son de uso residencial urbanizable. Tienen varias casas construidas y otras muchas en construcción. El alcalde socialista, José Pablo González, aprobó en 2001 el Plan General de Ordenación Urbana que recogió el cambio de uso. La Comunidad no se pronunció sobre la recalificación, y dio luz verde al Plan General. Ahora las viviendas de Arroyo Arriba tienen una vista privilegiada de la cuenca del Manzanares, con la que linda.

El actual alcalde de Collado-Villalba insinuó que quizá Ortiz se confundió en sus declaraciones y se refería a un solar de Galapagar, también propiedad de Martín (con el que este periódico trató de contactar, sin éxito). Ortiz lo negó: el suelo que Martín quería recalificar y al final se recalificó es el de Collado-Villalba.

www.elpais.es 31.01.09

135. FUERTE MALESTAR EN EL PP POR LA DESIGNACIÓN DE COSPEDAL PARA INVESTIGAR LA TRAMA DE ESPIONAJE

La tensión en el seno del PP a raíz de la supuesta trama de espionaje desatada en la Comunidad de Madrid crece cada vez más. Según informó la Cadena SER, en el partido hay un fuerte malestar por el hecho de que Mariano Rajoy haya designado a la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, para investigar el caso. Según sostienen, la dirigente mantiene una estrecha relación de amistad con el vicepresidente madrileño, Ignacio González, uno de los mandos que habría sido espiado. De Cospedal y él han trabajado juntos desde los gobiernos de Aznar e incluso han ido juntos de vacaciones, por lo que a muchos no les gusta que sea precisamente ella quien se va a ocupar de esclarecer la trama.

A la tensión interna que vive el PP desde que se destapó la **supuesta trama de espionaje relacionada con la Consejería de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid**, se suman ahora el descontento en el seno del partido por la decisión de Mariano Rajoy de dejar en manos de María Dolores de Cospedal la investigación del caso. Según informó la Cadena SER, muchos sectores del partido han mostrado su sorpresa e indignación por la designación, ya que la secretaria general popular es amiga personal de Ignacio González, directamente implicado en el caso.

De hecho, De Cospedal y el vicepresidente madrileño coincidieron en varios ministerios durante los gobiernos de Aznar, y habrían congeniado especialmente cuando trabajaron juntos en Interior a las órdenes de Ángel Acebes. En aquel momento, la ahora secretaria general del PP era subsecretaria del Ministerio, y González ocupaba la Delegación del Gobierno para Inmigración. Ambos volvieron a coincidir en la Comunidad de Madrid en el primer mandato de Aguirre, ella como consejera de Transportes y él como vicepresidente.

Además, mantienen una relación de amistad y sus familias han llegado a ir juntas de vacaciones. El pasado verano, por ejemplo, coincidieron en una urbanización de lujo en Marbella, donde también pasó unos días Ildelfonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y persona de confianza de González que también ha sufrido seguimientos.

Por ello, en ciertos sectores del PP no ha gustado la designación de Cospedal para investigar la trama, aunque la dirigente ya ha recogido la declaración del propio González. El vicepresidente madrileño

Además, desde medios como *El País* apuntan a que Aguirre y su entorno están presionando a Rajoy para que cierre esta investigación interna. , en una entrevista en Onda Cero, Aguirre insistió en que **la trama es "un montaje que acabará en nada"**, y criticó que se de "pábulo" a las informaciones sobre el espionaje, que están haciendo "mucho daño" al partido.

www.elplural.com 31.01.09

136. AGUIRRE Y RAJOY NO ALCANZAN UN PACTO

Fue la tarde del pasado domingo. Después de su triunfal discurso de estilo obamista, Mariano Rajoy estaba descansando en su casa. Sonó el teléfono, y era Esperanza Aguirre. Sobre la mesa estaba lo que los aguirristas consideraban una agresión: una información de *EL PAÍS* en la que el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, hombre muy respetado y clave en la historia interna del partido, aseguraba que en mayo de 2008 había avisado a Rajoy de que le estaban espiando.

Lapuerta pensaba que eran personas de la Comunidad de Madrid, como respuesta a críticas que había hecho a adjudicaciones de esta administración que consideraba sospechosas. Para colmo, según la visión de los aguirristas, el propio Rajoy, a través de su responsable de Comunicación, Carmen Martínez Castro, había confirmado la noticia. Lapuerta es además amigo del presidente del PP, con lo que todos los aguirristas atribuyeron al líder la bomba informativa.

Espionaje, adjudicaciones y una investigación interna en marcha. Eran demasiados fusiles apuntando a Aguirre, y todos de fuego supuestamente amigo, esto es desde Génova, la sede central del PP. La presidenta llamó al líder para, según diversas fuentes populares, mostrarle su preocupación por la situación y reclamarle que busque una salida que no le haga daño a ella ni al partido.

Rajoy, fiel a su estilo, no entró de lleno en el asunto y trató de tranquilizarla con la idea de que seguramente habrá una solución. Pero no hubo acuerdo, y desde entonces la situación se ha complicado.

El diario *El Mundo* ha publicado graves acusaciones de conductas irregulares tanto de Lapuerta como de su sucesor, Luis Bárcenas, por haber presionado a la Comunidad de Madrid en diversas adjudicaciones. Todos los marianistas lo interpretaron como una venganza del aguirrismo.

A mediados de semana, mientras se publicaban dossiers con supuestas irregularidades de la mano derecha de Aguirre, Ignacio González, amigos y familiares suyos, hubo al menos otra conversación telefónica entre los dos dirigentes, de tenor similar, según las mismas fuentes.

Aguirre insiste en que la investigación interna que dirige la secretaria general, Dolores de Cospedal, es una gran muestra de desconfianza hacia ella, que no va a encontrar nada porque nada hay, y que se debe cerrar cuanto antes.

Rajoy insiste en su ambigüedad. En privado buscan un pacto, pero ella quiere un apoyo público que él no le ha dado. Y por eso las espadas siguen en alto mientras la situación es cada día más explosiva.

El entorno del líder y algunos dirigentes regionales, muy enfadados por lo que consideran un ataque directo al corazón del partido, le piden mano dura, un gesto de autoridad. "Casi todos estamos aquí de paso, pero Lapuerta y Bárcenas son la casa, los que dan continuidad al PP. Ir contra ellos es ir contra el partido, no contra Rajoy. Esto no puede quedar así", señala un marianista.

Mientras, Aguirre no está dispuesta a aceptar que el presidente le pida la cabeza de nadie, porque insiste en que no hay ninguna prueba de que el espionaje saliera de la Comunidad ni de ninguna irregularidad en ninguna adjudicación.

Cospedal, que aún tiene que interrogar a algunos, se prepara para enviar su informe al Comité de Derechos y Garantías del partido. Si su papel recomienda sanciones, como apuntaba el durísimo comunicado de la semana pasada, y éstas no están pactadas con Aguirre, la guerra será total y ella se resistirá hasta el final. De momento todo sucede en pasillos, pero la próxima semana probablemente habrá un Comité Ejecutivo Nacional, el órgano de gobierno, donde se verá hasta dónde llega la batalla y si alguien sigue a Aguirre en su resistencia numantina a ofrecer ninguna cabeza, ni siquiera la de algún jefe intermedio de los espías.

(www.elpais.com, 01/02/09)

137. EL PP SE ENFRENTA A SÍ MISMO

La primera impresión es la que cuenta. Lo primero que dijo un cargo público del PP cuando se destapó el escándalo de espionaje político en la Comunidad de Madrid fue que "si alguien hace lo que no debe, hay que cesarlo", sin contemplaciones. Lo declaró la presidenta de la Asamblea regional, Elvira Rodríguez. Después, matizó sus palabras. Al fundador del PP, Manuel Fraga, lo primero que le vino a la cabeza fue: "Desgraciadamente, hay cosas no resueltas entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento". Después, relativizó los problemas y dijo que eso pasa en todos los partidos. Pero esas dos primeras impresiones

eran las buenas. Tras diez días de polémica ya nadie disimula en el PP dos ideas. Uno: hay temas no resueltos que van a terminar por sangrar el partido. Dos: alguien va a perder la silla por hacer lo que no debía.

Como escándalo político, la situación no tiene episodios recientes con qué compararla. Un vicealcalde de Madrid, un consejero de Justicia y el vicepresidente de la Comunidad han sido espiados. El consejero de Interior es sospechoso de amparar a los autores de parte de los seguimientos. Un ex tesorero del PP denuncia que a él le espiaban en Madrid. El Gobierno de la Comunidad airea públicamente que la cúpula del partido manejaba dossiers contra ellos hace dos años. Los supuestos contenidos de esos informes empiezan a aparecer en los periódicos. El presidente del PP ha ordenado una investigación interna. Todas las víctimas presentes y futuras de esta historia son del mismo partido.

Se ha apoderado del PP la sensación de que no hay marcha atrás. Lo peor está por llegar. Como en los bancos de Wall Street, en el PP nadie sabe exactamente cuánta basura tiene guardada el vecino, ni siquiera cuánta tiene en su propia casa. La desconfianza que esto provoca está paralizando el sistema y la iniciativa política.

El PP podía haber intentado aguantar, esperando a que escampe. No sería la primera vez. Pero esas "cosas no resueltas" que apuntó Fraga hace diez días son las que han terminado por pulverizar la estabilidad lograda tras el congreso de Valencia, en junio de 2008, en el que Mariano Rajoy acalló las críticas a su liderazgo y empezó una nueva etapa en el PP. De esto hace menos de un año. Esas "cosas no resueltas" se van a resolver ahora, o Rajoy posiblemente no siga adelante.

Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre no se han llevado bien nunca, cuentan en el partido. Pero desde que ambos compiten claramente por un puesto en la cúpula del PP la situación ha sido explosiva. Cuando Rajoy presentó las candidaturas de Aguirre y Gallardón para Madrid, en enero de 2007, exhibió la gestión de ambos y dijo que "Madrid es el emblema de la España que quiere el PP".

En enero de 2008, Aguirre estaba dispuesta a dimitir del emblema y de la presidencia de la Comunidad con tal de que Gallardón no fuera diputado, y consiguió que no lo fuera. Al salir de la tensa reunión en la que Rajoy les dio la noticia de que ninguno de los dos iría en las listas electorales, Aguirre destapó todas sus cartas. En un ascensor de Génova 13 le dijo a Gallardón: "Si Mariano pierde, tú y yo estaremos en iguales condiciones" para sucederle. El golpe fue tan duro que el alcalde, bastión electoral del partido, desapareció de la campaña.

Rajoy perdió. Mientras Aguirre amagaba públicamente con disputar el liderazgo del partido, Gallardón permaneció junto a Rajoy. Los seguimientos al vicealcalde de Madrid y al consejero Alfredo Prada, alineados en el bando de Rajoy, se produjeron en esas fechas.

La victoria de Rajoy en el congreso de Valencia reafirmó su liderazgo, aupó a Gallardón, remodeló la cara visible del PP y obligó a Aguirre a retirarse con los suyos a sus cuarteles de invierno, con la vista puesta en el próximo congreso, tres años después. Pero es enero de 2009 y la herida vuelve a sangrar.

La secuencia de los hechos es rapidísima en política. *EL PAÍS* destapa el escándalo del espionaje político, Aguirre niega, Rajoy dice que la cree, Gallardón se suma a la petición de explicaciones, Aguirre desmiente de nuevo y amenaza con los tribunales al periódico y al alcalde, Rajoy explota al ver que ella no asume la más mínima duda y abre una investigación interna, Aguirre airea que Rajoy conocía dossiers contra sus hombres. Todo, entre el 19 y el 27 de enero.

Aguirre ha convertido un problema de la Consejería de Interior de Madrid en un problema de todo el PP. Un experto en comunicación del PP, que no simpatiza con la presidenta, cree que el equipo de Aguirre ha hecho todo lo que no debe hacerse en una crisis. "Primero lo niegan todo y se definen como víctimas. Eso no se debe hacer, es lo que hacen los culpables. Lo primero siempre tiene que ser demostrar la inocencia". Pero además, "después, reparten la mierda. Y por último, matan al mensajero".

La sobreactuación del Gobierno de Madrid ha llevado las cosas a un punto de no retorno. Ya no se puede, por ejemplo, abrir una investigación propia, dar imagen de transparencia y controlar el proceso. "Hemos visto cómo la bola de nieve se convertía en alud, y no sólo no hemos sabido pararlo, sino que ni siquiera nos hemos quitado de en medio", opina este experto. Génova trató sin éxito de que fuera la Comunidad la que actuara, antes de tomar las riendas.

Francisco Granados, el consejero de Justicia e Interior de Madrid y superior de los supuestos espías, desveló el viernes que preguntó a sus subordinados por las denuncias de *EL PAÍS* y no halló nada extraño. Granados ha matizado crípticamente que, sin embargo, en la Comunidad hay miles de

funcionarios. Pero ahora ya es una anécdota. Las investigaciones están en manos de Génova y de la Fiscalía.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, tras decir el primer día que no apreciaba delito, ahora investiga las diversas tramas de espionaje que supuestamente parten de la Consejería de Interior que dirige Granados. Por el momento, ha pedido toda la información necesaria a todos los actores, incluido este periódico.

Desde la secretaría general se ha dejado claro estos días que la investigación interna del partido no es ningún paripé. Se inició con un durísimo comunicado en el que se anunciaban "responsabilidades de carácter estrictamente político que el PP exigiría con absoluta firmeza y determinación".

El objetivo es probar si existe un servicio de espionaje en la Comunidad de Madrid (algo ya negado tajantemente), y saber quién ha realizado los seguimientos al vicepresidente, Ignacio González. La secretaria general, Dolores de Cospedal, no parece que vaya a cerrar la investigación en falso. Prueba de ello es que ha llamado a declarar a su despacho incluso a Sergio Gamón, jefe del área de Seguridad de la Comunidad, citado como "nuestro director" por los autores de uno de los informes.

Gamón, al servicio de Aguirre desde que era presidenta del Senado, es el único de los implicados que es militante del PP. Los demás no sienten ninguna obligación de dar explicaciones a la jefa del partido de su jefe, Granados.

Por ahora no hay la más mínima pista de dónde apuntarán las responsabilidades que los datos que confirme Cospedal. Según los estatutos del partido, se puede expulsar a aquellos que comprometan el honor y la imagen del PP. En cualquier caso, hasta la investigación puede acabar siendo irrelevante. Porque la furibunda reacción del núcleo duro del aguirrismo (Aguirre, González y Granados), al poner el grito en el cielo con el espionaje a González, ha puesto el ventilador en su casa. Puede que el fiscal acabe siendo el único interesado en saber quién hizo el dossier sobre González, mientras se airean supuestos negocios sucios del vicepresidente y otros personajes de su entorno como Ildelfonso de Miguel o Pedro Antonio Martín Marín.

El pasado jueves, un ex alto cargo de la Comunidad, Pedro Ortiz, contó con una ligereza pasmosa en una tertulia radiofónica cómo Martín Marín le presionó para recalificar un terreno protegido. Son el tipo de cosas que hacen temer en el PP que se haya abierto la veda. Todos contra todos y nadie sabe quiénes son los suyos. La parte del PP ajena a esta situación, es decir, la inmensa mayoría, sólo espera que los que han apretado los botones del ventilador lo paren antes de que los papeles lleguen al pasillo.

Responsabilidades aparte, el problema político es mayúsculo. El PP se la juega en apenas un mes en las elecciones gallegas y vascas, con dos candidatos jóvenes y primerizos que quieren ser la mejor imagen del mejor PP del mejor Rajoy. El candidato gallego, Alberto Núñez Feijóo, dio una conferencia con Rajoy en el Club Siglo XXI de Madrid el pasado jueves. No trascendió absolutamente nada en los medios nacionales más que una frase de Rajoy pidiendo altura de miras al PP. El candidato vasco, Antonio Basagoiti, dijo ese día que estaba "hasta las narices" del asunto del espionaje, que está arrinconando su campaña.

El propio Rajoy dio el domingo pasado el que iba a ser el discurso del año. Paro, jóvenes, esperanza, esfuerzo y patriotismo en un evento multitudinario de corte obamista preparado durante meses. No consiguió colocar un mensaje claro en los grandes medios de comunicación. Nada a lo que el PSOE o el Gobierno tuvieran que responder con urgencia. Nada que hiciera consciente que estamos en campaña electoral o que el PP tenga algo que decir sobre el paro.

Pero muchos sí recordarán que Rajoy garantizó la "unidad del partido pase lo que pase". En junio del año pasado, haciendo cábalas sobre el liderazgo del PP, un destacado parlamentario del partido advertía a los periodistas: "Si nos ponemos a final de año con 800.000 parados más, no se pueden descartar elecciones anticipadas". El año 2008 terminó con un millón de parados más y visiones terroríficas. Las encuestas de finales de diciembre revelaban que el PP no lo había capitalizado.

Un mes después, una encuesta de Metroscopia para *EL PAÍS* realizada en los días más duros del escándalo de espionaje revelaba que el PP está todavía más lejos, a 7,6 puntos en intención directa (en las elecciones perdió por una diferencia de 2,6). Por ahora, Zapatero sólo ha pasado apuros por la situación económica el día que lo atornillaron los ciudadanos en TVE.

También en este aspecto lo peor está por venir, intuye una fuente parlamentaria. Esta semana se reanuda la actividad en el Congreso y el Senado tras el parón de enero. "Cuando vengan los ministros se van a reír de nosotros. Van a hacer chistes con este asunto". El PSOE y el Gobierno, por ahora, son espectadores atónitos tanto como cualquier ciudadano. Pero en el momento en que tengan que defenderse en el Parlamento tienen material de sobra para desacreditar al PP hasta que no depure responsabilidades internas.

(www.elpais.com, 01/02/09)

138. LAS TRES CLAVES SECRETAS DEL ENREDO

Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha recibido uno de los encargos más envenenados de su carrera: investigar las supuestas malas prácticas de un Gobierno del PP, el de la Comunidad de Madrid, que lidera con aplastante autoridad Esperanza Aguirre, el principal y, a estas alturas, casi único referente de la corriente crítica del partido.

La tarea se complica porque las personas a las que debe investigar Cospedal (Esperanza Aguirre, Ignacio González o Francisco Granados, entre otros) han sido, hasta hace muy poco, sus jefes políticos directos, sus principales mentores o sus amigos de escapada veraniega.

Pese a todo, según cuentan algunas de las personas que han pasado ya por la "sala de interrogatorios" de Cospedal está intentando hacer una investigación fría y profesional. Y eso que algunos de los sujetos que pueden resultar cruciales para desentrañar todo lo ocurrido (principalmente ex policías que han trabajado en el servicio acusado de espionaje) se niegan a comparecer con la excusa de que no pertenecen al PP.

El escenario en el que se maneja Dolores de Cospedal tiene unos actores que se mueven en un círculo de intereses políticos y tiene otros actores en una obra de teatro paralela donde lo que manda son las implicaciones económicas.

La decisión de Cospedal respecto a la investigación abierta puede marcar un antes y un después en la historia del PP. Así están las cosas.

La guerra de los dossiers. La guerra de los dossiers es muy vieja en la Comunidad de Madrid. A comienzos de la primera legislatura de Esperanza Aguirre, octubre de 2004, proliferaron los informes secretos que se lanzaban contra el PP buscando vinculaciones entre algunos dirigentes populares y el denominado tamayazo (la fuga de dos diputados socialistas en una votación crucial que impidió a Rafael Simancas ser presidente de la Comunidad de Madrid y dio una segunda oportunidad a Esperanza Aguirre para ganar en las urnas ese puesto). Se hallaron muchos vínculos entre el PP, sus aladaños y Eduardo Tamayo, el último gran tráfuga de la democracia española, pero nadie acreditó una compra del voto que hubiera implicado responsabilidades penales.

Más tarde llegó la adjudicación de la explotación de la Plaza de las Ventas, un negocio supuestamente muy apetitoso, en el que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, empezó su exitosa carrera para reclutar a legiones de enemigos. La empresa perdedora recurrió a los tribunales. Y González, según explican desde el Gobierno regional, empezó a sospechar que Alfredo Prada, entonces segundo vicepresidente de la Comunidad, que compartía con él los máximos galones después de la presidenta, le hacía luz de gas y se aliaba con sus enemigos para informar contra él. Prada siempre lo ha negado. Por si acaso, González y la presidenta le pusieron a Prada, que era consejero de Interior, un guardián ex policía llamado Sergio Gamón al que colocaron como director general de Seguridad, neutralizando a la persona de confianza de Prada que hasta entonces ejercía, sin tanto cargo, ese mismo puesto. Luego llegaron más dossiers sobre las propiedades de González, las hipotecas de sus casas, las adjudicaciones a sus familiares, amigos y conocidos, sus tratos de favor a empresarios especialmente beneficiados en el Canal de Isabel II, la poderosa compañía pública que preside.

- Empresas molestas. Los intereses económicos de empresas molestas por no haber sido beneficiarias del maná de la Comunidad de Madrid, una administración rica y gran inversora, han arrojado durante los últimos cuatro años una concienzuda cadena de sospechas sobre el honor de González y algunos cargos de su confianza a los que ha colocado en sitios estratégicos. Esas empresas perdedoras en múltiples concursos encuadraron sus sospechas y denuncias en carpetas donde aparecían datos públicos que se pueden encontrar en el Registro Mercantil o en el Boletín Oficial de la Comunidad junto a algunos detalles, a veces sorprendentes, de la vida privada de González. Así completaban un panorama sombrío sobre supuestas prácticas corruptas del vicepresidente de la Comunidad. Él siempre lo ha

negado. Es el alto cargo de Madrid, y probablemente de España, que más dossiers por adjudicaciones sospechosas tiene. Y lleva dando explicaciones de su honorabilidad mucho tiempo. Lo tuvo que hacer ante su propio partido porque Álvaro Lapuerta, tesorero nacional los últimos 25 años, quiso saber más de sus propiedades en 2006. Y en 2008, el propio Lapuerta se sentía espiado por las personas sobre las que puso sus sospechas, entre ellas el propio González.

- Enemigos irreconciliables. Desde la Consejería de Interior se hicieron seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada; y a su hombre de confianza y director de Seguridad en la Ciudad de la Justicia, Juan Carlos Fernández. Los dos políticos espiados no apoyaban precisamente a Esperanza Aguirre en la batalla por el poder del PP y se declaraban enemigos irreconciliables de Ignacio González. El espionaje, documentado, ocurrió entre marzo y mayo de 2008, cuando caían chuzos de punta sobre el PP tras la derrota electoral. Los ex policías que hicieron el seguimiento citaban en sus partes a sus jefes directos: Sergio Gamón y Miguel Castaño, que no despachaban casi nunca con el consejero de Interior, Francisco Granados, según ha declarado. El viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, es quién manda en Gamón. Y Halffter confía tan poco en Granados como el consejero confía en él, porque sabe que es un hombre de González. El consejero del Interior ya intentó acabar con Sergio Gamón cuando éste irrumpió con cuatro de sus hombres en un despacho de la consejería de Justicia donde pensaba que se guardaban dossiers muy comprometedores para él mismo y para miembros del Gobierno regional. Pero una semana después de destituir a Gamón, le volvió a nombrar. Y ahí sigue.

(www.elpais.com, 01/02/09)

139. EL 71,6% DE LOS ESPAÑOLES CREE QUE LOS CASOS DE ESPIONAJE EN PP SON GRAVES O MUY GRAVES

Según los datos de El Barómetro, difundido por La Sexta Noticias, el 71,6 por ciento de los españoles cree que los casos de espionaje que están afectando al Partido Popular de Madrid son graves o muy graves. Solo un 18,5 por ciento los califica de nada o poco graves.



Esperanza Aguirre y su equipo son los principales responsables del espionaje, según el 32,5 por ciento de los españoles. Según el 12,1 por ciento, el responsable es Mariano Rajoy. El 7,2 por ciento considera que el responsable es Alberto Ruiz-Gallardón con su equipo.



El Barómetro ha sido realizado a través de 1.100 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI), representativas de la población española (por comunidad autónoma, hábitat, sexo y edad).

(www.elplural.com, 31/12/09)

140. EL GOBIERNO DE AGUIRRE MANEJA UNA RED PARALELA DE MÓVILES PREPAGO

Desde hace más de un año, algunos miembros (consejeros y altos cargos) del Gobierno de la Comunidad de Madrid tienen dos teléfonos móviles para trabajar. El habitual, con el que realizan todas las llamadas y al que se remiten los periodistas para hablar con ellos, y otro, de modelo muy básico, que reciben de la Consejería de Presidencia con tarjeta prepago y que cambian cada 15 días. Este sistema de comunicaciones, que alerta de la desconfianza que se ha instalado en el seno del Ejecutivo autónomo, arrancó en las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

En la actualidad este sistema de seguridad no se aplica a todos los consejeros ni a todos los altos cargos, sino solamente algunos. Según distintas fuentes, esta precaución fue adoptada por el vicepresidente Ignacio González, la persona con más poder de la Administración regional después de Esperanza Aguirre. González ha sido en los últimos años el principal objetivo de duras acusaciones, la mayoría gruesas, que, escudadas en el anonimato, denunciaban tratos de favor a determinadas empresas vinculadas por lazos familiares o de amistad con él. Algunos de los altos cargos que reciben esos teléfonos para sus comunicaciones más delicadas no los utilizan nunca en los 15 días de vida útil y se limitan a cambiarlos cuando se les dice en la sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad.

Por otro lado, González ha presentado una denuncia en el Juzgado 47 de la plaza de Castilla exigiendo que se investigue el origen de los seguimientos que ha sufrido en los últimos años, y de los que han quedado pruebas gráficas en al menos un dossier. En su denuncia, González nada dice de los seguimientos que tuvieron su origen supuestamente en la Consejería de Interior de la propia Comunidad de Madrid y que afectan a una persona que era miembro del Gobierno regional cuando sufrió el espionaje, el ex consejero de Justicia Alfredo Prada.

González, según distintas fuentes, ha presentado la denuncia en su calidad de vicepresidente y portavoz del Ejecutivo de Aguirre. En concreto, lo ha hecho a través del secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En ella, según los citados medios, se refiere a las informaciones publicadas por *EL PAÍS*, con soporte documental, que indican que ha sido objeto de seguimientos en viajes de carácter oficial y privados realizados al extranjero. Y pide al juez que comisione a la policía judicial para que investigue quien está detrás de esos seguimientos, que, señala, pueden ser constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

También pide al juez, José Sierra, que indague quién elaboró el dossier de 69 páginas del que se hizo eco el diario Público el 28 de enero y que da cuenta de una investigación realizada sobre él durante meses. González detalla que el citado informe recoge datos sobre su patrimonio, su familia y amistades políticas y privadas, así como adjudicaciones de contratos públicos en los que él ha intervenido en función de su cargo de vicepresidente.

Según González, para elaborar ese informe se han producido "violaciones al derecho a la intimidad" de él y su "familia". Lamenta que los autores de los mismos hayan tenido acceso a información privada mediante "abusos informáticos" y sustracción de documentos, "entre otras actuaciones ilegales".

La Comunidad de Madrid también ha presentado ante el juez Sierra una denuncia, paralela a la de González, por los seguimientos que igualmente habría sufrido el gerente del Canal de Isabel II de Madrid, Ildefonso de Miguel, de los que informó este periódico el pasado 20 de enero. En este caso, la Comunidad demanda que se investigue si De Miguel fue espiado durante un viaje que realizó a Cartagena de Indias (Colombia), en agosto de 2008, acompañando al vicepresidente González, presidente del Canal de Isabel II. De ese viaje hay un informe que contiene fotografías y documentos privados de González. De Miguel sostiene que las fotos fueron captadas con cámaras ocultas y de modo clandestino. También pide que se investigue un informe de 32 páginas que adelantó la cadena SER y que alude a De Miguel como hombre de confianza de González. Ese informe contiene fotos de las supuestas casas de lujo y fincas que posee De Miguel.

(www.elpais.com, 02/02/09)

141. PRADA: "ES UN ATENTADO A MI PRIVACIDAD"

El ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada negó "con rotundidad" haber ordenado "seguimientos, dosieres" o cualquier otra "labor que no fueran las del departamento" que dirigió hasta la última remodelación de la presidenta, Esperanza Aguirre, tras haberse visto implicado en la supuesta trama de espionaje en la Administración autonómica, informa Europa Press.

En declaraciones en Londres, donde tomó parte en el congreso de constitución del PP de Reino Unido, Prada reconoció la gravedad del caso. Por ello, confirmó haber trasladado la cuestión a la fiscalía, donde espera que se "depuren las responsabilidades que se tengan de depurar, si finalmente se demuestra la existencia de delito" en los registros en los que aparecen ámbitos de su vida privada.

"Hubo referencias, que son ciertas, y aparecen miembros de mi propia familia, que son menores de edad", advirtió, en lo que calificó como "un atentado" contra su derecho a la privacidad. "Que todos lo tenemos, aunque estemos en la vida pública", aseveró.

Además, en referencia a las informaciones que apuntan a su departamento, insistió en que, "en ningún momento, ninguna persona recibió ninguna indicación de dedicarse a otras labores" de una cartera que, recordó, tuvo una actividad "intensísima" en la que figuró desde la reacción a los atentados del 11 de marzo de 2004 al incendio del edificio Windsor, la bomba en la T-4 de Barajas o la modernización del cuerpo de bomberos.

Sin embargo, reiteró "con rotundidad, que en ningún momento se hizo ningún seguimiento". "No bajo mi responsabilidad", aclaró.

(www.elpais.com, 02/02/09)

142. AGUIRRE ACEPTA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA DE MADRID

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta mañana que el PP regional "va aceptar la comisión de investigación en la Asamblea" madrileña con el fin de demostrar que el Gobierno que preside "no ha espiado a nadie". A su llegada a un desayuno informativo en el que interviene el candidato popular a la presidencia de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Aguirre ha dicho que su objetivo con esta decisión es "dejar totalmente claro" su interés "en la transparencia, claridad, la luz y los taquígrafos". Por otro lado, Aguirre ha eludido responder a la pregunta de si la semana pasada mantuvo conversaciones con el presidente del PP, Mariano Rajoy. Según publicó **EL PAÍS**, Aguirre trató sin éxito de pactar con Rajoy el fin de la crisis de los espías.

El Parlamento autonómico debe decidir precisamente esta semana sobre esta cuestión, después de que tanto el PSOE como Izquierda Unida hayan reclamado la creación de una comisión en la Asamblea. Los partidos de la oposición **registraron la solicitud** el día 27.

La presidenta de Madrid ha explicado que la comisión de investigación es "un instrumento" y por tanto lo van a aceptar. La primera ocasión para hablar sobre ella será durante la reunión de la Mesa de la Asamblea, donde se estudiará la solicitud de la oposición desde el punto de vista técnico. El debate político llegará mañana, martes, cuando la Junta de Portavoces aborde el fondo de la cuestión y la

califique. Si el asunto es de "interés general", habrá comisión. En cualquier caso, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, deberá volver a enfrentarse a las preguntas sobre este mismo tema el próximo jueves, durante el pleno de la Asamblea.

Gómez: "Lo más grave en democracia"

En el escrito, la oposición proponía que la comisión esté formada por cuatro diputados del PP, tres del PSOE y uno de IU; que los trabajos finalicen antes del 30 de junio; y que los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y funcionarios estén "obligados" a comparecer si son requeridos. La portavoz socialista, Maru Menéndez, considera que la comisión es absolutamente necesaria para investigar las "supuestas irregularidades del Gobierno de la Comunidad de Madrid o de cualquiera de las instituciones en el territorio de la Comunidad de Madrid", al considerar insuficientes las explicaciones dadas por el consejero en la comisión de Interior el pasado viernes, a petición propia.

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, fue incluso más lejos al subrayar que o se crea esta comisión "o el consejero Granados tiene que dimitir", puesto que lo ocurrido es "lo más grave en democracia en la comunidad autónoma". Además, indicó que la comparecencia del consejero demostró que "tiene muchas más información de la que ha contado y que alguna indagación ha hecho en la Consejería de Interior". Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, exigió también la constitución de una comisión de investigación ad hoc, con el fin de lograr respuestas "claras y contundentes" sobre la supuesta red de espionaje a altos cargos desvelada en los últimos días.

(www.elpais.com, 02/02/09)

143. AGUIRRE ANUNCIA QUE VAN ACEPTAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que el PP de Madrid va a aceptar la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, para "dejar claro que nuestro interés es que se sepa que le Gobierno no ha espiado a nadie".

La lideresa del PP, quien ha defendido desde el primer momento que la trama "va a quedar en nada", responde así a la solicitud realizada por el PSOE y por IU. "El PP de Madrid va a aceptar la comisión de investigación en la Asamblea para dejar totalmente claro que nuestro interés es la transparencia, la claridad, y la luz y taquígrafos", ha precisado.

La presidenta de Madrid ha explicado que la comisión de investigación es "un instrumento" y por tanto lo van a aceptar en una reunión que se celebre en la Mesa y la Junta de Portavoces. Aguirre, quien desde el momento en el que saltó la trama ha reclamado "transparencia", se autodefinió como "una víctima" porque "políticamente van a por mí". Asimismo, Aguirre ha eludido responder a la pregunta de si la semana pasada ha mantenido conversaciones con el presidente del PP, Mariano Rajoy.

La primera ocasión para hablar sobre la comisión de investigación será este lunes, durante la reunión de la Mesa de la Asamblea, donde se estudiará la solicitud de la oposición desde el punto de vista técnico. El debate político llegará mañana, martes, cuando la Junta de Portavoces aborde el fondo de la cuestión. En cualquier caso, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, deberá volver a enfrentarse a las preguntas de la izquierda sobre este mismo tema el próximo jueves, durante el pleno de la Asamblea.

(www.publico.es, 02/02/09)

144. COSPEDAL SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EN EL PP SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta tarde que la investigación interna que realiza en el seno del PP sobre el escándalo de espionaje queda "en suspenso". En un comunicado leído en la sede de Génova, De Cospedal ha argumentado que no tiene sentido mantener tres líneas de investigación paralelas sobre un mismo asunto: sus pesquisas, la causa abierta por la justicia y la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid a la que Esperanza Aguirre ha dado luz verde esta misma mañana. Cospedal ha tenido mucho cuidado en repetir que la investigación no se cierra, sino que se aparca mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial, que son las que deben depurar responsabilidades políticas y penales respectivamente.

"La verdad siempre es beneficiosa para todo el mundo", ha sentenciado la número dos del partido. A preguntas de los periodistas, Cospedal ha agregado que tanto ella misma como Rajoy están dispuestos a comparecer en el Parlamento regional, al tiempo que ha negado que este gesto de Génova se deba a un pacto entre Rajoy y Aguirre de comisión por comisión. "No hace falta ningún pacto", ha subrayado. Cospedal no ha querido adelantar nada sobre las conclusiones a las que ha llegado tras varios días de trabajos, ha calificado de "adecuada" la decisión de Aguirre y ha dicho una y otra vez que "el órgano judicial y el parlamentario" son los que deben pronunciarse al respecto.

Este anuncio se ha producido unas horas después de que la presidenta de Madrid diera su visto bueno a la apertura de la comisión de investigación **pedida por PSOE e IU** el día 27, a pesar de que la semana pasada algunas voces del PP madrileño descartaran esta posibilidad. A la entrada de un desayuno informativo en el que ha intervenido el candidato popular a la presidencia de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Aguirre ha explicado a los periodistas que el PP regional "va aceptar la comisión" para "dejar totalmente claro" su interés "en la transparencia, claridad, la luz y los taquígrafos" y con el fin de demostrar que el Gobierno que preside "no ha espiado a nadie".

Poco después, Aguirre ha comunicado la noticia a Génova, donde ha calmado a los barones a los que Mariano Rajoy había reunido para hablar de financiación. Los líderes del PP en las 17 comunidades se han mostrado satisfechos con la medida y muchos de ellos se han pronunciado a favor de que el asunto se aclare cuanto antes. Inmediatamente después del anuncio de Aguirre, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha exigido que la comisión se convoque de forma "inmediata" y que el órgano sea "rápido en su funcionamiento". A su juicio, la situación del Gobierno autonómico "no puede continuar sujeta a las luchas internas" y "cuanto antes tiene que esclarecer todos los ámbitos de esa presunta trama de espionaje".

IU ha pedido que la Presidencia del organismo recaiga en manos de la oposición para permitir que la investigación llegue hasta el final. Inés Sabanés no quiere que "haya blindajes" y se convierta "en un juego de mayorías y minorías como ocurrió en la de Tamayo", en referencia al tráfuga que boicoteó la votación de investidura del socialista Rafael Simancas. El portavoz del PP madrileño, David Pérez, ha informado por su parte de que la comisión "empezará a funcionar de manera inmediata" y que posiblemente "podría estar funcionando la semana que viene". Además, el dirigente popular ha negado que el PP madrileño haya pactado con Génova la comisión, ya que "estas decisiones no se adoptan a base de pactos sino a base de compromisos y el compromiso de la Comunidad de Madrid está en la transparencia".

El Parlamento autonómico debe decidir precisamente esta semana sobre la comisión. La Mesa de la Asamblea estudiará la solicitud de la oposición desde el punto de vista técnico. El debate político llegará mañana, martes, cuando la Junta de Portavoces aborde el fondo de la cuestión y la califique. Si el asunto es considerado de "interés general", como todo parece indicar, habrá comisión. En el escrito, la oposición proponía que la comisión esté formada por cuatro diputados del PP, tres del PSOE y uno de IU; que los trabajos finalicen antes del 30 de junio; y que los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y funcionarios estén "obligados" a comparecer si son requeridos. En cualquier caso, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, deberá volver a enfrentarse a las preguntas sobre este mismo tema el próximo jueves, durante el pleno de la Asamblea.

(www.elpais.com, 02/02/09)

145. COSPEDAL ANUNCIA QUE EL PP SUSPENDE LA INVESTIGACIÓN INTERNA EL CASO DE ESPIONAJE

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que su partido deja en suspenso la investigación interna sobre el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial que pueda depurar responsabilidades políticas y penales. Cospedal ha hecho este anuncio en una comparecencia ante los periodistas en la sede nacional del Partido Popular, en la que ha subrayado que "la verdad siempre es beneficiosa para todo el mundo".

La dirigente del PP ha señalado que la comisión de investigación parlamentaria de la Asamblea de Madrid es el cauce adecuado para dirimir eventuales responsabilidades políticas. Precisamente, esta mañana, Esperanza Aguirre ha anunciado que va a apoyar esta comisión en la Asamblea.

Cospedal ha explicado que la investigación judicial abierta es el cauce adecuado para conocer eventuales responsabilidades penales. Por ello, ha anunciado que mientras esas dos investigaciones se

llevan a cabo (la parlamentaria y la judicial), el PP deja en suspenso su investigación interna. Además, ha garantizado que el Partido Popular está dispuesto a colaborar tanto con la justicia como con la Asamblea de Madrid en el desarrollo de sus trabajos.

Horas antes al anuncio de Cospedal, a la entrada de un desayuno informativo en el que ha intervenido el candidato popular a la presidencia de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Aguirre se había referido a la supuesta red de espionaje en la Comunidad de Madrid, y se había mostrado dispuesta a aceptar una comisión de investigación en la Asamblea, como habían solicitado el PSOE e IU.

"El PP de Madrid va a aceptar la comisión de investigación en la Asamblea para dejar totalmente claro que nuestro interés es la transparencia, la claridad, y la luz y taquígrafos", ha precisado, tras asegurar que la Comunidad quiere dejar claro que no se ha espiado a nadie.

La presidenta de Madrid había explicado que la comisión de investigación es "un instrumento" y por tanto lo van a aceptar en una reunión que se celebre en la Mesa y la Junta de Portavoces. Asimismo, Aguirre ha eludido responder a la pregunta de si la semana pasada mantuvo conversaciones con el presidente del PP, Mariano Rajoy.

(www.elperiodico.com, 02/02/09)

146. RAJOY CONCEDE UNA TREGUA A AGUIRRE PERO MANTIENE VIVA SU AMENAZA

Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre son como la noche y el día. Ella es una mujer de acción, en ocasiones precipitada; él es hombre de reacción, y sólo a veces. Por eso, fue ella la que, de nuevo, en una situación de bloqueo que amenazaba con destrozar la imagen de su Gobierno y romper el partido, movió ficha. Ante la evidencia de que se iba a enfrentar en Génova, sede central del PP, a todos los barones, muy molestos por cómo ella ha esquivado cualquier responsabilidad en el escándalo de los espías en la Comunidad de Madrid, Aguirre se adelantó y, a primera hora, antes de la reunión de los líderes regionales, anunció que aceptará la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que piden PSOE e IU.

Rajoy tardó varias horas en reaccionar, pero lo hizo. A última hora de la tarde, la secretaria general, Dolores de Cospedal -el líder sigue huyendo de los periodistas y sólo habla, a veces, fuera de Madrid- anunció solemnemente que suspende temporalmente -"no se cierra", aclaró dos veces- la investigación interna que había abierto la guerra total entre Rajoy y Aguirre.

El líder concede así una tregua a su gran enemiga interna, como respuesta al gesto de ésta, pero mantiene su amenaza de reabrir la investigación en cualquier momento si la comisión no resulta satisfactoria y no despeja las sospechas. Fuentes de ambos bandos insisten en que no había pacto previo, que ha sido más bien una acción-reacción en esta delicadísima jugada de ajedrez que tiene en vilo a todo el PP.

La guerra no ha terminado. Cospedal dejó muy claro que quiere que la comisión no sea un paripé en el que Aguirre aproveche su mayoría absoluta para negar las comparecencias clave. De hecho, llegó a decir que ella, que tiene mucha información tras sus 10 días de investigación, y Rajoy, que conocía de la existencia de dossiers y espionajes desde 2006, están dispuestos a acudir.

Aguirre y Rajoy, después de varias llamadas telefónicas con infructuosos intentos de pacto, han encontrado así una vía intermedia que les permite ganar algo de tiempo, aunque también garantiza que este asunto estará en la primera plana durante toda la campaña electoral de las vascas y, sobre todo, de las gallegas, claves para el futuro del líder.

Pero las espadas siguen en alto. Dirigentes regionales y del entorno de Rajoy insisten en que las revelaciones periodísticas son de tal gravedad, y la reacción de los aguirristas desvelando supuestas irregularidades del tesorero del PP tan inauditas, que este asunto sólo se puede resolver con alguna dimisión. "La dirección recuerda a todos los dirigentes su obligación de mantener una conducta acorde con los estatutos", dice el comunicado como aviso a navegantes. El texto deja muy claro que Génova abre la puerta para que sea la propia Aguirre, a través de la comisión, quien depure responsabilidades: "La dirección del PP considera que la comisión parlamentaria, en el ámbito de la mayor claridad y transparencia posibles, es un cauce adecuado para depurar eventuales responsabilidades políticas".

Varios dirigentes marianistas expresan claramente en privado su deseo de que todo este escándalo acabe con la dimisión de Ignacio González, la mano derecha de Aguirre, centro de dossiers,

seguimientos y sospechas, y enemigo declarado de Rajoy, que lo echó sin contemplaciones de la dirección nacional.

El enfado del líder con los últimos acontecimientos y con la reacción de los aguirristas era de tal nivel, según los que hablan con él, que algunos empezaban a dar por hecho que iba a pedir alguna cabeza. De hecho, así se había interpretado por algunos barones una frase que Rajoy pronunció en la reunión de la mañana.

Aguirre ya se había marchado, a inaugurar una exposición de Francis Bacon en El Prado, después de anunciar ante los barones -que ya lo sabían por los teletipos de agencia- la comisión de investigación. Al final, después de horas hablando de financiación, Luisa Fernanda Rudi, presidenta del PP aragonés y lo suficientemente veterana como para atreverse a romper el hielo, dijo que se alegraba de la noticia que había dado Aguirre y que esperaba que todo esto "se aclare cuanto antes".

Rajoy recogió el guante. Dijo que era "muy positiva" la noticia de la apertura de la comisión, que se iba a cerrar en cuanto se pudiera la investigación interna -no parecía que a esa hora estuviese decidido suspenderla- y al final, en un análisis sobre las responsabilidades de cada cual en la crisis, soltó: "Cada uno tiene que saber lo que tiene debajo". Esto es, un político no puede alegar desconocimiento de lo que hacen sus subordinados para evitar asumir responsabilidades.

Otra de las claves de la versión oficial ofrecida por Cospedal hay que buscarla en la prensa. Rajoy y los suyos le dan mucha credibilidad a lo publicado por *EL PAÍS* -fue la revelación del espionaje de Alfredo Prada lo que les hizo abrir la investigación interna-, y esperan nuevas entregas en cualquier momento. Por eso, Cospedal hizo una salvedad a esa suspensión: "Estamos abiertos a que cualquier dato relevante que aparezca y pueda ser importante sea puesto en conocimiento de la comisión de investigación".

En cualquier caso, Cospedal, en tono muy serio, dejó clara la gravedad de la crisis: "Trabajamos en defensa de la honorabilidad del PP y por respeto a nuestros 10 millones de votantes".

(www.elpais.com, 03/02/09)

147. PUNTOS A INVESTIGAR

- 1. Seguimiento a altos cargos del PP por trabajadores a sueldo de la Consejería de Interior de Madrid.

Los espías, según los partes de seguimiento: Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid), Alfredo Prada (ex consejero de Justicia), Juan Carlos Fernández (director de Seguridad del campus de la Justicia). Supuestos autores: Dirección General de Seguridad, equipo dirigido por Sergio Gamón, con trabajadores fijos y eventuales del departamento. Álvaro Lapuerta (ex tesorero nacional del PP) lo denuncia ante Rajoy sin pruebas documentales.

- 2. Seguimiento a Ignacio González e Idefonso de Miguel (gerente del Canal de Isabel II).

Autores: desconocidos. En los dossiers se hace referencia a adjudicaciones sospechosas con empresarios perjudicados.

- 3. Adjudicaciones sospechosas por parte del Gobierno de Madrid. -Explotación de la plaza de Las Ventas.

-Adjudicación de la seguridad en el Canal de Isabel II y en el Metro. Beneficiario: Enrique Sánchez Flores (pasó con González unas vacaciones en 2008).

-Adjudicación de carreteras (la denunció Lapuerta).

-Adjudicación del campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II.

-Recalificación de suelo protegido a favor de Pedro Antonio Martín Marín, ex alto cargo de José María Aznar.

(www.elpais.com, 03/02/09)

Espionaje político en la Comunidad de Madrid **UNA COMISIÓN EXPRÉS**

La Asamblea de Madrid dio el primer paso para crear una comisión de investigación que llegue al fondo del caso de espionaje que sacude al PP madrileño. Habrá que esperar para conocer los detalles del funcionamiento de la comisión, pero la cosa no pinta bien, según la oposición (PSOE e IU), porque el PP quiere una comisión a su medida. Una investigación exprés.

El PP pretende asegurarse la presidencia de la comisión a la que ha puesto caducidad: 28 de febrero. Lo que deja sólo dos semanas de indagaciones. "El objetivo es aportar transparencia a uno de los casos más graves que se han producido en nuestra región, pero parece que el PP no pretende eso", señala Maru Menéndez, portavoz del PSOE en la Asamblea. La oposición critica la falta de flexibilidad de los interrogatorios. "Será una comparecencia única con una sola pregunta", señala Inés Sabanés, de IU.

Aunque aún no hay una lista sobre las personas que desfilarán por la comisión, ya hay algunas pistas. "Llamaremos a Cospedal", asegura Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, quien agregó: "No descartamos llamar a cualquiera que tenga que ver con este caso". Gómez evitó reconocer si citarán a Rajoy, pero señaló que su grupo estudia hacerlo.

(www.elpais.com, 03/02/09)

148. AGUIRRE DUDA DE QUE LA INVESTIGACIÓN HALLE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sostenido esta mañana que su Gobierno aceptó "desde el primer día" una comisión de investigación en la Asamblea regional para "determinar si ha habido responsabilidades políticas" en la supuesta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid, aunque varios miembros del PP regional pusieron en duda la necesidad de su constitución y hasta no estaba claro que el PP fuera a permitirla. En todo caso, Aguirre ha añadido que no cree que se vayan a hallar implicaciones de miembros de su Gobierno en la red.

Durante un acto público en Ciempozuelos, Aguirre ha insistido en que en el PP lo que quieren "es que haya transparencia y claridad y que se demuestre que el Gobierno regional no ha espiado a nadie". "Luz y taquígrafos", ha vuelto a reclamar la presidenta madrileña, que de nuevo ha negado la existencia de un "pacto" con el líder del PP, Mariano Rajoy para suspender la investigación interna sobre la trama que realizaba el partido. "La investigación judicial [abierta el 26 de enero] derivará en su caso en las responsabilidades penales que haya por el espionaje, si es que existen responsabilidades, qué delitos hay, quiénes son los delincuentes (...). La Asamblea investigará si hay en su caso responsabilidad política. Yo creo que no y por eso lo que digo es que no tengo nada que ocultar", ha dicho Aguirre.

Para Aguirre, lo importante ahora es que los madrileños sepan que "sus derechos, sus libertades y su intimidad están absolutamente protegidos" y por eso ha dicho que a la Justicia le toca averiguar si ha habido "algún delito, quienes han sido los delincuentes y que pena les van a imponer los jueces", en el caso de que se demuestre que sí hubo seguimientos ilegales. La presidenta ha negado también que haya "tardado mucho" en aceptar la formación de una comisión de investigación en el parlamento madrileño y ha recordado que no fue hasta cuando se reunió la Mesa de la Asamblea y se votó a favor de llevar a cabo este proceso, cuya solicitud registró en la cámara no el PP sino el PSOE e IU.

A pesar de que Aguirre presupone que no hay responsabilidades que buscar, Rajoy ha asegurado poco antes que se queda "muy tranquilo" con la comisión de investigación y que lo único que quiere es "que se sepa la verdad". "Es un paso adelante que valoro muy bien", ha dicho, en alusión a la comisión de investigación que se abrirá en la asamblea de Madrid, y se ha confesado "muy contento" de que se haya optado por esa solución. "Quiero transparencia, claridad y saber lo que ha pasado", ha afirmado Rajoy en una entrevista en Rac-1 en la que ha opinado que "si es verdad que ha habido espionaje y dossiers, se haga con dinero público o sin él", le parece "lamentable y bochornoso y si se hace con dinero público muchísimo peor". Asimismo, ha reconocido que polémicas como ésta "hacen daño, porque hacen que no se hable de lo realmente importante", y "no ayudan nada" en puertas de unas elecciones vascas y gallegas. Sin embargo, Rajoy ha afirmado que la opinión pública "distingue muy bien" cada situación y ha añadido que en Galicia se votará pensando en quién es el mejor presidente para la comunidad.

Aún así, Rajoy ha insistido en que cree "en la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario", y ha añadido que considera una "buena decisión" que una comisión investigue el asunto, porque ello responde "al sentido común". Rajoy ha justificado además la decisión tomada por el PP de **suspender temporalmente** la investigación interna sobre el supuesto espionaje mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial que pueda depurar responsabilidades políticas y penales.

El líder del PP ha afirmado que su partido no podría citar a funcionarios de la comunidad que no son del PP, y que además no tiene "ni la mitad de los medios" que una investigación parlamentaria y judicial, por lo que su versión se limitaría a la de "dos o tres dirigentes políticos importantes". Si hay anotaciones personales en algunos de los documentos, ha añadido, "se pueden hacer pruebas caligráficas" durante una investigación judicial.

Rajoy ha admitido que los documentos que en las últimas semanas ha publicado *EL PAÍS* sobre la trama "existen", porque ese diario "no se los ha inventado", pero no saben "quiénes los han confeccionado y quién lo ha ordenado". La postura de Rajoy contrasta con la de otros importantes miembros del partido, como el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que **descalificó a *EL PAÍS*** y al redactor que ha destapado la trama de espionaje, Francisco Mercado, al que acusó de "fabricar cuatro o cinco portadas falsas y engañar a sus lectores". En sus primeras declaraciones sobre el asunto, la propia Aguirre contestó al periodista que le preguntaba sobre la noticia: "¿Y usted por qué cree a *EL PAÍS*". La presidenta marzó así la línea de defensa, que ha sido desde el primer momento negar los hechos. Francisco Granados, el consejero de cuyo departamento parte la trama, habla también de "un gran bulo".

Tras esta entrevista en la radio, Rajoy ha ofrecido una rueda de prensa tras una reunión con empresarios y dirigentes sindicales de Cataluña, en la que ha defendido la presunción de inocencia de la presidenta de la comunidad de Madrid y ha negado haber visto jamás "ningún dossier" sobre seguimientos a altos cargos. "Jamás he visto ningún dossier de esos que dice usted que llegaron. A mí nunca me ha llegado ningún dossier". A la pregunta de si pondría la mano en el fuego por la gestión de Aguirre en esta polémica, ha respondido: "Tengo la mejor opinión de todos los miembros de mi partido y creo en la presunción de inocencia, y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política".

(www.elpais.com, 03/02/09)

149. LOS MÓVILES PREPAGO SE CAMBIABAN CADA SEMANA EN 2007

La revelación de que el Gobierno popular de la Comunidad Madrid utiliza móviles prepago alternativos que se cambian cada 15 días como forma de evitar que las conversaciones delicadas sean espiadas causó estupor entre la mayoría de los dirigentes del PP consultados. No así, obviamente, entre los consejeros de Esperanza Aguirre, que cada 15 días asisten, a la entrada del consejo de Gobierno de los jueves, a la puesta en marcha de esta medida de seguridad ordenada por el vicepresidente, Ignacio González.

Ahora se realiza el cambio de móviles cada dos semanas, pero hace casi dos años, cuando comenzó, en la campaña electoral de 2007, se hacía todas las semanas. Muchos consejeros se quejaron, según comentaron algunos de ellos a *EL PAÍS*, por el engorro que suponía, y se empezó a hacer cada dos semanas. Uno de cada dos jueves, tres funcionarios reparten los móviles a la entrada y reclaman el anterior. Como muchos consejeros se lo han olvidado -el que llevan encima es el que usan habitualmente- estos funcionarios envían a otros a recoger el móvil antiguo en los despachos de los consejeros. Precisamente estas molestias hicieron que se espaciara la renovación.

Muchos consejeros rechazan el móvil prepago o lo guardan en un cajón, porque lo consideran una medida de protección excesiva, aunque González, que se sabe espiado -*EL PAÍS* reveló las pruebas de que fue seguido en Colombia y Suráfrica- insiste en la necesidad de utilizarlo para llamadas delicadas.

El sistema de la red paralela de teléfonos móviles está muy perfeccionado. Cada uno de los móviles tiene instalado en su memoria los teléfonos reservados de los otros consejeros, la única manera para no perderse con el cambio de numeración de todo el Gobierno cada semana.

De manera que si alguien quiere contactar de forma reservada con otro consejero, y en especial con el vicepresidente, el que más temor tiene a ser espiado -entre otras cosas porque es el que más decisiones económicas de alto nivel toma y el que, por ello, más enemigos tiene entre los empresarios- sólo debe buscar en la memoria del móvil prepago el nombre al que desea llamar y marcarlo.

Esta elaboración implica el trabajo de una serie de funcionarios que se encargan de mantener en marcha un sistema que se usa en Madrid desde las elecciones en las que Esperanza Aguirre confirmó y amplió su mayoría absoluta pero también abrió paso a la batalla interna del PP que sigue abierta.

(www.elpais.com, 03/02/09)

150. COSPEDAL REHÚYE UN NUEVO PACTO SOBRE EL FIN DEL TRASVASE DEL TAJO

La situación del Estatuto de Castilla-La Mancha se mantiene empantanada al no haberse renovado el acuerdo entre el PSOE y el PP de la región, que en 2007 les llevó a aprobar la reforma del estatuto. Las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron un pleno, forzado por la mayoría socialista, para que el presidente de la comunidad, José María Barreda, y la presidenta del PP de la región, María Dolores de Cospedal, explicaran en qué posición está cada uno ante los cambios que demanda el Congreso.

Barreda informó de la alternativa que está oficiosamente pactada con el Gobierno de España y con el grupo socialista, y remitida al Grupo Popular. Cospedal, por su parte, no se movió de la tesis de que su grupo acordó un texto en 2007 y no va a modificarlo. Lo cierto es que el texto que Cospedal aprobó con Barreda es rechazado por el PP de Valencia y el de Murcia, por eso los socialistas han trabajado en una alternativa. La nueva fórmula consiste en que la caducidad del trasvase del Tajo al Segura en 2015 queda en el preámbulo como mera declaración de principios y la comunidad se reserva 600 hectómetros cúbicos no trasvasables.

(www.elpais.com, 03/02/09)

151. EL PP SUSPENDE TEMPORALMENTE LA INVESTIGACIÓN INTERNA SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se apuntó el primer tanto en el enfrentamiento que mantiene con la dirección nacional del PP a cuenta de la supuesta trama de espionaje que cuestiona a varios cargos de su Ejecutivo. Le bastó dar un **sí a la comisión de investigación que le pedían PSOE e IU en la Asamblea de Madrid**, para que el líder del PP, Mariano Rajoy ordenara parar las máquinas. Así, a las 18.30 de la tarde, la secretaria general del partido, **María Dolores de Cospedal**, comparecía ante la prensa para informar de que quedaban “en suspenso” las pesquisas sobre la trama, iniciadas por ella misma hace tan sólo once días.

Además de hacer dar marcha atrás a Rajoy, el PP madrileño, con mayoría en la Asamblea, conseguía que la comisión de investigación vaya a desarrollarse en un tiempo record. Han puesto como tope el 28 de febrero y los conservadores confían en iniciar los trabajos la próxima semana.

Pese a ello, el comunicado mantenía que “la dirección del PP considera que la comisión parlamentaria, en el ámbito de la mayor claridad y transparencia posibles, es un cauce adecuado para depurar eventuales responsabilidades políticas”

La secretaria general del PP fue muy insistente a la hora de señalar que la “suspensión” –jamás usó la palabra “cierre”– no se debía a un pacto entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. En la Comunidad la versión era la misma: “Yo puedo asegurarles que no [hay pacto], pero a lo mejor ustedes no me creen”, aseguraba la presidenta de los conservadores madrileños. Con pacto o sin él, en la Comunidad se apuntan un tanto.

El anuncio llegaba diez horas después de que Aguirre anunciara que su formación aceptaba la comisión de investigación en la Asamblea sobre la presunta trama de espionaje. Aguirre hacía estas declaraciones a su llegada a un desayuno informativo protagonizado por el presidente de los conservadores gallegos, Alberto Núñez Feijóo. Era la noticia del día, aunque el viernes ya la dejaron caer algunos de sus consejeros.

Poco después de las palabras de la presidenta, eran varios los dirigentes del PP que daban por “muerta” la investigación del partido. Mientras, el entorno de Aguirre se mantenía sereno: “Cospedal puede seguir investigando. Sólo va a llegar a una conclusión; el Gobierno de la Comunidad ni ha amparado ni ha conocido el seguimiento de nadie”.

No obstante, recordaban que si Rajoy en algún momento había pedido a la Comunidad que aceptara una investigación en sede parlamentaria, ya la tenía. La pelota estaba ahora en el tejado del presidente del PP.

No es ningún secreto que la presidenta de la Comunidad de Madrid se había sentido abandonada por la dirección del partido cuando se anunció la apertura de la investigación interna. Le escoció la rotundidad del comunicado y el hecho de que De Cospedal escogiera para hacerlo público la misma tarde que ella

negaba las informaciones publicadas por *El País*. "Dimos una imagen penosa, parecíamos dos partidos diferentes", se quejan desde la sede del Ejecutivo regional.

Aguirre intentó disimular su enfado en público, pero jamás dejó de lanzar dardos envenenados. A sabiendas de que De Cospedal ya estaba entrevistando a algunos de los afectados, ella seguía con el mismo discurso: "El PP de Madrid no tiene que demostrar que es inocente. Son los que nos acusan los que tienen que probarlo. Y tendrán que rectificar, o a los tribunales".

Además de compartir con la prensa su disposición a ir a la Asamblea, Aguirre tuvo la oportunidad de comentárselo al resto de presidentes regionales de su partido. Lo hizo en una reunión a media mañana en la sede del PP, a la que los barones habían acudido para hablar de financiación autonómica. Consciente de que algunos de sus compañeros, sobre todo los de las comunidades con elecciones a la vuelta de la esquina, están molestos con el daño que la supuesta trama puede hacerles en las urnas, la presidenta quiso compartir con ellos su buena noticia. El propio Rajoy lo corroboró al final de la reunión, al filo de las dos de la tarde. "Que se aclare cuanto antes", fue el comentario más extendido.

Tan rápido pretende el PP que transcurran las pesquisas, que ha acordado, con la indignación de la oposición, que la comisión finalice el 28 de febrero. De Cospedal mantuvo que será de la investigación de la Asamblea de donde puedan extraerse responsabilidades políticas, "si las hubiera". Y del proceso abierto en los tribunales, las penales. Si los resultados finales apuntasen a algún culpable, "el PP actuará de forma inmediata", añade el comunicado.

Además, se puso a disposición de la Asamblea en el supuesto de que fuera necesaria su presencia para hacer cualquier tipo de aclaración. Rajoy también estaría dispuesto. No obstante, rechazó aventurar posibles desenlaces". Sí hubo una llamada a la unidad: "Estamos recibiendo ataques. A mí y a la inmensa mayoría de mis compañeros nos han servido para convencernos más de que tenemos una responsabilidad que es ganar las próximas elecciones".

152. RAJOY PONE LA MANO EN EL FUEGO POR AGUIRRE

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha defendido la presunción de inocencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el caso del supuesto espionaje en la Comunidad, y **ha negado haber visto jamás "ningún dossier"** sobre seguimientos a altos cargos. Rajoy ha asegurado, en respuesta a un periodista: "Jamás he visto ningún dossier de esos que dice usted que llegaron. A mí nunca me ha llegado ningún dossier".

A la pregunta de si pondría la mano en el fuego por la gestión de Aguirre en esta polémica, ha respondido: "Tengo la mejor opinión de todos los miembros de mi partido y creo en la presunción de inocencia, y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política".

Lo cierto es que Rajoy sólo tiene una certeza sobre la presunta trama de espionaje en el PP de la Comunidad de Madrid. "No voy a dimitir porque yo no he hecho nada. Me debo a los militantes del PP que me eligieron en el congreso de Valencia".

Todo lo demás es una inmensa duda para el líder conservador, quien ha asegurado que se queda "muy tranquilo" con la **comisión de investigación sobre el presunto espionaje** que, todo sea dicho de paso, "hace daño". "Lo único que quiero es que se sepa la verdad", ha argumentado Rajoy, quien desea "transparencia, claridad y saber lo que ha pasado".

En una entrevista en RAC1, Rajoy ha asegurado que "si es verdad que ha habido espionaje y dossieres, se haga con dinero público o sin él, me parece lamentable y bochornoso, y si se hace con dinero público muchísimo peor". Aún así, Rajoy ha insistido en que cree "en la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario", y ha añadido que considera una "buena decisión" que una comisión investigue el asunto, porque ello responde "al sentido común".

Rajoy ha justificado la decisión tomada por el PP de **suspender la investigación interna** sobre el supuesto espionaje mientras se desarrolla la investigación parlamentaria y judicial que pueda depurar responsabilidades políticas y penales. El líder del PP ha afirmado que su partido no podría citar a funcionarios de la comunidad que no son del PP, y que además no tiene "ni la mitad de los medios" que una investigación pública y judicial, por lo que su versión se limitaría a la de "dos o tres dirigentes políticos importantes". Si hay anotaciones personales en algunos de los documentos, ha añadido, "se pueden hacer pruebas caligráficas" durante una investigación judicial.

Rajoy ha asegurado que los documentos que en las últimas semanas ha publicado el diario *El País* sobre el supuesto espionaje "existen", porque ese diario no se los ha "inventado", pero "no sabemos quiénes los han confeccionado y quién lo ha ordenado".

Asimismo, ha admitido que polémicas como esta "hacen daño, porque hacen que no se hable de lo realmente importante", y "no ayudan nada" en puertas de unas elecciones vascas y gallegas. Sin embargo, Rajoy ha afirmado que la opinión pública "distingue muy bien" cada situación y ha añadido que en Galicia se votará pensando en quién es el mejor presidente para la comunidad. Es un paso adelante que valoro muy bien", ha dicho, en alusión a la comisión de investigación que se abrirá en la asamblea de Madrid, y se ha confesado "muy contento" de que se haya optado por esa solución.

(www.publico.es, 03/02/09)

153. RAJOY DA TREGUA A AGUIRRE Y LE CEDE LAS PESQUISAS DEL CASO DE ESPIONAJE

Tregua en el PP. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre se van a conceder un respiro: el líder de los populares ha decidido "suspender" la investigación interna que ordenó en torno al escándalo del espionaje, supuestamente ligado a la Comunidad de Madrid. Justo lo que la presidenta regional quería. Pero el alto el fuego no le ha salido gratis a Aguirre.

Ha tenido que dar su brazo a torcer y, en contra de su criterio inicial, acceder a apoyar una comisión de investigación parlamentaria sobre este asunto. ¿Hubo pacto entre ambos para cambiar una investigación por otra? Los dos lo niegan. Pero la coincidencia es demasiado llamativa como para no albergar dudas.

El caso es que investigar, se investigará, aunque en vez de en la sede central de los conservadores, se hará en el Parlamento madrileño. Resulta curioso que Aguirre prefiera que sea la oposición, y no su propio partido, la que ponga la lupa sobre sus colaboradores y las supuestas relaciones con el espionaje a otros políticos. Claro que el Grupo Popular tiene mayoría en la Asamblea regional y, por tanto, capacidad de imponer su criterio. No obstante, el PP asegura que no permitirá un cierre en falso, dado que algunos de sus dirigentes han sido objeto de espionajes. Y lanzan un mensaje a Aguirre: si el tema vuelve a enturbiarse, la investigación del partido se reactivará.

Fue la presidenta de Madrid la primera en mover ficha. A las nueve de la mañana anunció que respaldaba una comisión parlamentaria para que se sepa que no ha "espiado a nadie". Según fuentes de su entorno, Aguirre tomó la decisión el domingo. Hasta entonces, les asaltaban dudas. Sí eran defensores de esa iniciativa política su vicepresidente, Ignacio González, espiado y protagonista de varios dossiers ligados al tráfico de influencias, y el consejero de Interior, Francisco Granados, responsable del supuesto equipo de espías de la Comunidad.

"No hubo ningún pacto con Rajoy. Pero se hartó de que le reprocharan que no aceptaba la comisión de la Asamblea porque tenía algo que ocultar", enfatizan las citadas fuentes. Por la mañana, Aguirre comunicó a la prensa su decisión. Después, acudió a la sede del PP y, en una reunión con Rajoy y el resto de barones territoriales, dio explicaciones al respecto. Se marchó de allí pronto porque tenía un acto con los Príncipes, pero estuvo el tiempo suficiente para oír que tanto al líder del partido, como al resto de presidentes autonómicos veían bien la apertura de la comisión.

En esa misma reunión --en principio dedicada a la financiación autonómica--, Rajoy tuvo que escuchar a sus presidentes territoriales reclamar que el escándalo del espionaje se cierre cuanto antes. Todos comparten que mantener vivo el asunto perjudica a todos.

Por la tarde, Rajoy recogió la pelota que Aguirre dejó en su tejado. Su número dos, Dolores de Cospedal, anunció oficialmente que se suspendía la investigación interna, por considerar que las eventuales responsabilidades políticas se depurarían en la Cámara autonómica y las penales, en los tribunales. "Es difícil que un partido llegue a sitios donde no llegue el juez", admitió.

Calificó así de "sinsentido" mantener una investigación propia paralela, por lo que optó por dejar en suspenso sus trabajos hasta el fin de la investigación de la Asamblea, previsto para el 28 de febrero, justo la víspera de las elecciones en Euskadi y Galicia. De Cospedal dijo que tanto ella como su jefe estarían dispuestos a acudir a la comisión. El equipo de Rajoy, inmerso ya en precampaña electoral, respiró aliviado. Aguirre también. A ver cuanto dura el oxígeno.

(www.elperiodico.com, 03/02/09)

154. CINCO PREGUNTAS PARA EL SEÑOR GONZÁLEZ

La estrategia de los dirigentes del PP es meridiana: están dispuestos a hablar todo lo que haga falta sobre el **espionaje en Madrid**, pero evitan entrar en las sospechas de corrupción que se recogen en los dossiers elaborados sobre Ignacio González, el número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad. El **principal informe, de 69 páginas de extensión**, lleva casi dos años en manos de la cúpula del PP.

Las razones que explican esta estrategia también son obvias. La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid estará controlada por el PP, no sólo por tener mayoría absoluta, sino porque el Gobierno de Aguirre decidirá qué información acepta suministrarle. Y es previsible que los debates se centren en personajes más o menos subalternos, como Marcos Peña o Sergio Gamón, cuya cabeza se puede cortar y colocar mañana en otro puesto de la Comunidad.

Una investigación a fondo sobre las adjudicaciones del vicepresidente González es, en cambio, potencialmente explosiva para Aguirre. Y materia para examinar desde luego no falta, a la vista de lo que ya se conoce de los dossiers.

Una de las cuestiones que Ignacio González no ha aclarado es el origen de los más de 8.000 euros que costó un viaje a Johannesburgo (Suráfrica), que el vicepresidente realizó junto a su esposa y varios empresarios en marzo de 2008.

De acuerdo con un informe que *El País* desveló el pasado 20 de enero, el viaje fue un regalo de Enrique Sánchez en agradecimiento por los contratos públicos recibidos de la Comunidad. Una versión que negó González: "Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien".

¿Y cómo genera un funcionario público 8.000 euros en metálico? Legalmente y sin justificante bancario, sólo si recibe algún ingreso extraordinario, por ejemplo con la venta de algún bien o la recepción de una herencia.

Pero la declaración de González adquiere una relevancia especial si la relacionamos con uno de los datos que constan en el dossier que desveló Público hace una semana. "El investigado tiene una caja de caudales en Barclays donde parece ser que tiene dinero líquido", se indica textualmente en dicho informe. De momento, el vicepresidente no se ha pronunciado sobre este asunto.

En sus breves declaraciones a *El País*, González también aseguró que jamás le había adjudicado "nada" al empresario Enrique Sánchez. Una afirmación que resultó ser falsa. Público **descubrió** que el Canal de Isabel II empresa pública que preside González adjudicó un contrato de 33 millones a Segurisa y otro de 2,6 millones a Saminsa, ambas sociedades cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. ¿Por qué ocultó el vicepresidente estas concesiones?

Ignacio González tampoco ha ofrecido ninguna explicación sobre diversas adjudicaciones públicas sospechosas, que despertaron la alarma entre sus propios compañeros de partido.

La más sorprendente fue la concesión que realizó el Canal de Isabel II para explotar un campo de golf, en el barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las sociedades Iridium, Soto Once y Tecnoconcret.

Esta última es propiedad de José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y un cuñado de González. Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando recibió la concesión del campo de golf.

También ha sido polémica la adjudicación para gestionar la señal de las televisiones digitales locales de Madrid, que ha quedado en manos de dos empresas Centanor Spain y Secuencia Pixels controladas por Fernando Ruano, cuñado de Ildfonso de Miguel, que es el gerente del Canal y el más estrecho colaborador de González.

En definitiva, que si el PP quiere que los ciudadanos confíen en sus proclamas a favor de la transparencia, aquí tiene cinco preguntas que siguen pendientes de una respuesta detallada.

(www.publico.es, 03/02/09)

La cuestiones que no aclara el vicepresidente

1. ¿Cuál es el origen de los 8.000 euros en metálico que, según el vicepresidente, utilizó para pagar el viaje a Johannesburgo?

2. ¿Es cierto que tiene una caja de caudales en Barclays, como se afirma en el 'dossier' sobre González que manejó la cúpula del PP?

3. ¿Por qué mintió el vicepresidente sobre las adjudicaciones concedidas al empresario Enrique Sánchez, con el que viajó a Suráfrica?

4. ¿Por qué adjudicó González la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid al socio de su hermano?

5. ¿Por qué concedió la gestión de la señal de las televisiones digitales locales a empresas vinculadas al director del Canal de Isabel II y persona de su máxima confianza, Ildefonso de Miguel?

(www.publico.es, 03/02/09)

155. SERGIO GAMÓN ADMITE QUE NO TIENE ESTRUCTURA NI PRESUPUESTO NI FUNCIONES DELIMITADAS

El director del Área de Seguridad de la Consejería madrileña de Presidencia, Justicia e Interior, el ex policía Sergio Gamón, ha explicado esta tarde en la Asamblea de Madrid que su trabajo consiste en "elaborar un estudio sobre las necesidades de seguridad privada en los edificios institucionales dependientes" del Gobierno de Esperanza Aguirre. En una tensa y breve comparecencia celebrada en el Parlamento regional, Gamón -ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre y ex director general de Seguridad- ha reconocido que el cargo que desempeña desde hace cerca de siete meses no dispone de "estructura orgánica, ni de programa presupuestario" y que sus competencias no figuran en el decreto de su nombramiento, si bien ha anunciado éstas se delimitarán "perfectamente" en un decreto que el Consejo de Gobierno aprobará en breve.

Sergio Gamón, una de las cabezas, según ha revelado *EL PAÍS*, de los tres equipos de vigilancia pararelos que existen en la trama de espionaje de la Comunidad de Madrid, ha destacado en su comparecencia sus "vínculos" con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de la que ha dicho que le "llamó expresamente para trabajar en su gabinete en el tema de seguridad". "Ustedes destacan mi vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me hubiera gustado que también hubieran dicho que tengo vínculos con la vicepresidenta primera del Gobierno de España", les ha recriminado Gamón a los diputados del PSOE e IU.

"Trabajé tanto con Esperanza Aguirre como con María Teresa Fernández de la Vega y además llamado personalmente por ella. He trabajado tanto con el PP como con el PSOE y cualquier partido, porque en 27 años ejerciendo labores en el Cuerpo Nacional de Policía he coincidido con muchísima gente", ha añadido. Sergio Gamón fue nombrado director del Área de Seguridad de la Consejería que dirige Francisco Granados el 24 de julio de 2008, cuatro días después de ser destituido como director de Seguridad tras publicar este diario que había perpetrado un registro irregular en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero de Justicia Alfredo Prada, destituido apenas cuatro días antes por su apoyo a Mariano Rajoy. Tras dicho registro, desapareció el ordenador de Fernández.

Gamón se ha desvinculado de este asunto, ha recordado que la Fiscalía ha "sobreseído" el caso y ha pedido a los representantes de la oposición que no le imputen el presunto robo de información de un ordenador si la Justicia dice que no hay pruebas. "Les pido que sean justos, porque lo del Campus de la Justicia está sobreseído por la Fiscalía. La Justicia, en la que yo creo, ha dicho que está sobreseído y, aunque no tengo inconveniente en hablar de ello, no se me puede imputar ningún hecho que la Justicia no considere probado". La comparecencia se ha producido en la Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior y la registró el PSOE el 28 de octubre de 2008, a raíz de su nombramiento como director del Área de Seguridad, con el fin de conocer sus "objetivos, planes y proyectos" de legislatura.

La presunta trama de espionaje desvelada desde hace días por este diario ha otorgado a dicha comparecencia un interés especial, que ha llevado a la oposición a formularle un exhaustivo interrogatorio sobre su papel en la red de espías. Gamón ha rehusado contestar al interrogatorio y se ha limitado a insistir en que su cometido es elaborar un "estudio o auditoría del modelo de seguridad privada que utiliza la Comunidad de Madrid en sus 35 edificios y sedes institucionales, que deberá concluir en una propuesta de modificación para hacerla más eficiente". Tras deslindar su actividad de la de los "asesores" y "técnicos" de la consejería, ha señalado que su estudio lo está elaborando en "estrecha colaboración con las secretarías generales técnicas de las diferentes consejerías" del Gobierno regional.

Esta comparecencia ha acabado siendo un aperitivo de la comisión que investigará la trama en la Asamblea de Madrid. Se constituirá el próximo viernes, 6 de febrero, día en que los grupos deberán registrar ya sus peticiones de comparecencia, según ha acordado la Junta de Portavoces de la Cámara. Los grupos tienen de plazo hasta el jueves 5 a mediodía para decidir quiénes serán sus representantes en la comisión (cinco del PP, tres del PSOE y uno de IU), que el mismo día en que se constituya deberá fijar su calendario de trabajo. AEI portavoz del PP, David Pérez, ha acusado a sus homólogas de la oposición, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU), de no tener voluntad política para llegar al fondo del asunto, y viceversa. David Pérez ha dicho que ha ve "cariacotecidas" a Menéndez y a Sabanés y que nota "rabioso" al secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, desde que **Esperanza Aguirre** anunciara que aceptaba la comisión.

(www.elpais.com, 03/02/09)

156. UN PERSONAJE CLAVE DE LA TRAMA DE LOS ESPÍAS EVITA CONTESTAR A LOS DIPUTADOS

No ha hecho ni una sola declaración pública. Evita a los periodistas. Y eso que aparece en el centro de la trama de espionaje. Primero, porque era el director de Seguridad cuando se produjo. Segundo, porque su nombre aparece en los informes -"entra nuestro director, Sergio", se lee en el del seguimiento a Alfredo Prada-. Y tercero, porque fue destituido por espiar a Prada, que después fue seguido de nuevo. Es Sergio Gamón, "protagonista de esta película del que no conocemos aún al director", sentenció la diputada socialista Encarnación Moya. Por eso la expectación era máxima cuando Gamón compareció en la Comisión de Interior para explicar cuál es su trabajo.

Pero el ex policía volvió a dar esquinazo a políticos y periodistas, con la colaboración de la presidenta de la comisión, Pilar Liébana, del PP, que insistía en exigir a los diputados del PSOE e IU que no le preguntaran al ex policía por lo que está en todos los periódicos, sino por el asunto de la comparecencia, esto es ¿cuál es su trabajo?

Las preguntas estaban todas: ¿Ante quién responde? ¿Es el jefe de los espías? ¿Es una de esas personas por las que Francisco Granados no se atrevió a poner la mano en el fuego? ¿Por qué le cesaron cuando robó un ordenador y lo recolocaron a los cuatro días? Las respuestas, casi ninguna.

Después de un largo listado de cuestiones que afectaban a su imagen -la diputada del PP Cristina Cifuentes llegó a pedirle "perdón en nombre de todos los parlamentarios" por las preguntas de Miguel Reneses, de IU- Gamón se contuvo y sólo entró al trazo en dos cosas.

Ante la pregunta de si mantiene amistad con Esperanza Aguirre -fue su jefe de escoltas cuando presidía el Senado, y es eso, según fuentes populares, lo que hizo que después de su fulminante destitución le buscaran un puesto de "director de área" prácticamente sin atribuciones-, el ex policía se alteró: "Me preguntan sobre mi relación con Aguirre. ¿Por qué no me preguntan sobre mi relación con María Teresa Fernández de la Vega? Ella me llamó expresamente para trabajar en su gabinete en el tema de seguridad. En 27 años de policía he trabajado con el PSOE y con el PP". Una portavoz de la vicepresidenta aseguró a *EL PAÍS*: "Eso es imposible, ella no le conocía de nada".

Gamón trabajó un año para De la Vega, pero es militante del PP, y fue Aguirre quien le dio un puesto de relevancia política, director general de Seguridad, y quien ahora le mantiene como director de área con un salario alto, de 91.657 euros brutos al año.

El ex policía también perdió la paciencia cuando le preguntaron por el robo del ordenador en el despacho de un hombre de confianza de Alfredo Prada, al día siguiente de que Aguirre lo echara. "Me gustaría que fueran un poquito justos. El caso está sobreesido. La justicia en la que yo creo ha dicho que no hay prueba alguna". Efectivamente, no se encontraron pruebas porque cuando el fiscal pidió los vídeos de seguridad de las instalaciones ya se habían borrado.

De lo demás, ni palabra. Se limitó a explicar a que su puesto no tiene estructura orgánica ni dotación presupuestaria, y su función es elaborar "un estudio sobre las necesidades de seguridad privada en los edificios dependientes de la Comunidad". Las explicaciones fueron tan vagas, y la comparecencia tan breve y tensa, que la oposición sostuvo que Gamón "tiene mucho tiempo libre", cobra por no hacer nada y por "deudas pasadas".

El ex policía tendrá que comparecer de nuevo, casi con seguridad, en la comisión que arranca sus trabajos el viernes. Aún no hay nada decidido sobre la manera en la que desarrollará. Sobre todo si se admiten o no repreguntas, como ha sucedido en todas las comisiones del Congreso y en la de Tamayo y Sáenz en la Asamblea. Sólo hubo una comisión sin repreguntas, esto es con sucesión de monólogos. Fue la del incendio de Guadalajara en 2005. La investigación política fue un desastre, y el PP criticó el rodillo socialista que impidió ir más allá, aunque al final dimitió la consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo.

Todo parece indicar que Aguirre quiere controlar la comisión estrechamente. Como primera medida, no ha cedido a la petición de que el presidente, personaje clave para cortar preguntas, como se vio con Gamón, sea de la oposición. Ésa era la tradición en la democracia española. Es lo que sucedió en comisiones famosas como el 11-M, Gescartera (con Aznar), Filesa y Naseiro, todas presididas por CC. Otras conocidas, como la del caso Mariano Rubio o el caso Roldán, fueron para el PNV. Obviando esta tradición, Aguirre dará la presidencia a un diputado del PP y además de máxima confianza. Se trata de Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto y por tanto miembro de la dirección del Grupo Popular. El portavoz del PP en la comisión será David Pérez, que es a su vez portavoz en la Asamblea y por tanto jefe de Martín Vasco.

(www.elpais.com, 04/02/09)

157. DE ROLDÁN AL 11-M Y EL 'TAMAYAZO'

- 15 Comisiones de Investigación. En el Congreso de los Diputados se han celebrado 15 comisiones de investigación de asuntos como malos tratos a detenidos en *El País Vasco*, catástrofes aéreas, Rumasa, financiación de partidos, caso Renfe, caso Roldán, caso Rubio, privatización de Intelhorce, tramitación de expedientes de la Agencia Tributaria, fraude del lino, Gescartera y 11-M. El Senado creó una sobre los GAL en 1995 que no llegó a funcionar.

- Presidencia de las minorías. Se ha cumplido siempre la costumbre de que el presidente fuera de un partido minoritario. Coalición Canaria presidió la del 11-M, la del lino y Gescartera. CiU la de Roldán y el PNV la de Mariano Rubio. La de Roldán fue la última a puerta cerrada y la del 11-M, la más larga: 13 meses, seis de ellos de interrogatorios. El tiempo medio del resto fue de tres meses. La de la matanza de los trenes no tuvo límite de tiempo en las comparecencias y fue un puro interrogatorio.

- Comisiones autonómicas. La del tamayazo en la Asamblea de Madrid la presidió Francisco Granados (PP); duró un mes y no hubo límites en los interrogatorios. En Navarra se celebró la del caso Urralburu y en Castilla-La Mancha la del incendio de Guadalajara, limitada a un mes.

(www.elpais.com, 04/02/09)

158. RAJOY SOBRE LOS ESPÍAS: "NO SON RUMORES, ESOS DOCUMENTOS EXISTEN"

Todos los dirigentes del PP señalaban estos días que la dirección concedía mucha credibilidad a las informaciones sobre el espionaje entre compañeros de partido que ha publicado *EL PAÍS*. Pero hasta ahora nadie lo había dejado tan claro como Mariano Rajoy en Barcelona. En una entrevista con la cadena de radio Rac 1 fue tajante al avalar las informaciones de *EL PAÍS* y contradecir, por tanto, la tesis de Esperanza Aguirre, que insiste en que todo es una "gran mentira" urdida por este periódico, a pesar de que se ha visto forzada a conceder la creación de una comisión de investigación.

Preguntado expresamente por las informaciones de *EL PAÍS*, Rajoy señaló: "Una cosa es que se publiquen rumores y otra cosa es que, como ha sucedido, se publiquen muchos documentos. Esos documentos existen. Lo que no sabemos es quién los ha confeccionado y quién los ha ordenado. Yo quiero transparencia y claridad, es bueno que se sepa la verdad y por eso es bueno que se haya abierto una comisión de investigación".

El líder del PP llegó incluso a sugerir que si hay anotaciones personales en algunos de los documentos, como se ve en los que ha publicado este periódico, se pueden hacer pruebas caligráficas durante una investigación judicial. El departamento de Interior de Madrid no ha intentado esas pruebas caligráficas a las que se refiere el líder del PP. Rajoy señaló que si ha habido espionaje y dossiers -se hagan con dinero público o sin él- "es lamentable y bochornoso. Y si se hace con dinero público muchísimo peor", concluyó.

Poco después de acudir a la radio, el líder del PP volvió a tratar de esquivar a los periodistas. Llevaba 18 días sin enfrentarse a una rueda de prensa, y se vio por qué. Apenas aguantó una pregunta sobre la

trama de espionaje de la Comunidad de Madrid: "Si usted conocía la existencia de los dossiers, ¿por qué no tomó cartas en el asunto?", le preguntaron. La réplica, breve y forzada, fue la siguiente: "No he visto jamás ningún dossier, si ustedes tienen uno, me gustaría verlo".

En 2006, Álvaro Lapuerta, entonces tesorero del PP, informó a Rajoy de que tenía en su poder un dossier sobre concesiones irregulares de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El entorno del líder ha confirmado esta información. Aunque Rajoy no llegó a ver el dossier, sí supo de su existencia -es lo que le preguntaban- y en vez de ir al juzgado o a los medios, se lo contó en secreto a Esperanza Aguirre, según ha confirmado ésta. Y ahí quedó todo hasta que la prensa lo investigó.

La siguiente pregunta fue si habrá alguna dimisión. Cambió el semblante e incluso su tono de proverbial ironía. Se limitó a replicar: "No responderé nada más sobre este tema y me remito a la nota que hizo pública el partido" el lunes. Hubo otro intento, también sin éxito. Y nada más.

(www.elpais.com, 04/02/09)

159. RAJOY ENDOSA A AGUIRRE EL COSTE ELECTORAL DEL ESCÁNDALO DE MADRID

Mariano Rajoy intenta tomar distancia respecto a la trama de los espías y, de paso, blindarse ante futuros fiascos electorales. El líder del PP aprovechó su paso por Barcelona para lanzar un mensaje a la militancia que no es baladí: dejó caer que el escándalo del espionaje a políticos, presuntamente relacionado con el Gobierno de Esperanza Aguirre, podría perjudicar seriamente al partido. Especialmente cuando apenas queda un mes para los comicios gallegos y vascos y cuatro para las elecciones europeas.

Y es que, según se deduce de sus palabras, Rajoy considera que este asunto daña seriamente la imagen de los populares y, además, imposibilita que los medios de comunicación recojan otro tipo de discursos y temas, más propios de la oposición y de tiempos de crisis. "Un escándalo como este hace daño, porque hace que no se hable de lo realmente importante", afirmó.

No obstante, Rajoy dijo estar contento de que Aguirre haya aceptado, finalmente, apoyar una comisión de investigación en el Parlamento regional de Madrid, una iniciativa que le ha permitido aparcarse, al menos de momento, la investigación interna que había ordenado. "Si es verdad que ha habido espionaje y dossieres, se haga con dinero público o sin él, me parece lamentable y bochornoso. Y si se hace con dinero público, muchísimo peor", señaló en declaraciones a RAC-1, a fin de justificar la necesidad de seguir buscando "la verdad".

Eso sí, reconoció que el PP no tiene "ni la mitad de los medios" que una Cámara regional o un juzgado para poder investigar, puesto que no tiene potestad para obligar a personal de la Comunidad de Madrid no afiliado al partido a prestar declaración ante su secretaria general, Dolores de Cospedal. Además, sacó a colación que los documentos que se han publicado sobre seguimientos a terceros llevan anotaciones personales. En su opinión, un juez podría ordenar pruebas caligráficas que dieran un poco de luz a tan oscuro asunto.

Ya en la rueda de prensa que ofreció en Barcelona, tras reunirse con la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, Rajoy trató de defenderse de quienes le acusan de conocer desde el 2006 la existencia de dossieres sobre el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. "A mí nunca me ha llegado ningún dossier", señaló. Y eso parece que es verdad. No le llegaron, pero sabía de su existencia desde hace dos años, cuando el tesorero de su partido, Álvaro Lapuerta, le habló de esos informes.

Sin embargo, tampoco quiso Rajoy arremeter directamente contra ninguno de sus compañeros de organización. "Tengo la mejor opinión de todos los miembros del PP y creo en la presunción de inocencia. Y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política", enfatizó.

¿Eso significa que el líder de los populares descarta que los miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre estén implicados en la trama de espionaje?. No lo parece, a tenor del aviso que dejó en el aire: "Cualquier persona tiene que saber quiénes son sus colaboradores".

Y mientras Rajoy se declaraba "entusiasta" de la investigación parlamentaria, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, rebajaba las expectativas creadas. Él decía en Barcelona: "Soy un entusiasta de esa comisión. Que se sepa lo que se tenga que saber, si se tiene que saber algo". Ella, mientras tanto, lanzaba augurios exculpatorios. "La investigación judicial derivará, en su caso, en responsabilidades

penales que haya por el espionaje, si las hay. La Asamblea investigará si hay responsabilidad política. Yo creo que no y digo que no tengo nada que ocultar", recalcó.

El equipo de Aguirre trabaja ya en los preparativos de la comisión. Y, sin micrófonos delante, se mofa de que la dirección del PP ya prepare la venda para una posible herida electoral. Una herida que podría complicar el futuro del partido.

(www.elperiodico.com, 04/02/09)

160. RAJOY CELEBRA QUE LA ASAMBLEA DE MADRID INVESTIGUE LA PRESUNTA TRAMA DE ESPIONAJE

Mariano Rajoy se ha declarado "muy contento" por que la Asamblea de Madrid vaya a llevar a cabo una investigación sobre la supuesta trama de espionaje en la Comunidad que preside Esperanza Aguirre, quien **hizo público su apoyo a la comisión investigadora**. "Lo único que quiero es que se sepa la verdad", ha reiterado el presidente del PP en una entrevista en **RAC1**.

A Rajoy le parecería "bochornoso y lamentable" que hubiese habido juego de espías y redacción de dossiers "con o sin dinero público" y ha subrayado que para evitar situaciones como la que ahora vive su partido todos los cargos deberían "conocer a quienes tienen por debajo".

Respecto a los documentos que ha ido publicando el diario '*El País*' sobre los casos de espionaje, no ha tenido reparos en admitirlos como pruebas –"no se los han inventado"- aunque ha insistido en la importancia de que sea una investigación pública la que determine las responsabilidades.

Rajoy también ha reconocido que todo este asunto "no ayuda" a las aspiraciones de los populares en las próximas elecciones gallegas y vascas. Sin embargo, considera que los votantes sabrán distinguir entre lo que pasa en Madrid y en su comunidad.

"Yo no he hecho nada", fue su respuesta espontánea al preguntársele si se había planteado dimitir por las últimas disensiones en el seno del partido y ha recordado que obtuvo un respaldo del 84% en el pasado congreso del PP.

Más tarde, Rajoy se ha reunido con empresarios y dirigentes sindicales de Catalunya, y en la posterior rueda de prensa ha defendido la presunción de inocencia de Esperanza Aguirre en el caso del supuesto espionaje en la Comunidad a la vez que ha negado haber visto jamás "ningún dossier" sobre seguimientos a altos cargos. "Tengo la mejor opinión de todos los miembros de mi partido y creo en la presunción de inocencia, y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política", dijo.

Más allá de la lucha intestina de los populares, en los micrófonos de RAC1 el líder de la oposición se mostró muy preocupado por cómo la crisis afecta a la sociedad española el día en que se han conocido los datos del paro de enero, con un **aumento récord del número de desempleados**, 198.838, que eleva a más de 3,3 millones la cifra total.

A su juicio, el aumento imparable del paro es una "auténtica tragedia social" que requiere un urgente cambio de rumbo de la política económica del Gobierno, al que acusa de ser incapaz de generar confianza y mitigar el miedo. "Esto es un drama. Detrás de cada cifra hay familias que lo pasan muy mal". Preguntado sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ha sido taxativo y ha acusado de engañar al presidente del Gobierno. Denuncia que José Luis Rodríguez Zapatero "ofrece a todos el oro y el moro" para a continuación improvisar el modelo, aunque, asegura, ningún presidente autonómico conoce qué cantidad de dinero va a recibir su comunidad.

Rajoy no ha dejado de subrayar que su principal preocupación es que la financiación vaya a pagarse con deuda pública y no con los recursos ordinarios de los Presupuestos. Lamenta que de este modo el pago se hará a costa de los ciudadanos y se dificultará la concesión de créditos.

(www.lavanguardia.es, 04/02/09)

161. CONTINÚA EL ESCÁNDALO DEL ESPIONAJE: PEDRO CASTRO TAMBIÉN PUDO SER INVESTIGADO

El culebrón de los espías continúa. El alcalde de Getafe y actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, interpondrá acciones judiciales por las presuntas

investigaciones a las que ha sido sometido. Un reportaje de la revista *Interviú* describe cómo Castro pudo haber sido investigado sin saberlo en fechas previas a la pérdida de la FEMP por parte del Partido Popular en favor del histórico dirigente socialista.

Después de que *Interviú* publicara que Castro había podido ser objeto de espionajes, tal y como ha ocurrido con el vicepresidente regional, Ignacio González y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, entre otras personas, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, afirmó que Pedro Castro "interpondrá una denuncia en los juzgados", y consideró "inaceptable" que el consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, siga siendo miembro del Ejecutivo regional.

En efecto, *Interviú* informó de que el regidor del populoso municipio de Getafe -la "Madrid del sur"- habría podido ser objeto de espionajes por parte de un ex jefe del Ejército de Tierra en la reserva. Los seguimientos e informes sobre Castro habrían tenido lugar en 2007, coincidiendo con el momento en el que Castro iba a conseguir alzarse con la presidencia de la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP).

Siempre según la revista, el ex jefe militar dedicado a la tarea habría contratado a ex agentes de seguridad y detectives privados para elaborar un dossier sobre las propiedades y la situación patrimonial de Castro y su familia, un informe que habría sido realizado a cambio de unos 10.000 euros. Al mismo tiempo, el dispositivo puesto en marcha para espiar a Pedro Castro trató de encontrar entre los funcionarios del Ayuntamiento de Getafe a algún topo dispuesto a proporcionar más información sobre el histórico regidor socialista, pieza clave en el PSM y en el Comité Federal del PSOE.

"Con todo lo que dijo el señor (Francisco) Granados y la señora (Esperanza) Aguirre del presidente de la FEMP hace escasamente dos meses hay que tener cara para haber dicho lo que han dicho y no asumir en este momento ninguna responsabilidad y seguir formando parte de un Gobierno que está roto, en estado de coma, y un Gobierno que sufre metástasis en el que unos órganos están comiendo a otros", ha concluido de manera contundente Tomás Gómez en relación con este tema, según informa Europa Press.

(www.elplural.com, 04/02/09)

162. EL PP BLINDA EN EL PARLAMENTO REGIONAL A GAMÓN, UN HOMBRE CLAVE EN EL ESPEGATE

A juzgar por la actitud que mantuvo el PP en la Asamblea de Madrid, Sergio Gamón, director del área de Seguridad de la Consejería de Presidencia de Madrid y hombre clave en la presunta trama de espionaje regional, vale más por lo que calla que por lo que habla. Sólo así se entiende que, en una actitud dudosamente democrática, la presidenta de la comisión de Interior, Pilar Liébana, exigiera a los diputados de la oposición la retirada de todas las preguntas incómodas. El blindaje a Gamón fue tal que la parlamentaria Cristina Cifuentes llegó a excusar a sus compañeros por su imprudencia. Cifuentes se dirigió al compareciente para pedirle "perdón en nombre de todos" los presentes.

Sergio Gamón es uno de los nombres más relevantes en la presunta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid. Primero, porque era director de Seguridad cuando sucedieron los seguimientos. Segundo, porque se le menciona en los dossier sobre Alfredo Prada: "entra nuestro director, Sergio". Y tercero, porque, curiosamente, se le destituyó del anterior cargo por espiar precisamente a Prada, nada más ser destituido como consejero de Justicia.

En definitiva y retomando las palabras de la portavoz socialista de Interior, Encarnación Moya, Gamón es el "protagonista de esta película del que no conocemos aún al director". Su comparecencia en la Asamblea, por tanto, era de las más esperadas. IU y PSOE, sin embargo, se quedaron con las ganas de interrogarle. Pilar Liébana, presidenta de la Comisión de Interior, impidió que se le interpelara al también ex policía algo distinto a ¿cuál es su trabajo?

Quedó prohibido, por tanto, preguntar a Gamón a quién obedece, si ha dado o recibido órdenes de espiar, cuáles fueron los motivos de su cese como director general de Seguridad o, simplemente, si se refería a él el consejero de Justicia, Francisco Granados, cuando rehusó poner las manos en el fuego por sus subalternos. La guinda la puso la diputada popular Cristina Cifuentes, pidiendo "perdón en nombre de todos los parlamentarios" por las preguntas del diputado de IU, Miguel Reneses.

Reneses recibió tres toques de atención por parte de la presidenta de la comisión para que volviera al tema de la comparecencia y a la salida aseguró haber asistido "a la primera farsa de un sainete", con "un

señor al que se le paga por hacer nada [en concreto, 91.657 euros al año] o en todo caso por un estudio sine die sobre los temas de seguridad privada en la vigilancia de edificios" cuando, según aseguró, todos conocen que es "un personaje clave" en los hechos del Campus de la Justicia y en la trama de espionaje.

El ex director de Seguridad tan solo se pronunció sobre dos aspectos: sobre si mantiene una relación de amistad con Esperanza Aguirre, de quien fue jefe de escoltas cuando presidía el Senado, y sobre **el robo del ordenador de un despacho dependiente de Prada**. En el primer caso, salió por la tangente: "Me preguntan por mi relación con Aguirre. ¿Por qué no me preguntan sobre mi relación con María teresa Fernández de la Vega? Ella me llamó expresamente para trabajar en su gabinete". La información ha sido desmentida por una portavoz de la presidenta: "es imposible que ella le llamara, no le conocía de nada", asevera al diario *El País*.

En el caso de Prada, se limitó a pedir "justicia". "El caso está sobreesido. La justicia en la que yo creo ha dicho que no hay prueba alguna", remachó. Ni una palabra sobre la misteriosa desaparición del ordenador o el borrado de los vídeos de seguridad. En cualquier caso, es altamente probable que Gamón vuelva a comparecer en la comisión de investigación que arranca este viernes presidida por un hombre de máxima confianza de Aguirre, el diputado Benjamín Martín Vasco.

(www.elplural.com, 04/02/09)

163. AGUIRRE SE SALTA LAS NORMAS DE CORTESÍA DEMOCRÁTICA Y EVITA CEDER LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE

A dos días de que la Comisión de Investigación de la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid inicie andadura en la Asamblea, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha echado mano de sus dotes de vidente –seguramente teniendo en mente su mayoría absoluta- para adelantar las conclusiones. "No tendrá consecuencias políticas", ha indicado.

Aguirre no da puntada sin hilo y, previamente, había atado los cabos poniendo a un diputado de máxima confianza al frente de la citada comisión. El popular Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto y miembro de la dirección del grupo, presidirá los trabajos, en una decisión inédita en democracia ya que hasta ahora se había aceptado la norma no escrita de ceder la presidencia a otros grupos políticos en casos como éste. Ni siquiera Aznar traspasó la norma tácita en el caso Gescartera, cuando dejó la presidencia a Coalición Canaria.

Gracias a su mayoría absoluta en la Asamblea, Aguirre se ha asegurado que su grupo sea el que decida el funcionamiento, los turnos de réplica y las comparecencias en la comisión, que iniciará su andadura este viernes y finalizará el 28 de febrero, aunque podrá prorrogar sus trabajos durante otro mes si es necesario. Las condiciones impuestas han indignado a la oposición. sin embargo, ella sigue defendiendo que se trata de un proceso con luz y taquígrafos.

En el Congreso de los Diputados se han celebrado 15 Comisiones de Investigación sobre asuntos como malos tratos a detenidos en *El País* Vasco, catástrofes aéreas, Rumasa, la financiación de partidos, los llamados casos RENFE, Roldán y Rubio, la privatización de Intelhorce, la tramitación de expedientes de la Agencia Tributaria, fraude del lino, Gescartera y el 11-M, tal como recoge *El País*.

En todas las ocasiones, la presidencia de las mismas corrió a cuenta de los líderes de los grupos minoritarios, siendo Coalición Canaria la formación con más investigaciones a su cargo –la del 11-M, la del lino y Gescartera-. CiU, se encargó de Roldán –la última, por cierto, celebrada a puerta cerrada- y PNV, por su parte del caso Mariano Rubio y del de Roldán.

La lideresa, sin embargo, se ha asegurado el control sobre otra comisión. Mientras los grupos de la oposición han mostrado su recelo hacia lo que parece una "trampa" -en palabras de Inés Sabanés, portavoz de IU-, Aguirre ha seguido firme en su empeño y ya ha adelantado que estos trabajos no tendrán consecuencias políticas. "La Asamblea investigará si hay, en su caso, responsabilidad política. Yo creo que no y por eso lo que digo es que no tengo nada que ocultar", ha indicado.

De momento, como antecedente de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid está el del tamayazo y en aquella ocasión, Aguirre también contó con un hombre de su absoluta confianza en la presidencia, **su actual Consejero de Justicia, Francisco Granados**.

(www.elplural.com, 04/02/09)

164. FRAGA NIEGA QUE EL PP CIERRE LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA: "LA HEMOS ENCARRILADO"

El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha asegurado que la dirección de su partido no ha cerrado la investigación abierta por el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid sino que "la ha encarrilado".

Fraga ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por la decisión de la dirección del PP de suspender la investigación interna que inició la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, a raíz de las informaciones difundidas sobre espionaje político en la Comunidad de Madrid.

"La han llevado a donde la tienen que llevar"

"La han llevado a donde la tienen que llevar", ha asegurado Fraga, en referencia a la comisión de investigación sobre este asunto que se pondrá en marcha el próximo viernes en la Asamblea de Madrid.

Preguntado por el aumento del paro en 198.838 personas en enero conocido, Fraga ha criticado la "absoluta incapacidad" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para gestionar una de las crisis "más graves" que ha tenido España.

Aguirre, la sospechosa

El secretario del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado que si Esperanza Aguirre sigue interesada en que no se celebre la comisión de investigación sobre la supuesta trama de espionaje en el PP de Madrid, "es sospechosa, y una presidenta sospechosa no puede seguir presidiendo la Comunidad".

Antes de asistir a un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que interviene el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, Gómez ha dicho que el Ejecutivo de Madrid "no es un gobierno de una derecha civilizada, democrática, sino un gobierno facha".

(www.publico.es, 04/02/09)

165. GÜEMES: "YO NO TENGO LA INFORMACIÓN DE RAJOY"

El secretario de Comunicación del PP de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, no se acaba de creer las informaciones publicadas por *EL PAÍS* sobre la trama de espionaje en el Gobierno regional. "Yo no tengo la información de Rajoy", ha señalado Güemes esta mañana preguntado por lo dicho por el líder de su partido sobre la existencia de los documentos difundidos. Güemes ya acusó al redactor que ha destapado la trama, Francisco Mercado, de "fabricar cuatro o cinco portadas falsas y engañar a sus lectores".

Las acusaciones de Güemes, yerno de Carlos Fabra -presidente de la diputación de Castellón e imputado por tráfico de influencias y fraude fiscal sobre el que Mercado también ha publicado numerosos reportajes- fueron censuradas por la Asociación de la Prensa de Madrid. También su líder las censura al afirmar, en una entrevista con RAC 1, que los documentos publicados por *EL PAÍS* "existen", porque ese diario "no se los ha inventado". "Una cosa -explicó el presidente del PP- es que se publiquen rumores y otra cosa es que, como ha sucedido, se publiquen muchos documentos". Rajoy matizó no obstante que desconocía "quiénes los han confeccionado [los documentos] y quién lo ha ordenado".

Aguirre, en un tono muy diferente y en una de sus primeras intervenciones tras salir a la luz el escándalo de espionaje respondió a preguntas de la prensa: "¿Y usted por qué cree a *EL PAÍS*". "Yo desde luego no he visto ningún informe", ha aclarado Güemes durante una entrega de premios en la Agencia Laín Entralgo. "(Son) como las meigas, que haberlas haylas", ha comentado el consejero de Sanidad en relación a los documentos, al tiempo que puntualizó que si existen, la Comunidad no está detrás.

"Si existen, le puedo garantizar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha elaborado, ni amparado la elaboración, ni conocido la elaboración de ningún informe relativo a nadie", ha afirmado Güemes quien además ha insistido en que si ha habido o no informes, está "convencido" de que se esclarecerá en la investigación llevada a cabo en instancias judiciales y en la comisión de investigación que comenzará a funcionar el viernes en la Asamblea de Madrid.

(www.elpais.com, 04/02/09)

166. GÜEMES AFIRMA QUE ÉL NO HA VISTO NINGÚN INFORME DE LA TRAMA DE ESPIONAJE

El consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha indicado este miércoles que él no ha visto ningún informe procedente de la presunta trama de espionaje que supuestamente depende de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, ya ha insistido en que la Comunidad de Madrid no está detrás de ellos.

"Yo desde luego no he visto ningún informe", ha afirmado Güemes durante una entrega de premios, al ser preguntado por las palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que afirmaba que se conocía la existencia de dossiers pero que él no los había visto. "Son como las meigas, que haberlas hailas", ha comentado en relación a los documentos, al tiempo que puntualizó que si existen, la Comunidad no está detrás.

"Si existen, le puedo garantizar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha elaborado, ni amparado la elaboración, ni conocido la elaboración de ningún informe relativo a nadie", ha afirmado ya ha insistido en que si ha habido o no informes, está "convencido" de que se esclarecerá en la investigación llevada a cabo en instancias judiciales y en la comisión de investigación que comenzará a funcionar el viernes en la Asamblea de Madrid.

Güemes ha garantizado que "en ambas instancias se llegará a la conclusión inequívoca y contundente de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha conocido, ni ha amparado, ni ha promovido seguimientos, ni el espionaje de nadie". "Es absolutamente falso que la Comunidad de Madrid se dedique a hacer dossiers ni investigaciones ni seguimientos", ha asegurado y reseñado que el Gobierno de la Comunidad lo que hace es "trabajar por los ciudadanos" de la región.

Así, ha matizado que lo que le interesa al Ejecutivo que lidera Esperanza Aguirre "no es con quien va a tomar café fulano o mengano, sino los intereses de los madrileños".

Fraga señala que el PP no ha cerrado investigación sino que "la ha encarrilado"

El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha asegurado este miércoles que la dirección de su partido no ha cerrado la investigación abierta por el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid sino que "la ha encarrilado"

Fraga ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo con el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, al ser preguntado por la decisión de la dirección del PP de suspender la **investigación interna** que inició la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, a raíz de las informaciones difundidas sobre espionaje político en la Comunidad de Madrid.

"La han llevado a donde la tienen que llevar", ha asegurado Fraga, en referencia a la comisión de investigación sobre este asunto que se pondrá en marcha el próximo viernes en la Asamblea de Madrid. Preguntado por el aumento del paro en 198.838 personas en enero conocido , Fraga ha criticado la "absoluta incapacidad" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para gestionar una de las crisis "más graves" que ha tenido España.

Por su parte Juan José Güemes, consejero de Sanidad del gobierno de Esperanza Aguirre y yerno de Carlos Fabra, cree que es Rajoy quien debe dar explicaciones de la existencia de dossiers en el escándalo de los espías . El líder del PP señaló este martes que él no había visto ninguno cuando le preguntaron por qué no actuó cuando se conoció que había informes.

La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó este lunes la creación de una comisión de investigación por la supuesta trama de espionaje presuntamente liderada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, tal y como la presidenta regional, Esperanza Aguirre. El órgano no contará con limitación de los comparecientes a funcionarios de la Comunidad.

Fuentes populares explicaron que la comisión se extenderá hasta el 28 de febrero, con posibilidad de ampliación de un mes y que contará con cinco diputados de PP, tres del PSOE y uno de IU, en contra de la propuesta de la oposición, que requería que hubiera cuatro de PP, tres de PSOE y uno de IU.

La reunión de la Mesa celebrada finalizó con dos votaciones. La primera, referida a la creación de la comisión, que se aceptó por unanimidad de los tres Grupos Parlamentarios. No obstante, hubo una segunda votación, referida a las normas de funcionamiento, que tan sólo se aprobó con la mayoría absoluta del PP.

El funcionamiento se regirá por lo establecido en los artículos comprendidos entre el 208 y el 211 del Reglamento de la Cámara, asemejándose al funcionamiento de una comisión ordinaria, según afirmaron fuentes parlamentarias.

(www.cadenaser.com, 04/02/09)

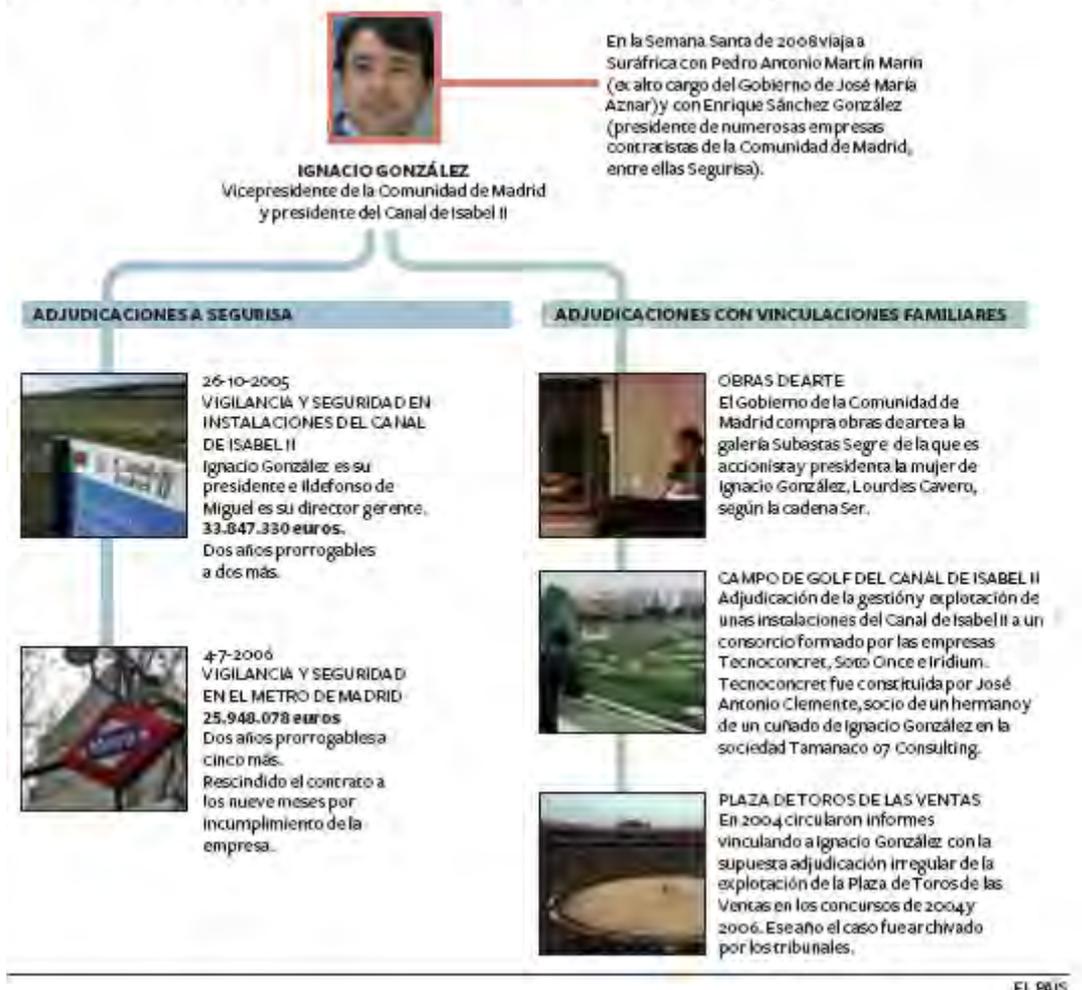
167. EL JUEZ INICIA LA INVESTIGACIÓN POR EL ESPIONAJE AL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE

El titular del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, ya ha iniciado su instrucción sobre el espionaje sufrido por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), número dos de Esperanza Aguirre. Sierra investigará los dossiers que destapó *EL PAÍS* el 20 de enero -el seguimiento con cámara oculta a González durante un viaje a Colombia en 2008 y otro de un viaje a Johannesburgo ese mismo año donde se hace referencia a adjudicaciones sospechosas- y un tercer dossier, publicado posteriormente por Público, también sobre adjudicaciones del vicepresidente. "La apertura de diligencias supone que se ha producido la judicialización de este presunto caso de espionaje", explicó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los autores de los dossiers -desconocidos hasta el momento- podrían haber incurrido, según la denuncia que presentó en su día el vicepresidente, en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de cárcel.

Además del espionaje al número dos de Aguirre, *EL PAÍS* ha revelado la existencia de otros seguimientos a dirigentes del PP -éstos enfrentados políticamente a Aguirre-: el vicalcalde Manuel Cobo y el ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada. Pero ambos han denunciado ante la Fiscalía de Madrid, no ante el juez, así que su caso depende de que el fiscal decida inhibirse y remitirlo al juzgado. O de que, en una fase más avanzada del proceso, el juez concluya que todo tiene que ver con una única trama delictiva y reclame la investigación.

■ Adjudicaciones sospechosas en los 'dossiers' contra Ignacio González



En paralelo al proceso judicial prosigue el avatar político. habló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para repetir lo que el pasado lunes ya subrayó tres veces: que la investigación interna iniciada por el partido sobre el espionaje político en Madrid no está cerrada, sino "suspendida" durante el tiempo que dure la comisión de investigación en el Parlamento regional. Lo dijo durante una visita a la sede del PP en París, y el protocolo hizo que en ese acto estuviera también el espiado Alfredo Prada en su actual condición de director del PP en el Exterior. Prada se mostró dispuesto a acudir a la comisión parlamentaria si es citado, aunque recalcó que la investigación que le interesa es la judicial.

En nombre de los más fieles a Esperanza Aguirre, el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan Jesús Güemes, volvió a cargar sus palabras con ironías contra el propio PP. "Pregúntenle al señor Rajoy. Yo no tengo la información que tiene Rajoy. Yo, desde luego, no he visto ningún dossier", afirmó. La víspera, Rajoy había admitido que el escándalo del espionaje no es "un rumor" sino que está apoyado en "muchos documentos". Sobre la comisión de investigación, Güemes avisó de que el PP no permitirá que se convierta "en un circo".

Por otro lado, el alcalde de Getafe (Madrid) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, anunció que emprenderá "acciones legales" tras leer en la revista *Interviú* que también él fue espiado en 2007. Una portavoz municipal precisó después que acudirán a la fiscalía.

Castro dijo estar "indignado, dolorido y rabioso" al saberse víctima de "tan oscuras prácticas", y añadió que en los últimos años había confesado a colaboradores y familiares que tenía "la sensación" de sentirse espiado. "Era una percepción de que alguien me observaba", aseguró. Nunca llegó a denunciarlo. El presidente de la FEMP exigió a la Comunidad que llegue "hasta las últimas consecuencias" y, aunque dejó claro que no puede "acusar a nadie", aprovechó para deslizar un mensaje: "Pensé que este tipo de prácticas, que están más cercanas al pasado más triste y oscuro de este país, habían sido erradicadas de las administraciones que gobiernan a los ciudadanos".

(www.elpais.com, 05/02/09)

168. EL VICEPRESIDENTE DE MADRID DESCONOCE LAS FUNCIONES DEL HOMBRE CLAVE DE LA TRAMA DE ESPIONAJE

"Creo que es algo así como coordinador del área de seguridad", ha sido todo lo que pudo responder esta mañana el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al ser preguntado por el cargo y funciones exactos del inspector Sergio Gamón en la Administración madrileña. Gamón es un personaje clave en la trama de espionaje político que ha afectado a varios cargos de la Comunidad. "Está adscrito a la consejería de Presidencia, Interior y Justicia y sus funciones serán las que diga el decreto" de su nombramiento, añadió González. El pasado martes, en la Asamblea de Madrid, el propio Gamón no pudo tampoco concretar sus funciones exactas dentro del Gobierno.

A pesar de desconocer cuáles son las funciones o el cargo exacto de Gamón, González no ha tenido problemas en considerar "falsas" las imputaciones que se deducen de la información descubierta por *EL PAÍS* entre ellas la que sitúa a Gamón como responsable de un equipo de espionaje directamente relacionado con el asalto a un despacho y el robo de un ordenador a un ex consejero de Justicia. "Yo no sé lo que hacen todos los cargos de la Comunidad", ha añadido González esta mañana, y ha remitido a la consejería que dirige Francisco Granados para conocer esa información, ya que es de quien depende orgánicamente.

Si bien el vicepresidente desconoce, dos semanas después de que trascendiera el nombre de Gamón, cualquier detalle sobre el "coordinador del área de Seguridad" de la Comunidad de Madrid, ha animado a que la comisión de investigación que se inicia mañana viernes en la Asamblea sobre este asunto "aclare el objeto que persigue, averiguar si alguien ha montado un servicio de espionaje en la Comunidad de Madrid". Para ello, afirmó que él ha pedido al grupo parlamentario que pida su comparecencia. También ha reiterado, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Comunidad, que no hay "nadie más interesado que el PP en que se aclaren unas imputaciones que hasta ahora se han demostrado falsas".

(www.elpais.com, 05/02/09)

169. UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006 la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret. Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de los hermanos de González compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre.

Los datos a los que ha tenido acceso Público figuran en el Registro Mercantil de Madrid y, lógicamente, no están incluidos en el **dossier sobre González** manejado por la cúpula del PP, ya que dicho informe fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007.

El Canal de Isabel II, empresa pública que preside Ignacio González, adjudicó el campo de golf de Chamberí a un consorcio formado por las empresas Iridium, Soto Once y Tecnoconcret. La concesión se produjo el 27 de diciembre de 2006, por un periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco en caso de que ambas partes se muestren de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de formar una nueva compañía para explotar las instalaciones deportivas, y así lo hicieron el 15 de febrero de 2007, al constituir Green Canal Golf.

TECNOCONCRET PROYECTOS E INGENIERIA S.L. - DON JOSE ANTONIO CLEMENTE MARTIN, en nombre y representación de la sociedad de esta hoja, como Administrador Único de la misma, debidamente facultado y llevando a cumplimiento lo acordado por la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL de fecha 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, celebrada en el domicilio social, según resulta de certificación inserta, en la que consta la aprobación del acta de la misma, ha otorgado la escritura que se inscribe, en la que se eleva a público los acuerdos adoptados por unanimidad, en dicha reunión, que son los siguientes:

1.- Ampliar el capital social de la sociedad en la cantidad de CIENTO MIL EUROS (100.000,00€), mediante la creación y puesta en circulación de 100.000 participaciones sociales de UN EURO de valor nominal cada una de ellas, e identificadas correlativamente con los números 3.010 al 103.009, ambos inclusive.

CARACTERÍSTICAS DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

a).- **PARTICIPACIONES.**- El citado aumento de capital está distribuido en CIENTO MIL participaciones sociales, iguales e indivisibles, numeradas correlativamente del 3.010 al 103.009 ambos inclusive, con un valor nominal de 1,00 EURO cada una de ellas.

b).- **SUSCRIPCIÓN.** Las cien mil participaciones sociales representativas del aumento del capital social son asumidas y totalmente desembolsadas en metálico, previa renuncia de los otros socios, por las siguientes personas de la siguiente forma:

DON JOSE ANTONIO CLEMENTE MARTIN, con D.N.I. número [REDACTED], cuyas circunstancias personales consta en el Registro Mercantil, quién suscribe treinta y un mil seiscientos sesenta y seis (31.666) participaciones sociales, números 3.010 al 34.675, ambas inclusive, por su valor nominal de treinta y un mil seiscientos sesenta y seis euros (31.666,00€).

DON PABLO MANUEL GONZALEZ GONZALEZ, con D.N.I. número [REDACTED], mayor de edad casado, vecino de Madrid, C/ [REDACTED], quién suscribe treinta y un mil seiscientos sesenta y seis (31.666) participaciones sociales, números 34.676 al 66.341, ambas inclusive, por su valor nominal de treinta y un mil seiscientos sesenta y seis euros (31.666,00€).

PROYECTOS ECOSISTEMAS, S.L. con C.I.F. número B-83777169, domiciliada en Valdemorillo (Madrid), C/ Monte Pirineo Nº 4, quién, debidamente representada, suscribe treinta y un mil seiscientos sesenta y seis (31.666) participaciones sociales, números 66.342 al 98.007, ambas inclusive, por su valor nominal de treinta y un mil seiscientos sesenta y seis euros (31.666,00€).

DON FERNANDO MANUEL SERRANO FUENTES, con D.N.I. número [REDACTED], mayor de edad casado, vecino de Madrid, C/ [REDACTED], con D.N.I. número [REDACTED], quién suscribe cinco mil dos (5.002) participaciones sociales, números 98.008 al 103.009, ambas inclusive, por su valor nominal de cinco mil dos euros (5.002,00€).

Quedan en consecuencia, las nuevas participaciones sociales, totalmente adjudicadas y desembolsadas en la forma antes mencionada haciéndose constar que se ha reflejado en el Libro Registro de Socios.

2.- Como consecuencia del aumento de capital efectuado, se modifica el artículo 5 de los Estatutos Sociales, que queda redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 5. - CAPITAL SOCIAL.-
El capital social se fija en CIENTO TRES MIL NUEVE EUROS (103.009,00€), representado por 103.009 participaciones de 1,00 Euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 103.009, inclusive, acumulables e indivisibles, totalmente suscritas y desembolsadas por los socios.

Cualquier aumento o reducción del capital implicará, conforme a Ley, una modificación estatutaria con sujeción a los requisitos consiguientes en tanto a la adopción del acuerdo, que en el caso de citarse en un aumento de capital dará derecho a cada socio a asumir una parte proporcional a su participación social, durante el plazo fijado por la administración de la sociedad, que no habrá de ser inferior a un mes, desde la publicación del anuncio de oferta o desde el envío de la comunicación."

La realidad de las aportaciones dinerarias se acredita mediante una certificación, que se inserta, expedida por la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria -Caja Duero-, Sucursal sita en Pozuelo de Alarcón, Madrid, acreditativa del ingreso del total del capital social asentado en la cuenta abierta a nombre de la Sociedad de esta hoja en dicha Sucursal. El otorgante, según interviene, certifica que en el Libro Registro de Socios se ha tomado razón de las nuevas participaciones creadas como consecuencia del anterior

La decisión de construir un campo de golf y ocho pistas de pádel sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II contó con una fuerte oposición de los vecinos, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un espacio público.

En abril de 2007, la revista Tiempo publicó que Tecnoconcret era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Efectivamente, en aquel momento, en el Registro Mercantil figuraban oficialmente como únicos socios de la empresa un ingeniero llamado José Antonio Clemente y su esposa.

Clemente era socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente madrileño, en otra compañía denominada Tamanaco 07 Consulting. Esta empresa se había constituido el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicase el concurso para adjudicar el campo de golf. Curiosamente, el objeto social de Tamanaco 07 Consulting era la "explotación de instalaciones deportivas".

Al hacerse públicos estos datos, el vicepresidente González compareció ante los medios de comunicación, el 27 de abril de 2007. Visiblemente nervioso, en tres ocasiones rehuyó aclarar si sabía que había adjudicado el campo de golf a un socio de sus familiares directos. Y como principal argumento de defensa utilizó el siguiente: "La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos".

González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal de Isabel II y tampoco advirtió a los demás consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las empresas adjudicatarias.

Todo el entramado empresarial resultaba altamente sospechoso. Lo lógico era pensar que Clemente actuaba en Tecnoconcret como testaferro de los familiares de González, que evidentemente no podían aparecer en el accionariado de la sociedad adjudicataria del campo de golf. Pero no había documentos que probasen esa sospecha.

Aunque los partidos de la oposición consideraron que ya era suficientemente escandaloso que el beneficiario fuese un socio del hermano y del cuñado de González, la presidenta Aguirre respaldó entonces a su número dos y no adoptó ninguna medida. Un mes después, el PP amplió su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.

Cuando casi todo el mundo había olvidado la polémica concesión, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros, acordada el 10 de noviembre de 2008. José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero –a través de su empresa Proyectos Ecosistemas– suscribieron cada uno el 31,6% de las nuevas acciones. Entre el hermano y el cuñado de González controlan, por tanto, la mayoría absoluta del capital.

De esta forma, el accionariado de Tecnoconcret pasó a ser prácticamente idéntico al de Tamanaco 07 Consulting. Y se confirma, así, la relación entre los familiares de González y la empresa que recibió la adjudicación del polémico campo de golf de Chamberí.

Fuentes del Canal de Isabel II aseguraron a este diario que, "hace aproximadamente un año", Iridium le compró sus acciones a las otras dos empresas que recibieron la adjudicación para explotar el campo de golf; es decir, a Soto Once y a Tecnoconcret. Según esta versión oficial, por tanto, los familiares de González ya no formarían parte de Green Canal Golf.

(www.publico.es, 05/02/09)

170. AGUIRRE ACUSA AL PSOE DE HABER ESPiado "DEL REY PARA ABAJO A TODO EL MUNDO"

¿Espías en el PP? No, los hay en el PSOE. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mantiene su estrategia de hacer bueno el dicho de "no hay mejor defensa que un buen ataque" en la **trama de espionaje** desatada en el PP. La 'lideresa' ha afirmado que el PSOE "tiene como seña de identidad el espionaje político" y ha aludido a seguimientos irregulares realizados por este partido en los años 80, en los 90 y en la actualidad.

Aguirre, que ha hablado de este asunto en el pleno de la Asamblea regional, ha relatado cómo en 1984 el PSOE "creó un gabinete de espionaje político para espiar a los de su propio partido, a los de Alianza Popular y a los comunistas", y cómo en 1995 su "creador", el entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno Narci Serra "tuvo que dimitir por espiar desde el rey para abajo a todo el mundo".

Tras insistir en que su Gobierno "no tiene nada que ocultar", la presidenta ha señalado que en la presunta trama de espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid lo único "cierto" es que ha habido "18 portadas nacionales de un periódico diciendo que el Gobierno de esta Comunidad espía, acusaciones que han sido desmentidas más tarde por su autor a la salida de la Fiscalía".

Esperanza Aguirre, que ha dedicado buena parte de su intervención a recordar la trayectoria histórica de espionaje del PSOE, ha destacado que "sigue abierta una causa porque en 2003 escucharon los teléfonos del PP de Madrid y el juez ve indicios de delito" y que "se ha probado que agentes del CNI espionaron a Manuel Pizarro (diputado nacional del PP) en junio de 2007".

"Es usted muy valiente, señora Menéndez. Bienvenida al club de los que creemos que estos espionajes son intolerables y no estamos dispuestos a aceptar que los derechos y libertades sean conculcados. Es usted la primera en la historia de su partido que se preocupa por nuestro derecho a no ser espiados", le ha dicho Aguirre a la portavoz del PSOE.

La socialista Maru Menéndez le había preguntado si considera que existen responsabilidades políticas relacionadas con la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, a lo que Aguirre ha contestado que dichas responsabilidades las tendrá que "juzgar" y "esclarecer" la **comisión de investigación de la Asamblea**.

Menéndez le ha dicho a la presidenta que "a la hora de mentir podían ponerse de acuerdo" todos los representantes del PP para "no volver locos" a los demás, y ha hecho hincapié en que miembros de su mismo partido, como el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero y diputado regional Alfredo Prada "son los que han hablado directamente de responsabilidad en los hechos de la Consejería de Interior".

Le ha reprochado también que, desde que hace un año se mostrara dispuesta a abandonar el Gobierno regional para concurrir en la lista de Mariano Rajoy al Congreso de los Diputados y se produjera la "fractura interna" en el PP, los madrileños estén sufriendo su "ambición desmedida y su lucha por el poder y por el dinero".

Menéndez se ha mostrado convencida de que el PP, "fruto de un pacto interno", **tiene ya "escrito el dictamen de la comisión de investigación"** y "no tiene voluntad de esclarecer los hechos". Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, le ha dicho a Aguirre que su grupo está "dispuesto cruzar el desierto aun sin cantimplora, para saber la verdad de lo que aquí ha sucedido".

"Tengo la convicción de que usted se está enfrentando a uno de los momentos más duros de su gobierno, porque recaen sospechas muy serias y firmes, y las tramas de espionaje se suelen montar contra algo y por algo en momentos de deterioro y descontrol", ha agregado la portavoz de IU.

Sabanés ha aprovechado además para lanzar un cuestionario a la presidenta, con el fin de que ésta dijera expresamente si "sostiene que nadie de la Consejería de Interior ni relacionado ha podido intervenir en la trama" y si "responde por todos sus consejeros", y para que explicara "quién la persigue" y "de quién es víctima".

Como respuesta, Aguirre ha asegurado que quiere "claridad, luz y taquígrafos" y que "nadie ha organizado espionajes, ni los ha amparado, ni ha tenido conocimiento de ello". En su debate con Sabanés, la presidenta ha criticado que IU "preste ayuda al PSOE" en este asunto.

(www.publico.es, 05/02/09)

171. EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE EL DOSSIER DESVELADO POR 'PÚBLICO'

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, solicitó al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que amplíe el contenido de la denuncia presentada anteriormente en relación con la existencia de una supuesta trama de espionaje en la Comunidad. González pide que se añada a las diligencias la información desvelada por Público sobre la existencia de dos informes que contienen datos muy detallados sobre su patrimonio y relaciones y en los que se vincula al número dos de Esperanza Aguirre con varias adjudicaciones sospechosas.

Estas informaciones parten de dos. El informe principal consta de 69 páginas y en él se repasan cinco adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, realizadas por organismos controlados por el vicepresidente madrileño. El Gobierno de Madrid llevó a los tribunales la presunta trama de espionaje el 20 de enero. Posteriormente, incluyó en ella los seguimientos de que habría sido objeto el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

(www.publico.es, 05/02/09)

172. EL PP DE MADRID SE QUEJA DE QUE RAJOY CREA EN DOSIERES SIN VERLOS

Al PP de Madrid, que dirige Esperanza Aguirre, no le ha gustado nada que el presidente del partido, Mariano Rajoy, admitiera en Barcelona que cree en la existencia de dossieres vinculados al espionaje a políticos, pese a no haber visto ninguno.

Y, para que constase en acta, los populares madrileños decidieron hacer público su malestar a través de su portavoz, Juan José Güemes, que llegó a mofarse de esos informes que Rajoy da por buenos. "Son como las meigas, que haberlas haylas", subrayó, dando a entender que lo del presidente del PP es una cuestión de fe en lo publicado en los medios de comunicación, y no en los argumentos de Aguirre. Además, quiso aprovechar la oportunidad para intentar desvincular la Comunidad de la supuesta red de espías. "Puedo garantizar que el Gobierno de Madrid no ha elaborado ni amparado ni conocido la elaboración de ningún informe relativo a nadie", sentenció.

Pero Güemes no solo tenía recado para Rajoy. También se acordó de sus compañeros de Galicia y Euskadi, que están inmersos ya en la campaña preelectoral y que han puesto de manifiesto su preocupación por la repercusión que, a la hora de votar o no al PP, puede tener el escándalo de espionaje en Madrid. "No es cuestión ni momento de hacer cálculos electorales", replicó el portavoz de los conservadores madrileños, reclamando "rigor y seriedad" ante este asunto.

Por último, se pronunció sobre la comisión de investigación que mañana empezará en la Asamblea. Avisó de que el PP no permitirá que se convierta "en un circo" y abogó por marcar un calendario de trabajo intenso. Y como hiciera su jefe, Esperanza Aguirre, auguró que la investigación demostrará la inocencia de la Comunidad de Madrid.

(www.elperiodico.com, 05/02/09)

173. LOS JEFES DE LOS GRUPOS ASUMEN EL CASO

Hay una causa común en los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. La enorme preocupación sobre el funcionamiento de la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje a altos cargos. Y esta inquietud ha desatado la tensión.

Nada debe quedar al azar. Por eso, el Gobierno regional ha tomado cartas en el asunto. Fuentes populares avanzaron el martes que la presidencia de la comisión recaería en un cargo próximo a Esperanza Aguirre. El escogido era Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del Grupo Popular y miembro de la dirección de grupo. Pero fuentes de la Asamblea reconocieron que no está tan claro. "Sol [sede del Gobierno regional] tiene que dar la última palabra", apuntaron. Otro de los nombres que se barajan es el de David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea, uno de los hombres duros de Aguirre en el Parlamento regional.

Los socialistas observan de reojo cualquier movimiento de sus rivales políticos y aplazan la designación de los tres miembros que les corresponden. Fuentes del PSOE avanzan que la portavoz del grupo, Maru Menéndez, y el portavoz adjunto, Adolfo Navarro, estarán en la comisión. También Inés Sabanés, la portavoz de IU, intervendrá junto a Miguel Reneses.

La investigación quedará así en manos de los jefes de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. La oposición teme que el PP ponga trabas al desarrollo de la comisión con unas reglas que no impidan el turno de réplica. De ser así, la comisión se convertiría en un monólogo del compareciente que podría eludir las preguntas de los miembros de la comisión.

(www.elpais.com, 05/02/09)

174. LA COMISIÓN NO SERÁ "UN CIRCO", ADVIERTE EL PP

La supuesta red de espionaje controlada desde la Comunidad de Madrid desembarcará en sede parlamentaria. Como un aperitivo de la comisión de investigación que comenzará a funcionar el viernes, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dará las primeras explicaciones sobre esta trama en la Asamblea regional. Dos preguntas, del PSOE e IU, estrenarán así el nuevo periodo de sesiones en el parlamento autonómico.

Será el primer envite. Mañana concluye el plazo para que los tres partidos que constituirán la comisión: PP, PSOE e IU, registren su primera petición de comparecencias. El consejero de Sanidad y responsable de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, advirtió de que su partido no tolerará que la comisión "se tome como una broma ni que nadie tenga la tentación de convertirla en un circo".

La investigación parlamentaria finalizará el próximo 28 de febrero. La oposición considera que tanta premura por parte del PP responde a la estrategia de atragantar el trabajo de la comisión. Güemes verbalizó cierta urgencia al señalar que la Asamblea podrá "alcanzar conclusiones relativamente rápido".

El portavoz del PP madrileño pidió también que la comisión se marque "un calendario de trabajo intenso". De este modo, nueve diputados, cinco del PP y cuatro de la oposición, tendrán que hacer frente a la estajanovista filosofía de trabajo anunciada por Güemes: "Que la comisión se reúna cuantas más veces mejor, que comparezcan cuantas más personas mejor y que se haga rápido, porque conviene despejar cualquier duda cuanto antes".

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, cree que Aguirre quiere "echar tierra encima" de la comisión "para que no se esclarezca nunca la verdad". Desde esa sospecha, el PSOE pide "transparencia" al Ejecutivo regional: luz, taquígrafos, y las cámaras de la televisión pública de Madrid. Los socialistas esgrimen un precedente, Telemadrid ya emitió en directo las comparencias de la comisión que investigó el denominado Tamayazo, en agosto de 2003.

Entretanto, los protagonistas de la trama esperan su citación. Uno de los cargos supuestamente espiado, el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, aseguró que "estaría encantado" de comparecer. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló que ella y Rajoy "están dispuestos a ayudar en lo que sea posible".

175. AGUIRRE ELUDE DAR EXPLICACIONES DEL "LODAZAL DE 'DOSSIERS" A LA OPOSICIÓN

La Asamblea de Madrid resucitó los momentos más ásperos desde el episodio de transfuguismo de 2003 de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que abrió las puertas de la presidencia regional a Esperanza Aguirre. Durante tres horas, la oposición intentó, sin éxito, que Aguirre, su viceconsejero, Ignacio González, y el responsable de Interior, Francisco Granados, intentaran aclarar el "el lodazal de dossiers para chantajear a altos cargos" que, en palabras del diputado socialista Adolfo Navarro, se había convertido la Comunidad de Madrid.

PSOE e Izquierda Unida querían saber si algún "subordinado había usurpado atribuciones en las competencias de seguridad previstas en el Estatuto de autonomía; por qué un Gobierno sin apenas competencias de seguridad tienen tal número de asesores y altos cargos de seguridad; por qué Granados destituyó a su responsable de Seguridad Sergio Gamón y lo recuperó a los tres días o por qué le paga 91.000 euros al año por limitarse a hacer un informe sobre la seguridad privada de los edificios de la Comunidad".

Lejos de dar respuestas, Aguirre y sus consejeros replicaron a la catarata de preguntas contraatacando. La presidenta acusó al PSOE de tener "una larga historia de espionaje político". "Desde 1984 a 1995 funcionó un gabinete de espionaje por el que tuvo que dimitir quien lo creó como ministro de Defensa [Narcís Serra] y luego dimitió como vicepresidente del Gobierno por haber espiado, del Rey abajo, a todo el mundo. No sólo a los de su propio partido sino al Partido Comunista y a Alianza Popular". También aludió Aguirre a casos más recientes. Y se refirió al presunto "espionaje del Gobierno de Andalucía a los presidentes de las cajas andaluzas", caso que fue investigado por un juez y archivado a los pocos días.

La presidenta eludió las preguntas de la oposición sobre la responsabilidad política en la red de espionaje y se refugió en la creación de la comisión de investigación que se pone en marcha y de la que, aseguró, no se derivarán responsabilidades políticas. "Queremos claridad para demostrar que aquí nadie ha espiado", espetó Aguirre.

González siguió la estrategia al pie de la letra y, tras negar todas las acusaciones sobre su intervención en algunos contratos del Canal de Isabel II que preside, en los que presuntamente se favoreció a empresas de familiares, reclamó a la oposición que, "una vez que haya culminado la comisión de investigación, si no se prueba nada, pidan excusas por las acusaciones graves que se han hecho".

La portavoz socialista, Maru Menéndez, caldeó aún más el debate cuando se dirigió a Aguirre para decirle que "llegó a la Comunidad bajo sospecha y saldrá bajo sospecha". La frase no sentó nada bien en la bancada popular. La portavoz socialista presentó una queja formal contra el portavoz adjunto del PP por llamar "cacatúas" a la bancada socialista.

Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, después de reprochar a los responsables populares que "no respondieran a las preguntas", le espetó a Aguirre que se estaba "enfrentando a uno de los momentos más duros de su gobierno". "Sobre la Consejería de Interior y el Gobierno regional recaen

sospechas muy serias y firmes de que pudieran haberse vulnerado derechos fundamentales con espionajes fuera de control, con seguimientos fuera de la ley pagados con fondos públicos".

(www.elpais.com , 06/02/09)

176. RAJOY: "NO ME PARECE RAZONABLE COMPARECER"

Los grupos de la Asamblea de Madrid decidieron la composición de la comisión de investigación que se constituye y que integrarán nueve diputados. Uno de los asuntos es la lista de comparecientes. Quien parece que no estará es el líder del PP, Mariano Rajoy. Ni el PSOE ni el PP parecen dispuestos a citarlo. Rajoy consideró en Rianxo (A Coruña), adonde acudió para respaldar la campaña del PP, que no le parece "razonable" comparecer y negó que el ex tesorero del partido Álvaro Lapuerta le dijera "nada" sobre dossiers.

Aunque ni socialistas ni populares citarán a Rajoy, IU sí lo incluirá. Inés Sabanés (IU) espera que la comisión comience con Esperanza Aguirre y concluya. Los socialistas sí están dispuestos a llamar a Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados, Ruiz-Gallardón, la estructura de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y algunos de los empresarios vinculados a la información aparecida sobre las supuestas adjudicaciones irregulares en la contratación.

(www.elpais.com , 06/02/09)

177. LA COMUNIDAD DA SIETE CONTRATOS A UNA FIRMA VINCULADA AL GERENTE DEL CANAL

Una empresa de telecomunicaciones e informática de la que fue socio el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, ha obtenido siete contratos públicos de la Comunidad de Madrid que superan 3,9 millones de euros. De Miguel fundó la empresa Secuencia Pixels junto a su cuñado, Fernando Ruano, y otros socios en 2002. La abandonó un año después, cuando se convirtió en gerente de la compañía de aguas que preside el número dos del Gobierno regional, el vicepresidente Ignacio González.

Secuencia Pixels obtuvo siete contratos de la Administración regional entre 2006 y 2008. Fueron adjudicaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), que depende de la vicepresidencia regional desde junio de 2008. De Miguel negó cualquier vinculación con esas adjudicaciones. Ruano también rechaza que el gerente del Canal haya influido.

De Miguel, hombre de confianza de González, aparece en dos dossiers de la trama de presunto espionaje que afecta a cargos públicos madrileños. Participó en el viaje a Colombia donde se le hizo un seguimiento a González. Y también está en otro informe que alude a las supuestas casas de lujo y fincas del gerente.

De Miguel entró en Secuencia Pixels como accionista mayoritario con "un 30% de participaciones", según indicó a *EL PAÍS*. Presidió la compañía hasta que le nombraron gerente del Canal en diciembre de 2003. El gerente asegura que en ese momento vendió sus acciones a su cuñado y se desvinculó de la firma, como consta en el Registro Mercantil, "para no tener conflicto de intereses".

ICM otorgó las cinco primeras adjudicaciones a Secuencia Pixels por 2,3 millones de euros entre febrero de 2006 y junio de 2008. A partir de esa fecha, cuando esta agencia dejó de depender de la Consejería de Hacienda y entró a formar parte del organigrama de vicepresidencia, obtuvo otros dos contratos por 1,6 millones. La mayoría era para suministrar aplicaciones informáticas.

Secuencia Pixels, según datos de la Comunidad de Madrid, se ha presentado desde 2006 a 34 concursos de los que ha ganado siete para dar servicios a las Consejerías de Justicia, Vivienda, Educación y Hacienda.

Las dos adjudicaciones más cuantiosas fueron para Justicia. Se otorgaron en junio de 2007 (por 1,7 millones de euros) y en noviembre de 2008 (1,4 millones). Ambos fueron concursos abiertos con dos y tres participantes, respectivamente, según un portavoz de la Comunidad, que añade que Secuencia presentó la oferta más económica.

De los otros cinco contratos, cuatro se concedieron en concursos restringidos, en los que la administración invita a un número cerrado de empresas, según el Gobierno regional. El primero de ellos lo ganó Secuencia en septiembre de 2006, para un plan de comunicación para los juzgados por valor de

134.080. Competía con otras dos firmas. En febrero de 2007, Secuencia obtuvo otro contrato para el SICE (Sistema Informático de los Centros Educativos) por 145.000 euros. También en concurso restringido logró la adjudicación del soporte informático de la oficina de quejas de Hacienda (108.919 euros) en octubre de 2007. Y en septiembre de 2008 fue la adjudicataria, frente a otras dos compañías invitadas al concurso, de los sistemas de información para la oficina de Vivienda (203.440 euros). La empresa ganó una quinta adjudicación en concurso abierto y con otro adjudicatario (193.336 euros) en febrero de 2006.

Los contratos de Secuencia con el Gobierno madrileño suponen el 30% de sus ingresos, según afirmó Fernando Ruano. Insistió en que trabaja también para otras administraciones, como el Ministerio de Industria.

(www.elpais.com , 06/02/09)

178. CREO QUE ES ALGO ASÍ COMO COORDINADOR", DICE GONZÁLEZ SOBRE GAMÓN

"Creo que es algo así como coordinador del área de seguridad". Fue todo lo que alcanzó a decir el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al ser preguntado por el cargo y funciones del inspector Sergio Gamón en el Gobierno regional. "Está adscrito a la Consejería de Presidencia y tendrá las funciones que diga en el decreto de su nombramiento", añadió en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Francisco Granados las aclaró más tarde, pero en la web de la Comunidad de Madrid no figura ni una sola competencia adjudicada al área de Seguridad.

Gamón es uno de los personajes centrales en la trama de espionaje político que lleva dos semanas llenando los medios de comunicación. Es directamente sospechoso de haber dirigido el asalto al despacho del ex consejero de Justicia Alfredo Prada y el robo de su ordenador en junio de 2008. El pasado martes, compareció en la Asamblea de Madrid precisamente para explicar sus funciones, y tuvo dificultades para aclararlo.

González insistió en su disposición a acudir a la comisión de investigación que se constituye en la Asamblea de Madrid sobre el espionaje. "Le he pedido al Grupo Parlamentario que me pida", dijo, con lo que garantiza su presencia. A pesar de que González parece no haber hecho ningún tipo de averiguación sobre Gamón, dijo tener la esperanza de que "la comisión aclare el objeto que persigue, averiguar si alguien ha montado un servicio de espionaje en la Comunidad de Madrid".

Por su parte, Francisco Granados, consejero de Presidencia, dijo que la principal función de Gamón es "informar los expedientes de contratación de seguridad" de la Comunidad de Madrid. Es decir, controlar las condiciones en que se contrata la seguridad y las bases de los concursos. También realiza informes sobre la seguridad en edificios del Gobierno regional y participa en la supervisión de la misma. El cargo de Gamón, según el decreto por el que se creó, en julio de 2008, es director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid, con las funciones de seguridad en los edificios públicos. Sin embargo, en la página web Madrid.org el apartado "competencias" de esa Dirección de Área aparece vacío, en blanco. Fuentes de la Consejería de Presidencia lo achacaron a un fallo de coordinación entre el departamento y el equipo que hace la página. La página web, indicaron, no se actualizó en su momento y ahora, en medio de esta polémica, sería malinterpretado hacer cualquier cambio en la información.

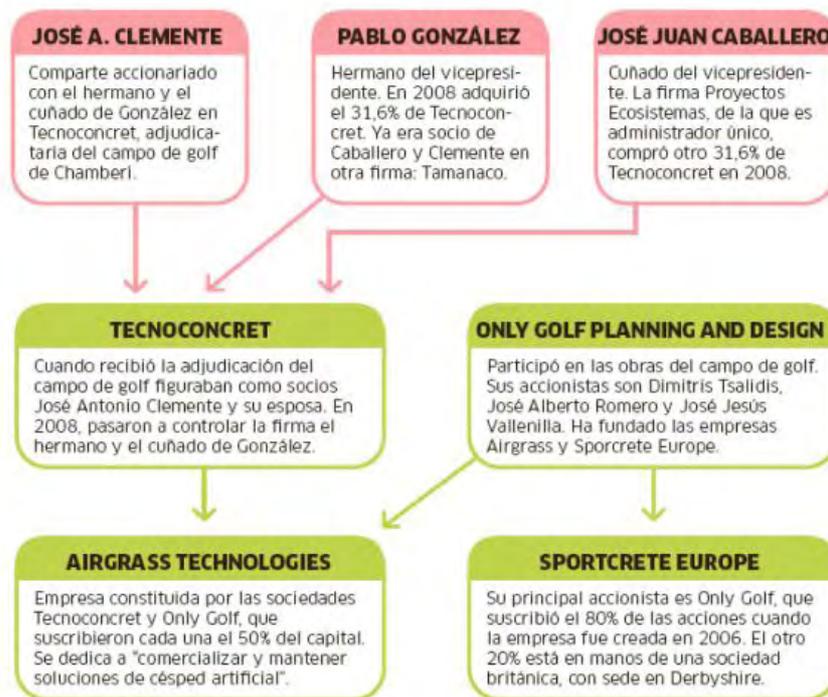
(www.elpais.com , 06/02/09)

179. UN CUÑADO DE IGNACIO GONZÁLEZ FUE "PROMOTOR DEL PROYECTO" DEL CAMPO DE GOLF DEL CANAL

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, **Ignacio González**, no sólo adjudicó la explotación del campo de golf de Chamberí a un socio de su hermano y de su cuñado. Las obras de dicho campo también fueron realizadas por empresas vinculadas a su familia, mediante subcontratas recibidas de ACS. Y un cuñado de González, José Juan Caballero, fue uno de los "promotores" del proyecto.

El diseño y la construcción del golf de Chamberí corrió a cargo de varias firmas relacionadas entre sí. La principal se llama Only Golf Planning and Design y elaboró un vídeo promocional para explicar el éxito de su trabajo, al que ha tenido acceso Público. En dicho vídeo se indica que los "promotores de proyectos" de la sociedad son José Juan Caballero y José Antonio Clemente.

La familia y sus socios



FUENTE: REGISTRO MERCANTIL DE MADRID Y ELABORACIÓN PROPIA

infografia@publico.es

Caballero está casado con Isabel González, hermana del vicepresidente y diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Clemente, por su parte, es un hombre clave en los negocios de los familiares del vicepresidente. En junio de 2006, fundó la empresa Tamanaco junto a Caballero y a Pablo González, hermano del número dos de Aguirre. Y también era el accionista y administrador de Tecnococoncret cuando esta sociedad recibió la adjudicación para explotar el campo de golf de Chamberí. **Como desveló este lunes este diario**, Pablo González y José Juan Caballero se han hecho hace tres meses con la mayoría del capital de Tecnococoncret.

Las obras del campo de golf se terminaron antes de las elecciones autonómicas de 2007. Como subcontratistas del Grupo ACS trabajaron Only Golf y Sportcrete. Se trataba de construir, encima de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, un campo de golf de nueve hoyos y una zona de prácticas. El proyecto contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un espacio público.

Según datos que figuran en el vídeo promocional, el presupuesto total del proyecto ascendió a 50 millones de euros, de los que 3,5 se asignaron al campo de golf. Como accionistas de Only Golf figuran en el Registro Mercantil tres personas: Dimitris Tsalidis, José Alberto Romero y José Jesús Vallenilla. El objeto de esta empresa, fundada en noviembre de 2003, es "el diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones deportivas".

Además de tener a Caballero y Clemente como "promotores de proyectos", **Only Golf comparte negocios con Tecnococoncret**. Recientemente, ambas empresas han constituido la firma Airgrass Technologies, dedicada a "comercializar soluciones de césped artificial".

En cuanto a otra de las subcontratistas, Sportcrete, se trata de una filial de Only Golf, que controla el 80% de su capital. El 20% restante está en manos de una sociedad británica, cuya sede está en la localidad de Derbyshire.

En definitiva, en la fase de construcción del campo de golf, la contratista principal ACS **decidió subcontratar a empresas ligadas a la familia de González**. Y luego, en el momento de adjudicar la explotación del campo, Ignacio González le dio la concesión a una empresa de ACS Iridium y a otra del socio de su hermano y de su cuñado.

(www.publico.es, 06/02/09)

180. GONZÁLEZ NIEGA HABER FAVORECIDO A SUS FAMILIARES

"En ningún caso se ha hecho una adjudicación por parte de ninguna entidad dependiente de mí a ninguna empresa en la que figure ninguno de mis familiares". Esta fue la respuesta que esgrimió Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, tras la reunión del Consejo de Gobierno regional.

El número dos de Esperanza Aguirre respondía así a la información publicada por este diario en la que se señalaba que Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente, habían entrado en noviembre de 2008 en el capital de Tecnoconcret, sociedad que recibió hace dos años la concesión para explotar un campo de golf en el barrio madrileño de Chamberí. La adjudicación la realizó el Canal de Isabel II, que preside el propio González.

Interrogado por este tema, González comenzó diciendo que no sabía muy bien de qué le hablaban. Después dijo que se imaginaba que se trataba de una historia que no había tenido "aún oportunidad de leer". Pero, para no haberlo hecho, la relacionó de inmediato con otra que apareció en abril de 2007 en la revista Tiempo, y en la que obviamente no se informaba sobre compras de acciones de miembros de la familia González que se produjeron año y medio más tarde.

"Esa es una información ya muy vieja", comentó en dos ocasiones, mientras afirmaba que ya había dado "explicaciones en su momento". A pesar de las vueltas que le dio al asunto, Ignacio González no desmintió en ningún momento los datos aportados por Público.

Pero no fue la única polémica de la que se desentendió. A González también se le preguntó qué le parecía que la galería de subastas Segre, que dirige su esposa Lourdes Cavero, hubiera vendido varias obras de arte a la Comunidad madrileña. "Es imposible que conozca los millones de contratos y decisiones que se toman en la gestión de la Comunidad de Madrid", se defendió. Y añadió que, si la Consejería de Cultura había decidido hacer esas compras, tenía que ser dentro "de la política que estaba llevando a cabo y en función de sus objetivos culturales".

Y también sostuvo que desconocía que una bodega de vinos de Ribera de Duero en la que participa el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, haya supuestamente vendido sus caldos al Gobierno regional: "No tiene nada que ver con la actividad pública a la que me dedico. No tengo ni idea". González, eso sí, quiso aprovechar la ocasión para recordar que él había solicitado voluntariamente comparecer ante la comisión de investigación que comienza en la Asamblea madrileña.

El portavoz del Ejecutivo regional se lamentó de que "desgraciadamente", durante estos días, tanto él como sus compañeros hayan sido el principal objetivo de los medios de comunicación "sin que nadie haya acreditado absolutamente nada". En realidad, casi todas las revelaciones periodísticas están basadas en documentos, muchas veces públicos.

González cree que todo es una campaña "de echar velos de sospechas". Por eso afirmó que el más interesado en que se aclare todo es él, recordó que fue el primero en poner todo el caso en manos de la justicia y se mostró "especialmente satisfecho" por el arranque de la investigación. González desea que ésta "vaya muy rápido" y sirva para "clarificar quién está detrás y con qué objetivos". También pidió "responsabilidades" en el caso de que se hubiera cometido alguna actuación ilícita y "rectificaciones públicas" si se demuestran falsas "las imputaciones tan graves que se han hecho".

Como viene repitiendo desde el primer día, González dijo que no hay "nadie más interesado" que él en la resolución de esta trama y que le parece "estupendo" que toda aquella persona que pueda aportar algo lo haga. Y para este cometido valen también su presidente nacional, Mariano Rajoy, y su secretaria general, María Dolores de Cospedal. "Sé de la disponibilidad de ambos", destacó.

Por último, se le pidió que explicara las funciones del ex policía Sergio Gamón, a quien varias informaciones apuntan como uno de los presuntos cabecillas de la trama de espionaje. "Creo que es algo así como coordinador del área de seguridad, que está adscrito a la Consejería de Presidencia y que tendrá las funciones que ésta le asigne", respondió de forma dubitativa.

(www.publico.es, 06/02/09)

181. EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE FALTA DE NUEVO A LA VERDAD

Ignacio González aseguró que la noticia desvelada por 'Público' era una "información muy vieja" que ya había sido publicada en su día por 'Tiempo'. Resulta sencillo comprobar que la versión del vicepresidente no se ajusta a la verdad. La información de la revista a la que se refiere González es de abril de 2007, mientras que este diario reveló que un hermano y un cuñado del vicepresidente compraron acciones de la empresa Tecnoconcret el 10 de noviembre de 2008. Así que parece complicado sostener que en 'Tiempo' tuvieron la audacia de prever con año y medio de antelación las actividades empresariales de la familia González.

o es la primera vez que el número dos de Aguirre no cuenta la verdad. Cuando saltó el escándalo, González afirmó que no había adjudicado "nada" a las sociedades de Enrique Sánchez, el empresario con el que viajó a Suráfrica. 'Público' desveló que el Canal delsabel II, empresa que preside González, le había adjudicado un contrato de 33 millones de euros a Segurisa y otro de 2,6 millones a Saminsa. Ambas compañías tienen como accionista mayoritario a Enrique Sánchez.

(www.publico.es, 06/02/09)

182. EL PP NO QUIERE QUE TELEMADRID RETRANSMITA LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE

Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, ha vuelto a reclamar que Telemadrid emita en directo las sesiones de la Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid que ha empezado su andadura. El Partido Socialista Madrileño –PSM- ya había hecho esta petición el pasado miércoles, pero la hizo llegar a la misma presidenta, Esperanza Aguirre durante su comparecencia en el Parlamento. La lideresa, sin embargo, hizo oídos sordos y obvió la cuestión. Al parecer, su deseo de "luz y taquígrafos" no incluye cámaras, y menos de Telemadrid.

Menéndez ha explicado que el "indudable interés público" de la comisión hace "imprescindible que Telemadrid informe en directo a los ciudadanos" de ella, apelando a la citada voluntad de "transparencia" que manifestó Aguirre cuando anunció la creación de la investigación parlamentaria.

"Luz y taquígrafos. Esto es lo que dice Esperanza Aguirre que quiere para la Comisión de Investigación, así que vamos a solicitar que Telemadrid, como ente público autonómico que es, emita en directo y sin cortes las comparecencias que se desarrollen en esta investigación", explicó la portavoz el miércoles.

durante el pleno en el que comparecía la presidenta, Menéndez la reiteró la petición reprochándole su escaso interés en "la verdad". Para que eso no ocurra, y en aras de "salvaguardar los derechos de la ciudadanía", exigió a Aguirre que permitiera a Telemadrid televisar en directo la comisión. La jefa del Ejecutivo regional dio la callada por respuesta, y evitó dar un sí o un no.

Fuentes del ente autonómico consultados por este diario han explicado que Aguirre no tiene ninguna intención de retransmitir la comisión, y que esta negativa no se debe a cuestiones "económicas" –por el coste de la transmisión- ni de "audiencia". "Podrían usar La Otra -la hermana en TDT de Telemadrid con escasas presiones de este tipo- para retransmitirla como hicieron con la comisión del 11-M, seguro que el espionaje tiene más seguimiento", precisan.

Precisamente, si de audiencia se trata, en agosto de 2003, cuando el ente autonómico emitió la Comisión de Investigación del llamado tamayazo, retransmitiendo en directo las comparecencias de Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez, entre otros, la cadena alcanzó "elevados índices de audiencia", como explica el entonces director general, Francisco Jiménez-Alemán. Los buenos datos, sin embargo, fueron decayendo y se sustituyeron por avances diarios de diez minutos de duración y amplia cobertura en los telediarios.

(www.elplural.com, 06/02/09)

183. TENSA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POR LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID

Esta mañana se ha constituido la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por la presunta trama de espionaje que, según las informaciones del diario *El País*, dependería de la Consejería de Presidencia e Interior de la región que preside Francisco Granados. Tras una tensa discusión sobre la composición de la comisión, en la que PSOE e IU han intentado sin éxito que Inés Sabanés (portavoz de IU) presidiera el órgano, la mayoría popular ha impuesto a Benjamín Martín Vasco, de la confianza de Aguirre, como presidente. La vicepresidencia ha recaído en la socialista Encarnación Moya y la secretaria ha sido para la popular Gandor Ongil.

Tal y como estaba previsto, la comisión ha quedado integrada por los populares David Pérez (portavoz), Juan Soler, Pablo Casado, Gador Ongil (secretaria) y Benjamín Martín (presidente). Por parte del PSOE conforman la comisión Maru Menéndez (portavoz), Adolfo Navarro y Encarnación Moya (vicepresidenta); e Inés Sabanés (portavoz) representa a IU.

El clima polémico que probablemente tendrá la comisión se ha dejado ver ya en la sesión de constitución de la mesa, cuando PSOE e IU han mostrado su disconformidad por el hecho de que el grupo Popular, que es el objeto de la investigación y el grupo mayoritario, sea el que preside el órgano extraordinario.

Menéndez recordó que la tendencia general es que los grupos minoritarios presidan este tipo de comisiones, algo que desmintió el portavoz del PP. Pérez aseguró que "en la Asamblea de Madrid todas las comisiones las ha presidido el grupo mayoritario". "No manipulen, la tradición en esta Cámara es que siempre las ha presidido el grupo mayoritario (...) Un poco de respeto al procedimiento, a la sala y a los madrileños", reclamó.

La tensión se ha mantenido al estudiar también la organización de los temas a tratar en la comisión y el calendario de la misma. Pese a los intentos de PSOE e IU por ampliar el calendario de sesiones, finalmente la comisión se reunirá los lunes y miércoles en sesión de mañana y tarde y los viernes en sesión de mañana hasta el próximo 28 de febrero y con posibilidad de prorrogar un mes más el órgano.

(www.elplural.com, 06/02/09)

184. EL PP PRESIDIRÁ LA COMISIÓN DE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID

La **comisión de investigación de la Asamblea de Madrid** por la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid ha quedado constituida bajo la presidencia del diputado conservador Benjamín Martín Vasco, tras ser rechazada la propuesta del PSOE de que reca en la portavoz de IU, Inés Sabanés.

Los nueve miembros (5 del PP, 3 del PSOE y 1 de IU) se reunirán los lunes y los miércoles en sesiones de mañana y tarde, y los viernes sólo por la mañana, hasta el 28 de febrero, prorrogable a un mes más. Asimismo, aquellas personas a las que se solicite su comparecencia, tendrán obligación de asistir a la reunión.

En la sesión de constitución de la comisión a "objeto de estudiar y analizar las responsabilidades políticas que pudieran derivar de la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid", la portavoz socialista, Maru Menéndez, propuso dejar la presidencia al grupo minoritario en "aras a la transparencia y a la claridad de la investigación", como se ha hecho en otros ámbitos.

Sin embargo, la vicepresidenta de la Cámara, Cristina Cifuentes (PP), rechazó esta posibilidad por considerarla una "voluntad política" y por no corresponder con las reglas establecidas por la Junta de Portavoces en esta Legislatura. "En ningún caso se ha expresado que deba ser por el grupo mayoritario el que obtenga la presidencia, sino el grupo que tenga más votos obtenga de acuerdo con el voto ponderado", destacó.

Por su parte, Sabanés destacó que las propuestas de presidencia de la comisión "están vinculadas a un criterio político", por lo que el PP podrían haberlo aceptado "por tradición democrática", con el "mismo reglamento y con el mismo criterio".

Dado que no fue aceptada la misma, procedió a retirar su candidatura, con el fin de que Encarnación Moya, del PSOE, obtuviera la vicepresidencia.

Será secretaria de la comisión la conservadora Gádor Ongil.

(www.publico.es, 06/02/09)

185. EL PP ARRANCA LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS' CON TODO TIPO DE ZANCADILLAS

No había prácticamente empezado la comisión de investigación sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid, y el presidente, Benjamín Martín Vasco, del PP, ya mostraba sus cartas. Hasta cuatro veces quitó la palabra a Maru Menéndez, la portavoz socialista, y a Inés Sabanés, de IU, ante el estupor de ambas.

"Mal empezamos, presidente si me quita la palabra el primer día", le espetó Menéndez. "Presidente, no sabe lo que voy a reclamar, permítame que lo reclame, por favor", se quejó Sabanés cuando Martín Vasco no le dejaba ni siquiera exponer su petición. El presidente, teóricamente un cargo institucional, llegó a decir en un momento: "Entiendo la buena voluntad del Grupo Popular", para aplaudir una intervención de David Pérez, el portavoz del PP. Pérez es el jefe de Martín Vasco, que no es un diputado cualquiera, sino un miembro de la dirección del grupo, por tanto, un aguirrista de la absoluta confianza de la cúpula.

Toda esta bronca se produjo sin que hubiera ningún compareciente polémico, mientras se discutían cosas tan básicas como qué días de la semana se trabajará. Después de una sesión de control del jueves durísima, en la que Esperanza Aguirre recuperó escándalos socialistas de hace más de 20 años, lo de es sólo un pequeño avance de una comisión que el PP pretende controlar hasta sus últimos detalles para evitar que se deteriore aún más la imagen de Aguirre y su Gobierno.

El PP arrancó utilizando su mayoría absoluta para poner varias zancadillas a la oposición. Primero, decidió que sólo habrá tres días hábiles: lunes y miércoles a jornada completa y viernes sólo por la mañana. El martes, adujo el PP, hay junta de portavoces, y el jueves pleno. IU replicó: pongamos también el martes por la tarde, y ampliamos a la tarde del viernes, para poder agilizar. Los diputados del PP, con poco margen porque las decisiones políticas se toman en la Puerta del Sol, donde está el Gobierno madrileño, votaron en contra incluso de esta pequeña ampliación.

Los populares no dieron ninguna garantía de que la comisión pueda ser considerada de investigación, esto es, que incluya repreguntas y capacidad de interrogar realmente al compareciente, como sucedió en todas las comisiones importantes del Congreso. La última fue la del 11-M, con interrogatorios de hasta 12 horas, como el de José María Aznar.

Según el reglamento, el PP puede forzar que haya comparecencias de poco más de una hora y sin ninguna repregunta, como una "sucesión de monólogos", en palabras de Menéndez. El PP no rechazó de plano la idea de las repreguntas, pero tampoco se comprometió a nada. Y la actitud del presidente, cortando constantemente a la oposición, hizo temer a PSOE e IU que no va a dar ningún tipo de facilidades cuando estén allí miembros del Gobierno del PP, y por tanto jefes supremos de Martín Vasco.

El PP puso otras zancadillas de las que la oposición ni siquiera se percató en un primer momento. Concentrados como estaban en las repreguntas y otro tipo de cuestiones, no con en la cuenta de que los populares aprovechaban su mayoría para dilatar al máximo los plazos para empezar a trabajar. Hasta el punto de que aún no se sabe cuándo arrancará. Según lo votado, podría retrasarse indefinidamente la llegada del primer compareciente.

El PP, al contrario que PSOE e IU, no registró sus peticiones, y hasta que no lo haga no se podrá votar y arrancar la comisión. Además, hay que dar un plazo de tres días desde que se llama al primero. La situación llega al absurdo de que, aunque el PP ha prometido ser flexible, formalmente la fecha final de la comisión es el 28 de febrero, pero al paso confuso que marcó el PP para esa fecha podrían no estar ni siquiera decididos los comparecientes. El 1 de marzo son las elecciones gallegas y vascas, claves para el PP.

(www.elpais.com, 07/02/09)

186. PRIMER DÍA, PRIMERAS TENSIONES

- David Pérez (PP): El portavoz del PP se indignó con la presencia de Tomás Gómez, que no es diputado, en la Asamblea: "Hay una voluntad de aprovechamiento político descarado. Hay un tiempo para los partidos y un tiempo para los representantes parlamentarios. No respetar esto es no respetar la democracia".

- Maru Menéndez (PSOE). A la segunda interrupción del presidente, la socialista se enfadó: "Mal empezamos si el primer día me retira la palabra. Por favor, permítame expresarme y sabrá lo que quiero decir". Después dijo que la actitud del PP puede convertir este órgano en una "comisión tapadera".

- Inés Sabanés (IU). También interrumpida varias veces por el presidente, del PP, se indignó: "No sabe aún lo que voy a reclamar, permítame que lo reclame, por favor", clamó. Después señaló que sería un "verdadero escándalo político" si el PP veta la comparecencia de personajes clave e impide prolongar la comisión después del 28 de febrero.

- Tomás Gómez (PSOE): "El presidente de la comisión es un intransigente que representa el sector más duro del PP. Venía todo atado y bien atado por Esperanza Aguirre".

(www.elpais.com, 07/02/09)

187. IU Y PSOE INTENTAN EVITAR RETRASOS EN LA INVESTIGACIÓN

La oposición trató de zafarse de la trampa tejida por el Grupo Popular durante la constitución de la comisión de investigación de la presunta trama de espionaje en Madrid. Con las normas aprobadas, las primeras comparecencias no tendrán lugar hasta el próximo viernes, como mínimo. Y si el lunes, como está previsto, no se envían las primeras citaciones, el asunto se retrasaría una semana más. Por eso, para evitar dilaciones, tanto socialistas como IU intentaron solucionar el entuerto parlamentario.

Los grupos de la oposición presentaron por la tarde en la Asamblea sendos escritos reclamando una reunión de la comisión de investigación para fijar el calendario de comparecencias. También solicitan a la Mesa de la Asamblea de Madrid, el órgano que da luz verde a la discusión de las iniciativas, que acepte las citaciones propuestas para poder comenzar cuanto antes los interrogatorios. De este modo y dado que el tiempo que debe transcurrir entre las citaciones y las comparecencias es de tres días, según el reglamento de la Asamblea, la oposición se asegura que las comparecencias no comenzarán más tarde del viernes por la mañana.

PSOE e IU presentaron su relación de comparecientes. El Grupo Popular no la presentará hasta el próximo lunes. Esta circunstancia hace sospechar a los socialistas que el PP trata de retrasar el comienzo de la comisión.

Comparecientes

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, advirtió de que "la comisión tiene fecha de finalización pero no de comienzo". Y reclamó a los populares que no entorpezcan los procedimientos para comenzar cuanto antes con los interrogatorios. Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, confía en que "el lunes se empiecen a calificar las comparecencias para que el viernes comiencen los interrogatorios". El portavoz del Grupo Popular, David Pérez, manifestó su intención "en que no haya problemas con los tiempos".

Desde que se conoció que el PP aceptaba la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, los socialistas han mostrado su desconfianza por el juego limpio de los populares. Menéndez ha expresado en repetidas ocasiones, esta semana, su temor a que la comisión estuviese diseñada a medida del PP. Sospechaban que no habría turno de réplica y que no podrían repreguntar a los comparecientes. La preocupación por el funcionamiento formal de la comisión ha dejado margen al PP para jugar con los plazos.

(www.elpais.com, 07/02/09)

188. CINCO CASOS PARA UNA COMISIÓN

El objeto de la comisión de investigación creada en el Parlamento madrileño es uno: "Analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con el supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid". Pero los caminos para llegar a ese objetivo pueden ser varios, porque el escándalo tiene frentes distintos que se entremezclan. Para tratar de esclarecerlos, PSOE e IU registraron mismo su solicitud de comparecencias: una lista con 56 nombres que aún debe pasar el filtro del PP. Éstos son algunos de los asuntos sobre los que la comisión tratará de arrojar luz:

- Seguimientos parapoliciales a adversarios de Aguirre. En abril de 2008, el vicealcalde, Manuel Cobo, y el ex consejero Alfredo Prada -enfrentados políticamente a Esperanza Aguirre- fueron sometidos a seguimiento por un grupo de agentes que trabajaban supuestamente en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Eso se deduce de los partes de seguimiento, publicados por *EL PAÍS*, donde los espías hablan de "nuestro director, Sergio" -supuestamente Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad- y de "Miguel" -supuestamente el ex subdirector Miguel Castaño-. Los agentes se encaminan a veces a la "D. G.", identificada con la Dirección General de Seguridad. El máximo responsable de la consejería es Francisco Granados, aunque fuentes cercanas a él y a Prada aseguran que Gamón no respondía ante Granados sino ante el vicepresidente Ignacio González (el número dos de Esperanza Aguirre) y el viceconsejero Alejandro Halffter, un hombre de González.

- Asalto al despacho de un alto cargo. El 27 de junio de 2008, Sergio Gamón, director general de Seguridad, se presenta con varios agentes en un organismo de la Consejería de Justicia, entra en un despacho y requisita un ordenador. El despacho es de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de quien ha sido destituido como consejero de Justicia la víspera: Alfredo Prada (después de colocarse del lado de Rajoy en la batalla de poder en el PP). El ordenador contiene supuestamente informes confidenciales (algunas fuentes aseguran que es un dossier contra Granados; otras, que se trata de información contra González). El asunto ya salió a la luz pública entonces (Gamón fue destituido por el asalto al despacho, aunque permaneció en nómina de la Comunidad), pero ahora vuelve a cobrar relevancia porque otro de los altos cargos que ha sido espiado es Juan Carlos Fernández. En los dossiers aparece con el apodo de "el cabezón": así es como era llamado en la consejería según confirman distintos responsables de ésta.

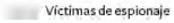
- Espionaje al vicepresidente. Ignacio González fue grabado con cámara oculta durante un viaje oficial a Colombia en agosto de 2008, según figura en uno de los dossiers publicados por *EL PAÍS*. Un segundo dossier informaba de un viaje privado del vicepresidente a Suráfrica cuatro meses antes, y denunciaba adjudicaciones presuntamente irregulares de la Comunidad a empresas (como un tercer dossier, divulgado por Público). Uno de los empresarios iba en el avión con González; en otros casos las empresas están ligadas a familiares del vicepresidente. PSOE e IU llaman a declarar a varios empresarios.

Éste es uno de los episodios más confusos del escándalo, porque González aparece a la vez como víctima de espionaje y acusado de irregularidades en el ejercicio de su cargo. Y también porque algunos de los sospechosos de ordenar el resto de seguimientos eran hombres de confianza del vicepresidente.

- Las denuncias ante la dirección nacional del PP. El ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, comunicó en mayo de 2008 a su presidente, Mariano Rajoy, que creía estar siendo espiado por gente relacionada con la Comunidad de Madrid, según ha explicado el propio Lapuerta y confirmado el PP. Esperanza Aguirre, por otro lado, asegura que Lapuerta había tenido acceso a informes que atentaban contra el honor de Ignacio González y Francisco Granados, y que avisó a Rajoy en 2006; éste se limita a decir que él no vio ningún dossier.

- Un 'CNI' autonómico. En junio de 2008 y ante la creciente sensación de que altos cargos del Gobierno regional, él incluido, estaban siendo espiados, González barajó crear un servicio secreto similar al CNI. Encargó un borrador del proyecto a Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta, pero finalmente el plan quedó aparcado. La Comunidad de Madrid carece de competencias para tener un CNI.

■ Comparecencias solicitadas por PSOE e IU

PRINCIPALES ASUNTOS A TRATAR POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN					
SEGUIMIENTOS PARAPOLICIALES A DIRIGENTES DEL PP	ASALTO AL DESPACHO DE UN ALTO CARGO DEL EX CONSEJERO PRADA	ESPIONAJE AL VICEPRESIDENTE Y ADJUDICACIONES SOSPECHOSAS ATRIBUIDAS A ÉL	LAS DENUNCIAS DEL EX TESORERO DEL PP A LA DIRECCIÓN NACIONAL	PROYECTO PARA CREAR UN CNI AUTONÓMICO	OTROS COMPARECIENTES
 Alfredo Prada, ex consejero de Justicia e Interior  Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior  Sergio Gamón, ex director general de seguridad de Interior <ul style="list-style-type: none"> Juan Carlos Fernández, ex director de seguridad del Campus de la Justicia Manuel Cobo, vicescalde de Madrid Enrique Barón, director general de Seguridad e Interior Marcos Peña, asesor de seguridad de Presidencia, Justicia e Interior Miguel Castaño, ex subdirector general de Seguridad 	 Alfredo Prada  Francisco Granados  Sergio Gamón <ul style="list-style-type: none"> Juan Carlos Fernández Alejandro Halffter, vicesconsejero de Presidencia e Interior Alfonso Cuenca, vicesconsejero de Justicia Técnicos y asesores de Consejería de Interior Carmen Rguez, Flores, diputada autonómica del PP Mar Merino, secretaria general técnica de Presidencia, Justicia e Interior 	 Ignacio González, vicepresidente y portavoz de la Comunidad <ul style="list-style-type: none"> Borja Sarasola, secretario general técnico de Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II Enrique Sánchez, accionista de Segurisa Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Estado Fernando Ruano, administrador único de Secuencia Pixels Fidel San Román, empresario 	 Mariano Rajoy, presidente del PP  María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP  Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP <ul style="list-style-type: none"> Luis Bárcenas, tesorero del PP Cristóbal Páez 	 Ignacio González  Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta	 Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid <ul style="list-style-type: none"> Pedro Calvo, concejal del Ayuntamiento de Madrid y delegado del Área de Seguridad Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid Juan Carlos Durán, director de seguridad corporativa del Ayuntamiento de Madrid Carlos Mayor Oreja Alfredo Cabezas Manuel López Eduardo San Román
 Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad					 Víctimas de espionaje

189. EL PP SE RESISTE A ACLARAR SI APOYARÁ LA CITACIÓN A RAJOY

Pérez no quiso adelantar eso ni ninguna otra cosa, porque, aunque subrayó que su grupo apostará por la "máxima transparencia" para llegar "al fondo de la cuestión", respondió con elusiones a todo. Así,

tampoco quiso decir si el PP renuncia a vetar comparencias, aunque más tarde declaró a este periódico: "Los vetos no nos gustan. No forman parte de nuestra política".

PSOE e IU no coinciden en la comparencia de Rajoy, aunque sí en la de su número dos, María Dolores de Cospedal. También piden que acuda a dar explicaciones la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, los máximos responsables de su Gobierno, prácticamente todo el organigrama de la Consejería de Interior y varios empresarios beneficiarios de adjudicaciones en Madrid.

Inés Sabanés, portavoz de IU, quiere empezar preguntando a Aguirre. "Hay que centrar la cuestión y ella es la máxima responsable de la región", afirma. El PSOE prefiere recabar primero información de los cargos medios para después afrontar con más razones los interrogatorios a políticos.

(www.elpais.com, 07/02/09)

190. RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE SÓLO ELLOS NIEGAN

Tanto Esperanza Aguirre como Mariano Rajoy han negado que entre ellos existiera un pacto para afrontar la supuesta trama de espionaje y corrupción que salpica a la Comunidad de Madrid. No lo piensa así la mayoría de los dirigentes del partido, que sospecha que sí ha habido un acuerdo o tregua, como se quiera llamar, para evitar "el suicidio político" al que ambos se encaminaban. En el PP consideran que tanto la presidenta de la Comunidad como el líder conservador estaban sufriendo un "tremendo desgaste" con todo este asunto y que, por eso mismo, decidieron echar el freno.

No entienden sino que de la noche a la mañana Aguirre, que desde el primer día puso la "mano en el fuego" por los suyos, termine aceptando una comisión de investigación en la Asamblea regional. Ni que Rajoy, que lanzó un duro comunicado expresando toda su "repugnancia" por esta trama, suspenda la investigación interna que le había encargado a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Varios parlamentarios y miembros territoriales del PP consideran, además, que la actitud entre ambos ha cambiado mucho en los últimos días. Cuando saltó el escándalo, Rajoy y Aguirre se enzarzaron en una lucha sin cuartel. La presidenta del PP de Madrid estaba, según algunos de sus colaboradores, dispuesta a "morir matando". De hecho llegó a implicar a su jefe de filas diciendo que Rajoy conocía la existencia de comprometidos dossiers por boca de su ex tesorero, Álvaro Lapuerta, desde 2006.

Rajoy, por su parte, prefirió, como cuentan los que le conocen, "mantenerse al margen". Durante 16 días guardó silencio y sólo cuando Aguirre desatascó el asunto, el presidente nacional del PP fue capaz de dar la cara por este tema ante los periodistas. Le habían puesto en bandeja una salida que algunos denominan "cómoda".

en una entrevista en la Cope, Rajoy se mostró "absolutamente seguro" de que la presidenta de la Comunidad iba a ser capaz de demostrar "su verdad". "Estoy muy contento de que Aguirre haya tomado la decisión de abrir una comisión", señaló.

Los cargos intermedios del PP creen que ésta "no va a ser-vir de nada". Y se muestran desesperados por estar todo el día con este "nuevo estigma" en vez de hablando de Zapatero y de la campaña.

(www.publico.es, 08/02/09)

191. INFORMES CALIGRÁFICOS SOBRE LOS PARTES DE SEGUIMIENTO A CARGOS DEL PP EN MADRID. LOS ESPÍAS SON DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR

Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de la ciudad, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre un equipo de la máxima confianza del máximo jefe de esa área, Sergio Gamón, director general de Seguridad. Ese equipo estaba compuesto por asesores, trabajadores eventuales y funcionarios de la consejería.

Los agentes que se encargaron de los seguimientos dejaron anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían durante sus tareas de espionaje. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales.

La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico a los peritos José Javier Simón Alonso y Rafael Martín Ramos.

Antes de encargar los informes periciales, *EL PAÍS* tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí.

En alguno de los documentos de ese departamento con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.

Los peritos Simón Alonso y Martín Ramos sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones de los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la Dirección General de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan Simón Alonso y Martín Ramos.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento.

Pero ni el Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el número 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje.

El consejero de Interior madrileño, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico, pese a que los dos espíados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días.

El autor de la letra a la que se refieren los peritos calígrafos es un técnico de la Dirección General de Seguridad llamado José Manuel Pinto. "No sé de qué me está hablando. Eso lo tendrán que probar en el juzgado", declaró cuando conoció por este periódico el resultado del informe pericial.

El agente Pinto, un veterano que lleva en el servicio desde 1989, trabajaba hasta hace unos meses a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarías de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 Gamón fue destituido de su puesto por irrumpir en un despacho de la Consejería de Justicia -casualmente, de una persona que también había sido espíada algunos meses antes-, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscara un cargo dentro de la misma Consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. El consejero Francisco Granados lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de Madrid.

Unos meses antes de su destitución, se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral, y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario que se iba a celebrar en junio en Valencia.

En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Esperanza Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones.

También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno regional, el consejero de Justicia, Alfredo Prada.

A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quiénes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del partido y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional. Desde hacía meses, había caído en desgracia en el Gobierno de Esperanza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su equipo de gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle únicamente la cartera de Justicia.

Además, sólo dos meses después de los últimos seguimientos a Prada de los que existe prueba documental, y concluido el congreso regional con una victoria aplastante de Mariano Rajoy, la presidenta regional le destituyó como consejero de Justicia.

Uno de sus hombres de confianza, Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, también fue víctima del espionaje del personal de la Dirección General de Seguridad: sólo un día después del cese de su consejero, sufrió el robo de su ordenador personal y de distintos documentos que guardaba en su despacho de la Ciudad de la Justicia. Lo denunció ante la Fiscalía de Madrid, conociendo que Sergio Gamón era el jefe del grupo de agentes que irrumpió en su despacho. Pero la fiscalía archivó el caso porque la prueba concluyente de aquel asalto se había borrado. Las cámaras de videovigilancia del recinto sólo guardaban cinco días de grabación, y el fiscal pidió esas pruebas un mes después de que ocurrieran los hechos.

Sergio Gamón se negó a dar detalles de esta operación en su comparecencia de la semana pasada ante los diputados autonómicos. El consejero de Interior, Francisco Granados, de quien depende, también evitó responder en los últimos días al episodio de la destitución de Gamón y su nombramiento, sólo tres días después, en un cargo que no tiene ni personal ni competencias asignadas. Gamón explicó que desde que le destituyeron como director general de Seguridad se ha dedicado a redactar un informe sobre la seguridad en los edificios institucionales de la Comunidad de Madrid. En eso lleva casi siete meses.

Según fuentes de la Consejería de Interior, Gamón ha contado siempre con una célula de hombres de su confianza para los trabajos más delicados, "secretos", según la denuncia inicial que presentó UGT ante la Dirección General de la Función Pública.

De hecho, los partes de los espías aluden a Gamón, cuando narran que han visto entrar el coche de su "director Sergio" en las oficinas del consejero de Justicia, Alfredo Prada, mientras lo vigilaban. Al igual que anotan que deben volver a la sede de la dirección por órdenes de "Miguel", en alusión a Miguel Castaño, ex subdirector de seguridad recolocado como asesor, al igual que Gamón, tras ser destituido en julio pasado.

(www.elpais.com, 10/02/09)

CONCLUSIONES

- Irregularidad. "Se mueve con un rango específico de irregularidad que permite establecer que se trata de la misma grafía".
- Cifras y letras. "El modo de ubicar cifras y letras, de distanciarlas y de situarlas sobre una línea teórica horizontal" es el mismo.
- Fluctuación. "El tipo de fluctuación de unos y otros textos es similar".
- Tendencia. "Al delimitar las letras, en cada uno de los grupos aparecen las mismas tendencias".
- Distanciamiento. "Hay distanciamientos semejantes entre letras en ambos grupos".
- Comportamiento de la mano. "El comportamiento de la mano es idéntico en todos los casos. Los dedos se desplazan desde el final de una letra hasta el arranque de la siguiente con un impulso irregular, que en la totalidad de los textos presenta recorridos equivalentes".
- Similitudes inequívocas. "La muestra dubitada y las indubitadas son homogéneas, han sido realizadas por un mismo autor. Existen numerosas similitudes que son, sin duda, resultado de la existencia de una

determinada personalidad escritural, lo que permite dictaminar de manera inequívoca que todas las muestras objeto de estudio tienen una autoría común".

- Renglones. "Hay análogas cualidades en la formación de los renglones".

(www.elpais.com, 10/02/09)

192. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE, AMIGO DEL JEFE DE LA TRAMA

El entramado de relaciones con los implicados en el escándalo se extiende por multitud de ayuntamientos de Madrid, distintos organismos de la Comunidad y hasta el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, Benjamín Martín Vasco, el diputado del PP en la Asamblea que ha sido designado presidente de la comisión de investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid, es amigo personal de Francisco Correa, el empresario detenido.

Martín Vasco está siendo investigado y que una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura en una grabación que a Martín Vasco le pagaron para que callara sobre operaciones urbanísticas en Arganda. Fuentes de la Audiencia aseguran que, por el momento, no está imputado en este sumario. El diputado autonómico admite su relación de amistad con Correa. De hecho, explica que antes de 2005 coincidía con él en Marbella, mientras pasaban las vacaciones de verano. Según su versión, salían y asistían a fiestas con grupos de amigos. Niega que fuera de vacaciones a su casa en Marbella y asegura que desde 2005 viaja a Estepona y ya no coincide con Correa. Pero admite su relación de amistad.

El empresario detenido está casado con Carmen Rodríguez, hija de un constructor recientemente fallecido que estuvo implicado en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Algunas fuentes aseguran que Martín Vasco coincidió en Marbella con Emilio Rodríguez Buallo, el suegro constructor de Correa.

Otra relación llamativa es la de la jefa de gabinete del todavía alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que está casada con David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

Elena Cerezo Rodero ocupa ese cargo de confianza del alcalde desde hace seis años. Fuentes del PP en la Asamblea aseguran que se trata de un cargo técnico y que la esposa del portavoz es especialista en comunicación.

Por el cargo de jefa de Gabinete, Elena Cerezo, de 36 años, tiene acceso a la agenda del alcalde de Boadilla, que, entre otras cosas, viajó a Miami con Correa. También se ha asegurado en algunos medios que adquirió un apartamento en Estados Unidos.

Fuentes del PP aseguran que cuando fue designada por González Panero para el cargo, hace seis años, David Pérez no era ni diputado autonómico. El actual portavoz del PP obtuvo el escaño en 2003. Correa es también amigo personal de Jesús Sepúlveda, actual alcalde de Pozuelo y anterior responsable de acción electoral de su partido. Cuando organizaba los actos del PP tenía también estrecha relación con Francisco Álvarez-Cascos, entonces secretario general del partido. Personas vinculadas a Correa han tenido relación con el concejal de Madrid Álvaro Ballarín.

(www.elpais.com, 10/02/09)

193. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN QUE INVESTIGA EL ESPIONAJE NO DIMITIRÁ

El presidente de la comisión de investigación sobre la trama de espionaje político destapada por *EL PAÍS* en Madrid, el diputado autonómico del PP Benjamín Martín, no dimitirá de este cargo por su supuesta implicación en otro escándalo, el de corrupción que investiga Baltasar Garzón. Además, se querellará contra aquellos que le impliquen, tal y como ha anunciado esta mañana el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, que ha dicho estar "convencido" de que las informaciones que apuntan que Martín podría haber recibido dinero a cambio de silenciar la corrupción "no son ciertas". La cadena SER aseguró que una de las detenidas, Isabel Jordán, dice en una grabación que a Martín Vasco le pagaron 30.000 euros para que callara sobre operaciones urbanísticas en Arganda. Otro medio, elplural.com, eleva la cifra a más de dos millones. Por el momento, no está imputado en el sumario.

"Benjamín Martín quiere esclarecer que esa acusación es falsa y demostrarlo. Si no se produce una rectificación, se querellará. Por el momento no se va a derivar ninguna otra actuación. Lo primero es

esclarecer si esas informaciones son ciertas o no y yo estoy convencido de que no son ciertas", ha afirmado el portavoz del PP, que ha incidido en la "presunción de inocencia".

David Pérez se ha referido así, en declaraciones tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, a la petición formal que han efectuado en la Junta de Portavoces de la Asamblea las portavoces del PSOE e IU, Maru Menéndez e Inés Sabanés, para que Martín sea apartado por el PP de la presidencia de la comisión de investigación y sea recusado como miembro de ésta. PSOE e IU entienden que Benjamín Martín podría haber recibido dinero a cambio de su silencio. My gráficamente lo ha expresado el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quien a dicho que "no se puede poner a la zorra a cuidar el gallinero". En una entrevista en Telemadrid, el líder socialista ha llamado "a la cordura" al PP para "que depure responsabilidades, sea transparente y permita que todos los ciudadanos conozcamos la verdad" sobre la trama de espionaje.

¿Y los comparecientes del PP?

Maru Menéndez ha pedido además que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, comparezca en la cámara para dar "explicaciones urgentes" por los "escándalos" de su Gobierno. Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, ha señalado en un comunicado que "no es razonable que una persona que aparece en unas grabaciones de una investigación judicial como implicado presida una comisión que tiene por objeto averiguar la verdad y depurar responsabilidades políticas sobre una supuesta trama de corrupción ilegal muy ligada también a unos dosieres donde aparecen más denuncias de corrupción".

Por otro lado, y tras las críticas de la oposición a la falta de tiempo para las comparecencias en la comisión, el grupo parlamentario popular ha registrado la petición de ampliación del plazo de los trabajos de la comisión de investigación hasta el 31 de marzo, casi un mes después de la fecha de finalización establecida en origen -28 de febrero-. El portavoz del PP ha indicado que lo que quieren es que "nadie pueda pensar que va a haber alguna dificultad en los plazos para ello", para que la comisión pueda "desarrollar sus objetivos" y que lo haga de una manera "serena". No obstante, la oposición ha criticado el "silencio" de los populares respecto a sus peticiones de comparecientes.

Menéndez ha destacado que si no hubiera respuesta y permaneciera el "bloqueo de la comisión de investigación" recurrirán al amparo del Tribunal Constitucional como ya hicieron en el caso de la petición de una comisión de investigación por el caso de la bacteria del Doce de Octubre. Por último, el PSOE ha avanzado que esta misma mañana van a registrar la petición de información para llevar a cabo los trabajos de la comisión de investigación. El plazo acaba mañana a las 12.00. El PP aún no ha manifestado cuándo lo solicitará y respecto a la petición de comparecientes, el portavoz popular ha señalado que están todavía estudiándolo y que aún están en tiempo, ya que no ha finalizado el plazo para poder pedir comparecientes.

(www.elpais.com, 10/02/09)

194. EL PP RETRASA EL ARRANQUE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA

El Partido Popular mantiene el suspense sobre las comparecencias que va a pedir, si pide alguna, en la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid el pasado viernes para investigar la trama de espionaje político en la región que afecta a altos cargos de la Comunidad de Madrid y miembros de ese partido. El PP maneja los tiempos con su mayoría en la Cámara y la comisión no va a arrancar hasta que ese partido no decida exactamente qué quiere que ocurra en la misma.

Tras un fin de semana de mutismo absoluto (la comisión se constituyó el jueves pasado), y con las listas de comparecencias de la oposición ya presentadas (en las que aparecen desde el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad y la cúpula del PP, hasta los consejeros más cercanos a Esperanza Aguirre y los policías implicados), la Mesa de la Asamblea, el órgano de Gobierno de la Cámara, decidió en su reunión ordinaria volver a reunirse el miércoles para tratar todos los asuntos referidos a la comisión de investigación.

La Mesa es el órgano que debe dar trámite a las peticiones de comparecencias o la solicitud de documentación por parte de los grupos. El miércoles es la fecha tope para solicitar documentación, por lo que la oposición esperaba que parte se resolviera en la reunión de . Al no producirse ningún avance, la comisión no puede echar a andar, como mínimo, hasta el lunes que viene. El PP incluso tiene cinco días de plazo desde el día que reciba la documentación para presentar su lista de comparecientes. Los populares impusieron que el 28 de febrero sea la fecha tope para finalizar los trabajos, con posibilidad de prórroga de un mes.

Una vez presentada la petición de documentación y, previsiblemente, las peticiones de comparecencias de todos los grupos, incluido el PP, tras la calificación de la Mesa de la Asamblea aún queda el trámite de que el presidente de la comisión convoque la misma para organizar el calendario. El primer compareciente no podría acudir a la Asamblea hasta por lo menos tres días después de recibir la comunicación. Es decir, si el PP quisiera, cumpliendo estrictamente el reglamento la comisión tampoco empezaría la semana que viene, lo que condiciona gravemente los trabajos.

"En la comisión de investigación estamos aceptando las máximas garantías", dijo la presidenta, Esperanza Aguirre, en la misma rueda de prensa en la que anunciaba la dimisión de tres cargos del PP madrileño.

(www.elpais.com, 10/02/09)

195. GONZÁLEZ, ANTE EL JUEZ

El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, acudió al juzgado para ratificar la denuncia que interpuso ante la fiscalía por los supuestos seguimientos a los que fue sometido en viajes al extranjero. A las puertas de las dependencias judiciales, el número dos de Esperanza Aguirre confió en que el proceso sirva para conocer "quién está detrás de los seguimientos ilícitos" y de la vulneración de su "intimidad privada". "Espero que la actuación diligente de la justicia nos dé luz para saber quién está detrás de esto, por qué lo ha hecho, con qué objetivos y sepamos qué hay detrás de verdad", recalcó el vicepresidente.

(www.elpais.com, 10/02/09)

196. RAJOY REÚNE AL PP PARA EXIGIR LEALTAD Y PERSPECTIVA ELECTORAL

Mariano Rajoy ha convocado en Madrid al comité ejecutivo del partido. Y está decidido a reclamar a sus compañeros unidad, lealtad, honradez y visión electoral en uno de los momentos más difíciles que ha vivido esta organización, según fuentes de su entorno. Esta cita estaba prevista para la próxima semana aunque, con la tormenta que está cayendo sobre el tejado popular, no caben esperas. Rajoy está preocupado por la repercusión que, en Galicia y Euskadi, pueda tener el escándalo sobre el espionaje en Madrid o la investigación del juez Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción, que de momento se ha cobrado cuatro dimisiones en el PP.

Por eso, hoy sacará a colación que hay dos investigaciones internas --una suspendida temporalmente y otra en marcha-- para esclarecer esos casos. Dicho esto, demandará a los suyos que se vuelquen con sus candidatos gallego y vasco, Alberto Núñez Feijóo y Antonio Basagoiti, ya que, en opinión de los más cercanos a Rajoy, en momentos tan duros se la está "jugando" todo el partido.

En los últimos días, tanto Núñez Feijóo como Basagoiti han reconocido públicamente su desazón por el interés mediático que despierta el escándalo del espionaje o, últimamente, el sumario sobre corrupción y tráfico de influencias que instruye Garzón. Existe temor en las filas del PP por cómo pueda salpicar la investigación de la Audiencia Nacional en Madrid y Valencia, dos importantes caladeros de votos populares. "Me produce repugnancia que mientras hay concejales del PP vasco que dan la vida, que dan todo por defender sus ideas, pueda haber por ahí consejeros que utilizando el nombre del PP, saquen dinero", enfatizó ayer Basagoiti.

Rajoy pretende insistir hoy en ese punto y advertir que, si se demuestra que algún miembro del partido ha sacado los pies del tiesto de la honradez, se tomarán medidas "contundentes". Claro que ese aviso del líder conservador está rodeado de cierta ambigüedad: el lunes, tuvieron que dimitir un consejero de Esperanza Aguirre; el alcalde del municipio de Boadilla y el exregidor de la localidad de Majadahonda sin estar aún imputados por Garzón (los dos últimos lo fueron finalmente ayer). Mientras, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se mantiene sin problemas en el cargo pese a llevar a sus espaldas varias imputaciones.

En cualquier caso, ya hay dirigentes del PP que han señalado que es momento de limpiar la suciedad que pueda haber de puertas para dentro, o de "sacar las manzanas podridas del cesto", como dijo ayer la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Más duro se mostró el ya ratificado candidato a las europeas, el veterano Jaime Mayor Oreja, que recalcó que al equipo de Rajoy no debe "temblarle la mano" a la hora de tomar medidas que ayuden a restaurar la deteriorada credibilidad del partido. Y demoleedor el dirigente navarro Jaime Ignacio del

Burgo, que tachó de "hijos de puta" a todos los cargos del PP que se hayan lucrado a costa de la corrupción. Eso sí, Del Burgo hizo hincapié en el "regalo electoral" que, bajo su punto de vista, ha hecho Garzón a los socialistas al destapar este asunto en víspera electoral.

Ese último argumento será utilizado, de modo algo más suave, por el propio Rajoy en el comité ejecutivo. Como ayer hiciera Esperanza Aguirre, insistirá en la "indefensión" que supone para el PP que haya "filtraciones" de un sumario secreto. Recordará además que ha presentado denuncias al respecto en la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial y que intentará personarse en la causa para tener más información. Rajoy se sabe tocado y reclama refuerzos.

(www.elperiodico.com, 11/02/09)

197. EL PP INTENTA MEZCLAR A RUBALCABA Y EL CNI EN LA CRISIS DE LOS ESPÍAS

El PP quiere que la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid para abordar la supuesta trama de espionaje político investigue otras cosas, como el estado de la cuestión del presunto seguimiento al popular Manuel Pizarro por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hace dos años, el dictamen emitido en su día sobre el "espionaje en la Televisión Pública Gallega", el presunto espionaje en las Cajas de Ahorro en Andalucía, el presunto espionaje "ordenado por el CNI a políticos y cargos públicos de la Comunidad de Madrid"... Nada de esto tiene relación aparente con el caso por el que se creó hace apenas una semana la comisión madrileña, pero todo figura en la solicitud de documentación que el grupo popular ha presentado hoy ante el registro, apenas minutos antes de que terminara el plazo.

El PP solicita, además, el "registro de entrada y salida de personal y visitas" en el complejo de La Moncloa, en el CNI y en el Ministerio de Interior (no precisa en qué periodo ni por qué) y reclama la "relación de actividades, presupuesto y viajes sufragados por la Fundación Pinares adscrita al PSOE de Pinto", localidad donde una polémica moción de censura desalojó al PP de la alcaldía el pasado diciembre.

Los populares solicitan por último la documentación relativa al presunto seguimiento a Manuel Cobo, Alfredo Prada o Ildelfonso de Miguel -partes del espionaje publicados por este periódico, el organigrama de la Consejería de Interior, las denuncias de los afectados ante la fiscalía- por la presunta trama relacionada con el actual Gobierno madrileño, que es de lo que trata la comisión de investigación.

Mientras tanto, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha opinado que el mantenimiento del diputado del PP Benjamín Martín como presidente de la comisión hace que "esté en juego en estos momentos la credibilidad de la institución".

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de su partido, el secretario general de los socialistas madrileños ha pedido que Martín deje el cargo porque es una persona "bajo sospecha" y "presuntamente implicado en asuntos oscuros", en relación con las informaciones que apuntan que podría haber recibido dinero a cambio de silenciar la supuesta corrupción en Boadilla. Preguntado por qué iniciativas adoptaría el Grupo Socialista si Martín sigue al frente de la Comisión, Gómez ha contestado que no concibe otro escenario que su relevo.

También ha criticado que la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, "actúa de parte" -a favor de su partido- al no calificar las listas de comparecientes en la comisión presentadas por la oposición hasta que el PP haya registrado la suya. Además, el líder del PSM ha vuelto a pedir el cese "de forma automática" del consejero de Interior, Francisco Granados, esta vez tras la publicación ayer por este periódico de **unas pruebas caligráficas** que, sin ninguna duda para Gómez, prueban que los partes del seguimiento a Alfredo Prada entre marzo y mayo de 2008 fueron escritos por un funcionario de su departamento.

(www.elpais.com, 11/02/09)

198. EL ESPÍA QUE ESCRIBIÓ PARTES DE COBO Y PRADA ESCOLTÓ A AGUIRRE EN MÍTINES

José Manuel Pinto, funcionario de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados, es autor, según dos peritos calígrafos, de las anotaciones manuscritas que figuran en los partes de espionaje a dos cargos políticos del PP contrarios a Esperanza Aguirre: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. Además, Pinto formó parte de una red paralela para dar escolta a Esperanza Aguirre en sus actos de partido en la última campaña electoral, como se aprecia en la imagen que ilustra esta información.

El Ministerio del Interior brinda escolta a la presidenta madrileña, por lo que dicho servicio de protección, que prestaban Pinto y otros empleados de la Consejería de Interior, no sólo es redundante, sino ilegal, ya que la Comunidad de Madrid no tiene asignadas esas competencias.

La labor de protección de la presidenta en actos del partido es una de las actividades ilegales que denunció recientemente la sección de UGT del colectivo de Seguridad de la Consejería de Interior, antes de pedir disculpas por enviar por escrito su denuncia al director general de la Función Pública de la Comunidad.

Esta tarea extraordinaria, fuera del marco institucional de la Comunidad de Madrid, ha sido desempeñada, de manera excepcional y a regañadientes, por agentes del colectivo de 40 funcionarios que trabajan en el área de Seguridad de la Consejería de Interior. Una decena de hombres de confianza de Sergio Gamón, hasta el pasado mes de julio director general de Seguridad, han realizado esa función, ajena a su cometido oficial.

Robo de un ordenador

Gamón estuvo al frente de la Dirección General de Seguridad desde mayo de 2007 hasta julio de 2008, fecha en que fue destituido al verse implicado en la requisita de documentos y el supuesto robo de un ordenador del despacho de Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia y hombre de confianza del ex consejero Alfredo Prada.

A continuación, Gamón fue recolocado por el consejero Francisco Granados en una dirección de nueva creación con un sueldo superior a 90.000 euros anuales. Desde entonces se dedica en exclusiva a elaborar un informe sobre la seguridad en los edificios de la Comunidad de Madrid.

Durante su etapa de director general contó con un equipo de confianza formado por tres ex policías a los que fichó como asesores y a los que conocía de su labor de escolta a la vicepresidenta del Gobierno, junto a otros funcionarios del departamento, entre ellos José Manuel Pinto Serrano, el autor de las notas manuscritas de los partes de seguimiento a Prada y Cobo.

En este núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior recaen las sospechas de los casos de espionaje perpetrados entre marzo y mayo de 2008, en vísperas del combate por el poder en el partido que había de dirimirse en el Congreso del PP en Valencia.

Las sospechas se basan en varias razones: uno de sus integrantes ha sido identificado ya por peritos calígrafos (José Manuel Pinto); los partes de espionaje aluden a sus jefes (Sergio Gamón y Miguel Castaño) y en privado sus compañeros de trabajo y altos cargos de su consejería lo confirman. Los espionados por los funcionarios de Aguirre eran partidarios de su Rajoy, el adversario político de la presidenta de la Comunidad ante el congreso interno del partido.

(www.elpais.com, 11/02/09)

199. PRADA SOLICITA AL FISCAL UN INFORME PERICIAL SOBRE UN AGENTE AUTONÓMICO

Alfredo Prada, consejero de Justicia hasta junio de 2008, cuando fue destituido por Esperanza Aguirre tras apoyar a Mariano Rajoy en el congreso nacional del Partido Popular, tuvo ayer una reacción inmediata tras leer la noticia publicada por este diario y reclamó nuevas actuaciones de la Fiscalía para aclarar quién le espionó y quién ordenó que le siguieran.

Dicha información revelaba la identidad de uno de los autores de los partes de seguimiento al propio Prada entre marzo y mayo de 2008. Dos peritos calígrafos certificaron que la letra manuscrita de los partes era la misma que la que aparecía en distintos formularios de la Consejería de Interior firmados por el funcionario José Manuel Pinto.

Prada aseguró ayer a este diario que ha ordenado a su abogado trasladar al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix -que investiga el espionaje que sufrió este político y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo-, dicha información para que, a su vez, "practique pruebas que conduzcan a la confirmación de la veracidad de lo publicado". "De tal manera que con las pruebas caligráficas que hoy aporta el diario EL PAÍS se puede evidenciar que detrás de esos partes hay personas que trabajaban en la Consejería de Interior. Y, tras las pesquisas del fiscal, me querellaré contra el autor o autores del espionaje y quienes se lo ordenaron".

Colaboradores del consejero de Interior, Francisco Granados, interrogaron ayer a José Manuel Pinto en relación con los informes caligráficos publicados por este periódico. Fuentes de la Consejería de Interior aseguraron que Pinto había negado ante los colaboradores de Granados ser autor de las notas manuscritas que aparecen en los partes de seguimiento a políticos.

Dichos partes recogen, con más o menos detalle, la actividad pública y privada de Cobo y Prada. En el caso del ex consejero de Justicia, los agentes no sólo apuntan los movimientos de Prada sino que llegan a entrar a tomar fotos en restaurantes donde come el dirigente del PP para intentar identificar a las personas que almuerzan con él. También toman nota de matrículas sospechosas que se mueven en la misma zona por donde almuerza Prada y llegan a identificar el vehículo de una diputada autonómica del PP y de un servicio de contravigilancia del Ministerio del Interior. Tanto Cobo como Prada han confirmado que los movimientos registrados en los partes de seguimiento corresponden con su actividad en los días que se citan en cada documento.

(www.elpais.com, 11/02/09)

200. LA OPOSICIÓN PIDE QUE DIMITA EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, no tuvo reparos ayer en relacionar las dos tramas que afectan en estos momentos al Partido Popular. En este sentido, y pese a las recomendaciones de José Luis Rodríguez Zapatero a los suyos de no cebarse con los populares, Gómez afirmó que la Asamblea de Madrid debe sustituir al actual presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje en el PP, Benjamín Martín Vasco, porque "no se puede poner a la zorra a cuidar el gallinero". El socialista se hacía eco, con ello, de la información que relacionaba a Martín Vasco con una imputada en la trama corrupta, Isabel Jordán.

El líder socialista también llamó "a la cordura" al PP, en una entrevista en Telemadrid, para que "depure responsabilidades, sea transparente y permita que todos los ciudadanos conozcan la verdad". La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, aseguró también que "necesariamente" hay que impugnar al presidente de la comisión. Sabanés se sumó a los socialistas madrileños y exigió que se celebre un pleno monográfico para que Esperanza Aguirre "responda globalmente de la crisis de enorme de magnitud que afecta a su Gobierno y que está poniendo en riesgo la estabilidad de las instituciones".

La respuesta no se hizo esperar. Martín Vasco no dimitirá y para defender su inocencia actuará contra los que le impliquen. Así lo anunció el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, que dijo que estaba "convencido" de que las acusaciones contra el presidente de la comisión "no son ciertas". "Si no hay una rectificación, Martín Vasco se querellará", señaló.

(www.elperiodico.com, 11/02/09)

201. PRADA NO ACUDE AL HOMENAJE

El Senado concedió ayer la medalla de honor a Esperanza Aguirre -"¿Es de oro?", preguntó sorprendida la presidenta- por los años en que presidió la Cámara (1999-2002), y colgó su retrato junto a los de sus antecesores. Aguirre dijo sentirse orgullosa de compartir pasillo con "ilustres liberales como Laureano de Figueroa y el Conde de Romanones". Faltaron al homenaje Francisco Granados, consejero de Interior, y el que fuera vicepresidente del Senado con Aguirre, después consejero en su Gobierno y más tarde destituido, Alfredo Prada.

(www.elpais.com, 11/02/09)

202. EL PP NIEGA DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA INVESTIGAR EL ESPIONAJE EN MADRID

La comisión parlamentaria creada en la Asamblea de Madrid para investigar la presunta trama de espionaje político no podrá acceder a los expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior o a los partes de los servicios realizados por éstos, ni a facturas de material fotográfico, ni a la información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente Ignacio González, ni a los datos sobre adjudicaciones supuestamente irregulares realizadas por la Comunidad.

El Partido Popular impuso ayer su mayoría absoluta en la Mesa de la Asamblea para rechazar más de la mitad de la documentación que PSOE e Izquierda Unida habían solicitado. Además, se negó a estudiar - hasta, como pronto, el lunes- la relación de comparecencias, lo que vuelve a retrasar el arranque de la

comisión. "Esto es inquisitorial, indigno. El PP ha puesto a este Parlamento en excepción democrática", protestó la portavoz de IU, Inés Sabanés. La socialista Maru Menéndez calificó de "burla" y "vergüenza" la actitud de los populares. "Está claro que el PP tiene mucho que ocultar", dijo.

El argumento empleado por el PP para guardar bajo llave todos esos documentos fue que "no tienen relación con el objeto de la comisión". Con ese mismo criterio fueron rechazadas igualmente varias peticiones del propio grupo popular, que había reclamado cosas tan peregrinas como la relación de entradas y salidas del complejo gubernamental de La Moncloa, los dictámenes sobre presuntos casos de espionaje en Andalucía y Galicia, o la relación de actividades de una fundación de Pinto (municipio madrileño donde el PP fue desbancado de la alcaldía mediante una polémica moción de censura), sin explicar qué podrían tener que ver con los presuntos seguimientos a cargos públicos en Madrid.

Sí admitió la Mesa otro de los asuntos que pedía el PP: analizar el "estado procesal de la denuncia presentada por Manuel Pizarro contra dos agentes de la Guardia Civil y dos agentes del CNI por supuestos seguimientos a su persona", un caso denunciado hace dos años. También pasó la criba su solicitud de aportar a la comisión el organigrama de seguridad de comunidades gobernadas por el PSOE como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia; así como el organigrama de la Consejería de Interior madrileña "en todas las legislaturas", es decir, desde los gobiernos de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón.

Tras conocer a media mañana la "extravagante" relación de documentación registrada por los populares, PSOE e IU habían decidido votar a favor para no sentar el precedente de un veto. "Sólo les falta pedir que venga a declarar el toro que mató a Manolete para desviar la atención, pero ni aun así conseguirán cargarse esta comisión", había dicho Sabanés. Sin embargo, no les sirvió de nada: la oposición votó a favor de las solicitudes del PP, pero el PP tiró abajo 28 de los 45 documentos pedidos por Izquierda Unida y 38 de los 60 planteados por el PSOE. Este periódico intentó, en vano, recabar la explicación del portavoz popular, David Pérez.

Y si mal le fue a la oposición con la petición de documentación, peor resultó su intento de que la Mesa se pronunciara ya sobre las comparecencias: el PP alegó que hasta el lunes, como pronto, no empezará a estudiar ese asunto, lo cual retrasa de nuevo todo el proceso. En principio, las sesiones deben finalizar el 31 de marzo.

(www.elpais.com, 12/02/09)

203. NI MÓVILES PREPAGO NI DATOS DE LOS AGENTES

La Mesa de la Asamblea, con mayoría absoluta del PP, consideró que no tienen "relación con el objeto de la comisión de investigación" los "expedientes administrativos personales de todos aquellos empleados públicos que realicen tareas de seguridad" en la Comunidad de Madrid. Tampoco aportará documentación sobre facturas de móviles, material fotográfico o vales de gasolina autorizados por la Consejería de Interior a sus empleados, que PSOE e IU pedían para seguir el rastro de los autores del espionaje a cargos públicos. Y no permitirá que se analice la red de tarjetas de móviles prepago que utilizan varios consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre.

La comisión tampoco podrá estudiar la información referida a los viajes del vicepresidente Ignacio González al extranjero (en uno de ellos fue seguido y grabado con cámara oculta). Las adjudicaciones sospechosas del Ejecutivo de Aguirre no formarán parte de la investigación. La Mesa ha denegado al PP el registro de entradas y salidas del CNI, el Ministerio del Interior y La Moncloa, y lo referido a presuntos casos de espionaje en Galicia, Andalucía y Fuenlabrada (Madrid).

(www.elpais.com, 12/02/09)

204. EL INFORME DE COSPEDAL SOBRE LOS SEGUIMIENTOS

Entre los documentos reclamados por PSOE e IU que la Mesa de la Asamblea aceptó ayer tramitar está todo lo referido a la investigación interna encargada por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, tras destaparse el espionaje a cargos públicos en Madrid. También figura la "relación nominativa del personal, cualquiera que sea su relación, en el ámbito de seguridad de la Administración autonómica" y la "descripción pormenorizada" de sus funciones. La comisión podrá acceder igualmente a las denuncias presentadas por los políticos que sufrieron los seguimientos, y al "estudio sobre el modelo de seguridad" que supuestamente está elaborando desde hace un año Sergio Gamón, ex director

general de Seguridad y destituido en 2008 (aunque sigue en nómina de la Comunidad) tras llevarse información confidencial del despacho del ex consejero Alfredo Prada.

En cuanto a la documentación reclamada por el PP, además del presunto seguimiento del CNI a Manuel Pizarro, la Mesa admitió lo referido a la estructura de la Consejería de Interior pero también la de cuatro comunidades del PSOE y la del Ayuntamiento de Madrid.

(www.elpais.com, 12/02/09)

205. UN PLENO A CARA DE PERRO

Ni micro ni nada. Hubo momentos en que no había manera de oír lo que decían sus señorías. Palmadas sobre la mesa, silbidos, bramidos ininteligibles, patadas en el suelo... Cómo estaría el ambiente ayer en el pleno de la Asamblea que las dos decenas de trabajadores de la multinacional de transporte de paquetería UPS que ocupaban la tribuna de invitados miraban lo que sucedía abajo y callaban. Y eso que estaban allí para protestar por el ERE de su empresa. El pollo ya estaba montado. Entre sus señorías.

Fue un pleno a cara de perro. Y con acusaciones gruesas, como la que hizo la portavoz del grupo socialista, Maru Menéndez, a Esperanza Aguirre. Empezó preguntando por qué no avanza la comisión que investiga la trama de espionaje: "¿No será que están ustedes ganando tiempo porque, como cada vez está más extendido el rumor, pueden estar destruyendo documentación pública?". En la bancada popular, sorpresa y un clamor: "Buuu".

Socialistas e IU denunciaron por la mañana la "censura" del PP por negarles documentación imprescindible para investigar el espionaje en Madrid. Menéndez anunció antes del pleno que pedirá amparo al Constitucional si la Asamblea persiste en su negativa a aportar más de la mitad de la documentación pedida por la oposición.

"Cada vez está más claro que el PP tiene muchas cosas que ocultar", dijo Menéndez, que calificó la actitud de los populares de "oscurantista". Inés Sabanés, de IU, se sumó a la protesta, aunque subrayó que mientras haya "una mínima posibilidad de seguir trabajando y el blindaje no sea ya total", su grupo no dará "ni una sola razón para que se bombardee la comisión".

Ya en el pleno, Aguirre respondió a la portavoz socialista: "Nos ha imputado un delito. O lo retira... o tendrá que retirarlo en los tribunales". Lo siguiente fue devolver el golpe. Con ironía. "Me ha sorprendido gratamente que sea la primera socialista que se preocupa por la utilización partidista de las instituciones", empezó. "Justamente en la semana en que nos hemos enterado de que el Poder Judicial y el Gobierno van juntos de cacería". Aguirre, ya lanzada, narró la secuencia completa de los hechos con una sonrisa: "Justo la semana en la que el juez pretende acusar al principal partido de la oposición de estar detrás de una trama de corrupción se va de fin de semana, deja detenidos en los calabozos y se va con el ministro de Justicia".

Era el turno de la bancada socialista: "Buuu", exclamaron los diputados. Unos minutos antes, los representantes de IU se habían levantado de sus escaños y habían mostrado carteles donde se leía: "¡Censura política, no!" y "Los madrileños quieren saber". Llegó un punto en que la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, tuvo que poner orden: "Con esta animación no hay manera de continuar", soplaba.

Las acusaciones cruzadas no acabaron ahí. Aguirre aprovechó para desempolvar supuestos escándalos, algo "corriente", dijo, entre los socialistas: del mitin de Tomás Gómez en un coche de policía, al avión privado de Zapatero "para ir de compras a Londres". En el orden del día no había ni rastro de espías, comisiones de investigación o tramas corruptas. Pero la actualidad mandaba. Menéndez recordó las dos destituciones que ha provocado de momento el escándalo de corrupción. "Se denuncian los unos a los otros, se chantajejan unos a otros, echan a su alcalde, pero le dejan que continúe como concejal; cesan ustedes a su consejero, pero le dejan que siga como diputado. Explíquenoslo porque no lo entendemos ni nosotros ni ningún madrileño". El ya ex consejero Alberto López Viejo, asistió al pleno, muy serio, pero se marchó pronto. No quiso hablar con la prensa.

Mientras, la Asamblea seguía trabajando. Se comentaba, a pregunta de Izquierda Unida, la propuesta de los empresarios madrileños de abaratar el despido, "sensata y eficaz", según Aguirre. Su respuesta soliviantó a la portavoz de IU, Inés Sabanés. "Con todo lo que está pasando, salir aquí, con todo el

desparpajo y toda la cara del mundo, a decir que lo que hay que hacer es abaratar el despido, me parece el colmo de la provocación", aseguró después en el pasillo.

Hubo más acusaciones. Como la del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que tachó a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, de "irresponsable" por admitir que va a aumentar la delincuencia este año por la crisis económica y el desempleo.

Entre papeles en destrucción y cacerías, en el pleno de ayer se contestaron 14 preguntas, comparecieron dos consejeras, se presentó una moción y se votaron dos proposiciones de ley. Pero al final se hablaba de lo mismo que al principio: la comisión de investigación que no avanza -debe finalizar el 31 de marzo-, espías y corrupción.

(www.elpais.com, 13/02/09)

206. EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN LA COMISIÓN SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE

Primeras peticiones de comparecencia para la comisión de investigación de la supuesta trama de espionaje en Madrid. El PP ha rechazado que comparezcan el presidente del partido, Mariano Rajoy, el tesorero y el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, varios empresarios relacionados con adjudicaciones de la comunidad de Madrid y con el seguimiento al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Asimismo, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta y quien hizo el borrador del 'CNI madrileño'. El PP sí ha aceptado que comparezcan la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, entre otros. Además, han tirado más documentación que había solicitado la oposición, que asegura que todo esto es un escándalo.

PSOE e IU habían requerido 56 comparecencias. Las portavoces del PSOE en IU en la Asamblea, Maru Menéndez e Inés Sabanés, han denunciado el "veto" y la "censura" que, a su juicio, ha ejercido el PP sobre comparecientes que consideran "esenciales" para la investigación de la supuesta trama. La Mesa ha rechazado asimismo las peticiones de comparecencia del secretario general técnico de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno regional, Borja Sarasola; y de los empresarios Enrique Sánchez (accionista de Segurisa), Fernando Ruano (administrador único de Secuencia Pixels) y Fidel San Román (adjudicatario de la plaza de toros de Las Ventas).

El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha destacado, sin embargo, que la Mesa ha aprobado la mayoría de las comparecencias solicitadas por la oposición y lo ha considerado un "ejercicio de compromiso con la transparencia".-

(www.elpais.com, 16/02/09)

207. AGUIRRE BLINDA AL CÍRCULO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y PROTEGE A RAJOY

Paso a paso, Esperanza Aguirre va perfilando qué entiende por investigar el presunto espionaje en la Comunidad de Madrid. El lunes ofreció a la oposición, PSOE e IU, otra valiosa pista. Investigar, "llegar hasta el fondo y esclarecer los hechos" -como se cansó de repetir el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez-, significa blindar el círculo del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y proteger al líder nacional del partido, Mariano Rajoy.

El PP madrileño ejecutó su plan en tres horas y sin costes, gracias a su mayoría absoluta. La Mesa de la Cámara autonómica vetó 13 peticiones de comparecencia de PSOE e IU. No eran nombres vacuos. Aguirre impidió que den la cara los dos empresarios que viajaron a Suráfrica con González en 2008, Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín. El número dos de la presidenta fue supuestamente espiado en esa ocasión, y de hecho él mismo ha denunciado los hechos. Sánchez es además el principal accionista de Segurisa, sociedad a la que el Canal de Isabel II -que preside González- adjudicó en 2005 un contrato de 33 millones.

Tampoco irá Fidel San Román, uno de los empresarios que explota el coso de Las Ventas e implicado en la operación Malaya.

La Mesa rechazó también las comparecencias del ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta -otro de los presuntamente espionados-, de su sucesor, Luis Bárcenas, y del actual gerente, Cristóbal Páez. Descartado quedó Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en Ceuta con José María Aznar y autor del proyecto de creación de una agencia "legal" de espionaje en la Comunidad.

La criba no la superó, finalmente, Rajoy , reclamado por IU. El argumento esgrimido por el PP fue siempre el mismo: "No se ajusta al objeto de estudio de la comisión". ¿Quiénes comparecerán? El PP no ha entregado su lista, pero permitió que la Asamblea llame a Aguirre, González y el consejero de Interior, Francisco Granados; a Alberto Ruiz-Gallardón y su mano derecha, Manuel Cobo, y a Alfredo Prada. Está prevista la comparecencia igualmente de María Dolores de Cospedal.

De momento, claro, porque la Mesa de la comisión denegó a los socialistas su solicitud de que la secretaria general del PP les enviase su informe interno. La semana pasada los conservadores habían decidido justo lo contrario. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) calificaron la actitud del PP de "censura y bloqueo". Pérez, como un "ejercicio de transparencia".

(www.publico.es, 17/02/09)

208. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SOBRE EL ESPIONAJE PIDE ABANDONARLA

El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco ha solicitado esta mañana dejar la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid, de la además de miembro y es presidente, para querellarse contra Isabel Jordán, imputada en la otra gran trama que salpica al PP, el caso Gürtel que investiga la Audiencia Nacional. En las grabaciones en poder del juez Baltasar Garzón, Jordán le había relacionado con la trama corrupta y de tráfico de influencias, razón por la cual PSOE y PP habían exigido que Martín Vasco abandonara la presidencia del organismo.

Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del Grupo Popular y miembro de la dirección de grupo, denunció la semana pasada que el lunes sufrió un intento de chantaje telefónico a cuenta de la trama de corrupción. Alguien llamó a su móvil y le dijo: "Si no quieres que te pase lo que a tu amigo Correa [Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción] , tienes que llevar 50.000 euros esta tarde a un bar de la Casa de Campo".

Martín Vasco ha admitido que mantiene una relación de amistad con el presunto cabecilla de la trama, aunque subraya que desde 2005 ya no lo frecuenta tanto porque él dejó de veranear en Marbella, donde ambos solían coincidir. La cadena SER informó al estallar el escándalo que Martín Vasco estaba siendo investigado y que Isabel Jordán sostiene en una grabación que al diputado madrileño le pagaron para que callara sobre operaciones urbanísticas irregulares en el municipio de Arganda del Rey. Pero Martín Vasco no ha sido imputado por el juez Garzón.

Este periódico ha detallado que en otra conversación grabada, Correa y sus colaboradores implican a Benjamín Martín Vasco, ex alto cargo de Arganda: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".

(www.elpais.com, 18/02/09)

B) QUIEN ES QUIEN

Francisco Granados : Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre. Secretario General del PP en Madrid. Ex alcalde de Valdemoro. . **Presidente de la Comisión de Investigación abierta en la Asamblea madrileña en el verano de 2003 para esclarecer las causas de la actuación de dos diputados electos socialistas que con su deserción de la sesión constitutiva de la nueva Cámara, dejó a los socialistas sin la presidencia de la Comunidad.**

Marcos Peña. Ex Inspector de Policía. Desde Junio del 2008 es fichado por Granados como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles, lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones. Dejo la Policía en el año 85. Ha estado ligado al sector de la seguridad como director de seguridad en la antigua

Hidroeléctrica Española y, después de la fusión con Iberduero, mantuvo este mismo cargo en Iberdrola hasta el año 2007.

Manuel Cobo, Vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón. El grupo de ex agentes de policía y de la Guardia Civil a sueldo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados, hizo seguimientos diarios en abril de 2008, y elaboró detallados informes sobre sus actividades. Los seguimientos se produjeron en plena batalla por el poder en el PP tras el fracaso de Mariano Rajoy en las elecciones de marzo de 2008.

Ignacio González González. Vice Presidente del Gobierno de Esperanza Aguirre. Mantiene serias diferencias con Granados. Se han conocido dos 'dossiers' que incluyen fotos y documentos privados de González. El principal es un dossier de 69 páginas, que recoge una detallada información sobre González. La conclusión básica del informe es que el vicepresidente madrileño lidera **"un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtiene beneficios extra de la Comunidad o el Canal de Isabel II"**. En el documento se cifra el patrimonio de González y su esposa en 1,8 millones de euros. Además, se indica expresamente que tiene una "caja de caudales" y que en ocasiones "paga en negro". El viaje a Johannesburgo es, precisamente, la clave del segundo dossier. Se trata de un documento más modesto, que no llega a diez páginas, donde se relatan las relaciones de González con el empresario Enrique Sánchez González. Parte de este informe fue desvelado por El País, el pasado 20 de enero, y provocó una denuncia de la Comunidad de Madrid que ha llevado a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, al entender que hay indicios de delito. Los autores de este documento sostienen que el viaje a Suráfrica de González y su esposa fue abonado en realidad por el empresario, como supuesto pago por contratos públicos. El vicepresidente aseguró que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez. El periódico Público demostró que esa afirmación no era cierta, ya que el Canal de Isabel II que preside González otorgó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez.

Isabel González González. Hermana de Ignacio González. Fue Asesora de la presidenta Aguirre. Ex jefa de la Secretaría del Secretario de Estado para el Deporte, por donde pasó Pedro Antonio Martín Marín. Diputada de la Asamblea de Madrid.

Pablo González González. Hermano de Ignacio González y Juan José Caballero Escudier. Cuñado de Ignacio González. Crean en junio de 2006 una empresa junto a una persona sin vínculos personales con el vicepresidente (**José Antonio Clemente Martín**). La empresa se llama Tamanaco 07 Consulting (Tamanaco fue un líder indígena caraqueño –Clemente es venezolano-; 07 era el año en el que se iban a forrar y Consulting es el apellido de toda empresa que se precie). La empresa tenía por objeto social la explotación de instalaciones deportivas, pese a que ninguno de los familiares de Ignacio González tenía experiencia alguna en el sector. Resultan adjudicatarios del campo de golf de Chamberí, ubicado en terrenos del Canal Isabel II. Se presentó un consorcio de tres empresas: Iridium (propiedad de ACS), Soto Once (empresa gestora de otros campos de golf y que ya ha estado involucrada en otros casos parecidos) y una empresa llamada Tecnoconcret (empresa cuyo administrador único es Clemente –el testaferro- y es propiedad suya y de su mujer al 100%, con sede social en el domicilio conyugal). Según el pliego de condiciones, la adjudicataria podría llevarse hasta 1.5 millones de euros, pero finalmente el Canal de Isabel II decidió ser generoso con estas empresas amigas subiendo la entrega a 3.2 millones.

Lourdes Cavero Mestre. Esposa de Ignacio González. Es presidenta de Subastas Segre, una firma que tiene entre sus socias a varias amigas íntimas de Ana Botella, entre ellas Carmen Cafranga y Concha Tallada. Jefe de Departamento de Relaciones Internacionales ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (UNESA)

Carmen Cavero Mestre. Cuñada de Ignacio González. Es también una de las consejeras 'independientes' que se ha sumado junto Ángel Acebes o Manuel Lamela, al consejo de administración de Cibeles, la nueva corporación financiera de Caja Madrid. El sueldo por este 'trabajo', que no exige dedicación exclusiva, ronda los 150.000 euros anuales, más tarjeta de crédito y coche.

Carmen Cafranga. Es consejera de Caja Madrid. La esposa del vicepresidente de la Comunidad de Madrid Lourdes Cavero comparte con Carmen Cafranga la dirección de **"Subastas Segre"**; una rentable firma de arte de la que ambas son accionistas y en la que ocupan los cargos de presidenta y secretaria general respectivamente. La empresa obtuvo en 2007 unos beneficios de más de medio millón de euros. Amiga personal de **Ana Botella**, Cafranga posee además varias empresas y una fundación que han

recibido en los últimos tres años contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000 euros.

Ángeles Alarcó, ex mujer de Rodrigo Rato, vicepresidenta ejecutiva de Turismo de Madrid, organismo dependiente de la CAM.. Dimitió del puesto de consejera de Radio Televisión Madrid (RTVM) que ocupaba en representación del PP, lo que posibilitó la entrada en el Consejo de Manuel Soriano.

Esperanza Aguirre. Presidenta del Gobierno regional y Presidenta del PP en la CAM. Ha achacado las informaciones que relacionan al consejero Francisco Granados con espionaje con un "problema" del periódico El País, al que acusa de "atacar" al PP o al gobierno regional cuando "el Gobierno central tiene agotadas todas las posibilidades sobre la crisis".

Álvaro Lapuerta. Ex Tesorero nacional del PP. Informó a Mariano Rajoy en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. Alertó entonces de que estaba siendo vigilado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid. La máxima dirección del PP ha confirmado estos hechos.

Ildefonso de Miguel. Gerente del Canal de Isabel II. Ha sido también objeto de espionaje. Se ha conocido un *dossier* sobre el patrimonio privado de De Miguel, hombre de confianza del vicepresidente regional, Ignacio González, en la compañía pública que ahora quiere privatizar el Gobierno regional. Los autores del informe de 32 páginas se identifican a sí mismos como miembros de un "centro de investigación". El *dossier* arranca en sus primeras páginas con un detallado recorrido por los supuestos actuales domicilios del gerente del Canal de Isabel II. Para probar sus informaciones, los redactores del informe acuden al Registro de la Propiedad aportando documentación para acreditar que De Miguel es el titular de las casas. El *dossier* atribuye al hombre de confianza del vicepresidente del Gobierno la propiedad de dos pisos y un chalé de grandes dimensiones en la zona oeste de Madrid. De todas las propiedades aparecen numerosas fotografías y direcciones en el *dossier*. Los supuestos espías también han buscado propiedades de Ildefonso de Miguel fuera de Madrid y citan una zona de viñedos del sur de Burgos, en la denominación de origen Ribera del Duero, donde supuestamente el gerente del Canal de Isabel II y su esposa poseen casi 25 hectáreas de viñedo. Caja Madrid compró un pedido de varios cientos de miles de euros en botellas para regalar por Navidad, hace un año. La compra de los terrenos, según el informe, se habría realizado en 2004. Los espías también habrían averiguado que una empresa de De Miguel contrata directamente con la Comunidad de Madrid, Administración en la que trabaja como gerente del Canal de Isabel II. La empresa de De Miguel, Secuencia Pixels, logró presuntamente un contrato de casi dos millones de euros con la Consejería de Justicia en 2007. Al frente de esta empresa aparece un hermano de su mujer. Fue director de Quiero TV.

Concepción Ruano. Mujer de Ildefonso de Miguel. el hombre de confianza de Ignacio González en el canal de Isabel II. En un dossier se incluye una ficha completa de Ruano, de quien subrayan su puesto como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid desde 2006.

Luis Vicente Moro Díaz. Ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar. Trató con Ignacio González la necesidad de crear un servicio secreto. Moro es amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro Delegado del Gobierno en Ceuta. El tal Moro es un tipo con antecedentes penales. Según la sentencia del Tribunal Supremo ***Moro fue autor de un delito de revelación de secretos cometida por Autoridad o Funcionario público .Fue condenado a las penas de un año y nueve meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.***

Ginés Jiménez. Ex jefe de la Policía Municipal de Coslada Acusado de crear una trama corrupta de la Policía Local de Coslada, descubierta en mayo de 2008. Marcos Peña reconoce haber preparado un informe para Granados sobre la situación de esta trama. En la actualidad este Ayuntamiento está gobernado por el PSOE. Está imputado un ex alcalde del PP, Raúl López,

Pedro Antonio Torrejón Joaquín Tejeiro, ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos. En el año 2006 se investigó una supuesta trama corrupta que acabó con los dos ex alcaldes en prisión. El asesor de Granados elaboró un informe sobre este asunto

Rocío Güemes Barrios. Hermana del Consejero de Sanidad Juanjo Guemes, directora de Estrategia Empresarial del Instituto Madrileño de Desarrollo

Agustín Carretero. ex titular del Juzgado número 2 de Valdemoro, y responsable de enviar a prisión a Pedro Torrejón cuando aún era alcalde de Ciempozuelos (ahora es concejal independiente), y a su antecesor en el cargo, Joaquín Tejeiro. En la actualidad a propuesta de Francisco Granados es el actual gerente de la Academia de Policía de Madrid y ex director general de Política Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre

Manuel Sergio Gamón Serrano. Nacido en Pereruela de Sayago (Zamora).el 6 de noviembre de 1959 e ingresó en la policía el 1 de abril de 1981. Ex comisario de Policía, ex jefe de escoltas de vicepresidencia del Gobierno en Moncloa, ex jefe de seguridad de Esperanza Aguirre como presidenta del Senado. Fichado por Aguirre en 2006 como director general de Seguridad Ciudadana, a las órdenes de Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.Encabezó el registro de un despacho del Campus de la Justicia, el proyecto estrella de Aguirre -300 millones de presupuesto-, y que dependía directamente del entonces Consejero de Justicia Prada. Gamón puso vigilancia durante días en el despacho y, según varios testigos, se llevó documentos y un ordenador..Cesó poco después de ser fichado Peña. Fue jefe del Grupo Operativo de la Unidad Central de Protección y se encargaba del dispositivo de altos cargos del Estado y testigos protegidos. Su mujer también trabajó a sus órdenes en el Senado como secretaria, y hace unos años, con la bendición de Aguirre, sustituyó en el puesto a la secretaria que denunció por acoso sexual a **Manuel Soriano**, el primer director general de Esperanza Aguirre en Telemadrid.

María del Carmen Gamón. Hija de Sergio Gamón, es concejal del PP en Fuenlabrada y presidenta de Nuevas Generaciones en este municipio de Madrid.

Miguel Castaño, Ex subdirector general de Seguridad de la Consejería de Interior.E s uno de los altos cargos de la Consejería de Interior a los que presuntamente se alude en los partes de espionaje .Ha sido nombrado asesor de seguridad del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio González. Castaño es aludido en los partes del espionaje perpetrado supuestamente por personal de la consejería de Interior, que dirige Francisco Granados. El 28 de abril de 2008 escriben: "A las 18.25, nos desplazamos a la dirección por requerimiento de Miguel".

Pedro Antonio Martín Marín. Empresario y político, compañero del empresario Enrique Sánchez en UCD, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, ex directivo del Real Madrid y sucesor de Miguel Ángel Rodríguez al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación de José María Aznar. Según varias fuentes, es el amigo de Ignacio González y de Enrique Sánchez que viajó con ellos y sus esposas hasta Sudáfrica. Martín Marín coincidió con Sergio Gamón en La Moncloa y preside el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y de la empresa gestora del Pabellón de Deportes, adjudicada en septiembre del 2006 a un consorcio liderado por el Grupo Recoletos.

Borja Sarasola Jaúdenes. Secretario general de la Vicepresidencia de Ignacio González.. Jefe de Gabinete de Esperanza Aguirre en el PPYerno de Pedro Antonio Martín Marín. 32 años, licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho. Fue vicesecretario nacional de organización de Nuevas Generaciones en la ejecutiva presidida por María del Carmen Funes, así como el diputado regional más joven en Asamblea de Madrid en la pasada legislatura, donde fue designado asesor de Ignacio González, con quien ha estado muy unido en su carrera.

Pilar Martín. Hija de **Pedro Antonio Martín Marín.** Ttrabaja en la Fundación Canal de Isabel II. Precisamente, el gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, será otro de los supuestamente, como veremos en otro capítulo

Fernando Ruano. Cuñado de **Ildefonso de Miguel.** Gerente del Canal de Isabel II. . Ruano es consejero delegado de la empresa que difunde la señal de las emisoras de TDT que adjudicó Aguirre

Francisco Javier Aguirre Pemán. Primo de Esperanza Aguirre. Subdirector de marketing del Canal de Isabel II.

Ramiro Cid. Preside un grupo constructor .Ha levantado viviendas en Valdemoro, localidad madrileña de la que fue alcalde Granados. El coche incendiado del consejero Granados, está a nombre de una empresa que se llama Grandes Locales de Negocio S.L., que forma parte del gran grupo empresarial dirigido por el constructor Cid. Entre los edificios que Ramiro Cid ha construido en Valdemoro figura la casa de Granados, en la calle Guardia Civil de esta localidad, donde se produjo el incendio en el garaje

C) LOS DOCUMENTOS

DOSSIER SOBRE NACHO GONZÁLEZ Y SUS CIRCUNSTANCIAS	
MANUEL COBO, INVESTIGADO	
SERGIO GAMÓN, INVESTIGADO	
HOMBRE CALVO, INVESTIGADO	
DIPUTADA, INVESTIGADA	
BAJO Y GORDO, INVESTIGADO	
LOS BILLETES DE NACHO	
LA DENUNCIA DE NACHO	
¿UN CNI MADRILEÑO?	
SOLICITUD DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. PSOE	
CARTA DE LA SOCIA DE LA MUJER DE NACHO SOBRE NEGOCIOS VARIOS	